H. Congreso de la Unión

GACETA PARLAMENTARIA

LXII

LEGISLATURA

COMISIÓN PERMANENTE
SEGUNDO RECESO,
PRIMER AÑO DE EJERCICIO.

No. 25
TOMO I

MESA DIRECTIVA

Presidente: Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, PAN;
Vicepresidentes: Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza, PRI; Dip. Ricardo Anaya Cortés, PAN;
Secretarios: Sen. María del Pilar Ortega Martínez, PAN; Dip. Cristina González Cruz, PRI; Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz, PRD; Dip. Ernesto Núñez Aguilar, PVEM.

CONTENIDO TOMO I

ORDEN DEL DÍA…….... **5**

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR……..... **17**

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Conferencia de Sun Valley, celebrada los días 10 y 11 de julio de 2013, en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos de América. ……. **33**

Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al tercer bimestre de 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013. . **37**

Miércoles 31 de Julio de 2013

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL

Consulta la Gaceta ***www.senado.gob.mx*** **……**

Gaceta del Senado

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Oficio con el que remite los Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2013; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2012. ……..…….. **38**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Oficio con el que remite la información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior, para el segundo trimestre del ejercicio 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013. ……..……..…….. **38**

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Una, de la Sen. Sonia Mendoza Díaz, con la que remite el Acta de la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 27 y 28 de junio de 2013, en San Salvador, El Salvador. ……..……..…….. **39**

Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de la participación de integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores en una visita de trabajo al Parlamento Europeo, llevada a cabo los días 21 al 23 de mayo de 2013, en Estrasburgo, Francia. …..…….. **58**

Una, del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con la que remite el Informe de su visita, conjuntamente con los Senadores Layda Sansores, Augusto López Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, a la frontera sur: Tabasco-Guatemala, los días 28 y 29 de mayo de 2013. …..…….…….. **70**

Una, del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, en relación con los proyectos de decreto presentados por diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el 24 de julio de 2013: …..…….…….. **86**

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

De las Diputadas María de la Paloma Villaseñor Vargas y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. …..……..…….…….. **89**

De legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia energética. ……..……..…. **103**

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 35, 36 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Participación Ciudadana. ……..……..…. **159**

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos in fine a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el artículo 24 bis a la Ley del Banco de México. ……..……..…. **174**

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ……..…. **181**

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. ……..…..…….. **186**

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción I y el párrafo sexto del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. ……..…….. **202**

De los Diputados Amalia García Medina y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ……..…….. **208**

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ……..…….. **222**

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ……..……..…….. **233**

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Ernesto Ruffo Appel, Sonia Mendoza Díaz, Javier Corral Jurado, María Marcela Torres Peimbert y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de candidaturas independientes. …..……..…….. **239**

De los Diputados Trinidad Morales Vargas, Mario Miranda Salgado y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que crea la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana. …..……..…. **266**

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 9 fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el penúltimo párrafo del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. …….. **284**

Del Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. ……. **301**

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 52, fracción IV del Código Fiscal de la Federación. …….. **306**

Del Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. …….. **313**

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. …….. **316**

Del Dip. Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. …….. **351**

Del Dip. Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que modifica el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. …….. **357**

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. …….. **360**

CONTINÚA TOMO II

ORDEN DEL DÍA

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones y correspondencia.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la Conferencia de Sun Valley, celebrada los días 10 y 11 de julio de 2013, en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos de América.

Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al tercer bimestre de 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Oficio con el que remite los Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2013; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2012.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Oficio con el que remite la información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior, para el segundo trimestre del ejercicio 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Una, de la Sen. Sonia Mendoza Díaz, con la que remite el Acta de la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 27 y 28 de junio de 2013, en San Salvador, El Salvador.

Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de la participación de integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores en una visita de trabajo al Parlamento Europeo, llevada a cabo los días 21 al 23 de mayo de 2013, en Estrasburgo, Francia.

Una, del Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur,

con la que remite el Informe de su visita, conjuntamente con los Senadores Layda Sansores, Augusto López Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza y Zoé Robledo Aburto, a la frontera sur: Tabasco-Guatemala, los días 28 y 29 de mayo de 2013.

Una, del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, en relación con los proyectos de decreto presentados por diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el 24 de julio de 2013:

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

De las Diputadas María de la Paloma Villaseñor Vargas y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.

De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 35, 36 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Participación Ciudadana.

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos in fine a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el artículo 24 bis a la Ley del Banco de México.

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción I y el párrafo sexto del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

De los Diputados Amalia García Medina y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Ernesto Ruffo Appel, Sonia Mendoza Díaz, Javier Corral Jurado, María Marcela Torres Peimbert y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de candidaturas independientes.

De los Diputados Trinidad Morales Vargas, Mario Miranda Salgado y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que crea la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 9 fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el penúltimo párrafo del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación.

Del Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 52, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Del Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del Dip. Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Del Dip. Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Del Dip. Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que modifica el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania.

De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomianski como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a

favor del ciudadano Orlando Arvizu Lara, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.

Cuatro, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

- Por el que se desecha la proposición que solicitaba información acerca de la creación de la Gendarmería Nacional.
- Que exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar o, en su caso, realizar las investigaciones correspondientes con relación a las operaciones financieras y económicas de los líderes de organizaciones sindicales al servicio del Estado que hayan sido denunciadas.
- Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Durango a intensificar las investigaciones de los hechos relacionados con el secuestro y asesinato del candidato a la Presidencia Municipal de San Dimas, Durango, por el Partido Movimiento Ciudadano.
- Que exhorta al gobierno de Oaxaca a intensificar las investigaciones para esclarecer los hechos del deplorable atentado perpetrado en contra de la candidata al congreso del estado, Rosalía Palma López, así como el homicidio de sus familiares.

ONCE, DE LA SEGUNDA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO:

- Por el que la Comisión Permanente se pronuncia enérgicamente en contra de los actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.
- Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones realizadas en torno a las denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y/o elementos de la Policía Federal durante 2012 y 2013.
- Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre la estrategia en torno al monitoreo de información en el ciberespacio y sobre el uso del software Finfisher/Finspy para las instancias de seguridad.
- Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar y salvaguardar la dignidad y la integridad física y emocional de los mexicanos repatriados, así como a proteger sus derechos humanos en el marco del Programa de Repatriación al Interior de México.
- Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones tomadas por el Ejecutivo Federal a partir de la información difundida con relación al programa de vigilancia y espionaje internacional operado por agencias gubernamentales de los Estados Unidos de América.
- Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, instrumenten acciones conjuntas en favor de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, que incluyan la actualización de las bases de datos relativas a migrantes mexicanos radicados en dicho país.
- Por el que se tiene por atendida la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter al Senado de la República el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para su aprobación.
- Por el que se tiene por atendida la proposición que exhortaba a hacer respetar los derechos humanos de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, Municipio de San Juan Chamula, que egresarán del Instituto para la Educación de los Adultos.
- Por el que se tiene por atendida la proposición que exhortaba al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a reforzar las acciones tendientes a la protección y divulgación de las lenguas Cucapá y Pápago.
- Por el que se tiene por atendida la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República para su ratificación, los convenios de la OIT 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares; 183 sobre la protección de la maternidad y 189 y su recomendación 2001 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
- Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a

incluir en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial un registro diferenciado de la población afromexicana.

Treinta y tres, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

- Por el que se solicita a diversas dependencias información y acciones respecto a la situación del sector de la vivienda en el país.
- Que exhorta a diversas dependencias a implementar un programa de emergencia para detener la desertificación del territorio nacional y una estrategia integral de recuperación de tierras para el uso agropecuario y forestal.
- Que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas en la construcción de las reglas de operación para la aplicación del Fondo Metropolitano.
- Que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor a supervisar de manera constante la calidad en los servicios turísticos ofertados para los vacacionistas durante el periodo vacacional de verano 2013.
- Que exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en coordinación con los gobiernos de diversos estados, realice las acciones para la promoción turística de las playas que cuentan con certificaciones nacionales e internacionales de playas limpias.
- Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar la política de precios de los combustibles para que sea acorde a las necesidades del país y a los objetivos de crecimiento y competitividad.
- Que exhorta a la Comisión Federal de Competencia a considerar el inicio de una investigación de oficio respecto a la producción, comercialización y distribución del huevo a nivel nacional y solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar sus labores de vigilancia y verificación a fin de que no haya especulaciones o aumentos desproporcionados en los precios de los productos agropecuarios, en especial del limón mexicano.
- Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar la observancia y aplicación del permiso de paternidad que deben otorgar los patrones a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante.
- Que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir un informe sobre la política alimentaria del país en relación a los productos derivados y que contienen organismos genéticamente modificados.
- Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la normatividad y políticas aplicadas al otorgamiento de créditos a estados y municipios.
- Que exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en colaboración con los diferentes órdenes de gobierno de Michoacán, diseñe e instrumente una estrategia orientada a fortalecer y recuperar el turismo en la entidad.
- Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar, estudiar y resolver sobre las diversas proposiciones que las agrupaciones sindicales han formulado relacionadas con la aerolínea Mexicana de Aviación, con la finalidad de que pueda reiniciar operaciones.
- Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer una adecuada coordinación con los secretarios de desarrollo agropecuario y los delegados estatales de la SAGARPA de los estados de Guerrero y Oaxaca para la correcta operación y aplicación de los recursos, en concurrencia de las comisiones estatales de desarrollo de capacidades y extensionismo rural 2013.
- Que exhorta a la Secretaría de Energía a que, dentro del proyecto nacional de eficiencia energética en alumbrado público municipal, supervise y vigile que las lámparas ahorradoras cumplan con la normatividad y los estándares contemplados.
- Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a garantizar el derecho de toda persona al libre acceso y tránsito en las playas y en la zona federal marítimo terrestre.

- Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a promover el transporte ferroviario como una alternativa rápida, segura y de bajo costo para el transporte de personas y de mercancías.
- Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar la creación del seguro de desempleo dentro de su orden jurídico local.
- Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a garantizar los mecanismos institucionales para eliminar y atender cualquier acto de discriminación laboral y despidos por causas de embarazo.
- Que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a la Administración General de Aduanas y a la Procuraduría General de la República a intensificar las acciones y medidas tendientes a combatir los delitos contra la propiedad industrial y el contrabando, en especial de las refacciones y accesorios para automóviles.
- Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a acelerar los trabajos del panel de expertos que están revisando la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-02-2008, y se concluyan en un plazo perentorio.
- Que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones para la protección y conservación de la tortuga caguama (caretta caretta).
- Que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones y medidas para promover las exportaciones de los productores de tequila y carne de cerdo del estado de Jalisco hacia la República Popular de China.
- Que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones y medidas para implementar mayores beneficios permanentes para las personas de la tercera edad, que permitan el desarrollo humano integral de los adultos mayores.
- Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regular las tarifas del servicio de transporte marítimo de pasajeros en las rutas Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel, en el caso de que no existan condiciones de competencia.
- Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria un informe sobre la enajenación de acciones del Grupo Modelo.
- Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar acciones de verificación y vigilancia periódicas en los humedales costeros y zonas de manglares cercanos a rellenos sanitarios o depósitos de residuos sólidos, para evitar su contaminación o la de sus afluentes.
- Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe sobre la probable afectación ecológica al predio "La Joyita" del municipio de Jalapa, Veracruz.
- Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a llevar a cabo las acciones y medidas para la difusión y orientación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 2012 y a considerar la creación de un programa de autoregulación para las empresas, en particular para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
- Que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre los alcances de los convenios de coordinación y participación que ha suscrito en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre con los sectores privado, social, del conocimiento y demás agrupaciones de representación.
- Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a continuar cumplimentando la ejecución del gasto para el campo, de acuerdo al calendario presupuestal para el ejercicio fiscal 2013.
- Que exhorta a las autoridades competentes del gobierno federal a elaborar un análisis sobre la disponibilidad hídrica en el estado de Sonora para determinar la viabilidad de los proyectos actuales que se están llevando a cabo en el estado, en específico, el Acueducto Independencia; así como a generar propuestas que garanticen a esa entidad federativa el agua suficiente para su desarrollo y el equilibrio hídrico regional.

- Que exhorta a las Procuradurías General de la República y General de Justicia del estado de Tabasco a continuar con las indagatorias relacionadas a actos presuntamente delictivos cometidos por ex servidores públicos del dicho estado, conforme a los expedientes que obran en diversas causas penales.
- Que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno del estado de Sonora un informe sobre el estado que guardan las denuncias de los pobladores de Cananea, respecto a la empresa minera Grupo México.

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Del Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a continuar cumpliendo con las atribuciones a su cargo, en tanto inicia el funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De la Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para que se lleve a cabo una revisión de la concesión otorgada al operador del Aeropuerto de la ciudad de Chihuahua *Grupo Aeroportuario Centro Norte*, por las graves afectaciones que recibieron los usuarios debido a la inundación de dicho Aeropuerto.

De los Diputados Carlos Reyes Gámiz, Carlos Augusto Morales y Alfa González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos sobre el proceso de elaboración de los libros de texto gratuitos que serán entregados a los alumnos de educación básica para el periodo 2013-2014.

Del Sen. Pablo Escudero Morales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal información de las razones por las que no se ejecutó una resolución administrativa de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y se le exhorta a dar cumplimiento a dicha resolución, con cargo al propietario y requerir a la Contraloría General del Distrito Federal o a la autoridad pertinente que investigue e imponga las sanciones que corresponda a los servidores públicos que omitieron la ejecución de la misma.

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a dictaminar legislaciones contra el maltrato infantil.

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene punto de acuerdo sobre la empresa Iberdrola, S.A.

De la Dip. Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social y de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social a generar un protocolo de actuación en materia de seguridad pública en instalaciones que brinden servicios de educación inicial.

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a las Secretarías de Energía y de Economía a establecer las normas oficiales mexicanas en materia de distribución de combustibles; y sistemas de medición y verificación de las pipas que distribuyen gasolinas y diesel, así como

a la PROFECO a instrumentar operativos que garanticen que el llenado de las pipas se apegue a las medidas y calidad establecidas.

De la Dip. Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal su intervención para lograr el desbloqueo de las carreteras en el sur del estado de Sonora, garantizando el derecho de los sonorenses a la libre circulación de las personas y de sus mercancías.

De la Dip. Lizbeth Rosas Montero y de la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública a informar las causas por las que se han constituido empresas filiales de Petróleos Mexicanos de nacionalidad extranjera, en las que no se cuenta con una participación mayoritaria, así como los rendimientos que generan para el Estado Mexicano.

Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para guardar un minuto de silencio en reconocimiento a la labor desempeñada por el Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y el Segundo Maestre Francisco Ricardo Hernández Mercado, como miembros de la Armada de México y distinguidos mexicanos, caídos en el cumplimiento de su deber el pasado 28 de julio.

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a revisar la situación de la empresa Isolux Corsán.

De las Diputadas Adriana Hernández Íñiguez y Leticia Calderón Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales, a los gobiernos de los estados de la República Mexicana y sus diferentes dependencias públicas, para que en el marco de la conmemoración del "Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo", se sumen el 2 de abril del 2014, a la labor de concientización.

Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a renovar y ampliar el Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, manteniendo además la tasa especial del impuesto al valor agregado a razón del 11%, con el fin de dar continuidad al impulso de la competitividad económica en dichas regiones.

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Aleida Alavez Ruiz, Miguel Alonso Raya, Víctor Reymundo Nájera Medina, Lizbeth Rosas Montero, Alfa Eliana González Magallanes y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar el asesinato y castigar a los autores materiales e intelectuales del Abogado Herón Sixto López, defensor de los derechos humanos e indígenas del municipio de Santiago Juxtlahuaca del estado de Oaxaca.

Del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a reactivar la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Publicidad Exterior.

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo en materia de protección a los derechos de la niñez, en relación al caso ocurrido en Villahermosa, Tabasco.

Del Dip. Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar los lineamientos de cancelación de la empresa Comunicaciones Nextel de México S.A de C.V, debido al mal servicio brindado y afectación a los usuarios.

De la Dip. Lizbeth Rosas Montero y de la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a informar sobre la situación actual de las demandas interpuestas en Estados Unidos a empresas y ejecutivos vinculados a la compra y comercialización de hidrocarburos robados.

De la Dip. Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a notificar las razones por las cuales el Consejo Nacional de Vacunación no ha incluido las vacunas de la hepatitis A y la varicela en el sistema básico.

Del Dip. Alfio Vega de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, con la finalidad de que inicien los estudios sobre las características físicas y satisfacción de los criterios emitidos para que los municipios de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, sean incluidos en la zona metropolitana de la Laguna.

De la Dip. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para preservar el Cerro de Moctezuma y rescatar sus vestigios arqueológicos, ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Del Dip. Jhonatan Jardines Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría Federal del Consumidor a aplicar los recursos necesarios para que se revisen los servicios prestados a la ciudadanía por las compañías concesionarias de nombres Axtel, S.A. de C.V. y Telmex S.A. de C.V., en el servicio de banda ancha y línea telefónica.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe pormenorizado sobre la ejecución del presupuesto ejercido durante el sexenio anterior, con objeto de disminuir la pobreza en nuestro país y los resultados que se obtuvieron.

De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación analice la extinción de permisos de captura en aguas de jurisdicción federal de calamar gigante en el noroeste del país a embarcaciones extranjeras que no cumplan lo dispuesto en los artículos 43 y 63 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De los Diputados María del Socorro Ceseñas Chapa, Javier Orihuela García y Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Educación Pública que detenga los actos de represión administrativa en contra de los trabajadores de la educación.

Del Dip. Alfio Vega de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que

contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, con la finalidad de que inicien los estudios sobre las características físicas y satisfacción de los criterios emitidos para que el Municipio de San Buenaventura, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea incluido en la zona metropolitana Centro.

Del Dip. Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a intervenir y solucionar el conflicto surgido en la comunidad de Tepoztlán, por la construcción de la ampliación de la autopista la Pera-Cuautla.

Del Dip. Faustino Félix Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar que el gobierno de Sonora se conduzca en los cauces de la legalidad y apego al derecho respecto de actos relacionados con la presa Plutarco Elías Calles, conocida como "El Novillo".

Del Dip. Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social a prevenir, sancionar y difundir entre la población el modus operandi de diversas empresas que defraudan mediante la venta de productos cosméticos.

Del Dip. Alfio Vega de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas, con la finalidad de que inicien los estudios sobre las características físicas y satisfacción de los criterios emitidos para que la región de la carbonífera (Sabinas - San Juan de Sabinas) del estado de Coahuila de Zaragoza, sea reconocida como una zona metropolitana.

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria establezcan una mesa de diálogo con las Cooperativas *Campesinos Unidos de Hidalgo*, a fin de evaluar opciones de apoyo financiero para subsanar en el ejercicio fiscal 2013 la retención del beneficio fiscal sobre diesel para productores del campo.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes a fin de acreditar, y en su caso, iniciar el juicio correspondiente contra los servidores públicos responsables que dejaron impunes y obviaron las denuncias de desaparición de personas en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón.

De la Dip. Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República información sobre las acciones que se han tomado para la protección de las personas migrantes y la salvaguarda de su vida.

Del Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que establezca una política social adecuada, moderna, inclusiva y eficaz para prevenir el consumo de drogas entre la población menor de edad.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a enviar un informe del impacto que tuvieron los programas de testigos protegidos durante las administraciones de los Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón

Hinojosa.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe sobre las quejas atendidas por concepto de discriminación laboral por motivo de edad, así como del seguimiento y sanciones derivadas de las mismas.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, mediante la construcción de una plataforma digital, informe con la mayor amplitud y detalle sobre los diversos programas de becas que se ofrecen a nivel nacional, a favor de los estudiantes de educación media superior y superior.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Puebla a informar el costo total del juego mecánico denominado "Estrella de Puebla".

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a que, en el marco de la construcción de la autopista de cuota "Silao-San Miguel de Allende", se atienda la recomendación emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a efecto de que se salvaguarde el patrimonio material e inmaterial de los 25 asentamientos otomíes, así como las garantías que la ley prevé para el desarrollo armónico de su cultura y tradiciones.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, coordinadamente con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, realicen lo conducente para incrementar sustancialmente la oferta de espacios, en favor de los aspirantes a cursar alguna licenciatura en las instituciones públicas de ese nivel educativo.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca informe sobre las investigaciones contra el candidato a la alcaldía de San Agustín Amatengo, Oaxaca, Leninguer Raymundo Carballido Morales, por la presunta comisión de los delitos de violación tumultuaria y falsificación de documentos oficiales.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las medidas que han llevado a cabo para regular las casas de empeño.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realizar y remitir a esta soberanía, un diagnóstico integral sobre la corrupción en la Administración Pública Federal en el sexenio anterior.

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de salud federal y de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan el cumplimiento del derecho que tienen las mujeres para estar informadas veraz, oportunamente y decidir sobre la forma o modalidad en que deseen tener el parto o nacimiento humano, en el marco de las recomendaciones de la OMS.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a rendir un informe de las ganancias obtenidas por la empresa PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. desde su puesta en operación y por otra parte se exhorta a las

comisiones de energía de las Cámaras de Diputados y de Senadores a elaborar una iniciativa y dictaminarla con objeto de que cumpla con las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación emitidas en el informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del año 2010.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal a informar las medidas a implementar para evitar que los capitalinos evadan el programa de verificación vehicular con el reemplacamiento en otros estados de la República.

De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer las acciones necesarias para llevar a cabo la estrategia nacional de seguridad vial.

De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a revisar y, en su caso, adecuar o dar mantenimiento a las instalaciones del Transporte Colectivo Metro para que toda persona discapacitada pueda hacer uso de este medio de transporte.

EFEMÉRIDES

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 30 de julio, 202 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla.

INTERVENCIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la reforma política del Estado.

C I T A .

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL TRECE

PRESIDE EL DIPUTADO HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y ocho minutos del miércoles veinticuatro de julio de dos mil trece, con una asistencia de treinta y un legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles diecisiete de julio de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la Visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de su participación en la Cumbre de Líderes del G8, realizados del 15 al 19 de junio de 2013.- *Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.*

Se recibió a la Secretaría de Gobernación, Informe sobre "Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013", del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al segundo trimestre de 2013.- *Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.*

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, similar de la Secretaría de Economía, con el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación "S" y de otros subsidios "U", a cargo de dicha dependencia.- *Se remitió a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.*

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, cuatro oficios con ocho solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros; asimismo, informa de las solicitudes de cancelación de permisos para prestar servicios.- *Se dispensaron los trámites a las ocho solicitudes de permisos. Se sometió a consideración de la Asamblea un proyecto de decreto que concede seis permisos a diversos ciudadanos para prestar*

servicios en representación diplomáticas en México.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. El decreto fue aprobado por 28 votos en pro, 2 en contra y 2 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal.
Se sometió a consideración del Pleno proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Tomás Javier Calvillo Unna para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Filipinas.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senador Héctor Larios Córdova del PAN; y Diputada Adriana González Carrillo del PAN. Fue aprobado el decreto por 30 votos en pro y 2 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal.
Se sometió a consideración de la Asamblea proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Haití.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD. Fue aprobado el decreto por 23 votos en pro, 10 en contra y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.
Por lo que hace a las solicitudes de cancelación, se remitieron a las comisiones de Gobernación de ambas Cámaras del Congreso.

Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite las evaluaciones externas o complementarias que su Dirección General de Evaluación del Desempeño ha coordinado a los programas prioritarios en salud durante el periodo 2007-2012.- *Se remitió a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.*

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2013 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- *Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.*

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa la conclusión de los trabajos del Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y remite copia de la comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que respecta al proceso de designación del Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- *Quedó de enterado.*

Se recibieron veinte oficios de los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *La Mesa Directiva realizó el escrutinio de los votos recibidos y la Presidencia emitió la declaratoria de aprobación del decreto. Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC y Diputado Manuel Huerta ladrón de Guevara del PT.*

PRESIDE EL DIPUTADO
RICARDO ANAYA CORTÉS

Se recibió del Diputado Juan Manuel Diez Francos, oficio por el que solicita se le extienda la licencia que le fue concedida para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 31 de julio de 2013.- *Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.*

Se recibió del Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Informe de las actividades de la XIV Reunión Extraordinaria del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y La Cuenca del Caribe (FOPREL), realizada el 28 de junio de 2013, en Managua, Nicaragua.- *Quedó de enterado.*

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Informe de actividades desarrolladas, conjuntamente con la Senadora María Elena Barrera Tapia, durante el encuentro con el European Citizen Action Service y el Centro de Recursos Internacionales Civiles, A.C., los días 18 al 21 de junio de 2013, en Bruselas, Bélgica.- *Quedó de enterado.*

Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Informe de su participación en la XIX Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 6 y 7 de junio de 2013, en La Habana, Cuba.- *Quedó de enterado.*

Se recibió de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lisbeth Hernández Lecona, Silvia Guadalupe Garza Galván y Daniel Ávila Ruiz, Informe de la Reunión de instalación de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, realizada los días 11 y 12 de julio de 2013, en Santiago de Chile.- *Quedó de enterado.*

Se recibió de la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, oficio por el que informa la conformación del Grupo de Trabajo integrado por miembros de dicha Comisión y de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados, derivado del Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el pasado 12 de junio, relativo a la Agenda Digital Nacional.- *Quedó de enterado. Se comunicó al Ejecutivo Federal.*

(Dictamen de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permisos para desempeñar cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- *Se dispensó la segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 28 votos en pro y 2 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal.*

PRESIDE EL DIPUTADO
HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA

Se sometieron a consideración de la Asamblea dieciséis dictámenes de la Primera Comisión con puntos de acuerdo:
1) Que exhorta a los congresos de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar su legislación con el objeto de que incluyan o refuercen los mecanismos tendentes a asegurar el pleno cumplimiento de proveer y garantizar los alimentos, derecho consagrado en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales.

2) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a impulsar políticas y programas que fortalezcan y dignifiquen a los cuerpos de bomberos en el país.

3) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar la factibilidad de modernizar la normativa que regula los mercados públicos y las concentraciones en el Distrito Federal.

4) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a instrumentar o, en su caso, intensificar las acciones y campañas de difusión y orientación sobre el contenido e implicaciones que tendrá para los ciudadanos la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

5) Que exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana.

6) Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Procuraduría General de la República a informar sobre las acciones realizadas en relación al robo de infantes en dicha entidad y en el país, respectivamente.

7) Que exhorta a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de las entidades federativas, a impulsar mecanismos internos y la definición de una agenda de "Parlamento Abierto", así como el reforzamiento de los canales oficiales de comunicación y colaboración con aquellas organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones académicas que impulsen el modelo de "Parlamento Abierto".

8) Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas para combatir los delitos relacionados con la pornografía infantil en medios electrónicos.

9) Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no cuentan con sistemas digitales para la expedición por medio electrónico de actas de nacimiento, y a la Secretaría de Gobernación a analizar y, en su caso, impulsar acciones tendientes a establecer dichos sistemas, procurando la coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno que permita tener un formato único de actas de nacimiento.

10) Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar de las acciones y las investigaciones de las conductas probablemente delictivas de venta y distribución de drogas, en su modalidad de narcomenudeo, en la zona de Tepito documentadas por los medios de comunicación.

11) Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a revisar y, en su caso, armonizar la legislación en materia civil con la Convención de los Derechos

Humanos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, suscrita por México en el año 2008.

12) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer las políticas necesarias para contar con una mejor coordinación en la expedición de licencias de construcción en la ciudad.

13) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe Delegacional de Cuauhtémoc a establecer un programa de detección de necesidades con la finalidad de proveer mejores condiciones de vida y seguridad a las personas asentadas en la colonia Atlampa.

14) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los congresos de los estados que tienen tipificado el lenocinio y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a derogar dicho tipo penal.

15) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a agilizar las investigaciones tendientes a perseguir y sancionar a quienes resultaran responsables de la presunta venta de los padrones electorales, dados a conocer a través de un periódico de circulación nacional.

16) Por el que se desechan dos proposiciones que exhortaban a los institutos electorales estatales y al Ejecutivo Federal a garantizar el orden, la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en los comicios del 7 de julio.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometieron a consideración de la Asamblea trece dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el "Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014", reactivos que arrojen información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial, el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia.

2) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una nota diplomática en la que se manifieste la contrariedad del pueblo de México ante la comercialización de los objetos de arte precolombino dada en la República Federal de Alemania por parte de una la casa de subastas Lempertz.

3) Por el que la Comisión Permanente se congratula por la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea; y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe cuál es el estado actual que guarda el que sería el Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, celebrado entre México y la Unión Europea y sus Estados Miembros, concerniente a la adhesión de Croacia a la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2013.

4) Que solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el proceso de

implantación del programa piloto para la adquisición de 240 mil equipos de cómputo.

5) Que exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a emprender acciones encaminadas a concertar la colaboración institucional entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, para considerar, y en su caso, facilitar y apoyar la creación del pasaporte cultural.

6) Que exhorta al Gobierno de la República y a las entidades federativas a establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas dependencias para el desarrollo de acciones y políticas públicas enfocadas a la prevención y atención de los casos de embarazos adolescentes.

7) Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, al momento de realizar su propuesta de presupuesto de egresos de la federación para 2014, considere la asignación de recursos destinados a la rehabilitación y remodelación del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel.

8) Que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 considere un incremento económico en la inversión en el sector educativo público en el nivel básico, medio y superior.

9) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar un informe integral sobre los programas y acciones que se establecieron entre 2006 y 2012 para revertir el rezago educativo de la población en nuestro país.

10) Que exhorta a los titulares de las secretarías de salud de las entidades federativas, en particular a la del estado de Baja California, a establecer acciones pertinentes para lograr la adecuada prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y contención de la Rickettsia y de sus variantes, a fin de atender de forma oportuna los casos que se puedan presentar en el municipio de Mexicali y demás zonas vulnerables que puedan ser propensas a esta enfermedad.

11) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones.

12) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes a establecer un programa de reconstrucción para el Teatro Lírico de la Ciudad de México.

13) Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la instrumentación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre a implementar, aplicar y ejecutar las acciones, programas y recursos necesarios para la incorporación de la lactancia materna a dicho Sistema.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo que exhorta a los institutos electorales locales a resolver las quejas presentadas por el presunto uso de recursos públicos en procesos

electorales.- *Intervinieron los legisladores: Senadora Adriana Dávila Fernández del PAN; Senador Benjamín Robles Montoya del PRD; Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI; y Senador Héctor Larios Córdova del PAN. Fue aprobado en votación económica.*

(Efeméride) La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó efeméride con relación al LX aniversario del asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

(Iniciativas) El Diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre propio y del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- *Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.*

Los Senadores Fernando Herrera Ávila y Alejandro Encinas Rodríguez, presentaron a nombre propio y de diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.*

De diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.*

De diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Planeación.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.*

De diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 35, fracción VIII, del artículo 36, fracción III y del artículo 71 constitucionales, en materia de Participación e Iniciativa Ciudadanas.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.*

De diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria para el artículo 134 constitucional, en materia de Propaganda Gubernamental.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.*

De diversos Senadores Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.*

La Senadora Cristina Díaz solicito al Presidente rectificación de turno por lo que hace a las iniciativas en materia de propaganda gubernamental y la correspondiente al derecho de réplica a efecto de que la Comisión de Gobernación encabece el turno para efectos de coordinar los trabajos de análisis y estudio de las iniciativas.- *El Presidente contestó a la solicitud de la Senadora Cristina Díaz que la Mesa Directiva revisaría el contenido de las iniciativas para dictar el turno idóneo.*

El Diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud.- *Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.*

(Excitativas)

El Senador Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa con relación al punto de acuerdo que solicita la conformación de un grupo plural de trabajo para investigar y esclarecer los presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos en el estado de Guanajuato, presentado el 19 de junio de 2013.- *La Presidencia emitió excitativa a la Primera Comisión.*

El Senador Zoé Robledo Aburto, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de decreto por el que se adiciona un Libro Octavo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 26 de junio de 2013.- *Se remitió a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.*

El Diputado Fernando Zárate Salgado, remitió solicitud de excitativa con relación al punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación incluya en su análisis de la Cuenta Pública 2012, estudios de los contratos de servicios, así como del desempeño de la Procuraduría General de la República, presentado el 19 de junio de 2013.- *La Presidencia emitió excitativa a la Tercera Comisión.*

Los Diputados Lizbeth Rosas Moreno, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Víctor Manuel Bautista López, Fernando Cuéllar Reyes, Agustín Miguel Alonso Raya y Alfa Eliana González Magallanes, remitieron solicitud de excitativa con relación a las proposiciones con puntos de acuerdo presentadas por legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en las sesiones

del día 8 de mayo al 10 de junio del presente.- *La Presidencia emitirá las excitativas correspondientes.*

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XIX-A, se adicionan dos fracciones y se recorre la última fracción del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.*

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal.- *Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.*

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.*

De los Diputados Javier Salinas Narváez, Miguel Alonso Raya y Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor.- *Se turnó a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.*

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II del artículo 76 y III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.*

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.*

Del Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 147 y 242 de la Ley del Seguro Social.- *Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.*

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.*

De la Diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 58 del Código Civil Federal.- *Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.*

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

Del Diputado José Luís Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a agilizar el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos.- *Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.*

De la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima a reforzar acciones de inspección y vigilancia para combatir la pesca ilegal.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

De los Diputados Carlos Reyes Gámiz y Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia registrados en varios estados y se solicita la comparecencia del Secretario de Gobernación, con el propósito de que informe sobre la situación de inseguridad que se vive en el país.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda, a fin de informar sobre la existencia, alcance y resultados de las indagatorias administrativa y penal, relativas a la participación del Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Tlalpan en los hechos de extorsión que han sido denunciados en esa demarcación.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los Poderes Judiciales de la Federación y entidades federativas a garantizar en los procedimientos y controversias de orden familiar el interés primordial de las niñas y niños previniendo la alienación parental, bajo cualquier circunstancia.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el desplazamiento de personas en el estado de Guerrero.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

Del Diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a suspender inmediatamente las detenciones ilegales y masivas que violan los

derechos humanos de las personas migrantes; a implementar mecanismos de denuncia de delitos y acceso a visas humanitarias para los migrantes, así como la creación de una base de datos veraz de migrantes y la protección de los defensores de derechos de los migrantes.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

De la Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar seguridad social a todas las personas que prestan servicios en esa soberanía, ya sea a través de los grupos parlamentarios o en el régimen de honorarios.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

De los Diputados Ernesto Núñez Aguilar y Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el Decreto por el que se modifican, se adicionan y se derogan diversas disposiciones del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

Del Diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no implementar la homologación del impuesto al valor agregado en la franja fronteriza del norte del país, con el resto del territorio nacional.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre los derechos humanos de las mujeres internas en los centros de reclusión en la República Mexicana.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

Del Diputado Luis Miguel Ramírez Romero, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a no autorizar contratación de deuda hasta en tanto no se aprueben las reformas y legislación secundaria en materia de endeudamiento de estados y municipios.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

De los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Javier Orihuela García, Agustín Miguel Alonso Raya, Víctor Reymundo Nájera Medina y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, al Secretario de Energía, al Director de PEMEX y al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para considerar la factibilidad de construir un tren de refinación en el Complejo Petroquímico Cangrejera.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

Del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los Jefes Delegacionales en Azcapotzalco y Cuauhtémoc a aplicar políticas y acciones encaminadas a disminuir y evitar el consumo de drogas en sus demarcaciones.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se invita al Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública a una reunión urgente de trabajo para que explique sobre las causas que generaron la decisión de suspender la prueba Enlace y el concurso de oposición para maestros.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el detector molecular GT200.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como parte de la región fronteriza al municipio de Anáhuac, Nuevo León.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández y de la Diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a plantear diversas iniciativas en el marco multilateral para promover instrumentos internacionales que protejan los datos personales y sancionen los actos de espionaje.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

De la Senadora Dolores Padierna Luna y de la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación con el refinanciamiento de la deuda en el estado de Colima.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo a la indemnización por muerte causada por tránsito de vehículos.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a explicar sobre los parámetros mediante los cuales se estableció el acuerdo entre el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno de Estados Unidos para tomar la decisión de llevar a cabo la operación llamada "Procedimiento de Repatriación al Interior de México".- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de

acuerdo por el que se cita a comparecer a los integrantes del gabinete de seguridad nacional.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

Del Diputado Alfonso Inzunza Montoya, a nombre propio y de diversos Diputados, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a emitir declaratoria oficial para el estado de Sinaloa a efecto de declarar el dispositivo nacional de emergencia de sanidad acuícola, con el objeto de poder generar los mecanismos que permitan resarcir las afectaciones a los acuacultores sinaloenses.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

De la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Coordinación General de Protección Civil, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al titular del Órgano político administrativo de la Delegación Iztapalapa a implementar acciones de prevención para garantizar la vida e integridad física de las personas, así como la seguridad de los bienes privados y públicos en la zona oriente del Distrito Federal.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a actualizar base de datos de migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el programa para la formalización del empleo 2013.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a establecer las acciones pertinentes a fin de reducir los índices de reclamación por consumos no efectuados por tarjetas de crédito o débito de los usuarios de la banca en México.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación al homicidio del defensor de los derechos humanos, Herón Sixto López y del periodista Alberto López Bello, ocurridos en el estado de Oaxaca.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del IMSS a revalorar su propuesta de establecer un mecanismo de co-pago en los servicios médicos y medicinas, especialmente respecto a los derechohabientes que sufren enfermedades crónico degenerativas y que considere buscar otras soluciones en respeto al derecho humano a la salud.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

De los Diputados Marcos Rosendo Medina Filigrana, Javier Orihuela García y Marcelo Garza Ruvalcaba, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer la vinculación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y el sector productivo y de servicios, con el objeto de

potenciar el desarrollo de habilidades en la población mexicana.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la República a intervenir en la problemática derivada de la pesca ilegal del pepino de mar.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

Del Diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reforzar los protocolos para poder brindar servicios de actividades recreativas aéreas.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a prevenir la violencia contra las mujeres.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

Del Diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Seguridad Pública Federal, al Procurador General de la República, así como a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina a revisar el funcionamiento y los resultados del operativo "Guerrero Seguro".- *Se turnó a la Primera Comisión.*

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior y al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior a realizar un estudio sobre la viabilidad para la aplicación de un examen único de admisión para ingresar al nivel superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a fin de buscar alternativas a la problemática de los jóvenes que no son aceptados en la UNAM, el IPN y la UAM.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a informar los mecanismos y acciones que se prevé realizar con la finalidad de evitar accidentes futuros y la inoperancia de sus instalaciones.- *Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.*

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Geriatría realice una evaluación al Sistema Nacional de Salud, a efecto de conocer si éste cuenta con la infraestructura

hospitalaria, los recursos materiales y humanos necesarios para afrontar los retos que el envejecimiento poblacional implica y, en su caso, emitir las recomendaciones pertinentes para que esto pueda llevarse a cabo.- *Se turnó a la Segunda Comisión.*

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel e Ivonne Liliana Álvarez García, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a iniciar, a la brevedad posible, el cobro de contribuciones que se hayan dejado de percibir por parte de los importadores a quienes se les ha negado el amparo federal, respecto de los vehículos que ingresaron al territorio nacional protegidos en las suspensiones provisionales otorgadas durante la sustanciación de dichos amparos.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe pormenorizado de la situación laboral, salarial y de seguridad social de los cuerpos de bomberos del país.- *Se turnó a la Primera Comisión.*

De los Senadores Patricio Martínez García, Graciela Ortiz González y Lilia Merodio Reza y de los Diputados Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Minerva Castillo Rodríguez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Kamel Athie Flores, Luis Alfredo Murguía Lardizabal y Diana Karina Velázquez Ramírez, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al Procurador Federal del Consumidor y a las autoridades competentes a tomar decisiones sobre el estado que guarda la concesión otorgada para operar el aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

De los Diputados integrantes de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable y de la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes a incluir en sus programas sectoriales los objetivos y las estrategias enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar el presupuesto federal y el acompañamiento técnico adecuado para que estados y municipios de México aumenten sus inversiones en infraestructura para la movilidad no motorizada y sistemas integrales para la movilidad urbana sustentable.- *Se turnó a la Tercera Comisión.*

(Efemérides)

El Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis.- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración de la expedición de la Ley de Matrimonio Civil.- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Aniversario del día en que Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública.- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

(Agenda Política)

La Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse al "fraude electoral del estado de Tlaxcala".- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención para referirse a la reforma política del Estado.- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con treinta y siete minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles treinta y uno de julio a las once horas.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, EN LA CONFERENCIA DE SUN VALLEY, CELEBRADA LOS DÍAS 10 Y 11 DE JULIO DE 2013, EN SUN VALLEY, IDAHO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

'2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SEL/300/906/13
México, D.F., a 26 de julio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e s

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-1239/13, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el Informe de la participación del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Conferencia de Sun Valley, celebrada los días 10 y 11 del actual, en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos de América.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO

SRE

INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EN LA CONFERENCIA DE SUN VALLEY

Sun Valley, Idaho, Estados Unidos
10 y 11 de julio de 2013

A invitación del grupo financiero *Allen & Company*, el Presidente Enrique Peña Nieto pronunció el mensaje principal del jueves 11 de julio en la Conferencia de Sun Valley. Dicho evento se celebra cada año en la población de Sun Valley, Idaho, Estados Unidos, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo informal entre líderes empresariales en sectores clave para la economía estadounidense: medios, diseño y manufactura de tecnología, programación, comercio electrónico, finanzas, y entretenimiento. De este diálogo se derivan cambios en las percepciones de algunas de las personalidades más influyentes en la economía de América del Norte y proyectos específicos en el mediano plazo.

En esta edición, la Conferencia contó con la participación de empresas tecnológicas y medios del más alto nivel, como Amazon.com, American Express, Apple, Berkshire Hathaway, eBay, Coca Cola, Facebook, Fidelity, Google, HP, McDonald's, Microsoft, The New York Times, Qualcomm, Rakuten, Samsung, Sony, TimeWarner, 21st Century Fox, Twitter, Univision, Vodafone, Walt Disney Co., y The Washington Post.También participaron representantes de algunos centros académicos y educativos, como The Brookings Institution y la Universidad de Georgetown, y de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante su participación en la Conferencia, el Presidente de la República impulsó la consolidación de la imagen y el prestigio internacional del país. La intervención tuvo formato de entrevista, facilitada por el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.

SRE

El Presidente Peña Nieto se refirió a las prioridades del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo nacional: 1) México en paz, 2) México incluyente, 3) México con educación de calidad, 4) México próspero y 5) México con responsabilidad global. Asimismo destacó frente a empresarios y líderes de opinión de América del Norte el impulso a la innovación como herramienta para lograr estas prioridades, y, el ambiente propicio para la inversión productiva y el comercio que existe en México.

El Titular del Ejecutivo respondió diferentes preguntas relacionadas con las perspectivas de nuestro país, enfatizando el peso económico de México, su apertura comercial, su estabilidad macroeconómica y las buenas perspectivas que se derivan de su demografia.Se refirió a las reformas constitucionales en materia laboral, educativa y de telecomunicaciones, así como a las iniciativas de reforma energética y fiscal que serán presentada para la consideración del Congreso de la Unión próximamente.

El Presidente Peña Nieto sostuvo encuentros individuales y en grupo con líderes empresariales —tanto mexicanos como extranjeros—, a fin de intercambiar impresiones sobre los retos y oportunidades que existen en la economía mundial, y en particular en América del Norte. Destacan un encuentro con líderes de empresas de comercio electrónico y tecnología, y otro con fondos de inversión.

Asimismo, sostuvo un encuentro bilateral con Su Majestad el Rey Abdullah II ibn Al-Hussein, del Reino Hachemita de Jordania. Revisaron el estado que guarda la relación bilateral entre ambos países, tradicionalmente marcada por la amistad, y temas de interés común.

Esta visita de trabajo representó la oportunidad para establecer vínculos con líderes globales, para confirmarles que México es una economía en ascenso y una

SRE

nación comprometida con el libre comercio. Que es, además, una sociedad determinada a trabajar unida y transformar al país.

Tras desahogar su programa de trabajo, el Presidente de México regresó a territorio nacional el día 11 de julio. Lo acompañaron los Secretarios de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Economía; el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y el Embajador de México en Estados Unidos.

3

OFICIO CON EL QUE REMITE LOS INFORMES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS TIEMPOS OFICIALES DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, ASÍ COMO DE LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE DE 2013, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013.

'2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SEL/300/906/13
México, D.F., a 24 de julio de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e s

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. SNM/CAJ/129/2013, la Lic. Gabriela Monserrat González Montes, Coordinadora de Asesores en Materia Jurídica de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de esta Secretaría, envía los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, correspondiente al tercer bimestre del año 2013, a efecto de que por su amable conducto, sea enviada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
LIC. FELIPE SOLÍS ACERO

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

OFICIO CON EL QUE REMITE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013; INFORMACIÓN RELATIVA A LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO INTERNO NETO, EL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL; E INFORMACIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE QUE SIRVIÓ DE BASE PARA EL CÁLCULO DEL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS MISMAS, DESAGREGADA POR TIPO DE FONDO, EFECTUANDO LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OFICIO CON EL QUE REMITE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2013.

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

UNA, DE LA SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ, CON LA QUE REMITE EL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, REALIZADA LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

SONIA MENDOZA DÍAZ
SENADORA DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, Julio 18 de 2013

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

Reciba un cordial saludo de su servidora, aprovecho esta misiva para informarle que con fecha 06 de Junio de 2013 fui designada representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la XIX Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, llevada a cabo en la República de El Salvador, los días 27 y 28 de Junio de 2013, de la cual me permito anexar orden del día correspondiente.

Derivado de los acuerdos de la Comisión, se elaboró Acta de trabajo donde quedó plasmado el tratamiento de los temas discutidos durante la sesión, de la cual remito copia para su conocimiento y publicación.

Es menester fortalecer las relaciones internacionales con los países integrantes del Parlamento Latinoamericano, ya que el intercambio de experiencias fue fructífero y coadyuvará en el manejo de una servidora en los temas de la agenda nacional, lo que se verá reflejado en beneficio de nuestra nación.

Sin otro particular, le reitero mis más finas y seguras consideraciones.

Atentamente

Parlamento Latinoamericano

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
SAN SALVADOR, EL SALVADOR –
27 Y 28 DE JUNIO DE 2013

Lugar de la reunión:
Dirección:

Ubicación:

AGENDA

HORARIO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE / OBSERVACIONES
MIERCOLES, 26 DE JUNIO DE 2013		
	Llegada de los Parlamentarios, Traslado al hotel	Dirección de Protocolo
	JUEVES 27 DE JUNIO	
08:30 hs	Traslado de los legisladores al Lugar de la Reunión:	Dirección de Protocolo
09:00 a 10:00	Ceremonia de Inauguración	
10:00 a 11:15	**INICIO DE LOS TRABAJOS** **DESIGNACIÓN DE UN LEGISLADOR COMO SECRETARIO REDACTOR** **Tema I.** Medios de Comunicación: Proyecto de ley marco.	
11:15	***Receso para café***	
11:30 a 13:00	Continuación de los trabajos Debate	

www.parlatino.org
Calle Principal de Amador, Edificio 1113 – Ciudad de Panamá
Tel.: (507) 512 85 00/1/2 - Directo Secretaría de Comisiones: (507) 5128507- 8521 y 8522 / <alcira@parlatino.org>

Parlamento Latinoamericano

HORARIO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE / OBSERVACIONES
13:00 a 14:30	***Almuerzo***	
14:30 a 16:00	Continuación de los trabajos	
16:00	***Receso para café***	
16:00 a 18:00	Fin de la jornada	

HORARIO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE / OBSERVACIONES
	VIERNES 28 DE JUNIO	
08:30 hs	Traslado del hotel al Lugar de la Reunión:	Dirección de Protocolo
09:00 a 11:00	Continuación de los trabajos **Tema II** Asunto: Malvinas	
11:00	***Receso para café***	
11:30 a 13:00	Continuación de los trabajos	
13:00 a 14:30	***Almuerzo***	
14:30 a 16:00	Continuación de los trabajos	
16:00	***Receso para café***	
16:00 a 18:00	Fin de la jornada Acuerdos y puntos a tratar en la próxima reunión Lectura y aprobación del Acta FIRMAS.	

www.parlatino.org
Calle Principal de Amador, Edificio 1113 – Ciudad de Panamá
Tel.: (507) 512 85 00/1/2 - Directo Secretaría de Comisiones: (507) 5128507- 8521 y 8522 / <alcira@parlatino.org>

Parlamento Latinoamericano

ACTA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLITICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACION DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO

País: San Salvador, El Salvador **Fecha: 27 y 28 de Junio de 2013**

Lugar: Hotel Sheraton Presidente.

LEGISLADOR:	PAÍS:
Daniel Caggiani	Uruguay
Jorge Gandini	Uruguay
Daisy Tourné	Uruguay
Arístides da Roca Cano	Paraguay
Alfred Marlon Sneek	Aruba
Siany Villalobos	Costa Rica
Candelario Ambrosio Wever	Aruba
Carlos Guillermo Donkin	Argentina
María de los Ángeles Higonet	Argentina
Gabriel Ascencio	Chile
Ricardo Fernández Menéndez	Chile
Octavio Villacreses	Ecuador
Heriberto Manuel Galindo Quiñones	México
Abel Octavio Salgado Peña	México
Ernerto Núñez Aguilar	México
Sonia Mendoza Díaz	México
Ana Elisa Osorio	Venezuela
Roy Daza	Venezuela
Timoteo Zambrano	Venezuela
Julio Salazar	Bolivia
Franklin Garvizu	Bolivia

Testigos de Honor

Edgar Escolán Batarse	El Salvador
Walter Montejo	El Salvador

1

Ismael	El Salvador
Alba Márquez	El Salvador
Guadalupe Vásquez	El Salvador
Damián Alegría	El Salvador
Karina Sosa	El Salvador
César Humberto García	El Salvador
Marcos Salazar	El Salvador
Manuel Flores	El Salvador
Ciro Zepeda	El Salvador
Susy Bonilla	El Salvador
Arnoldo Marín	El Salvador
Francisco Ortiz	El Salvador
Nidia Díaz	El Salvador

A las once horas del día veintisiete de junio del corriente año, se inicia la Sesión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del PARLATINO, de la siguiente manera:

I) La Diputada Daisy Tourné (República Oriental del Uruguay) presenta al Presidente de la Comisión Diputado Heriberto Manuel Gallndo Quiñonez (México).
II) Se procede a la presentación de cada uno de los legisladores presentes.
III) Se nombra como Secretaria Relatora de la Comisión a la Legisladora Siany Villalobos de (Costa Rica)

TEMAS A TRATAR:

El Presidente propone los temas a tratar en la reunión los cuales son: A) Discusión sobre el proyecto de ley marco sobre medios de comunicación. B) Situación de las Islas Malvinas. C) Resolución tema marítimo de Bolivia. Así mismo el Presidente propone un punto de acuerdo sobre privilegiar el diálogo y la solución política y pacífica de la situación que actualmente se vive en la República de Brasil, reafirmando el apoyo a la Presidenta de Brasil y su gobierno. Así mismo resalta al parlamentarismo como un instrumento para solución de los conflictos.

TEMA I: MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PROYECTO DE LEY MARCO.

EXPOSITOR:

Legislador Roy Daza (República Bolivarana de Venezuela)

2

DESARROLLO DEL TEMA:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PROYECTO DE LEY MARCO.

El Presidente aclara que dicho proyecto no fue remitido por no existir el mismo en este momento, ya que los legisladores encomendados para su redacción ya no pertenecen a la Comisión. Acto seguido se abre a debate el tema, otorgándose la palabra al legislador Roy Daza (República Boliviarana de Venezuela) quien habla sobre la regulación de los medios de comunicación en el país y su región. Posteriormente se procede a debatir el tema desde la perspectiva de cada uno de los países de los legisladores presentes.

Se hace entrega de la Ley Orgánica de Comunicación de la República de Ecuador, el cual se solicita tomarlo en cuenta al momento de la discusión del proyecto de ley a elaborarse.

CONCLUSIONES:

Como acuerdo se estableció que se dará entrega de los documentos de cada uno de los países a la Secretaría Relatoría de la Comisión, para efectos de estudio y posterior análisis. Se realizará una relatoría de las experiencias de cada uno de los países en el tema que se tomarán como insumos adentro de cada Congreso.

Asimismo, se acuerda aprobar el comunicado propuesto por la Delegación de la República de Argentina.

TEMA II: **Con modificación de agenda se realizan diversas solicitudes de incorporación de temáticas, de las cuales se tomaron los siguientes acuerdos:**

I) Solicitud del Legislador Candelario Wever en el sentido de dar continuidad al tema de la situación de la República de Aruba.

II) Solicitar a la Legisladora Daysi Tourné, un informe a esta comisión sobre el seguimiento que se le ha dado en la Junta Directiva del PARLATINO al tema de Aruba.

III) La Comisión expresa su rechazo a todo tipo de colonización en la región, reafirmando el derecho de auto determinación de los pueblos de conformidad los principios del PARLATINO.

3

Parlamento Latinoamericano

IV) Se acuerda manifestarse en el sentido de privilegiar el diálogo y la solución política y pacífica de la situación que actualmente se vive en la República de Brasil, reafirmando el apoyo a la Presidenta de Brasil y su gobierno.

V) Pronunciarse en el sentido de reiterar el respeto por la soberanía de los pueblos latinoamericanos, en el ejercicio de su derecho a conceder asilo o refugio de conformidad a las normas de derecho internacional.

VI) Se acuerda emitir pronunciamiento sobre la situación de Puerto Rico propuesto por el Diputado Roy Daza de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho pronunciamiento se aprueba por mayoría.

VII) A solicitud de la Legisladora Karina Sosa, se acuerda incorporar como punto de discusión en la agenda de la Comisión, el tema de la migración.

Asimismo, emitir comunicado sobre la aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos de América sobre el proyecto de la Reforma Migratoria.

VIII) Se introduce el punto referente al tema marítimo de Bolivia, para lo cual se concede la palabra al Senador Julio Salazar, en su calidad de representante de Bolivia y posteriormente se abre a debate el tema antes citado. Bolivia retira su propuesta de resolución. Se acuerda que el audio de las intervenciones de cada Parlamentario se agregarán como anexos a la presente, instruyéndose a la Secretaría de Comisiones del PARLATINO su transcripción.

TEMA III:

SITUACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS.

Se le concede la palabra a la delegación Argentina, quien efectúa una exposición histórica y el status quo de las Islas Malvinas.

Se acuerda por unanimidad de las delegaciones presentes, ratificar la posición histórica del PARLATINO sobre la situación, apoyando la posición legítima y justa de los reclamos de la República Argentina sobre dichos territorios.

ACUERDOS FINALES

Se incorporan a la presente los comunicados aprobados.

Se acuerda agradecer a la Asamblea Legislativa por el apoyo que ha brindado a la realización de esta reunión y hace extensivo ese agradecimiento a las Unidades Institucionales que apoyaron el evento y en especial a la Oficina de Relaciones Internacionales y Unidad Técnica de la Asamblea Legislativa por su cálido y eficiente apoyo.

AGENDA PRÓXIMA REUNIÓN

- Informe caso Aruba
- Tema migrantes
- Tema electoral municipal (experiencias de reelección municipal en los países)
- Regulación de redes sociales
- Rol y papel de los recursos naturales como materia de integración para América Latina.
- Experiencias de los países sobre programas para combatir pobreza extrema y hambre.

Próxima reunión: 26 y 27 de septiembre, en los Estados Unidos Mexicanos.

Y sin más que hacer constar, se cierra la presente a las trece horas del día veintiocho de junio del año dos mil trece.

Heriberto Manuel Galindo Quiñones
Presidente de la Comisión
México

Slany Villalobos
Secretaria de la Comisión
Costa Rica

Daisy Tourné
Secretaria de Comisiones del PARLATINO
República Oriental del Uruguay

Daniel Caggiani	Uruguay
Jorge Gandini	Uruguay
Alfred Marlon Sneek	Aruba
Candelario Ambrosio Wever	Aruba
Carlos Guillermo Dogkin	Argentina

Gabriel Ascencio	Chile
Ricardo Fernández Menéndez	Chile
Octavio Villacreses	Ecuador
Abel Octavio Salgado Peña	México
Ernesto Núñez Aguilar	México
Sonia Mendoza Díaz	México
Ana Elisa Osorio	Venezuela
Roy Daza	Venezuela
Timoteo Zambrano	Venezuela
Julio Salazar	Bolivia
Franklin Garvizu	Bolivia

Testigos de Honor

Karina Sosa	El Salvador
Edgar Escolán Bafarse	El Salvador
Walter Montejo	El Salvador
Ismael Recinos López	El Salvador
Alba Márquez	El Salvador
Guadalupe Vásquez	El Salvador
Damián Alegría	El Salvador
César Humberto García	El Salvador
Marcos Salazar	El Salvador
Manuel Flores	El Salvador

6

Parlamento Latinoamericano

Susy Bonilla	El Salvador	
Arnoldo Marín	El Salvador	
Francisco Ortiz	El Salvador	
Nidia Diaz	El Salvador	

7

Parlamento Latinoamericano

COMUNICADO

La Comisión de Asuntos Políticos del Parlamento Latinoamericano reunida en San Salvador, República de El Salvador y abordando la problemática de los medios de comunicación y la democracia, resuelve:

Reafirmar su compromiso con el debate plural e interdisciplinario sobre el rol de los medios de comunicación y la democracia.

Concebir a la información y a la comunicación como un derecho humano fundamental, como un atributo necesario e ineludible para una ciudadanía plena en el marco de democracias profundas y participativas. Por tal motivo, la información no puede estar sujeta exclusivamente a las reglas del mercado, los concesionarios y los propietarios.

Afirmar que la concentración de medios y los monopolios informativos son incompatibles con la construcción de ciudadanía y un riesgo para la convivencia democrática.

Entender que la ciudadanía y los medios de comunicación, deben gozar de la más absoluta libertad de expresión que ineludiblemente conlleva responsabilidades ulteriores, para garantizar el derecho social a la información.

Manifestar su más profundo compromiso con una comunicación sin persecución libre y rigurosa pero a la vez comprometida con la democracia y respetuosa de los derechos humanos, de la intimidad y el honor, de la niñez, de la adolescencia, de las mujeres, de las minorías, de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe, de las víctimas de tragedias y de todos los sectores vulnerables.

Expresar su beneplácito con los países y pueblos que han impulsado la creación de medios públicos y comunitarios y han debatido profunda y democráticamente el riesgo que significa la monopolización o la concentración de medios en América Latina y el Caribe.

Declarar su complacencia con todas las políticas públicas tendientes al acceso universal y gratuito a la información, a los espectáculos y eventos de interés público, a la regulación de las nuevas tecnologías y al fortalecimiento de la industrias culturales y audiovisuales nacionales, regionales y locales que ofrecen miradas plurales sobre la realidad y alimentan la autoestima e identidad de los pueblos de América Latina y el Caribe.

COMUNICADO

LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES E INTEGRACIÓN DEL PARLATINO, *reunida en San Salvador, El Salvador, el 27 y 28 de junio de 2013, se pronuncia en respaldo a la Decisión adoptada por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual se ratifica la denuncia de la situación colonial sobre Puerto Rico y exhorta al gobierno de los Estaos Unidos, a cumplir con las resoluciones de la ONU sobre este caso.*

Para el Parlamento Latinoamericano, es una posición de principio pautada en nuestros estatutos y el Tratado Constitutivo, la lucha contra el colonialismo y ratifica el criterio según el cual se defiende el derecho a la autodeterminación y a la independencia, de la nación puertorriqueña.

DADO EN SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR: *a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil trece.*

Parlamento Latinoamericano

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN

La Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano, reunida en San Salvador, República de El Salvador, ratifica su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido relativa a la cuestión de las Islas Malvinas.

Reafirma el interés regional en que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con las Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las Declaraciones y los Comunicados Conjuntos de Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, la Organización de Estados Americanos, la UNASUR, el ALBA, el MERCOSUR y otros foros regionales y multilaterales, tales como ASA (Cumbre Sudamérica-Africa) ASPA (Cumbre de países sudamericanos y árabes), Cumbre Iberoamericana, Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur y G77 más China.

Rechaza toda acción unilateral en el área disputada en violación de lo establecido por la Resolución 31/49 sobre la Cuestión Malvinas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las Partes a abstenerse de introducir modificaciones en la situación e incluye, entre otras cosas, la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables de la República Argentina así como la realización de ejercicios militares.

Con relación a la ilegítima votación llevada a cabo en las Islas Malvinas los días 10 y 11 de marzo pasado, señala que dicha votación en nada altera la Cuestión de las Islas Malvinas ni pone fin a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, habiendo sido definida por las Naciones Unidas como un caso especial y particular de descolonización y rechazándose por tanto la aplicabilidad del principio de libre determinación de los pueblos, tal como fuera destacado en declaraciones del MERCOSUR, UNASUR y ALBA.

Exhorta a los Jefes de Estado y a los pueblos de nuestra América a estar vigilantes ante cualquier amenaza a la soberanía e independencia de la Patria Grande que es América Latina y El Caribe y de toda forma de dominación.

Remite esta Resolución a la Junta Directiva para su ratificación y envío a los Jefes de Estado latinoamericanos y caribeños; así como a todos los parlamentos nacionales y subregionales y al Secretario General de las Naciones Unidad Ban Ki Moon.

COMUNICADO

LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES E INTEGRACIÓN DEL PARLATINO, *respecto de la situación de protestas que se vive en la hermana República del Brasil,*

EXPRESA:

I.- Su convicción de privilegiar el diálogo, la tolerancia y una solución política y pacífica de la situación que actualmente se vive en la República de Brasil.

II.- Su respaldo a la Presidenta de Brasil, Dilma Vana Rousseff y su gobierno en sus gestiones para alcanzar una solución conciliadora a la situación. Así mismo se resalta el parlamentarismo como un instrumento para la solución de los conflictos de todo tipo.

DADO EN SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR: *a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil trece.*

Parlamento Latinoamericano
Comisión de Asuntos

COMUNICADO

LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES E INTEGRACIÓN DEL PARLATINO, *en vista de las nuevas amenazas expresadas por autoridades de EEUU contra Ecuador, y con base en las resoluciones de la ONU, exprese su total solidaridad y el rechazo al intento de violar y romper con el derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho de asilo; asimismo, se pronuncia en contra de cualquier forma de intromisión o intervención de un país en otro, por la vías que fueren.*

DADO EN SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR: *a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil trece.*

LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES E INTEGRACIÓN DEL PARLATINO,

MANIFIESTA:

Su reconocimiento y agradecimiento a la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador por el valioso apoyo que ha brindado a la realización de esta reunión de Comisiones.

Hace extensivo ese agradecimiento a las Unidades Institucionales que apoyaron el evento y en especial a la Oficina de Relaciones Internacionales y Unidad Técnica de la Asamblea Legislativa por su cálido y eficiente apoyo.

3 Gaceta migratoria Propuesta Salvador

COMUNICADO

LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES E INTEGRACIÓN DEL PARLATINO, *En vista que el día 27 de junio de los corrientes fue aprobada por mayoría en el Senado de los Estados Unidos de América la reforma migratoria integral, que busca regularizar la estancia en territorio estadounidense a más de 11 millones de personas que se encuentran en condición migratoria indocumentada en dicha nación:*

EXPRESA:

I. Su saludo a la voluntad política demostrada en el Senado Estadounidense, de avanzar en este proceso de elaboración de un marco normativo que favorezca a la comunidad migrante residente en ese país.

II. Su deseo porque dicho proceso continúe procurando el bien de toda la sociedad estadounidense incluidas las personas hasta hoy indocumentadas, en consonancia con la garantía de los derechos humanos e integración familiar de los más de 11 millones de seres humanos de diferentes nacionalidades que esperan verse beneficiados de este proyecto.

III. El PARLATINO saluda todo lo que se promulgue o haga en favor de los migrantes originarios de sus países miembros, y, en consecuencia, rechaza todo lo que los afecte en sentido negativo; al mismo tiempo, espera de los connacionales el respeto a las leyes de aquel país.

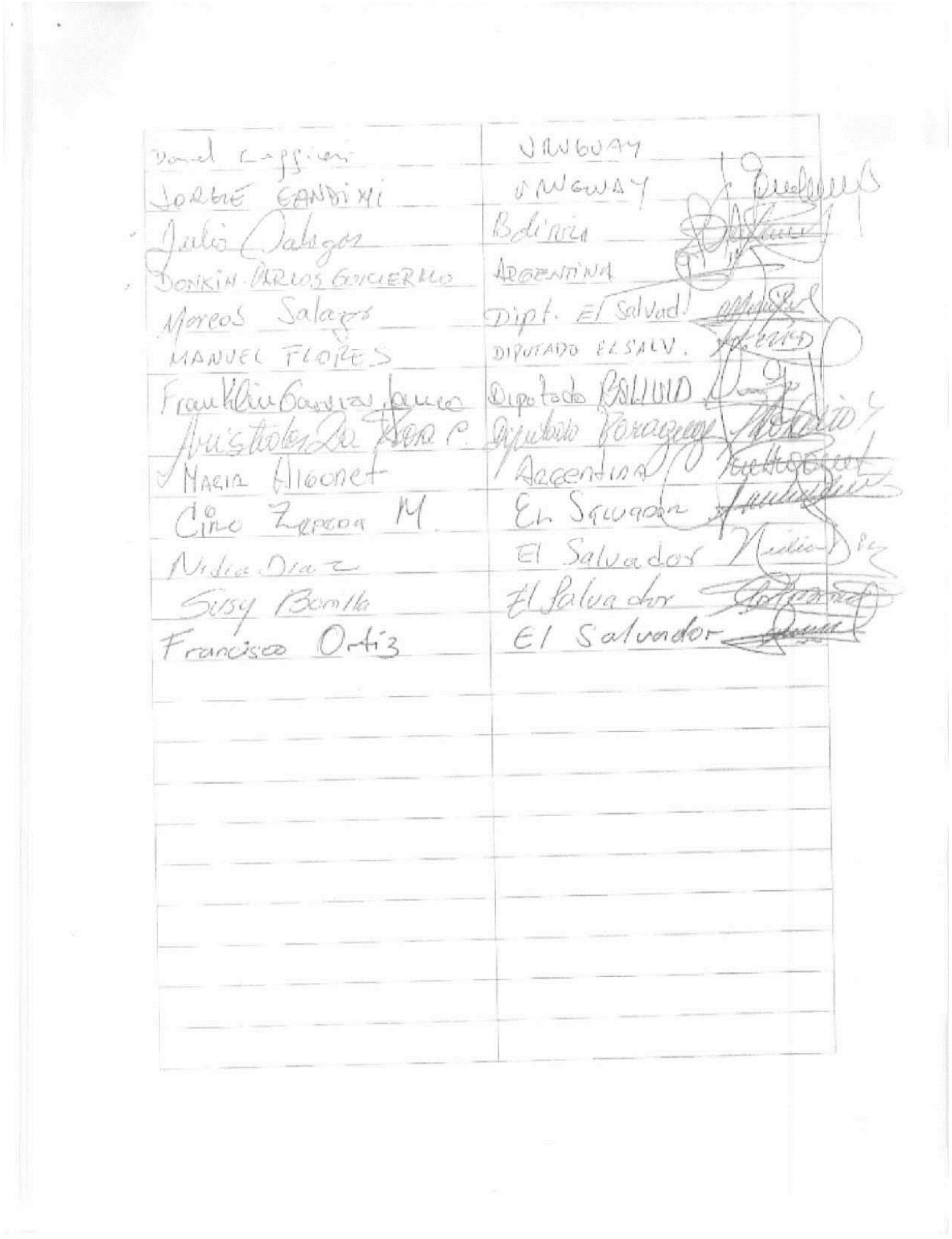
DADO EN SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR: *a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil trece.*

Acuerdo x unanimidad

PARTICIPANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN DEL PARLATINO

San Salvador, El Salvador 27 y 28 de junio de 2013

NOMBRE	PAÍS
Edgar Escobar B.	El Salvador
Walter Montejo	El Salvador
Ismael Ruiz Pleitez	El Salvador
Alba Marquez	El Salvador
Guadalupe Vasquez	El Salvador
Marlon Spruck	Aruba
Orlando Villacreses P.	Ecuador
Ricardo Hernandez	Chile
Gabriel Ascencio	Chile
Candelario Wever	Aruba
Sonia Mendoza Diaz	México
Ernesto Nava Agular	México
Abel Salgado Pont	México
Damián Negría	El Salvador
Karina Sosa	El Salvador
Humberto M. Gabriel Quintero	México
Roy Daza	Venezuela
Giang Villalobos Agüero	Costa Rica
César Humberto García	El Salvador
Ana Elisa Osorio	Venezuela



Daniel Caffera	URUGUAY
JORGE GANDINI	URUGUAY
Julio Salagor	Bolivia
DONKIN CARLOS GUILLERMO	ARGENTINA
Moreos Salazar	Dipt. El Salvad
MANUEL FLORES	DIPUTADO EL SALV.
Franklin Cuevas Lemus	Diputado PARLUNO
Aristides De Leon C.	Diputado Paraguay
MARIA Alconet	Argentina
Cino Zepeda M	El Salvador
Nidia Diaz	El Salvador
Sissy Bonilla	El Salvador
Francisco Ortiz	El Salvador

UNA, DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EN UNA VISITA DE TRABAJO AL PARLAMENTO EUROPEO, LLEVADA A CABO LOS DÍAS 21 AL 23 DE MAYO DE 2013, EN ESTRASBURGO, FRANCIA.

GABRIELA CUEVAS BARRÓN
SENADORA DE LA REPÚBLICA

Cámara de Senadores, a 23 de julio de 2013

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE

Por medio de la presente, con fundamento en el artículo 283, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, remito informe relativo a la participación de integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadoras Marcela Guerra, Lisbeth Hernández Lecona y la suscrita, sobre una Visita de Trabajo al Parlamento Europeo llevada a cabo los días 21 al 23 de mayo pasado en la ciudad de Estrasburgo, Francia.

Agradeciendo de antemano su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Informe de la Participación de las Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores
Senadoras Gabriela Cuevas Barron, Marcela Guerra Castillo y Lisbeth Hernández Lecona

VISITA DE TRABAJO AL PARLAMENTO EUROPEO

ESTRASBURGO, FRANCIA
21 AL 23 DE MAYO DE 2013



La Delegación del Senado mexicano en la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, el día 22 de mayo

Informe de la Participación de las Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadoras Gabriela Cuevas Barron, Marcela Guerra Castillo y Lisbeth Hernández Lecona en la Visita de Trabajo al Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia.

Contenido

Introducción 3

Desarrollo de la Visita de Trabajo al Parlamento Europeo 4

Anexos 11

Introducción

Una Delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República realizó una visita de trabajo a Estrasburgo, Francia los días 21 al 23 de mayo, en la que sostuvo reuniones con legisladores del Parlamento Europeo y con altos funcionarios del Consejo de Europa y de la Corte Europea de Derechos Humanos.



Senadoras de la Delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Parlamento Europeo

Senadora Marcela Guerra Castillo, Senadora Gabriela Cuevas Barron y Senadora Lisbeth Hernández Lecona

La Delegación estuvo integrada por:

1) Senadora Gabriela Cuevas Barrón (PAN), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores;
2) Senadora Marcela Guerra Castillo (PRI), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores-América del Norte y Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores; y
3) Senadora Lisbeth Hernández Lecona (PRI), Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Durante su estancia en Estrasburgo estuvieron acompañadas por la Embajadora de México ante la Unión Europea, Embajadora Emérita Sandra Fuentes Berain y por el Encargado de Negocios, *a. i.* de la Oficina de México en Estrasburgo, Alejandro Martínez Peralta.

Desarrollo de la Visita de Trabajo al Parlamento Europeo

Martes 21 de mayo

Cena informal con Euro Diputados

Además de la delegación participó el Euro Diputado José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, España), Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y el Euro Diputado Ricardo Cortés Lastra (S&D, España), Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México. En el evento intercambiaron puntos de vista sobre la XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, celebrada a principios de mes de mayo. Asimismo, discutieron los temas que son más relevantes para México en su relación con la UE.

Miércoles 22 de mayo

Reunión de trabajo con el Director General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa (CoE), Sr. Phillipe Boillat (11:15 a 12:30 hrs.)



Delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores en Reunión de trabajo con el Director General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa (CoE), Sr. Phillipe Boillat

En el encuentro participó también la señora Elda Moreno, Directora del Departamento de Igualdad de Género y Dignidad Humana del CoE. El funcionario europeo señaló que la mayoría de las convenciones recientes del organismo están abiertas a la adhesión de países no miembros del CoE, por lo que es de gran interés para la organización que México pudiera adherirse a algunas de ellas. Se refirió en específico a aquellas en las que se ha mostrado interés por parte de autoridades de los poderes ejecutivo o legislativo de nuestro país, en particular el Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (Convenio de Lanzarote), el Convenio contra la Ciberdelincuencia o Cibercrimen (Convenio de Budapest) y el Convenio Para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Convenio 108).

Las senadoras explicaron las modificaciones que ha realizado nuestro país, tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo, a fin de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y de los niños en particular. Respecto al Convenio de Budapest, el Sr. Boillat se refirió a él como el "estándar dorado" de la legislación internacional en la materia y recordó que México fue invitado a adherirse desde 2007. En cuanto al Convenio 108, el funcionario destacó que dos comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) han manifestado interés en adherirse al convenio, pero hasta el momento no ha habido una respuesta formal. Las legisladoras expresaron su interés en el contenido de los textos y señalaron que solicitarían información al Gobierno Federal para conocer el estado que guarda el análisis de adhesión a estos instrumentos.

Reunión de trabajo con el Vice Presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), Juez de Andorra, Josep Casadevall, y el Juez de España, Luis López Guerra (15:30 a 16:30)

Los jueces hicieron una amplia exposición sobre el funcionamiento de la Corte, desde los criterios de admisibilidad de los casos, hasta explicaciones específicas sobre casos muy significativos de particular interés. Señalaron que en el año 2012 se presentaron más de 65 mil solicitudes, pero más de un 98% son declaradas inadmisibles. En los últimos años se ha logrado una disminución de los casos (a principios de 2012 eran más de 151 mil), sin embargo, siguen pendientes más de 130 mil casos. Explicaron que aunque las sentencias de la Corte son declaratorias, el Comité de Ministros del CoE supervisa su cumplimiento por lo que se ejecutan de forma prácticamente vinculatoria, en la gran mayoría de los casos. Los jueces explicaron en particular la diferencia que existe entre la CEDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las legisladoras y la Embajadora de México ante la UE plantearon preguntas sobre el funcionamiento de la Corte, que fueron respondidas por parte de los jueces. La parte mexicana explicó que en México se han llevado a cabo modificaciones a la normatividad nacional de tal manera que las convenciones de derechos humanos se encuentran al mismo nivel que la Constitución. Al final del encuentro, la delegación realizó una breve visita por las instalaciones de la Corte, donde visitaron la Gran Sala.

Reunión de trabajo con la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa, Sra. Gabriella Battaini-Dragoni (17:00 a 18:00).

En el encuentro estuvieron presentes también el señor Zoltán Taubner, Director de Relaciones Exteriores, la señora Elda Moreno, Directora del Departamento de Igualdad de Género y Dignidad Humana, y la señora Leyla Kayacik, Asesora Legal de la Secretaria General Adjunta. En la reunión se abordaron de manera sucinta los convenios discutidos durante la reunión previa sostenida con el Director General Boillat. Adicionalmente, la Señora Battaini recordó que México firmó en 2002 el Convenio del CoE de Derecho Penal sobre Corrupción (supervisado por el Grupo de Estados en Contra de la Corrupción, mejor conocido como GRECO), sin embargo, no se ha ratificado hasta el momento. Expresó que en la actualidad el tema de la corrupción es el tema más importante de la organización, por lo que considerarían muy relevante si nuestro país pudiera adherirse al mismo. Las legisladoras manifestaron que el actual gobierno y el poder legislativo otorgan una importancia especial al tema e incluso mencionaron que existe la propuesta del Presidente de crear una Comisión Nacional Anti Corrupción.



Delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores con Sra. Gabriella Battaini-Dragoni, Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa.

La Senadora Marcela Guerra indicó que, en cinco meses después de que los grandes partidos suscribieran el Pacto por México, se han aprobado la ley laboral, la de contabilidad gubernamental para la transparencia, y contra el lavado de dinero, así como la reforma educativa. Añadió que se han puesto las bases para la futura Comisión anticorrupción y para la reforma financiera y de las telecomunicaciones.



Senadora Marcela Guerra con Sra. Gabriella Battaini-Dragoni.

La Senadora Guerra se comprometió a solicitar al Gobierno Federal cuál es la razón por la cual no se ha adherido nuestro país a ese instrumento. La Señora Battaini mencionó que actualmente está en proceso de redacción, una nueva convención sobre la integridad del deporte en contra de la manipulación de resultados y las apuestas ilegales. Señaló que actualmente hay varios países no miembros del CoE que participan en la redacción del texto y que, si México está interesado, podría ser de gran utilidad.

Las legisladoras mostraron interés en el tema y se comprometieron a enviar toda la información, con miras a que nuestro país evalúe la factibilidad de participar en este esfuerzo. Finalmente, la funcionaria señaló que hay dos temas adicionales donde existe potencial para una cooperación más activa. El primero es el proyecto de Ciudades Interculturales, en el cual la Ciudad de México ya forma parte de las ciudades asociadas al mismo. El segundo es el de las Rutas Culturales, del cual se hizo una breve descripción. En síntesis, la reunión fue de gran valor para que las legisladoras conocieran de primera mano las actividades en las que se enfoca el CoE, a las diferencias existentes con la Unión Europea y a los temas en los que se puede incrementar la cooperación de México con el organismo.

Cena de trabajo ofrecida por el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Othmar Karas, en nombre del Presidente, Martin Schulz (20:00 a 22:00 hrs).

En la cena participó el Eurodiputado Elmar Brok (PPE, Alemania), Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, el Eurodiputado Santiago Fisas Ayxela (PPE, España), la Eurodiputada (PPE, España), Teresa Jiménez-Becerril Barrio. Asistieron también Etienne Bassot, Jefe de Unidad del Departamento Temático de Relaciones Exteriores del PE; Alfredo Conte; Jefe de División de Planificación Estratégica, Servicio Europeo de Acción Exterior; y Fernando González González, del Secretariado de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El Diputado Karas se congratuló por su reciente visita a México, en el marco de una reunión de parlamentarios del G20. Señaló que el Presidente Schulz no pudo recibir a la delegación mexicana pues se encuentra en Bruselas en la Cumbre de Jefes de Estado de la UE. Respecto a la cooperación bilateral, señaló que el acuerdo global firmado con México ha sido un modelo para el acercamiento con otros países, pero que es necesario actualizarlo, en particular por las negociaciones actuales respecto a un acuerdo con Canadá y con Estados Unidos. Al respecto, tanto la Embajadora Fuentes como la Senadora Cuevas expresaron que para México sería mejor que la UE negociara el acuerdo con los miembros del TLCAN en su conjunto, en vez de hacerlo de manera individual. Al mismo

tiempo, reconocieron que tanto los miembros de la Comisión Europea como las autoridades de Washington han señalado que eso complicaría aún más la negociación.

La parte mexicana habló sobre las negociaciones en curso para que, tanto México como Estados Unidos, se integren al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Se informó también que uno de los esfuerzos que ha suscitado interés por parte de la UE es la Alianza del Pacífico, cuya Cumbre presidencial se estaba desarrollando en ese momento en Colombia. La Embajadora Fuentes informó que la UE ha manifestado su interés en obtener el estado de observador en el mecanismo. En la cena los legisladores hablaron de temas de interés global, como la situación en Siria y en el Medio Oriente.

Respecto al tema de cooperación para el desarrollo, la delegación mexicana expresó su preocupación por el hecho de que con las nuevas regulaciones de la UE, se detuvieran los proyectos con México. La Senadora Cuevas indicó que a pesar de que el PIB *per cápita* es relativamente alto en la región, existe todavía pobreza en una gran parte del país, por lo que es necesario continuar con estos proyectos. La Embajadora Fuentes agregó que, por cada euro otorgado por la UE, México destinaba un euro, por lo que no puede considerarse una donación sino como cooperación conjunta. Añadió que ahora la cooperación tendrá que llevarse a cabo bajo el esquema de los países con los cuales existe una "asociación estratégica". El Euro Diputado Brok expresó que México manifiesta que es un país rico o pobre, cuando le conviene.

Antes de concluir el evento, la Senadora Cuevas, ofreció unas palabras de agradecimiento a nombre de la delegación. Se congratuló por la reciente reunión interparlamentaria entre la UE y México, así como por la visita del Vicepresidente Karas. Reiteró que a nuestro país le interesa mucho formar parte de las negociaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. Señaló que actualmente se encuentra en proceso una reforma en materia energética que hará más competitivo a nuestra nación. "México va a tener un potencial sorprendente", agregó. En otro orden de ideas, se refirió al tema de la niñez. Recordó que en la última reunión de la Unión Interparlamentaria, las legisladoras mexicanas ingresaron, apoyadas por Bahréin, el tema de los niños. Solicitó el apoyo de la UE en este esfuerzo. Por otra parte, agradeció el apoyo del Parlamento Europeo a la candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Organización Mundial del Comercio. Finalmente, externó que para México la relación con la UE es verdaderamente "estratégica" y por eso hizo votos para que los contactos al más alto nivel continúen incrementándose. El Eurodiputado Fixas manifestó oficialmente su interés en que la próxima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México se realice en Monterrey, en el primer trimestre de 2014, antes de las elecciones en el Parlamento Europeo. La Senadora Guerra, Senadora por el estado de Nuevo León se comprometió en dar seguimiento al tema para lograr el apoyo de las autoridades federales, estatales y locales.

Jueves 23 de mayo
Intervención de la delegación mexicana en la Reunión Extraordinaria del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (09:15 a 09:35 hrs.)

En el marco de la sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el Comité de Asuntos Exteriores llevó a cabo la reunión extraordinaria para recibir a la delegación mexicana y para abordar el tema de la situación en Ucrania. El título de la reunión otorgado por el PE fue el siguiente: "Intercambio de puntos de vista con una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento mexicano,

encabezada por la senadora Gabriela Cuevas, sobre las relaciones UE-México y los retos comunes en materia de política exterior". El video de la sesión se localiza en la siguiente liga: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20130522-1000-COMMITTEE-AFET

La sesión inició con la intervención de la Senadora Gabriela Cuevas, quien habló a nombre de la delegación visitante. En su intervención destacó el interés en que las negociaciones actuales con Estados Unidos y Canadá, no se realicen en separado, sino que se haga como TLCAN en su conjunto. Manifestó que México es una economía abierta y se refirió específicamente a la Alianza del Pacífico, en el cual ya son observadores España y Francia y Portugal han solicitado su ingreso en la misma calidad. Respecto al tema de la cooperación internacional, lamentó los cambios propuestos para el periodo 2014-2020, en el que se considera a nuestro país con un país de renta media alta, por lo cual no se pueden destinar recursos para la cooperación bilateral. Por lo anterior, expresó su interés en que se planteen nuevas estrategias para seguir beneficiando a millones de mexicanos.



Intervención de la Senadora Gabriela Cuevas en el Comité de Asuntos Exteriores en el Parlamento Europeo

Al terminar la intervención, cuatro euro diputados realizaron preguntas a la delegación mexicana. La primera fue la Eurodiputada Barbara Lochbihler (Verdes, Alemania), Presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos. La legisladora se refirió al caso de la muerte de la defensora de derechos humanos mexicana Bety Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola cuando pretendía llevar ayuda humanitaria a los habitantes de San Juan Copala en 2010. Indicó que desde entonces nadie ha comparecido en los tribunales, a pesar de que en otoño pasado hubieron algunas noticias alentadoras pues una de las personas involucradas fue arrestada, sin embargo, no se ha llegado a una resolución sobre el caso. Al respecto, solicitó apoyo al Senado para acelerar el caso. Por otra parte, indicó que durante su visita a México visitaron Oaxaca, donde existe un potencial para establecer turbinas para generar energía eólica. "Por motivos difíciles de comprender para nosotros, el acceso de los campesinos a su tierra está restringida y la población nos habla de un profundo sentimiento de infelicidad respecto a su situación actual", señaló. Solicitó saber si esa es una política común en México.

Acto seguido, la Eurodiputada Ana Gomes (S&D, Portugal), se refirió a los feminicidios en México, particularmente en la frontera norte, e hizo preguntas sobre la política activa del Gobierno mexicano respecto a sus ciudadanos condenados a la pena capital en Estados Unidos. De igual manera, pidió su opinión a la Senadora Cuevas respecto a la posibilidad de alargar el Canal de Panamá y los efectos

que esta acción tendría en la economía de la región y, para terminar con su intervención, hizo preguntas a la Senadora acerca de las condiciones de los trabajadores en México.

Le siguió el Vicepresidente Primero de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, Santiago Fisas Ayxela (PPE, España), quién agradeció a la Senadora Cuevas la cálida bienvenida que recibió su Comisión en su visita a México el mes pasado e hizo extensiva la invitación al Comité para revisar el Tratado Comercial de la UE con nuestro país en un momento en el que también se estudia un posible TLC con América del Norte.

Al responder, la Senadora Cuevas refirió que México exige el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes nacionales en Estados Unidos y, del mismo modo, ha adquirido un compromiso activo con los migrantes del resto de América a través de la reforma migratoria, instrumento que entiende la naturaleza del país como país de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios del continente. A esto, añadió que el crimen organizado es una pesada carga en el trabajo por la salvaguarda de las garantías de los migrantes pero aseguró que, durante los primeros meses de la administración del Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, las muertes relacionadas a estas "mafias" han disminuido hasta en un 17% a nivel global. Aseveró que nuestro país se encuentra en un periodo de reformas y transiciones, y que una de las áreas que se está transformando es la de la procuración de justicia.

La Senadora Cuevas hizo énfasis en que México se encuentra trabajando arduamente en concretar las reformas que permitan a una mayoría de la población acceder a la clase media y mejorar significativamente su calidad de vida. En respuesta a la pregunta de la Eurodiputada Gomes, la Senadora aclaró que la mano de obra es más barata en China, pero no está a la par de la eficiencia y rentabilidad de la mexicana. Respecto a este tema, mencionó los importantes logros obtenidos con la Reforma a la Ley del Trabajo, que permite establecer una estructura legal muy sólida que hace atractiva la inversión en México mientras que, al mismo tiempo, protege los derechos de los trabajadores.

En el tema de la ampliación del canal de Panamá, aseguró que velar por la paz y la estabilidad de la zona será un reto que deberán encabezar los gobiernos centroamericanos, contando por seguro con el apoyo de nuestro país.

Terminada la intervención de la Senadora Cuevas, las Senadoras Guerra y Hernández detallaron las respuestas dadas a algunas de las preguntas. Sobre la política mexicana en el caso de ciudadanos condenados a la Pena de Muerte en Estados Unidos, la primera recalcó que las instituciones gubernamentales ofrecen toda la asistencia requerida a nuestros connacionales, al tiempo que respetan y reconocen la reglamentación vigente en los distintos estados de Estados Unidos y los crímenes o faltas en los que pudieron incurrir los condenados mexicanos. La Senadora Lisbeth Hernández, por su parte, puntualizó que el principal eje de la nueva administración es la preservación y procuración de la paz a través de estrategias de seguridad regional y de combate al crimen organizado. Mencionó también los diferentes esfuerzos del gobierno del Presidente Peña Nieto en contra del hambre y el trabajo que se lleva a cabo en materia legislativa para lograr la homologación legal de los tratados de derechos humanos en el país y de la definición del crimen de feminicidio.

La Senadora Marcela Guerra apuntó que en el tema de Condenados a Muerte que prevalece en Estados Unidos, actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó al Senado de la República un informe detallado sobre la situación que prevalece en ese tema. Hizo mención que del total de condenados en ese país, desafortunadamente 61 de esas personas son mexicanas. Además recalcó que la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de protección consular, ha instrumentado una campaña preventiva de información que alerte a los migrantes mexicanos sobre sus derechos y se les ofrecen diversas recomendaciones, entre ellas señaló que los consulados de México llevan a cabo una serie de acciones, gestiones e intervenciones en beneficio de nuestros connacionales, la cual se realiza con estricto apego a las convenciones consulares vigentes y en el marco de los principios del derecho internacional público.



Senadoras Marcela Guerra y Lisbeth Hernández, en su intervención en el Parlamento Europeo.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores creó en septiembre del año 2000 el "Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte", en respuesta a los ciudadanos de origen mexicano que enfrentaban una sentencia capital en los Estados Unidos. A partir del 2001, el Programa comenzó a incluir casos de connacionales no sólo sentenciados a muerte, sino también de aquellos que enfrentaban procesos judiciales que podrían culminar con la imposición de la pena capital, convirtiéndose en el "Programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital", respondió la Senadora Marcela Guerra.

Terminada la reunión, realizaron un saludo al Pleno del Parlamento.

A solicitud de las legisladoras, ofrecieron una breve entrevista al corresponsal de la Agencia EFE en Estrasburgo, que fue replicada en algunos medios de habla española.

Anexos

Orden del día de la reunión Extraordinaria del

Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (09:15 a 09:35 hrs.)

Jueves, 23 de mayo 2013 09:00-09:35 hrs.

- Aprobación del programa
- Comunicaciones del Presidente
- Intercambio de puntos de vista con una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Mexicano, encabezados por la Senadora Gabriela Cuevas, sobre las relaciones UE-México y los desafíos comunes de política exterior.

11

UNA, DEL SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU VISITA, CONJUNTAMENTE CON LOS SENADORES LAYDA SANSORES, AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, A LA FRONTERA SUR: TABASCO-GUATEMALA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2013.

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR

México, D.F., 23 de julio de 2013

Oficio No. SHM/CAFS/0020/2013

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, adjunto al presente para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe sobre la visita a la frontera sur: Tabasco-Guatemala, realizada el 28 y 29 de mayo de 2013, por los secretarios de dicha comisión Senadora Layda Sansores San Román y Senador Adán Augusto López Hernández, además de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, y el Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Especial Sur-sureste.

Sin más por el momento, agradezco su amable atención y aprovecho la ocasión para expresarle las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL
PRESIDENTE

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur

Informe de la Visita a la frontera sur: Tabasco - Guatemala

28 y 29 de mayo de 2013

1

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur
Informe de la Visita a la frontera sur: Tabasco-Guatemala
28 y 29 de mayo de 2013

Objetivos: Conocer con mayor detalle la situación de la frontera sur en el tramo Tabasco - Guatemala; intercambiar opiniones con las autoridades municipales, federales y estatales, escuchar e intercambiar información con las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, y proponer acciones conjuntas, desde una perspectiva integral, para hacer frente a los problemas fronterizos.

Participantes: Por parte del Senado: Senador Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur; Senadora Layda Sansores San Román, Secretaria de la Comisión; Senador Adán Augusto López Hernández. Secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur y Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo; Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe; y el Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste.
Participaron también en la gira el Dr. Jorge Castañares Priego, Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur y el Lic. Marco Antonio Alcázar Ávila, asesor de la Comisión.

Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores: Ingeniero Carlos Santibáñez Mata, Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y Licenciado Alejandro Reyes Huerta, Secretario Técnico.

Desarrollo de la Visita[1]

1. **Recorrido por el puerto fronterizo El Ceibo – El Naranjo: lado mexicano y lado guatemalteco.**

En esta visita se incorporaron los presidentes municipales de Tenosique, Carlos Alberto Vega Celorio, y de Balancán, Pedro Argüello Hernández.

Este cruce fronterizo se ubica entre el municipio de Tenosique, Tabasco, y el Departamento del Petén, en Guatemala, mismo que se formalizó mediante canje de

[1] Se anexa el programa

notas de fecha 12 de mayo de 2003 y que fue ratificado por el Presidente de la República de Guatemala Alfonso Portillo Cabrera, el 16 de mayo de 2003.[2]

Del lado mexicano, se cuenta con un camino de 57 km, pavimentado y con buena señalización, que comunica la cabecera municipal de Tenosique con el puerto fronterizo. Del lado de Guatemala se tiene un camino pavimentado de 20 kilómetros hasta la población de Lagunitas, lo que ha facilitado el tráfico de personas y mercancías entre los dos países, aunque no se tienen asentamientos de población importantes en la vecindad del puerto fronterizo, salvo la cabecera municipal de Tenosique. Cabe destacar que la carretera a Lagunitas se construyó con recursos federales y tiene un importante impacto turístico, ya que facilita el acceso a la zona arqueológica de Tikal, en Guatemala.

En el lado mexicano se cuenta con oficinas de varias dependencias federales: Aduanas, Instituto Nacional de Migración (INAMI), Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Instituto Nacional de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Del lado de Guatemala, se tienen instalaciones provisionales de varias oficinas gubernamentales. El gobierno de dicho país ha ofrecido construir un puerto fronterizo.

En la visita realizada a este cruce fronterizo se intercambió información con los representantes de Aduanas y de INAMI. En el caso de la primera dependencia, el funcionario de aduanas comentó sobre la reciente toma de las oficinas por una agrupación denominada Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos, la cual solicitaba la ampliación del beneficio fiscal (75 dólares libres de impuesto) para las personas que transitan por este paso. En el caso de la segunda dependencia, se explicó sobre la frecuencia de permisos que se expiden para trabajadores fronterizos (cinco al mes) y para visitantes regionales (de 15 a 20 diarios).

Del lado mexicano, se nos informó que el cruce tiene capacidad para recibir hasta 15.5 toneladas de carga; sin embargo, del lado guatemalteco no se cuenta aún con infraestructura adecuada para ello. El funcionario aduanal nos manifestó que es poco el transporte de carga que pasa por este punto fronterizo y que predomina el paso de personas.

Del lado guatemalteco se constató la existencia de comercios establecidos de productos como ropa, perfumería y abarrotería en general, de origen principalmente chino y algunos mexicanos, aunque con poca afluencia de compradores, quizás por

[2] Se anexa mapa de límites fronterizos entre Guatemala y Tabasco

3

ser día laborable, ya que los fines de semana y festivos son los de mayor presencia de compradores mexicanos.

2. Comida de trabajo con los presidentes municipales de Tenosique y Balancán en el Espacio Público Pedro Vega Martínez en Tenosique, Tabasco.

En esta comida, el Senador Humberto Mayans Canabal agradeció el acompañamiento de los Senadores, de los Presidentes Municipales y del Ingeniero Carlos Santibáñez Mata de la CILA.

El Senador Mayans señaló el interés del Senado mexicano de conocer más a fondo la situación de la frontera sur, la cual ha estado hasta ahora en una situación de escasa atención; mencionó que se trata de una frontera porosa, hay reducida presencia de la autoridad, frecuentes denuncias de violaciones a los derechos humanos de los migrantes y que esta zona se ha convertido en un problema mayor de seguridad nacional.

El Senador Mayans presentó al Ingeniero Santibáñez, quien hizo una exposición sobre la situación de la frontera entre Guatemala y Tabasco. Señaló la existencia de un solo punto de cruce formal, El Ceibo, y de diez puntos de cruce informal, siete en Balancán y tres en Tenosique. La mayoría de ellos, de alto riesgo, debido a las operaciones del crimen organizado. También el Ingeniero Santibáñez comentó la importancia del tránsito indocumentado a través de esta frontera, el cual se ha incrementado debido a los controles más estrictos establecidos en la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la destrucción de las vías ferroviarias ocasionadas por el huracán Stan en 2005, las cuales se han ido recuperando gradualmente.

Además, comentó que el incremento del cruce de indocumentados coincide con una mayor presencia del crimen organizado en la región y a falta de coordinación entre las diversas instancias gubernamentales que tienen presencia en la frontera.

Por otro lado, señaló que el cruce se encuentra subutilizado debido a la falta de instalaciones en la parte guatemalteca, en particular para el transporte de carga, y agregó que el mismo puede ser un punto de tránsito para incrementar las visitas turísticas desde México a la zona arqueológica de Tikal (ubicada a tres horas y media de distancia del cruce), y desde Guatemala al Caribe mexicano.

4

Finalmente, el Ingeniero Santibáñez comentó que hay incremento del narcotráfico a través de la adquisición de fincas a ambos lados de la línea divisoria entre Tabasco y Guatemala.

Por su parte, el presidente municipal de Tenosique, Alberto Vega Celorio, comentó que la frontera se ha vuelto un paso informal importante, tanto de personas como de mercancías y de ganado; se quejó que tanto el personal policiaco como su equipamiento son deficientes (algunos elementos de la policía ministerial han sido denunciados por los migrantes) y de la urgencia de mayores recursos para capacitación y equipamiento. El funcionario reconoció que hay asaltos y secuestros asociados a los migrantes, pero también a los habitantes de su municipio y que algunos migrantes, en particular hondureños, pueden ser parte de las bandas delictivas. Se tienen registradas bandas que operan en Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y en los municipios vecinos de Chiapas.

En cuanto a la situación económica del municipio, señaló que está muy deteriorada, dado que los cultivos tradicionales (caña de azúcar) y la ganadería se encuentran en crisis, que hay un alto desempleo y que la principal fuente de empleos es el gobierno municipal. Mencionó que hay atractivos turísticos como son las zonas arqueológicas que no han sido explotadas adecuadamente y agregó que se requiere ampliar el Hospital Comunitario para dar una mejor atención a la población.

Por último, manifestó que los municipios fronterizos de Tabasco no reciben recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), porque los índices delictivos no son tan altos como en otros municipios y que tampoco se les incluyó en la Cruzada contra el Hambre debido a sus niveles de ingreso. Por ello pidió que los Senadores fueran el conducto para solicitar su inclusión en esos programas (los únicos municipios fronterizos que reciben recursos del SUBSEMUN son Ocosingo, Palenque, Tapachula y Othón P. Blanco).

Por otro lado, el presidente municipal de Balancán Pedro Argüello Hernández mencionó que su municipio tiene 47 kilómetros de frontera, pero que registra el mayor número de cruces informales, debido a que los migrantes procedentes del Naranjo, Guatemala utilizan los caminos y las brechas que se hicieron a raíz del plan agropecuario Balancán - Tenosique.

El funcionario agregó que a pesar de que existe una producción agrícola (maíz, frijol, soya), frutícola (papaya) y ganadera importante, el Plan Balancán - Tenosique no está siendo aprovechado en su totalidad; además, hay una creciente inseguridad provocada por el aumento de los secuestros y homicidios, lo que ha provocado que muchos empresarios se estén yendo a la capital del estado.

5

Finalmente, compartió con el presidente municipal de Tenosique la necesidad de que haya mayores recursos vía SUBSEMUN para aumentar el personal policiaco y dotarlo de un mejor equipamiento y con ello reducir los problemas de inseguridad que se tienen en el Municipio.

3. Participación de la Cruz Roja en la región.

El delegado estatal de la Cruz Roja, Mario Bustillos hizo una presentación a un costado de la antigua terminal del tren, del programa especial de asistencia humanitaria a personas migrantes que tiene la Cruz Roja de Tenosique, para brindar con apoyo de una unidad móvil, atención médica, medicinas, ropa, agua y alimentos a los migrantes centroamericanos, en particular a mujeres y menores de edad, la cual cuanto con el apoyo de varias organizaciones internacionales.

Los Senadores hicieron reconocimiento a la labor desarrollada por esta institución a favor de la población local, destacando que se hace de manera extensiva a las personas migrantes.

4. Visita al albergue para migrantes "La 72" en Tenosique, Tabasco.

El albergue "La 72" lleva su nombre en recuerdo de los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, el 23 de agosto de 2010. Fue establecido a iniciativa de Fray Tomás González en la cabecera municipal de Tenosique, Tabasco. Este albergue recibe a migrantes centroamericanos de paso hacia los Estados Unidos, que utilizan el tren que viene de Yucatán transita por Tenosique, Palenque, Teapa, Estación Chontalpa y llega a Coatzacoalcos, Veracruz.

En la reunión, el fundador del albergue comentó sobre la constitución de un Observatorio para Migrantes, cuya primera tarea había sido organizar un recorrido por la ruta de los migrantes desde Orizaba, Veracruz hasta Tenosique, Tabasco, con la finalidad de integrar un informe sobre testimonios y evidencias sobre actos criminales y violaciones a los derechos humanos cometidos contra los migrantes.

Fray Tomás González, acompañado de los activistas Rubén Figueroa, José Jacques y Elvira Arellano, entregó el informe a los senadores, diputados federales y a las autoridades municipales presentes en la mesa, que incluye el número de extorsiones, asaltos, secuestros y desaparecidos en la ruta de los migrantes.

A continuación el fraile invito a hablar a algunos de los trabajadores del albergue involucrados en las tareas de defensa de los derechos de los migrantes, los cuales expusieron, entre otros, los hechos siguientes:

6

- Los actos delictivos contra los migrantes se han incrementado como resultado de que las bandas del crimen organizado se han adueñado de las rutas migratorias y que los migrantes son sujetos a nuevas modalidades de extorsión como el cobro de cuotas (100 pesos por subir al tren) en su tránsito a través del territorio nacional. La trata de personas y el secuestro han crecido entre la población migrante.

- El aumento de los contingentes de migrantes, no sólo de hombres sino también de un número creciente de mujeres, muchas veces acompañadas por sus hijos, ha ido de la mano de un cada vez mayor número de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las bandas se están nutriendo de jóvenes migrantes, que son sujetos a presiones para integrarse a las mismas.

- Hay una presencia reducida de vigilancia policial y por ello se registran reclamos de una mayor y mejor presencia de las autoridades. Las denuncias no han sido atendidas y la impunidad ha hecho que los actos criminales crezcan.

- La Ley de Migración, a pesar de los avances que tiene con respecto a la legislación anterior, se considera incompleta, por lo que se requiere una ley que corresponda a la realidad; los derechos de los migrantes son frecuentemente violados, acallados por el crimen organizado y el número de desaparecidos es cada vez mayor a lo largo de la ruta que siguen los migrantes.

- Las mujeres se han incorporado de manera significativa al flujo migratorio (según estimación, 10 % de los migrantes son mujeres), pero se trata de una población mucho más vulnerable, ya que son objeto de discriminación, violencia y pueden ser más fácilmente silenciadas por las amenazas de las bandas del crimen organizado, por lo que su situación demanda de una atención especial.

El fraile González presentó al párroco de la iglesia de Santo Domingo en Palenque, Chiapas, quien tiene un albergue en dicha ciudad y cuya intervención incluyó, entre otras, las observaciones siguientes: los centroamericanos huyen de sus países expulsados por la pobreza, los migrantes son un botín para diversos grupos y organizaciones y se tiene la necesidad de instrumentar algún tipo de permiso o documento para que puedan transitar por al país hasta su destino final, que los libere de la extorsión de los grupos criminales.

En su momento, los Senadores y la Diputada Federal Claudia Bojórquez Javier presentes hicieron uso de la palabra.

7

El Sen. Mayans comentó no sólo sobre la pertinencia de modificar leyes y de tomar acciones concretas por parte de las autoridades para hacer frente a los problemas de la migración, en particular, de la trata de personas, sino también de actuar para desarrollar económica y socialmente a los 23 municipios que abarcan la frontera sur. Se requiere, añadió el legislador federal, corregir acciones y hacer justicia a los migrantes.

La Sen. Sansores manifestó su preocupación porque las autoridades no están haciendo las detenciones en los casos de denuncias graves de violaciones a los derechos de los migrantes y por la necesidad de sensibilizar más a la población sobre los derechos de los migrantes para evitar las discriminaciones y la indiferencia, además de la urgencia de un frente común para frenar las violaciones que se están cometiendo. Además, comentó que la estrategia del INAMI de infiltrar a agentes entre los migrantes puede ser contraproducente.

Por otra parte, el Sen. Zoé Robledo manifestó que frente a la magnitud del problema migratorio en materia de derechos humanos se percibe una falla institucional del Estado, que se está ante una emergencia humanitaria por las numerosas denuncias que se escuchan y que conviene actuar de inmediato.

La Sen. Mariana Gómez del Campo comentó sobre los contactos que se han tenido con los legisladores centroamericanos para atender el problema migratorio y que se requiere una atención especial de los Consulados a los extranjeros que se encuentran en las estaciones migratorias.

El Senador Adán Augusto López Hernández señaló que en cuanto al problema de los migrantes se vive una situación de emergencia, debido al crecimiento de la violencia por parte del crimen organizado; denunció el cobro que estas bandas realizan a los migrantes por cruzar la frontera y subirse al tren, así como las amenazas a los albergues como "La 72", donde temporalmente se les da refugio.

Por último, la Diputada Federal Claudia Bojorquez manifestó la necesidad de que en Tenosique se cuente con un hospital para atender los problemas de salud de la población migrante, ya que muchos de ellos llegan enfermos o se enferman en el camino.

5. Reunión con el Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco.

El Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos se reunió con los Senadores visitantes y expuso la situación de los migrantes en materia de derechos humanos que se presenta en la frontera sur señalando, entre otros, que: existe una crisis humanitaria como resultado de las frecuentes violaciones a los derechos de los migrantes; la denuncia más frecuente es el secuestro (10,000 casos reportados); y que muchos niños y mujeres son objeto de explotación tanto sexual como laboral. El titular señaló que se requiere capacitar a las policías, en particular a la municipal, y reconoció que la seguridad pública no existe prácticamente a lo largo de la vía del tren, situación que definió como un verdadero genocidio. Señaló la presencia de elementos de la delincuencia organizada infiltrados en los grupos de migrantes desde sus países de origen. Reconoció que frente al número de los migrantes (estimó 1 000 migrantes al día) existen pocas quejas tanto a nivel local como nacional, y que la mayoría de ellas no prosperan debido a la falta de pruebas y al hecho de que los migrantes siguen su tránsito hacia la frontera norte, lo que impide la ratificación de las denuncias. Por otra parte, señaló que en el caso de Tabasco, la mayoría de las recomendaciones se han dirigido a las autoridades municipales y están relacionadas con la ausencia de condiciones de seguridad a lo largo de las vías del tren, así como con el trabajo que realiza la policía municipal. El Dr. Argáez entregó a los Senadores información sobre las actividades de la Comisión que preside.

Por su parte, los Senadores manifestaron su preocupación por la situación planteada, en particular por el número de secuestros y a la situación que impera en el tren; reconocieron el trabajo, que en medio de sus limitaciones de recursos, realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y se manifestaron por la necesidad de hacer justicia frente a la realidad del problema migratorio.

6. Desayuno de trabajo con el Gobernador del Estado de Tabasco Lic. Arturo Núñez Jiménez y con el Secretario General de Gobierno Lic. César Raúl Ojeda Zubieta, en la Quinta Grijalva en Villahermosa Tabasco.

En el desayuno de trabajo con el Gobernador de Tabasco, el Sen. Humberto Mayans presentó el propósito de la visita de los Senadores, el cual se inscribe en el interés de conocer de manera directa la situación de la frontera sur, misma que ha llevado a organizar primero un recorrido por la frontera entre Chiapas y Guatemala, luego por la que corresponde a Tabasco y Guatemala, seguirá a la línea fronteriza de Campeche y concluirá con una visita a la frontera entre Quintana Roo y Belice en fechas próximas.

9

El Senador Mayans expuso en términos generales lo que se ha visto en la frontera, la necesidad de trabajar en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, con una visión regional, y que se requiere atender a los problemas del rezago en la infraestructura física, de la aplicación de incentivos fiscales, de mejorar la calidad educativa y, de una reorganización comercial que incorpore el comercio informal, incluyendo la creación de un centro comercial de distribución en Tapachula.

El Senador Mayans le cedió la palabra al Ing. Santibáñez, quien expuso el trabajo que realiza la CILA a lo largo de la frontera sur; mencionó que en el caso de Tabasco la frontera no se encuentra tan bien delimitada como en el de Chiapas, debido a los reclamos del gobierno de Guatemala sobre algunos puntos de la línea fronteriza; de la existencia de numerosos cruces informales a lo largo de la frontera entre Tabasco y Guatemala, mismos que consideró de alto riesgo, porque en ellos opera el crimen organizado; y de la mayor presencia de migrantes en esta parte de la frontera debido a mayores controles en la frontera entre Chiapas y Guatemala.

En uso de la palabra, la Senadora Layda Sansores comentó la delicada situación de los derechos humanos de los migrantes, que se requiere un mejor seguimiento de las denuncias que se presentan por violaciones a estos derechos, incluyendo la detención de los delincuentes y que conviene trabajar con los gobiernos de los países centroamericanos para un mejor control del creciente tráfico informal, tanto de personas como de otra índole, que se está dando a lo largo de la frontera.

En el mismo tono de preocupación sobre la situación de los derechos humanos, de la necesidad de impulsar un enfoque integral para hacer frente a los problemas de la frontera, de atender la inseguridad pero también el desarrollo económico de la región y de trabajar conjuntamente con los gobiernos centroamericanos, se manifestaron los Senadores Zoé Robledo, Adán Augusto López Hernández y la Senadora Mariana Gómez del Campo.

El Gobernador Arturo Núñez Jiménez reconoció que al evidente problema de inseguridad en la frontera, se suma el de la falta de desarrollo económico; que se requiere del diseño de nuevas políticas públicas para el desarrollo de la frontera; que SEDENA y SEMAR se quejan de la falta de apoyo de otras dependencias involucradas en las actividades fronterizas; que Tabasco está viviendo un nuevo auge petrolero, pero que la economía tradicional basada en los cultivos y la ganadería está en crisis; y que, entre sus proyectos prioritarios, está el impulsar alianzas estratégicas con PEMEX donde el estado participe como socio, para fines de generación de energía eléctrica y posible desarrollo de un esquema de proveedores locales para la paraestatal, así como construir una ciudad del conocimiento, donde se concentre el desarrollo de nuevas

tecnologías y conocimientos aplicados a resolver los problemas de la entidad, en asociación con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Por último, el mandatario estatal mencionó que elaboró un documento metodológico en relación con el desarrollo integral del sur - sureste que distribuyó entre sus colegas gobernadores; y, se comprometió a trabajar desde su encargo, como Coordinador de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Sureste que tiene en la CONAGO para intermediar entre las comisiones que presiden los senadores visitantes y los gobernadores de las entidades.

7. Conclusiones y Recomendaciones generales:

- Se sugiere la gestión del gobierno de México ante el gobierno de Guatemala para construir la parte complementaria del puerto fronterizo en Tenosique, del lado de ese país, para aprovechar el potencial del tráfico de carga e incrementar las visitas turísticas desde México a la zona de Tikal (a tres horas y media de la frontera) y desde Guatemala a México, hacia el Caribe mexicano.

- Los municipios de la frontera de Tabasco con Guatemala, Tenosique y Balancán requieren el acceso a recursos vía Subsidio para la Seguridad en los municipios (SUBSEMUN), con la finalidad de destinarlos a mejorar sus cuerpos policiacos y a dotarles de mayor equipo.

- La situación de atropello a los derechos de los migrantes y el creciente número de desaparecidos a lo largo de la ruta que siguen, hace urgente revisar el marco legal; el funcionamiento de las instituciones, en particular el Instituto Nacional de Migración; combatir de manera permanente la corrupción al interior de algunas instituciones; la necesidad de sensibilizar más a la población sobre los derechos de los migrantes para evitar las discriminaciones y la indiferencia; y mantener los contactos con los legisladores centroamericanos para atender de manera conjunta el problema migratorio.

- Se requiere capacitar a las policías, en particular a las municipales, y aumentar la seguridad pública a lo largo de la ruta de los migrantes, ya sea en los cruces fronterizos como en el recorrido que hace el tren, donde los hechos delictivos se han incrementado considerablemente.

- La presencia de numerosos cruces informales a lo largo de la frontera entre Tabasco y Guatemala, donde hay tráfico de personas, mercancías, animales fauna silvestre, armas y drogas, hace urgente mejorar la coordinación entre las autoridades federales responsables, con la finalidad de establecer un control que identifique y regule estos flujos.

11

- Al evidente problema de inseguridad en la frontera se suma el de la falta de desarrollo económico, por lo que se requiere del diseño y aplicación de nuevas políticas públicas para el desarrollo integral de la frontera.
- En cuanto al desarrollo fronterizo se requiere un trabajo coordinado entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, instancias como la CONAGO y las comisiones que desde el ámbito del Senado tienen vinculación con el tema.

Senador Humberto Domingo Mayans Canabal
Presidente

Senadora Layda Sansores San Román
Secretaria

Senador Adán Augusto López Hernández
Secretario

12

ANEXOS

13

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, Comisión de Asuntos Migratorios y Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe

Visita a la Frontera Sur: Tabasco – Guatemala

28 y 29 de mayo de 2013

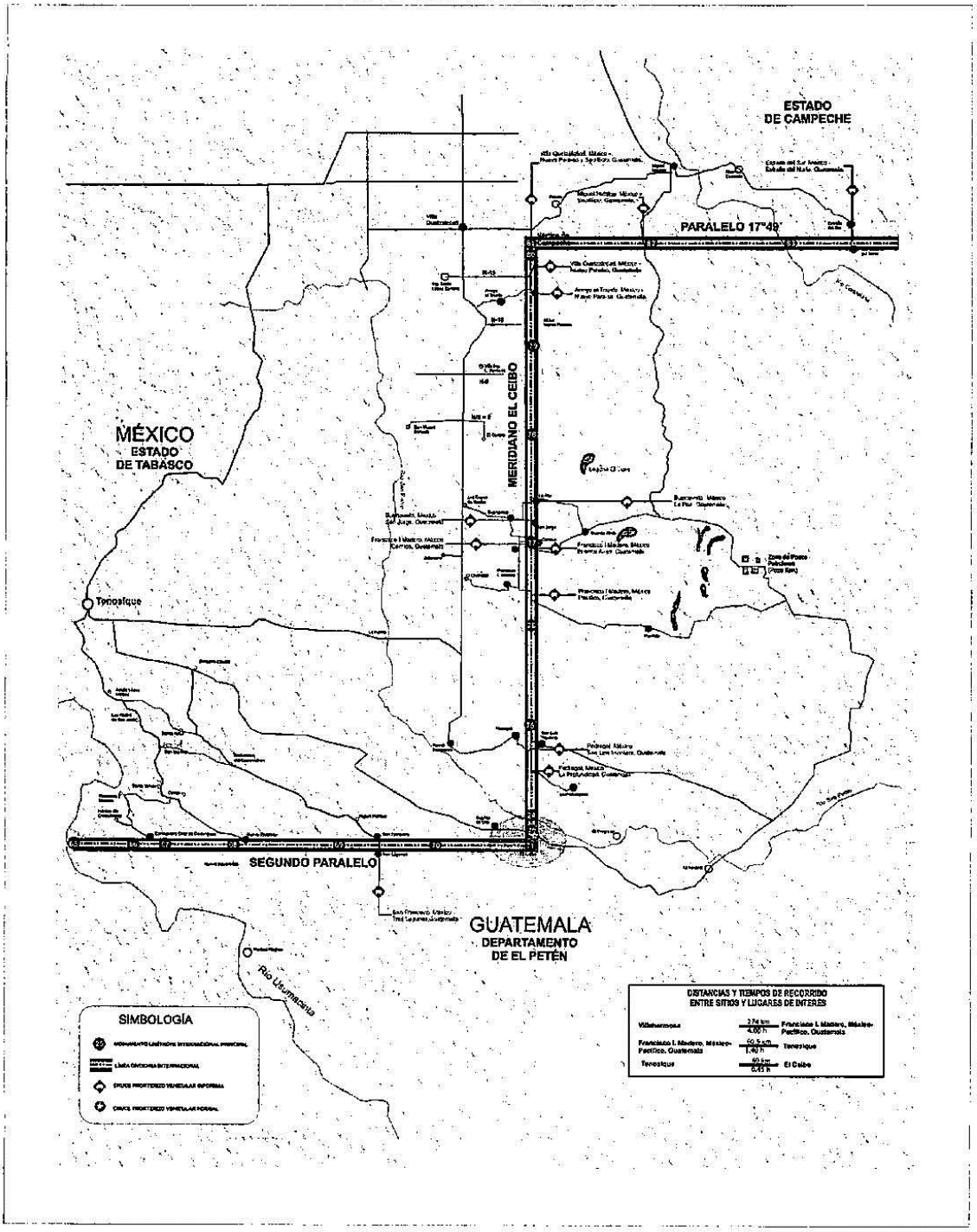
Asistentes	Sen. Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, Sen. Layda Sansores San Román y Sen. Adán Augusto López Hernández, Secretarios de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur; Sen. Ana Gabriela Guevara, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios; Sen. Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe; Sen. Zoé Robledo, Presidente de la Comisión Especial Sur – Sureste; Sen. Juan Gerardo Flores, Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Dr. Jorge Castañares Priego, Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur; Lic. Marco Antonio Alcázar, Asesor de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur; el Ing. Carlos Santibáñez Mata, Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Agua, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Lic. Alejandro Reyes Huerta Secretario Técnico de la misma.

PROGRAMA

28 de mayo de 2013	
Horario	**Actividades**
6.40 – 8.12 Aeroméxico. Vuelo 519	Arribo de los Senadores al aeropuerto de la ciudad de Villahermosa, Tabasco En este punto se integra el Ing. Carlos Santibáñez Mata, Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Agua, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
8.15 – 8.30	Traslado a casa del Senador Adán Augusto López Hernández para Desayuno.
8.30 – 9.30	Desayuno en casa del Senador Adán Augusto López Hernández.
10.30 – 13.30	Traslado terrestre (273 km) al Puerto Fronterizo El Ceibo.
13.30 – 14:30	Recorrido hasta el Puerto Fronterizo El Ceibo: lado mexicano y lado guatemalteco.
14:30 – 15.15	Traslado terrestre (60 km.) hacia Tenosique, Tabasco.
15.15 – 16.30	Comida de trabajo en Tenosique, Tabasco con los Presidentes Municipales de Balancán, C.P. Pedro Arguello Hernández, y de Tenosique, C.P. Carlos Alberto Vega Celorio, para analizar la problemática de la región, vinculada con las Comisiones visitantes. Espacio Público Pedro Vega.
17.00 – 18.00	Reunión en la Casa del Migrante "La 72". Fray Tomás González y Rubén Figueroa. Coordinan la Senadora Layda Sansores San Román y la Senadora Ana Gabriela Guevara.
18.00 – 20.30	Traslado terrestre hacia Villahermosa.
20.30 – 21.30	Ajuste de tiempo.
21.30 – 23.00	Cena con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Restaurante La Estancia.
29 de mayo de 2013	
9:30-10:00	Traslado del hotel a la Quinta Grijalva
10.00-11.00	Desayuno con el Gobernador de Tabasco Lic. Arturo Núñez Jiménez
13.28 – 15:13 Vuelo 506 Aeroméxico	Regreso a la ciudad de México

Hospedaje: Hotel Viva Villahermosa, Av. Adolfo Ruiz Cortines s/n Col. Lindavista CP 86050 (993) 3136000 018007115555

RECORRIDO FRONTERIZO MÉXICO - GUATEMALA
28 DE MAYO DE 2013



UNA, DEL SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS DE DECRETO PRESENTADOS POR DIVERSOS SENADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EL 24 DE JULIO DE 2013.



SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA, coordinador del Grupo Parlamentario del P.R.D. en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción III y 216 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitud de excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado, Justicia, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos Segunda, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 25 de julio del año en curso, los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República junto con senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos ante esta Comisión Permanente seis iniciativas legislativas, en materia de reforma política y electoral, que juntas constituyen una transformación del modelo de ejercicio del poder público, de las relaciones entre los distintos órganos y niveles de gobierno y sobre todo unaampliación de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a sus autoridades.

Se trató de la culminación de una etapa, del esfuerzo que se anunció el 27 de mayo pasado,para la construcción de una iniciativa de reforma política de gran calado, como una respuesta concreta y tangible al déficit de legitimidad y representación social que tienen en nuestro país las autoridades formales, frente a la ciudadanía.

Lo que sigue ahora es el análisis y dictaminación oportuna de las iniciativas presentadas en las Comisiones a las cuales fueron turnadas, para su posterior discusión y en su caso aprobación por parte del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados, en el caso de las reformas a nuestra Carta Magna, para lo cual debemos tener altura de miras, para ubicar el tema de la transformación política, como un asunto de gobernabilidad democrática y por lo tanto de atención prioritaria para todos.

En los últimos tiempos todos hemos sido testigos de cómo se ha venido erosionando el tejido social en nuestro país. En algunas zonasha sido más aceleradaesta condición que en otras, como el lamentable caso del estado de Michoacán, en la que la población descree de sus autoridades y se organiza para su propia protección, al margen de lo que disponen las leyes. También ello ha ocasionado que se genere un campo fértil y oportuno para que la delincuencia organizada penetre las estructuras sociales de las comunidades como un fenómeno de preocupante normalidad.

En el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos que la Reforma Política es la respuesta, para volver a construir una nueva relación de la ciudadanía con sus autoridades, basada fundamentalmente en la confianza social. Para ello se debe equilibrar su ejercicio en un verdadero sistema de pesos y contrapesos, recomponer la distribución de competencias, establecer mecanismos de prevención, corrección y sanción en las desviaciones que pueda haber de parte de las autoridades y hacer partícipe al ciudadano de los temas que le atañen en el ejercicio cotidiano del gobierno.

Las iniciativas presentadas la semana anterior, fueron fruto de audiencias públicas con especialistas en cada uno de los temas, cuyo resultado es una reforma política transformadora, de gran calado, que involucra 31 temas, agrupados en los siguientes rubros: fiscalización de gastos electorales, que incluye la oportunidad en que se llevaría a cabo para evitar la asunción del cargo del candidato infractor y la nulidad de las elecciones por dicha causa, así como el impedimento de los transgresores para participar en el proceso subsecuente;

prevención de conflicto de intereses de candidatos con grupos económicos preponderantes destinatarios de la norma; fortalecer el esquema sancionatorio penal, con descripciones más precisas y mayores penas según la gravedad del delito; regulación de encuestas en las campañas para asegurar que sean ejercicios profesionales e impecables en cuanto a su metodología; cuotas de género, que aseguren igualdad de representación de hombre y mujeres en los cargos electivos; reglamentación que permita la participación de candidatos independientes, los mecanismos de consulta popular y la reglamentación de las iniciativas ciudadanas ante el Congreso de la Unión; segunda vuelta electoral, que fortalezca la legitimidad del candidato que resulte electo; gobiernos de coalición, que incluye la designación por parte del Congreso de la Unión de un Jefe de Gabinete; moción de censura y sesiones de control efectivo del Congreso hacia el poder ejecutivo; iniciativa razonada; autonomía constitucional de la PGR Y FEPADE; aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad por parte del Senado; aprobación por parte del senado de los tratados internacionales en materia de seguridad; reelección legislativa y de autoridades municipales; y la eliminación del fuero o inmunidad procesal a altos funcionarios.

Las seis iniciativas presentadas y su turno correspondiente esel siguiente:

1.- Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Política y Electoral.

Comisiones: Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado, Estudios Legislativos Segunda.

2.- Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, así como de la Ley de Planeación en materia de delitos electorales y de controles democráticos al sistema nacional de planeación.

Comisiones: Justicia, Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Estudios Legislativos Segunda.

3.- Con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Comisiones: Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos Segunda.

4.- Con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria de los artículos 35, 36 y 71 constitucionales en materia de participación ciudadana.

Comisiones: Gobernación, Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos Segunda.

5.- Con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental.

Comisiones: Justicia, Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Segunda.

6.- Con proyecto de Decreto por el que se expide le ley reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Réplica.

Comisiones: Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda.

La presentación de estas iniciativas no pretende ser un acto testimonial, si no el inicio de un proceso legislativo serioque lleve a un verdadero cambio en las instituciones democráticas de nuestro país, por ello desde este momento solicitamos a las comisiones involucradas en la dictaminación de cada una de las iniciativas, que se avoquen a ese proceso, para beneficio de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita se formule excitativa, en los siguientes términos:

ÚNICO.- Se exhorta a las comisionesde Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado, Justicia, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos Segunda, para que en el ámbito de su competencia, de conformidad con el turno ordenado por la mesa directiva, convoquen a sus integrantes para el análisis, discusión y dictaminación de las iniciativas en materia de reforma política y electoral.

A T E N T A M E N T E

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

DE LAS DIPUTADAS MARÍA DE LA PALOMA VILLASEÑOR VARGAS Y MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.



DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LA PALOMA VILLASEÑOR VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Las que suscriben, **MARÍA DE LA PALOMA VILLASEÑOR VARGAS** y **MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ**, Diputadas Federales de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y/o adicionan los artículos 1, 3, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 28, 42, 44, 53 y 55 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos:

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, no ha sido reformada desde entonces. La promulgación de esta ley fue para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales adquiridos por México con la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre de 2006 y abrió la firma y ratificación de este instrumento el 30 de marzo de 2007. México firmó la Convención en marzo y el 17 de diciembre de ese mismo año con el aval del Congreso de la Unión que ratificó su adhesión a este convenio.

Con la ratificación de la Convención que realizó el Congreso de la Unión y por lo que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la convención es Ley Suprema de toda la Unión. Al promulgarse la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, se cumplió (en parte), con el compromiso del Estado Mexicano de realizar ajustes legislativos para hacer congruente el marco jurídico nacional respecto a las personas con discapacidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con la expedición de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue abrogada la Ley General de las Personas con Discapacidad (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005 y la reformada agosto de 2008), misma que tuvo como antecedente los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2000, por el que se crea la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad y el de 13 de febrero de 2001, por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad. Con la nueva ley

se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es el principal proceso de armonización de la legislación nacional respecto a la internacional y es parte del proceso de reconocimiento de derechos y de la protección a la Discapacidad para equiparar oportunidades. Empero, desde su entrada en vigor se han podido detectar aspectos mejorables de la legislación y precisiones para que la implementación de la norma sea lo más apegado al espíritu de la Ley.

La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reorienta la visión de la discapacidad como un problema de desarrollo social y ubica al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad dentro de la estructura y sistema de la Secretaría de Desarrollo Social, es un cambio en el paradigma de atención a la discapacidad.

El reconocimiento de la discapacidad como un problema de Desarrollo Social y no de Salud, es ver la discapacidad como una condición de vida que enfrenta el individuo en todo tiempo versus barreras físicas y socio culturales, sin que necesariamente esté enfermo.

Las modificaciones propuestas para los artículos 1 y 3 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tienen como objeto hacer explícita la obligatoriedad de la ley en todo el territorio nacional y hacer imperativo que las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean pertinentes, deben llevarse a cabo para lograr los objetivos de la Ley.

Los tres poderes de gobierno, en sus tres niveles, son los responsables por parte del Estado para fijar medidas administrativas, legislativas y judiciales que aseguren el piso de derechos de las personas con discapacidad. La transversalidad del tema, hace necesario que el respeto a la discapacidad y el reconocimiento de sus derechos, se interiorice como parte de la cultura del servicio público; no puede haber excepciones en ningún lugar y bajo ningún pretexto dentro del territorio nacional.

En este mismo sentido, los artículos 6 y 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, deben reconocer en su texto la responsabilidad de toda la federación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley. Las políticas públicas, especialmente las que refuerzan derechos sociales, deben ser coordinadas por el Ejecutivo Federal, pero la aplicación debe realizarse a nivel local. Las Entidades Federativas y los Municipios son corresponsables de la implementación de las políticas públicas; la Ley General de Desarrollo Social en su artículo cuarto y noveno, establecen la obligatoria concurrencia de los tres niveles de gobierno en la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas y, en el decimo séptimo obliga a que sea el Municipio el principal ejecutor de las políticas públicas para el desarrollo social y la atención de los sectores prioritarios para el desarrollo.

Las propuestas de modificación a los artículos 10, 12, 18 19 y 28, también de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tienen que ver con modificaciones que reconozcan más ampliamente los derechos de salud, educación, vivienda, transporte y justicia, respectivamente.

En el caso de Salud, se propone adecuar la norma para que la Clasificación Nacional de las Discapacidades sea actualizada periódicamente, pues la Clasificación Internacional del Funcionamiento de las Discapacidad y de la Salud, se revisa constantemente y es la base para recabar información estadística y epidemiológica de las enfermedades y las discapacidades asociadas.

Al no existir información estadística sobre las enfermedades y las discapacidades asociadas, los proyectos de investigación en epidemiología y sistemas de salud se encuentran frecuentemente demorados, detenidos y en ocasiones, ante una necesidad en concreto, por su inexistencia no se pueden desarrollar proyectos de

investigación ni mucho menos políticas públicas que se reflejen en un nivel y desarrollo de vida adecuado para las personas con discapacidad.

A nivel internacional según lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud en la nota descriptiva N°352 sobre Discapacidad y salud en el mes de noviembre del 2012, "Más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Entre 110 millones y 190 millones de personas tienen dificultades considerables para funcionar. Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, entre otras causas."

El panorama mundial nos da cuenta de la importancia y la necesidad de información fehaciente sobre la Discapacidad y la salud, es por ello que el Estado Mexicano debe recabar información puntual al respecto, pues al ser esta información la base para la elaboración del proceso de planeación y presupuesto del Sistema Nacional de Salud y, ante la realidad de que "Las personas con discapacidad tienen mayor demanda de asistencia sanitaria que quienes no padecen discapacidad, y también tienen más necesidades insatisfechas en esta esfera "; el que no sean contempladas sus necesidades conlleva la violación a sus derechos humanos.

La propuestas de reforma al artículo 12 fracción XII, es una precisión que faculta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenga la facultad de celebrar convenios con instituciones de educación superior para que sus estudiantes realicen el servicio social obligatorio, en favor de personas con discapacidad. Este cambio no modifica el espíritu del legislador, es una modificación en la redacción que adecua la norma a la reglamentación del Servicio Social, que establece que la entidad beneficiaria del trabajo social, tenga convenios para este fin con la institución educativa.

La adición de una nueva fracción XIV, tiene por objeto establecer en la ley la obligación de que en los libros de texto gratuitos, se incluya la imagen y contenido que normalice a la discapacidad como una condición de vida. La educación es el camino para sensibilización, los valores de respeto y tolerancia, además de la importancia de integrar a las personas con discapacidad en la comunidad y la existencia de estos contenidos debe ser condición *sine qua non* en la educación.

El artículo 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, reconoce el derecho a la accesibilidad y a la vivienda. La modificación tiene por objeto hacer explícita la importancia y obligatoriedad de respetar el derecho a la accesibilidad en la vivienda y su entorno, a través de la observancia de lo relativo a la accesibilidad para personas con discapacidad y el diseño universal, en las leyes y en reglamentos de urbanismo y construcción.

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho humano que "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo"[1]. Al respecto, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la vivienda, pero se requiere que establezca la obligatoriedad de hacer accesibles y acordes al diseño universal en la política nacional de vivienda.

Al respecto, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Universitario de Estudios Europeos, elaboró el estudio denominado "LA ACCESIBILIDAD EN LA VIVIENDA COMO VALOR SOCIAL: COSTES Y BENEFICIOS DE LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS", donde aporta las aseveraciones que justifican y dan cuenta la necesidad actual y futura sobre la garantía de accesibilidad.

> "La accesibilidad es un valor colectivo que la mayoría de hogares pueden reconocer y valorar, con independencia de las capacidades físicas de sus miembros, siendo la vivienda el espacio edificado en el que consumimos la mayor parte de nuestro tiempo, aquél del que tenemos más dependencia, pues nos proporciona abrigo, privacidad y, en general, bienestar.

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

> La vivienda sin un grado mínimo de accesibilidad también puede ser sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar, sobre todo para aquéllas personas cuyos requerimientos son mayores: las personas con discapacidad.

La modificación en materia de derecho al trasporte, contemplado en el artículo 19, tiene que ver con la no discriminación a las personas que, por su condición de discapacidad, requieren de la asistencia de un animal para su traslado. Este es el caso de las personas con debilidad visual que requieren de perros guías; o personas con trastornos del espectro autista que necesitan la compañía animal para un traslado tranquilo en algún medio de trasporte como es autobús o avión. Obviamente, previa acreditación de la existencia de una discapacidad y de la necesidad de un apoyo animal para el traslado.

La precisión que se propone en el artículo 28 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene como fin reconocer que las personas con discapacidad que, por la razón, circunstancia o en la calidad que sea, utilice los servicios de justicia, cuente con la asistencia que requiera, de forma gratuita y acorde con su condición.

El compromiso que adquirió México con la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 13 establece la obligación de equiparar las condiciones de la impartición de justicia de modo que se igualen las condiciones y el derecho a la justicia que gozan todos los individuos, respetando sus derechos humanos.

Las propuestas de modificación a los artículos 42, 44, 53 y 55, que son parte del Título del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, son producto de la experiencia del funcionamiento y de la nueva realidad del Consejo después de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La que suscribe, presenta estas propuestas de modificación como consecuencia del diálogo y espíritu de colaboración institucional con el Consejo.

La adición de una fracción XVIII a las atribuciones que establece el artículo 42, propone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pueda recibir y dar trámite a quejas o denuncias por la violación a los derechos humanos o actos de discriminación en agravio de personas con discapacidad, por parte de servidores públicos de la administración pública de cualquiera de los tres niveles de gobierno.

La propuesta de modificación a los artículos 44 y 53, tienen por objeto dejar en claro que los representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad, tanto en la Asamblea Consultiva, como los representantes de la asamblea en la Junta de Gobierno del Consejo, deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad y no podrán ser funcionarios públicos en activo.

Al respecto, el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su numeral tercero, establece que "La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento". La Asamblea Consultiva y la Junta de Gobierno son instancias de planeación, dirección y seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad. La representación de las personas con discapacidad debe ser por parte de organizaciones y personas que representen la experiencia y condición de discapacidad, ya sea por ser persona con discapacidad o representar sus intereses desde una organización no gubernamental.

La prohibición de que los representantes de las personas con discapacidad y sus organizaciones, sean funcionarios públicos, tiene que ver con la realidad. En la Junta de Gobierno, se contempla que serán nueve los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y cinco de la Asamblea Consultiva, esto deja claro que las personas con discapacidad y sus organizaciones tienen principios distintos y buscan fines igualmente distintos.

Para la mejor explicación y entendimiento de las propuestas realizadas, se presenta esta tabla de cambios propuestos:

Dice	Se propone
TÍTULO PRIMERO **CAPÍTULO ÚNICO** **DISPOSICIONES GENERALES**	**TÍTULO PRIMERO** **CAPÍTULO ÚNICO** **DISPOSICIONES GENERALES**
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.	**Artículo 1.** Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá **de manera obligatoria en todo el territorio nacional,** promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio..
Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. **Se adiciona un párrafo segundo**	**Artículo 3.** La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. **Para ello, se deberán adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean pertinentes para dar cumplimiento y plena vigencia a esta Ley.**
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.	**Artículo 4.** Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee. Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.	Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee. Las acciones afirmativas ~~**positivas**~~ consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas ~~**positivas**~~ que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa ~~**positiva**~~ para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.
Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes: I. a II. … III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente Ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables; IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad; V. a XIII. …	**Artículo 6.** Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes: I. a II. … III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos **suficientes y necesarios** para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente Ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables; IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, **de las Entidades Federativas y los municipios**, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad; V. a XIII. …
TÍTULO SEGUNDO **DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD** **CAPÍTULO I** **SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL** **Artículo 10.** La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos	**TÍTULO SEGUNDO** **DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD** **CAPÍTULO I** **SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL** **Artículo 10.** La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá **y actualizará periódicamente** la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los

por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas. El Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional	lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas. El Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional.
CAPÍTULO III **EDUCACIÓN** **Artículo 12.** La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: I. a XII. … XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social, y **Se adiciona y se recorre la fracción actual a la XV.** XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.	**CAPÍTULO III** **EDUCACIÓN** **Artículo 12.** La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: I. a XII. … XIII. **Celebrar convenios de coordinación o concertación con instituciones de educación superior de cada Entidad Federativa, a efecto de que los estudiantes que realicen su servicio social apoyen a personas con discapacidad**; XIV. **Integrar en los libros de texto gratuito, información e imagen de las personas con discapacidad, que permita a los estudiantes conocer, sensibilizar e infundirles valores y la importancia de integrar a las personas con discapacidad a la comunidad**, **y;** **XV.** Las demás que dispongan otros ordenamientos.
CAPÍTULO IV **ACCESIBILIDAD Y VIVIENDA** **Artículo 16.** Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente. **...** … I. a III. …	**CAPÍTULO IV** **ACCESIBILIDAD Y VIVIENDA** **Artículo 16.** Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, **de las Entidades Federativas, y Municipales**, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente. **...** … I. a III. …

Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.	**Artículo 18.** Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán **contemplar e** incluir **la normatividad en materia de accesibilidad y diseño universal en los** proyectos arquitectónicos de construcciones **y de modificación a las viviendas**. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.
CAPÍTULO V **TRANSPORTE PÚBLICO Y COMUNICACIONES** **Artículo 19.** La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: I. …; II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado; III. a V. …	**CAPÍTULO V** **TRANSPORTE PÚBLICO Y COMUNICACIONES** **Artículo 19.** La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: I. …; II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos, personal capacitado **y el libre acceso en compañía de animales de apoyo para su traslado;** III. a V. …
CAPÍTULO IX **ACCESO A LA JUSTICIA** **Artículo 28.** Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.	**CAPÍTULO IX** **ACCESO A LA JUSTICIA** **Artículo 28.** Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales**, respetando sus derechos humanos, deberán contar con asistencia,** asesoría y representación jurídica **accesible a su condición y** en forma gratuita**, a fin de asegurar el acceso efectivo a la justicia** en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.
TÍTULO TERCERO **CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD** **CAPÍTULO II** **ATRIBUCIONES** **Artículo 42.** Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:	**TÍTULO TERCERO** **CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD** **CAPÍTULO II** **ATRIBUCIONES** **Artículo 42.** Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVII. …	I. a XVII. …
Se adiciona	**XVIII. Recibir, dar trámite y seguimiento, ante la instancia competente, de las quejas o denuncias que las personas con discapacidad, sus familias o tutores interpongan contra supuestas violaciones a sus derechos humanos, cometidas por servidores públicos de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas o de los Municipios, contenidos en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia.**
CAPÍTULO III **ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN**	**CAPÍTULO III** **ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN**
Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por nueve representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.	**Artículo 44.** La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por nueve representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.
Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:	Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:
I. a IX. …	I. a IX. …
Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.	Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva **deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, no podrán ser funcionarios públicos en activo y** durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.
El Director General del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.	El Director General del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.
Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.	Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía
CAPÍTULO IV **ASAMBLEA CONSULTIVA**	**CAPÍTULO IV** **ASAMBLEA CONSULTIVA**
Artículo 53. La Asamblea Consultiva estará integrada por:	**Artículo 53.** La Asamblea Consultiva estará integrada por:
I. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas;	I. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas, **Los representantes de las organizaciones deberán ser miembros de alguna organización y no podrán ser funcionarios públicos en activo**;
II. a III. …	II. a III. …
La Asamblea será presidida por un representante electo	

de entre sus miembros.	La Asamblea será presidida por un representante electo de entres sus miembros, **así mismo se nombrarán un secretario y un escrutador, que también serán electos de entre sus miembros a efecto de garantizar la convocatoria de los integrantes de la asamblea a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se propongan**. **El consejo y los Gobiernos de las Entidades Federativas celebrarán acuerdos de colaboración en materia de logística y aportaciones para el buen funcionamiento de la Asamblea.**
Artículo 55. Las bases de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo.	**Artículo 55.** Las bases de **elección,** funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo.

Por lo expuesto y por el compromiso de una inclusión social con equidad y sin discriminación, se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 1; se adiciona un párrafo segundo al artículo 3; se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 4; se reforman las fracciones III y IV del artículo 6; se reforma el párrafo primero del artículo 10; se reforman las fracciones XIII y XIV del artículo 12; se reforma el párrafo segundo del artículo 16; se reforma el párrafo primero del artículo 18, se reforma la fracción II del artículo 19; se reforma el primer párrafo del artículo 28; se reforma la fracción 18 del artículo 42; se reforma el párrafo tercero del artículo 44; se reforma la fracción I y el párrafo segundo, y se adiciona un párrafo tercero al artículo 53, y; se reforma el artículo 55, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá, **de manera obligatoria en todo el territorio nacional,** promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder

Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

Para ello, se deberán adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean pertinentes para dar cumplimiento y plena vigencia a esta Ley.

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.

Las acciones afirmativas **~~positivas~~** consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas **~~positivas~~** que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa **~~positiva~~** para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I. a II. …

III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos **suficientes y necesarios** para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente Ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;

IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, **de las Entidades Federativas y los municipios**, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad;

V. a XIII. …

TÍTULO SEGUNDO
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPÍTULO I
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá **y actualizará periódicamente** la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas.

El Sector Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional.

CAPÍTULO III
EDUCACIÓN

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a XII. …

XIII. **Celebrar convenios de coordinación o concertación con instituciones de educación superior de cada Entidad Federativa, a efecto de que los estudiantes que realicen su servicio social apoyen a personas con discapacidad**;

XIV. **Integrar en los libros de texto gratuito, información e imagen de las personas con discapacidad, que permita a los estudiantes conocer, sensibilizar e infundirles valores y la importancia de integrar a las personas con discapacidad a la comunidad**, **y;**

XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

CAPÍTULO IV
ACCESIBILIDAD Y VIVIENDA

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, **de las Entidades Federativas, y Municipales**, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

...

…

I. a III. …

Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán **contemplar e** incluir **la normatividad en materia de accesibilidad y diseño universal en los** proyectos arquitectónicos de construcciones **y de modificación a las viviendas**. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.

CAPÍTULO V
TRANSPORTE PÚBLICO Y COMUNICACIONES

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. …;

II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos, personal capacitado **y el libre acceso en compañía de animales de apoyo para su traslado;**

III. a V. …

CAPÍTULO IX
ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales**, respetando sus derechos humanos, deberán contar con asistencia,** asesoría y representación jurídica **accesible a su condición y** en forma gratuita**, a fin de asegurar el acceso efectivo a la justicia** en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.

TÍTULO TERCERO
CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVII. …

XVIII. Recibir, dar trámite y seguimiento, ante la instancia competente, de las quejas o denuncias que las personas con discapacidad, sus familias o tutores interpongan contra supuestas violaciones a sus derechos humanos, cometidas por servidores públicos de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas o de los Municipios, contenidos en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia.

CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por nueve representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y

entidades:

I. a IX. …

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva **deberán ser miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, no podrán ser funcionarios públicos en activo y** durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

El Director General del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía

CAPÍTULO IV
ASAMBLEA CONSULTIVA

Artículo 53. La Asamblea Consultiva estará integrada por:

I. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas, **Los representantes de las organizaciones deberán ser miembros de alguna organización y no podrán ser funcionarios públicos en activo**;

II. a III. …

La Asamblea será presidida por un representante electo de entre sus miembros, **así mismo, se nombrarán un Secretario y un escrutador, que también serán electos de entre sus miembros; a efecto de garantizar la convocatoria de los integrantes de la asamblea a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se propongan**.

El consejo y los Gobiernos de las Entidades Federativas celebrarán acuerdos de colaboración en materia de logística y aportaciones para el buen funcionamiento de la Asamblea.

Artículo 55. Las bases de **elección,** funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Poder Ejecutivo Federal dispondrá de 180 días para realizar las adecuaciones reglamentarias a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de julio de 2013.

DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
DIP. MARÍA DE LA PALOMA VILLASEÑOR VARGAS

DE LEGISLADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA ENERGÉTICA.

Los que suscriben, **LEGISLADORAS Y LEGISLADORES FEDERALES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL** en las Cámaras de Diputados y Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,** al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

El sector energético de México se encuentra en un momento coyuntural. Los retos que se presentan en materia de desarrollo de los hidrocarburos, abastecimiento de la energía eléctrica y combate al cambio climático son desafíos que rompen con los paradigmas que han dominado hasta ahora el debate nacional. Estos retos deben atenderse con premura y con acciones contundentes, realizando cambios estructurales y de diseño institucional, a través de una reforma integral que recoge los objetivos que deben estar contemplados en toda política energética moderna: seguridad de suministro, competitividad, sustentabilidad y viabilidad fiscal. En este sentido, la presente iniciativa abarca tres aspectos: el petróleo y los hidrocarburos, el sector eléctrico y un nuevo diseño institucional en materia energética.

El país requiere de un cambio profundo en el modelo de gestión y organización del sector energético en su conjunto. El modelo actual llegó a su límite y se encuentra en franco agotamiento puesto que no responde a las necesidades presentes de la sociedad mexicana y es incapaz de adecuarse a los constantes cambios endógenos y exógenos que ponen en riesgo la seguridad energética, las finanzas públicas, los programas sociales y la calidad de vida de la sociedad mexicana.

Ante ello, es momento de llevar a cabo acciones firmes y contundentes que permitan al país contar con más y mejores fuentes de energía, aprovechar al máximo sus recursos naturales y generar en el corto plazo las condiciones necesarias para detonar el desarrollo económico de México.

El proyecto que presenta Acción Nacional a consideración del Congreso de la Unión, parte de una visión integral de lo que México requiere, de lo que la sociedad demanda y de los beneficios que todos los mexicanos esperamos. Hoy es el momento de llevar a cabo acciones legislativas serias, con miras de largo plazo y con la convicción de que las propuestas que se presentan están encaminadas precisamente a potenciar al máximo los recursos con los que contamos.

México ha esperado por muchos años reformas estructurales de gran calado, que nos ponga entre las mejores economías del mundo y que garantice un futuro próspero para las próximas generaciones. Sin embargo, las visiones sesgadas y los intereses mezquinos de unos cuantos no han permitido concretar dichas reformas, ante ello es necesario llevar a cabo un cambio en el paradigma actual de las inversiones, en el aprovechamiento de los recursos naturales y en el modelo de las finanzas públicas, pues la extrema dependencia de éstas a los ingresos petroleros nos colocarán en pocos años en una situación crítica.

Este cambio de visión en la estructura financiera y económica del país, particularmente en el aprovechamiento de los recursos energéticos y el nuevo modelo de inversiones que se proponen por parte de Acción Nacional garantizará al Estado mexicano consolidarse como rector de la política económica y

energética del país, dar un nuevo impulso a las inversiones públicas y privadas, crear empleos bien remunerados y poner a México a la vanguardia tecnológica a nivel mundial.

Para lograr lo anterior, el Partido Acción Nacional fiel a sus principios democráticos y con la convicción de ante poner el interés nacional sobre los intereses particulares, propone un paquete de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas fundamentalmente a otorgar al Estado mexicano de los elementos necesarios para aprovechar al máximo todos los recursos con los que el país cuenta, allegarse de nuevas tecnologías, de inversiones productivas, acabar con los monopolios de Estado, ofrecer a los ciudadanos mejores condiciones de vida, en un ambiente de libre competencia que detone nuevas fuentes de trabajo y el crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y eficientes, reduzca el costo de la energía eléctrica y consolide nuestra independencia energética.

Una reforma en el sector energético mexicano conlleva la necesidad de definir correctamente cuáles son los valores, conceptos, concepciones, normas y mitos que conforman las raíces cognitivas del imaginario popular: "*No se puede dejar de lado el aspecto simbólico, pues la expropiación petrolera aún se percibe como una pieza fundamental de la soberanía nacional, entre los diversos mitos de la historia mexicana*", declaró el escritor Carlos Fuentes al referirse a la imagen del petróleo.

Así, sin olvidar la memoria histórica que nos ha forjado como nación independiente y democrática, proponemos romper los viejos tabúes que, con el pretexto de una defensa a la soberanía mal entendida, han frenado el desarrollo económico del país. Es por ello, que vale la pena dar una mirada a los antecedentes históricos que dieron como resultado la redacción actual de diversos conceptos constitucionales. Ello con la finalidad de poner en contexto los cambios que la presente iniciativa tiene como objetivo.

Se trata de un breve repaso histórico, a partir de los excesos cometidos por empresas extranjeras establecidas en México en el ramo del petróleo, el proceso expropiatorio llevado a cabo por el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río, el surgimiento de Petróleos Mexicanos como empresa del Estado encargada de la exploración y explotación del petróleo y de los hidrocarburos, y las diversas reformas constitucionales y legales que se han llevado a cabo en momentos históricos específicos, que han atendido a situaciones concretas y muy particulares por las que ha atravesado el país.

BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La primera empresa petrolera extranjera que se estableció en nuestro país, en la zona de Tampico en el año de 1887, fue la Waters Pierce Oilcompany, subsidiaria de Standard Oil de la familia Rockefeller, destinada para la refinación de petróleo en México.

Más tarde, se expidió la primera ley petrolera de México promulgada el 24 de diciembre de 1901 por el presidente Porfirio Díaz, quien otorgó concesiones a empresas de origen canadiense, holandés, francés, inglés y alemán, para invertir en exploración, explotación y refinación de petróleo en la zona conocida como la Faja de Oro en la zona norte de Veracruz y sur de Tamaulipas[2].

La expedición de la Constitución de 1917 marcó un parteaguas en la vida política, social y económica de México, ésta fue el resultado más simbólico de la gesta revolucionaria de 1910, en la que por primera vez se reconocieron derechos sociales como parte de las garantías individuales que se incorporaron en el texto constitucional, al tiempo que se reconoció la rectoría del Estado sobre la propiedad de las tierras y aguas de todo el territorio nacional. La redacción original aprobada por el Congreso Constituyente de 1917 preveía en los 2 primeros párrafos del artículo 27 lo siguiente:

[2]"PEMEX, la historia de la Expropiación petrolera", información disponible en la página de Internet de Petróleos Mexicanos: www.PEMEX.com

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Esta no podrá ser apropiada sino por causa de la utilidad pública y mediante indemnización".

La primer reforma constitucional que sufrió el artículo 27, justamente versó en la modificación al segundo párrafo de dicho artículo, a fin de dotar al Estado de la posibilidad de llevar a cabo la expropiación de las tierras por causas de utilidad pública, permitiendo al Congreso de la Unión la expedición de la ley reglamentaria sobre dicha disposición, asimismo, se adicionó un segundo párrafo a la fracción VI de dicho artículo, por lo que la reforma constitucional aprobada por el Congreso quedó redactada de la siguiente manera:

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

…
I a V. …
VI. …
Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada".

Dicha reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934, mientras que la Ley de Expropiación fue publicada el 25 de noviembre de 1936. Estos antecedentes legislativos se materializaron y cobraron gran relevancia con motivo del Decreto expropiatorio aplicado a las compañías petroleras en el año de 1938.

En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el General Lázaro Cárdenas anunciónen mansaje a la Nación uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos Mexicanos: la Expropiación de la industria Petrolera.

Ésta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de la nación. Dicha expropiación tuvo como antecedente la constitución del Sindicato Único de

Trabajadores Petroleros, el cual presentó ante dichas compañías un proyecto de contrato en el que solicitaba mejores condiciones laborales y beneficios en caso de enfermedad o fallecimiento. Ante la negativa de las empresas petroleras de firmar dicho contrato, estalló la huelga el 31 de mayo de 1937. Así, la Junta General de Conciliación y Arbitraje, luego de emitir un laudo a favor del Sindicato en el que obligaba a las empresas a cumplir con las demandas de sus trabajadores y el pago de 26 millones de pesos en salarios caídos, las compañías petroleras interpusieron una demanda de amparo el 2 de enero de 1938 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les negó el amparo. Como consecuencia, las compañías extranjeras se declararon en plena rebeldía y, en respuesta, el máximo Tribunal emitió su fallo el 1 de marzo, señalando que el tiempo límite para que las empresas pagaran los 26 millones de pesos sería el 7 de marzo. No obstante que el entonces Presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo diversas reuniones con los dueños de las empresas petroleras, éstas insistieron en la negativa al pago de sus trabajadores. Ante dichas circunstancias, el Presidente Cárdenas no tuvo más camino que decretar la expropiación de las 17 compañías petroleras que operaban en México.

El anuncio de la expropiación se hizo a las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938. El Presidente Lázaro Cárdenas se había reunido previamente con su gabinete a quienes les comunicó su decisión de nacionalizar las empresas petroleras. Dos horas más tarde, se hizo el anuncio de que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales. Dicho Decreto expropiatorio señalaba lo siguiente:

"CONSIDERANDO:
Que es del dominio del público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el Grupo Número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo proporcionado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción XXI del artículo 123 de la Constitución General de la República en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo.

Que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias; así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, circunstancias todas éstas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera.

Por lo expuesto y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 27 Constitucional y en los artículos 1º fracciones V, VII y X, 4,8,10,20 de la Ley de Expropiación de 23 de noviembre de 1936, he tenido a bien expedir le siguiente:

DECRETO

Artículo 1º.- Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinarías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A, Compañía

Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San Ricardo, S.A., Huasteca PetroleumCompany, Sinclair Pierce OilCompany, Mexican Sinclair PetroleumCorporation, Stanford y Compañía, S. en C. Peen Mex Fuel Company, Richmond PetroleumCompany de México, California Standard OilCompany of México, Compañía Mexicana el Agwi, S.A Compañía de Gas y Combustible Imperio, ConsolidatedOilCompany of México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., SabaloTransportationCompany, Clarita S.A, y Cacalilao, S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera.

Artículo 2º.- La Secretaría de Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de la Nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo.

Artículo 3º .- La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y a un plazo que no excederá de diez años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados, que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales, en la Tesorería de la Federación.

Artículo 4º.- Notifíquese personalmente a los representante de las compañías expropiadas y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho Decreto expropiatorio marcó el inicio de la producción petrolera en manos de una empresa nacional denominada "Petromex" que más tarde se convertiría en Petróleos Mexicanos (PEMEX). La relevancia del Decreto de expropiación emitido por el presidente Cárdenas radica en el hecho no sólo de la nacionalización de la industria petrolera en manos del Estado, sino del cambio en el marco jurídico prevaleciente en esa época. A pesar de que comúnmente se menciona que con la expropiación petrolera se dejó en manos del Estado de manera exclusiva todo el proceso de exploración y explotación petrolera, esto no fue así, pues derivado de dicho Decreto se llevó a cabo la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional, así como la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, abrogando la ley del petróleo de 1925 vigente hasta esa época, en los que se previeron mecanismos de participación privada en dichos procesos.

De lo anterior, se desprende lo siguiente: en primer lugar, la redacción del sexto párrafo del artículo 27, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, quedó redactado de la siguiente manera:

"En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable, y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos"[3].

La adición de dicho párrafo tuvo por objeto señalar que en el caso del petróleo y de los carburos de hidrogeno no habría concesiones, pero sería la ley reglamentaria la que determinaría cómo se llevaría a cabo la

[3]Diario Oficial de la Federación, sábado 9 de noviembre de 1940.

explotación del petróleo. Así, la ley reglamentaria expedida también el 9 de noviembre de 1940 en sus artículos 6 y 7 señalaba lo siguiente:

> *Artículo 6º. El petróleo al que se refiere al artículo 1º será explorado y explotado por la Nación como sigue:*
>
> *"I. Mediante trabajos realizados en forma directa y*
>
> *"II. Por conducto de las instituciones que al efecto cree la ley.*
>
> *Artículo 7º. En el caso previsto por la fracción I del artículo anterior,* ***podrán celebrarse contratos con los particulares, a fin de que éstos lleven a cabo, por cuenta del Gobierno Federal, los trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que se obtengan****".*

El presidente Cárdenas al enviar al Congreso la ley reglamentaria de mérito dejó clara la forma en que se debía pagar al sector privado por sus trabajos de exploración y explotación de petróleo:

> *"Artículo 8º...*
>
> *"III. La forma de determinar la compensación y los límites dentro de los cuales deberá fijarse el porcentaje de que habla la parte final del artículo 7º., en la inteligencia de que deberá tomarse siempre como base para otorgar esa compensación la que los contratistas recuperen las inversiones que efectúen y obtengan una utilidad razonable".*

A mayor abundamiento, en la exposición de motivos de la iniciativa de mérito se señaló lo siguiente:

> ***"El Ejecutivo Federal a mi cargo ha expresado su punto de vista de que la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la Nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión que, por una tradición muy arraigada en nuestro sistema legislativo, se supone que, aunque en forma limitada y precaria, concede ciertos derechos a la explotación directa del subsuelo, de tal manera que una vez expedida, el Estado se reserva una función casi exclusivamente reguladora y de policía; función ésta enteramente insuficiente en materia de petróleo después de que el Estado por decreto del 18 de marzo de 1938 decidió la expropiación de los bienes de las principales empresas petroleras".***

La ley de 1925 abrogada por la ley expedida en 1940 dio el marco jurídico mediante el cual se establecieron los principios regulatorios en materia de concesiones que preveía la nueva ley, así, vale la pena señalar cuáles fueron algunas de las modificaciones que se hicieron en su momento a dicha ley reglamentaria:

TEXTO LEY DE 1925	TEXTO LEY DE 1940
ARTÍCULO 1o.- Corresponde a la Nación el dominio directo de toda mezcla natural de carburos de hidrógeno que se encuentren en su yacimiento, cualquiera que sea su estado físico. ~~En~~ esta ley ~~se~~ comprende con la palabra "Petróleo", a todas las mezclas naturales de hidrocarburos que los componen, lo	**ARTÍCULO 1.-** Corresponde a la Nación el dominio directo de toda mezcla natural de carburos de hidrógeno que se encuentran en su yacimiento, cualquiera que sea su estado físico. Esta ley comprende con la palabra "petróleo" a todas las mezclas naturales de hidrocarburos que lo componen, lo acompañen

acompañan o se derivan de él.	o se deriven de el.
ARTÍCULO 2o.- El dominio directo de la Nación, a que se refiere el artículo anterior, es inalienable e imprescriptible~~,~~ y sólo con autorización expresa del Ejecutivo Federal, concedida en los términos de la presente ley y sus reglamentos, podrán llevarse a cabo los trabajos que requiere la industria petrolera.	**ARTÍCULO 2.-** El dominio directo de la Nación a que se refiere el artículo anterior, es inalienable e imprescriptible y solo con autorización expresa del Ejecutivo Federal, concedida en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, podrán llevarse a cabo los trabajos que requieren la industria petrolera.
ARTÍCULO 3o.- La industria petrolera es de utilidad pública; por lo tanto, gozará de preferencia a cualquier aprovechamiento de la superficie del terreno y procederá la expropiación y la ocupación de la superficie mediante la indemnización legal correspondiente para todos los casos que reclamen las necesidades de esta industria **(se pasó al primer párrafo del artículo 4).** La industria petrolera comprenda; el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoductos y la refinación del petróleo.	**ARTICULO 3.-** La industria petrolera comprende: el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoducto y la refinación del petróleo.
ARTÍCULO 4o.-~~Lo mexicanos y las sociedades civiles y comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, podrán obtener concesiones petroleras sujetándose a los preceptos de esta ley. Los extranjeros, además de la obligación anterior, deberán previamente cumplir con lo prescripto en el artículo 27 de la ConstituciónPolítica vigente.~~	**ARTÍCULO 4.-** La industria petrolea es de utilidad pública; por lo tanto, gozará de preferencia a cualquier aprovechamiento de la superficie del terreno y procederá la expropiación y la ocupación de la superficie para todos los casos que reclamen las necesidades de esta industria. **El superficiario está indemnizado por la ocupación o expropiación en su caso, que sean requeridas para los trabajos relacionados con la industria petrolea. El reglamento determinará el procedimiento que deberá seguirse para señalar la zona ocupada o expropiada, el monto de la indemnización y la forma de pago.** **Ningún otro derecho diverso del de recibir la indemnización que este artículo concede, corresponderá al superficiario por la explotación petrolera del subsuelo.**
ARTÍCULO 5o.-~~Los derechos derivados de concesiones otorgadas conforme a esta ley, no se transferirán en todo o en parte a gobiernos o soberanos extranjeros, ni se admitirán a éstos como socios o coasociados, ni se constituirá a su favor ningún derecho sobre aquéllos.~~	**No hay correlativo.**
ARTÍCULO 6o.- Es de exclusiva jurisdicción federal todo lo relativo a la industria petrolera.	**ARTÍCULO 5.-** Es de **la** exclusiva jurisdicción federal todo lo relativo a la

	industria petrolera.
ARTÍCULO 7o.- Las concesiones de ~~exploración~~~~dan~~ derecho al concesionario para ~~la ejecución de los trabajos que tengan por objeto el descubrimiento del~~petróleo. La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, otorgará dichas concesiones y vigilará que se cumplan las obligaciones en ellas estipuladas, de conformidad con las siguientes bases: ~~I. El concesionario obtendrá del superficiario, dentro de los tres primeros meses de vigencia de su concesión, la conformidad para la ocupación de los terrenos que necesite y celebrará con él convenios especiales en que se estipule la forma de indemnizarle;~~ ~~II. En caso contrario, el Ejecutivo Federal resolverá la ocupación y expropiación de los terrenos, de conformidad con las necesidades de la industria petrolera, previa fianza del concesionario que garantice la indemnización a que tenga derecho el superficiario por daños y perjuicios;~~ ~~III. El concesionario deberá rendir a la misma Secretaría un informe trimestral del avance de sus trabajos y del resultado de su exploración;~~ ~~IV. Cada dos años, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, convocará a una junta que determine los límites de las "zonas exploradas" en la República. Esta junta estará integrada por un representante de la misma Secretaría, uno de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico y otro de las empresas petroleras. Dentro de los dos años siguientes a la determinación de las "zonas exploradas", las concesiones de exploración en lugares diversos tendrán la indicación de "zona nueva";~~ ~~V. Durante el período de exploración y tres meses más, sólo el explorador tendrá derecho de presentar solicitud de concesión de explotación de fundos petrolíferos dentro de la zona explorada;~~ ~~VI. El concesionario deberá hacer un depósito de garantía, en relación con la importancia y extensión de la zona que desee explorar, en la~~	**ARTÍCULO 6.-El petróleo a que se refiere el artículo 1º será explorado y explotado por la Nación como sigue:** **I.- Mediante trabajos realizados en forma directa y** **II.- Por conducto de las instituciones que al efecto cree la Ley.**

~~Tesorería General de la Nación, dentro del primer mes de vigencia de la concesión. La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, fijará el monto de este depósito;~~ ~~VII. La duración de las concesiones de exploraciónserá de uno a cinco años, a juicio de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y de acuerdo con la extensión y la importancia de la zona concedida;~~ ~~VIII. El beneficiario de una concesión de exploración, tendrá preferencia para obtener una nueva, hasta por cinco años improrrogables sobre la misma zona, siempre que haya cumplido con todas las obligaciones impuestas por la presente ley; y,~~ ~~IX. La prioridad de una solicitud da derecho de preferencia en igualdad de circunstancia, respecto de solicitudes posteriores.~~	
~~**ARTÍCULO 8o.**- Las concesiones de explotación se otorgarán previa solicitud y darán derecho al concesionario para captar y aprovechar el petróleo, La prioridad de una solicitud da derecho de preferencia en igualdad de circunstancias respecto de solicitudes posteriores. La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, otorgará dichas concesiones y vigilará que se cumplan las obligaciones en ellas estipuladas, de conformidad con las siguientes bases:~~ ~~I. Cuando el concesionario del fundo petrolífero no sea a la vez propietario de la superficie, deberá ceder al superficiario como mínimo el cinco por ciento sobre la producción bruta a título de indemnización;~~ ~~II. Dentro de la zona de explotación, en concesionario tendrá derecho a establecer todas las instalaciones que requieran la extracción, la conducción y el almacenamiento del petróleo;~~ ~~III. Fuera de la zona concedida, el beneficiario de una concesión de explotaciónntendrá derecho a obtener concesiones para tender oleoductos, construir cominos y aprovechar las aguas federales, sujetándose a lo que dispongan las leyes relativas;~~	**ARTÍCULO 7.-En el caso previsto por la fracción I del artículo anterior, podrá celebrarse contratos con los particulares, a fin de que estos lleven a cabo por cuenta del gobierno federal, los trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que obtengan.**

~~IV. Las concesiones de explotación en "zona nueva", darán derecho a los concesionarios, durante el tiempo que determine la junta de representantes a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, para obtener un descuento en el impuesto de producción, que deberá fijarse por la misma junta al mismo tiempo que ésta determine los límites de las zonas exploradas;~~ ~~V. La explotación de una zona concedida, no podrá interrumpirse sin causa justificada a juicio de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo;~~ ~~VI. El Ejecutivo Federal reglamentará la explotación de los pozos para evitar su agotamiento prematuro, y~~ ~~VII. La duración de la concesión so será mayor a treinta años, Al término de ella, el concesionario que haya cumplido con todas sus obligaciones, podrá obtener una nueva concesión sobre la misma zona.~~ ~~La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, establecerá el número de agencias suficientes a fin de recibir y tramitar los denuncios de fundos petroleros en los lugares en que sean necesarias dichas agencias.~~ ~~En la zona concedida para la explotación, únicamentepodrán otorgarse concesiones de exploración a los beneficiarios de las primeras.~~	
~~**ARTÍCULO 9o.-** La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, otorgará concesiones para establecer oleoductos de "uso público" y de uso privado. Los primeros se utilizarán para transportar el petróleo de quien los solicite y los de "uso privado", para transportar el petróleo del concesionario.~~ ~~Las concesiones se sujetarán a las siguientes bases:~~ ~~I. Las concesiones de oleoductos de uso público, se otorgarán a quienes satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 4o.~~ ~~II. Las concesiones de oleoductos de uso público, además del derecho que dará al concesionario para la ocupación y expropiación a que se refiere la fracción II del artículo 7o., serán estimuladas por el Gobierno~~	**ARTÍCULO 8.-** El reglamento de la presente ley determinará: I.- La extensión máxima de terreno que podrá ser objeto de contrato con un sola persona, ya sea en un solo acto o actos separados. II.- La duración máxima de los contratos III.- La forma de determinar la compensación y los limites dentro de los cuales deberá fijarse el porcentaje de que habla la parte final del art. 7º, en la inteligencia de que deberá tomarse siempre como base para otorgar esa compensación la que los contratistas recuperen las inversiones que efectúen y obtengan una utilidad razonable.

~~Federal con las franquicias que permita la Constitución;~~ ~~III. Las concesiones de oleoductos de uso privado se otorgarán únicamente a los beneficiarios de una concesión de exploración, de exploración o de refinación;~~ ~~IV. Las concesiones de oleoductos de uso privado, darán derecho al beneficiario para obtener servidumbres de paso y acueducto;~~ ~~V. No se permitirá la construcción de oleoductos para cargar petróleo directamente a barco en mar abierta;~~ ~~VI. Todo el que tenga un oleoducto, sea público o privado, tendrá la obligación de transportar el petróleo del Gobierno Federal, hasta en un 20% de la capacidad del oleoducto, y~~ ~~VII. La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, expedirá periódicamente, tarifas para el transporte del petróleo por oleoductos, oyendo previamente a los interesados.~~	IV.- La forma de comprobar la capacidad técnica y financiera del contratista V.- Las facultades que corresponden a las autoridades administrativas en cuanto al régimen del contrato
~~ARTÍCULO 10. Las Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, otorgará las concesiones para establecer refinarías y plantas de aprovechamiento de gas, de acuerdo con las siguientes bases:~~ ~~I. Se otorgarán a quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 4º,~~ ~~II. Los concesionarios de sujetarán a los reglamentos de higiene, seguridad y policía, a fin de preservar la vida y la salud de los empleados, operativos y vecinos, y~~ ~~III. La Federación estimulará por todos los medios posibles la industria de la refinaría del petróleo y el aprovechamiento de gas.~~	**ARTÍCULO 9.- Los contratos de que hablan los artículos anteriores, solo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador.**
~~ARTÍCULO 11. Las concesiones petroleras en terreno cuyo dominio superficial corresponda a la Nación se otorgarán en la forma prescrita por esta ley y el concesionario pagará la indemnización correspondiente por el uso de la superficie, de acuerdo con el reglamento que al efecto se expida, además de la participación para el Fisco Federal del tanto por ciento de los productos brutos de explotación que marque la concesión respectiva, En las concesiones se estipulará que no se entorpezcan los servicios públicos.~~	**ARTÍCULO 10.- El ejecutivo Federal dictará las disposiciones relacionadas con la política de los trabajos petróleos y las normas técnicas a que deberá estar sujeta la explotación.**
Artículo 12 al 22. …	Artículo 11 al 15. …

Con lo hasta aquí expuesto queda claro que el proceso expropiatorio y las reformas constitucionales y legales derivadas de dicho Decreto, tuvieron como finalidad dejar en manos del Estado la exploración y explotación

del petróleo y de los carburos de hidrogeno, pero al mismo tiempo, establecer la posibilidad de que los particulares pudieran participar de dichas actividades sujetándose a reglas definidas por la ley reglamentaria.

En otras palabras, la expropiación petrolera nacionalizó las industrias establecidas en México, conformando por primera vez una empresa nacional, a cargo de todo el proceso productivo en la rama del petróleo, pero en su concepción original no se previó la exclusión de la participación de particulares, nacionales o extranjeros, en los diversos procesos de exploración y explotación, pues la naciente industria petrolera nacional, requeriría de tecnología y financiamiento ajeno, que le permitieran potenciar y aprovechar los procesos de producción de toda la cadena petrolera. Incluso, el Constituyente Permanente de 1939 no prohibió la participación del sector privado en dichas actividades, más aún, en la ley expedida durante el mandato del Presidente Cárdenas se reconoció la necesidad de contar con el apoyo de particulares.

En este sentido, cobra mayor relevancia el hecho de que, más allá de posiciones políticas divergentes, **se debe reconocer que el nacionalismo al que en muchas ocasiones se hace referencia cuando se habla del petróleo y los hidrocarburos debe estar enfocado, como fue desde su origen, a que el petróleo y la renta petrolera son y deben seguir siendo propiedad de la nación, pero los procesos productivos válidamente pueden ser realizados tanto por el Estado como por particulares, nacionales o extranjeros, en lo individual o en asociación con aquél, pues esta fue la idea que inspiró en su momento las reformas publicadas en el año de 1940.**

En este orden de ideas, en 1941, el General Manuel Ávila Camacho, sin soslayar su cercanía con su antecesor y a tan sólo dos meses y medio de haber tomado posesión en su cargo de Presidente de la República, presentó ante el Congreso de la Unión, una iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, a fin de puntualizar la participación del sector privado en los procesos productivos del petróleo, así, la exposición de motivos señalaba lo siguiente:

> *"… nos han formado la convicción de que precisa introducir en el sistema de la ley ciertas modificaciones que, sin apartarse de su inspiración y tendencia, le presten la amplitud y flexibilidad requeridas para el mejor estímulo de la iniciativa privada, en cuyas energías vitales —lo tenemos dicho— ciframos principalmente nuestra seguridad en la expansión económica del país".*
>
> *"Por otra parte, las modificaciones intentan abrir nuevas oportunidades a la inversión del capital privado en la industria petrolera bajo formas de empresa que, por constituir entidades de economía mixta, es decir, organismos semioficiales controlados por el Gobierno, impriman a la participación privada un sentido preponderante de utilidad social".*

Dentro de las reformas propuestas, destacan los siguientes artículos:

> *"Artículo 6º. La Nación llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo, en la siguiente forma:*
> *I. Por trabajos que realice el gobierno a través de su órgano correspondiente;*
> *II. Por conducto de las instituciones públicas petroleras que al efecto cree la Ley, y*
> *III. Mediante contratos con particulares o sociedades".*
>
> *"Artículo 8º. En el caso de la fracción III del Artículo 6º podrán celebrarse contratos con particulares o sociedades para que lleven a cabo los trabajos respectivos, a cambio de compensaciones en efectivo o de un porcentaje de los productos que se obtengan.*
>
> *El otorgamiento de esos contratos se hará previo estudio que funde su necesidad o conveniencia, por medio de convocatoria que se expida en cada caso, y prefiriéndose a quien ofrezca mejores condiciones".*

Así, el presidente Manuel Ávila Camacho fijó las reglas mediante las cuales la iniciativa privada podía ser invitada a explorar y explotar petróleo por encargo del Gobierno Federal. Las reformas que sufrió dicha ley pueden expresarse de la siguiente manera:

TEXTO LEY DE 1940	TEXTO LEY DE 1941
ARTÍCULO 6.- ~~El petróleo a que se refiere el artículo 1º será explorado y explotado por la Nación como sigue:~~ I.- Mediante trabajos realizados en forma directa y II.- Por conducto de las instituciones que al efecto cree la Ley.	**Artículo 6.La Nación llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo, en la siguiente forma:** I. **Por** trabajos **que realice el gobierno a través de su órgano correspondiente;** II. Por conducto de las instituciones **públicas petroleras** que al efecto cree la Ley, y **III. Mediante contratos con particulares o sociedades".**
ARTÍCULO 8.- ~~El reglamento de la presente ley determinara:~~ ~~I. La extensión máxima de terreno que podrá ser objeto de contrato con un sola persona, ya sea en un solo acto o actos separados.~~ ~~II. La duración máxima de los contratos~~ ~~III. La forma de determinar la compensación y los limites dentro de los cuales deberá fijarse el porcentaje de que habla la parte final del art. 7º, en la inteligencia de que deberá tomarse siempre como base para otorgar esa compensación la que los contratistas recuperen las inversiones que efectúen y obtengan una utilidad razonable.~~ ~~IV.- La forma de comprobar la capacidad técnica y financiera del contratista~~ ~~V. Las facultades que corresponden a las autoridades administrativas en cuanto al régimen del contrato.~~	**Artículo 8º. En el caso de la fracción III del Artículo 6º podrán celebrarse contratos con particulares o sociedades para que lleven a cabo los trabajos respectivos, a cambio de compensaciones en efectivo o de un porcentaje de los productos que se obtengan.** **El otorgamiento de esos contratos se hará previo estudio que funde su necesidad o conveniencia, por medio de convocatoria que se expida en cada caso, y prefiriéndose a quien ofrezca mejores condiciones.**
No hay correlativo.	**ARTÍCULO 9.- Los contratos de exploración y explotación tendrán una duración máxima de 30 años, se referirán a una superficie continua y serán intransmisibles. El reglamento de esta ley fijará la demás condiciones necesarias a su celebración.**

ARTÍCULO 9.- Los contratos de que hablan los artículos anteriores, solo podrán celebrarse con ~~nacionales~~ o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. ~~No podrán concertarse~~ en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador.	**ARTÍCULO 10.-** Los contratos de que hablan los artículos anteriores, solo podrán celebrarse: **I.- Con particulares mexicanos** II.- Con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos **III.- Con sociedades de "economía mixta" en las que el gobierno federal representará la mayoría del capital social, y de las cuales podrán formar parte socos extranjeros y** IV.- En ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador.
No hay correlativo.	**ARTÍCULO 11.- El reconocimiento superficial de los terrenos con el objeto de investigar sus posibilidades petrolíferas no requiere le otorgamiento de contratos. Si el terreno es de propiedad particular se necesitara permiso del superficiario. En caso de posesión de este la Secretaría de la Economía Nacional oyendo a las partes, otorgar el permiso previa fianza que deberá dar el permisionario por los daños y perjuicios que al propietario pudieran causarse.**
No hay correlativo.	**ARTÍCULO 12.- El Ejecutivo Federal establecerá zonas de reserva petrolera en terrenos que previa investigación y estudios de sus posibilidades petrolíferas así lo ameriten, con la finalidad de garantizar el abastecimiento futuro del país. La incorporación de terrenos a las zonas de reservas y su desincorporaron será efectuada mediante decreto presidencial fundado en los dictámenes técnicos respectivos.**
ARTÍCULO 10.- El ejecutivo Federal dictará las disposiciones ~~relacionadas~~ con la política de los trabajos petróleos y las normas técnicas a que deberá estar sujeta la explotación.	**ARTÍCULO 13.-** El ejecutivo federal dictará las disposiciones con la política de los trabajos petroleros y las normas técnicas a que deberá estar sujeta la explotación.
Artículo 11 al 15. …	Artículo 14 al 20. …

Fue durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, casi 20 años después, que envió al Congreso de la Unión una iniciativa con modificaciones a la citada ley reglamentaria, en la que en la exposición de motivos señala que la reforma constitucional de 1940 proscribió el régimen de concesiones y facultó al legislador ordinario para que en la ley reglamentaria respectiva determinara la forma en que la Nación llevaría a cabo las explotaciones. De la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para reformar en el sentido expresado el artículo 27 de la Constitución –continúa señalando la exposición de motivos-, se

desprende que el propósito de esa reforma fue el de incorporar al texto constitucional "el principio de la explotación directa del petróleo por la Nación" y, consecuentemente, "que termine el régimen de concesiones". Así, dicha exposición de motivos señalaba:

"El conocimiento de las necesidades actuales del país y una mínima previsión del futuro de México, requieren que las actividades de una industria tan vital para la nación, sean no solamente controladas por el Gobierno, sino monopolizadas por el Estado, pues la explotación de un recurso natural como el petróleo, que no puede ser reservado y que significa un factor esencial y determinante en el progreso de México, debe inspirarse en un fin de interés general y no estar sometida al arbitrio de intereses privados que por cualquier causa, lícita o no, pudieran interferir en el adecuado desenvolvimiento de la industria petrolera

Expropiando el acervo de producción de las empresas afectadas por el Decreto de 18 de marzo de 1938 , recuperados los derechos de explotación conferidos a esas empresas a través de las concesiones que tenían otorgadas y reformada la Constitución en el sentido de que no se expidan concesiones y que sea la Nación la que lleve a cabo la explotación del subsuelo, el Gobierno debe avocarse directamente a la explotación integral del petróleo y establecer el control necesario de los recursos petroleros de la Nación, a fin de: regular la potencialidad productora del subsuelo y, estar en aptitud de asegurar los suministros de petróleo y sus derivados que el país requiera, mediante un servicio nacional, uniforme y coordinado; poder calcular y mantener un volumen de reservas que cubra las necesidades futuras del país, y determinar los excedentes que sea conveniente exportar.

Tampoco se ha realizado hasta hoy la explotación del petróleo por medio de contratos con individuos o sociedades, pues la Secretaría de Economía solamente llego a celebrar, en noviembre de 1946, un contrato de explotación con un particular mexicano, contrato que no llegó a operar y que finalmente fue cancelado. Y no obstante que la ley en vigor no condiciona la contratación de terrenos petroleros a una previa solicitación del Estado, sino que expresamente da derecho a los particulares para proponer al Gobierno, en cualquier tiempo, la contratación de un fundo petrolero, la iniciativa privada se ha abstenido de hacer uso de ese derecho, lo que revela que no es ésta una forma adecuada de explotación del petróleo nacional.

La Nación ha adoptado, por lo tanto, como única forma de explotación del petróleo, el conducto de Petróleos Mexicanos, organismo descentralizado mediante el cual se han obtenido frutos ventajosos.

Tomando en cuenta los resultados de esa experiencia, es imperioso modificar la vigente Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo, para ajustar las posibilidades jurídicas de la Nación, de particulares y de instituciones, consideradas en dicha ley, al propio precepto de la Constitución, a los intereses generales del país, a las necesidades de la industria y a la más conveniente y correcta realización de sus actividades , estableciendo al mismo tiempo un régimen uniforme de explotación del subsuelo petrolero, sostenido en su integridad por el principio de constitucionalidad de la explotación directa del petróleo de la Nación, y consecuentemente por la posibilidad legal de que el gobierno disponga de todo el subsuelo petrolero. De otra manera no será posible formalizar un proceso regular de producción, ni el Gobierno estará en aptitud de conocer las reservas petroleras nacionales y de adoptar una acertada política de conservación que asegure, tanto a las generaciones actuales como a las futuras, la estabilidad y el máximo beneficio que tienen derecho a esperar en los suministros de petróleo y sus derivados; preocupación de que no puede despojarse el Gobierno, a menos de desdeñar derechos primordiales de la Nación e intereses vitales del país.

Dentro de ese campo de acción del Estado, la nueva ley reglamentaria que se propone da acceso a la iniciativa privada, señalando la forma en que los particulares pueden prestar una eficaz

colaboración en el aprovechamiento colectivo del petróleo nacional, en la medida en que constitucionalmente pueden tener intervención en las actividades de la industria petrolera. Para este efecto, podrán celebrar contratos con Petróleos Mexicanos, mediante los cuales desarrollen en favor de la Nación obras, trabajos o servicios, de índole material o de carácter técnico, recibiendo a cambio compensaciones determinadas en efectivo, sin que los particulares puedan participar en las utilidades de la institución, ni obtener participaciones subordinadas al resultado de los trabajos o servicios que se les encomienden.

La Ley Reglamentaria vigente, como se ha dicho, permite también que se otorgue a personas, compañías o instituciones privadas mexicanas concesiones para refinación, transporte, almacenamiento y distribución del petróleo y sus derivados, y para la elaboración y distribución de gas artificial, lo que se explica en la exposición de motivos de la ley reglamentaria de 1941, porque en la época en que ésta fue expedida, tanto el Ejecutivo como el Congreso encontraban pertinente la concurrencia de la iniciativa privada en las diferentes actividades de la industria, dándoles carácter de servicios públicos a aquellas que podían ser concesionadas a los particulares, para que se beneficiaran de las mismas todos los que tuvieran la condición de productores o que necesitaren refinar, almacenar, transportar o distribuir sus productos, a fin de servir en esa forma a la colectividad y el Estado.

Al tiempo que se presentaron las reformas a la ley reglamentaria, el 20 de enero de 1960, ya con la presidencia de Adolfo López Mateos, se publicaron las reformas a los párrafos, cuarto, quinto, sexto y séptimo, fracción I del artículo 27 constitucional para prever el reconocimiento del espacio aéreo y mar territorial, conforme a las disposiciones reconocidas a nivel internacional. De hecho, la iniciativa enviada por el presidente Adolfo López Mateos, el 1º de octubre de 1959 a la Cámara de Diputados, se limitaba específicamente al reconocimiento de diversos derechos contenidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Sin embargo, las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Diputados llevaron a cabo diversas modificaciones a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, cuyo dictamen fue aprobado por el Pleno de dicha Cámara el 22 de octubre de 1959. De entre las reformas incorporadas al proyecto original destaca la reforma al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en el que **se prohibió de manera definitiva el otorgamiento de cualquier tipo de permiso y concesión sobre petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, otorgado por el Gobierno Federal, dejando sin vigencia cualquier otro que se hubiera otorgado previo a la reforma de mérito.** Así, es posible advertir los siguientes razonamientos hechos por las dictaminadoras:

"Además, la Primera Comisión de Puntos Constitucionales consideró conveniente, con motivo de este dictamen, hacer extensivo su estudio a los párrafos sexto y séptimo, fracción I, del mismo artículo 27 constitucional que consagran el dominio de la nación como inalienable e imprescriptible sobre el subsuelo y sus aguas y que señala la forma y términos en que podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares, regulando la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, encontró en dicho estudio que existen algunas manifestaciones de desconocimiento del verdadero alcance del Derecho de dominio de la nación sobre el subsuelo, que es necesario subsanar porque: a) se reconoce la existencia de supuestos derechos confirmatorios a la explotación del petróleo del subsuelo; b) dentro de un régimen en que el Estado tiene Facultades constitucionales de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, se le impide a la nación señalar a la explotación de sus recursos naturales, sobre los que ejerce el dominio directo, las modalidades equivalentes que dicte el interés general, pues se ha llegado a sostener que las normas relativas a los trabajos regulares de explotación, que son indispensables para normar las actividades mineras en el sentido más conveniente para la colectividad, no pueden aplicarse a concesiones expedidas con anterioridad a la fecha de expedición de tales normas; c) se

permite el acaparamiento por los particulares de una gran cantidad de fundos mineros que permanecen sin ser explotados cuando las concesiones relativas están expedidas a nombre de personas que mantienen en explotación otros fundos o dicho en otros términos, se faculta a los particulares para constituir a voluntad, reservas mineras en su propio beneficio, sin tener en cuenta el interés de la nación, impidiéndose así el acceso a otras personas o empresas que están en disposición o posibilidad de efectuar su explotación. y d) se ha discutido el derecho de la nación para constituir reservas de carácter nacional, respecto de substancias o regiones determinadas, lo que ha equivalido a hacer obligatorio el otorgamiento de concesiones hasta que los casos en que el interés público puede aconsejar lo contrario.

Ante las circunstancias antes enunciadas, que resultan del todo inconvenientes, la Comisión dictaminadora, por su parte, se permite proponer a la Asamblea, se reformen también los párrafos sexto y séptimo, fracción I, del propio artículo 27 constitucional de la siguiente manera:

a) Es necesario que el enunciado o primera parte del párrafo sexto, se modifique para permitir el uso o aprovechamiento de los recursos naturales, mediante el otorgamiento también de contratos. La celebración de contratos es práctica que ya se observa tratándose de substancias o áreas determinadas en las que la explotación debe someterse a requisitos especiales: pero este objetivo se logra a través de la previa asignación de los fundos a la Comisión de Fomento Minero que en ejercicio de los derechos derivados de la concesión pacta con el verdadero explotador condiciones y estipulaciones adicionales. La autorización directa al estado para celebrar contratos tiene por objeto dar a los mismos la fuerza y vigor inherentes a los actos emanados del Poder Público, constituyendo su celebración verdaderos contratos de derecho público, con todas sus consecuencias y alcances legales, en el mismo párrafo es conveniente expresar con toda claridad que las normas relativas a obras de trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto del mismo artículo 27 constitucional, serán aplicables la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de la vigencia de las propias normas, independientemente de la fecha de otorgamiento de lo contratos o concesiones para que el derecho de dominio de la nación sobre el subsuelo y el interés público en asegurar la adecuada explotación de sus recursos mineros, no se vean constreñidos por aplicaciones indebidas del principio de retroactividad de las leyes; pues resulta evidente que si la Constitución concede a la nación el dominio directo de los recursos del subsuelo, no debe abrirse la puerta al reconocimiento de derechos ilimitados de naturaleza patrimonial en favor de los particulares. Debe asimismo establecerse en forma expresa el derecho que ha tenido y tiene la nación ,através del Gobierno Federal para establecer reservas nacionales y suprimirlas, de acuerdo con las circunstancias que priven en un momento dado, facultándose al Ejecutivo Federal para hacer las declaratorias correspondientes conforme a las leyes secundarias.

En relación con el petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, que constituyen recursos importantísimos del subsuelo para la Nación Mexicana, la Comisión considera que ***debe asentarse de una vez por todas de manera indiscutible en el artículo 27 constitucional, que no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado y que sólo la nación podrá llevar a efecto la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva; porque no obstante que ha sido manifiesto el propósito del Constituyente, a partir de la reforma de diciembre de 1939, el de substraer totalmente la explotación petrolera del régimen de concesiones o contratos en ocasión de que fue expedida a fines del año anterior la ley reglamentaria respectiva, volvió a suscitarse un debate jurídico sobre la subsistencia de algunas concesiones o derechos de los particulares a la explotación del petróleo; por lo que, para evitar cualquiera controversia es procedente la reforma que propone la Comisión en la parte resolutiva de este dictamen.***

Por otra parte, la Comisión considera necesario reformar la fracción I del párrafo séptimo, para

establecer congruencia con las ideas que antes han quedado manifestadas, supuesto que regula la capacidad de los particulares para adquirir en forma legal el derecho de explotar los recursos naturales de la nación. Dicha reforma sólo se hace consistir en la supresión de los combustibles minerales, que como ya quedó asentado antes, nunca podrán ser susceptibles de aprobación por los particulares, y en señalar la posibilidad de establecer explotaciones de minas y aguas mediante concesiones o contratos".

Hasta aquí, de todo lo anteriormente señalado, se advierten dos circunstancias importantísimas que abonan al debate nacional sobre la posibilidad de que los particulares puedan llevar a cabo actividades de exploración y explotación del petróleo y de los hidrocarburos:

a) Como se ha visto, el proceso expropiatorio que culminó con las reformas constitucionales y legales en el año de 1940**, no prohibió ni tuvo por objeto la prohibición de los particulares en los procesos de exploración y explotación del petróleo. Por el contrario, al nacionalizarse las empresas petroleras, México requería la asociación con particulares para llevar a cabo la explotación de los recursos naturales con los que se contaba, ya que no existía ni la tecnología ni los recursos económicos para llevar a cabo dichas actividades. Asimismo, las reformas posteriores a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, precisamente clarificaban los esquemas de participación y de pago a los particulares en dichas actividades. En suma, no se prohibió la participación del sector privado en las actividades de la industria petrolera, por el contrario, el Estado se convirtió en el rector de la política petrolera, a través de una empresa de Estado, dejando abierta la participación de particulares.**

b) Sin embargo, durante los 20 años subsecuentes a la expropiación petrolera, y aún y cuando subsistían diversas concesiones y permisos en el proceso productivo de dicha industria, **se llevaron a cabo reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la respectiva Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo, a fin de establecer que sería la Nación, a través de Petróleos Mexicanos, quien de manera exclusiva llevaría a cabo las actividades de exploración y explotación del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógeno líquidos, sólidos o gaseosos.** La razón de dicha determinación, como puede desprenderse tanto de la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a la ley secundaria, como de las consideraciones hechas por las dictaminadoras en la Cámara de Diputados a la reforma constitucional, tenían por objeto dar por terminado el debate que en su momento se suscitó, respecto a la participación de los particulares en las actividades de exploración y explotación del petróleo. Es decir, dejar insubsistente cualquier permiso o concesión en materia de exploración y explotación del petróleo, otorgada a los particulares.

En suma, válidamente se puede concluir que hay dos momentos importantes en la historia de la vida petrolera del país: el proceso de expropiación iniciado con el Decreto expedido por el General Lázaro Cárdenas, mismo que culminó con las reformas constitucionales y legales publicadas en el año de 1940. Y en segundo lugar, las reformas constitucionales y legales, publicadas en el año de 1960, en el que de manera definitiva se dejan insubsistentes cualquier permiso o concesión sobre la explotación y exploración del petróleo y de los hidrocarburos, por lo que Petróleos Mexicanos, de manera exclusiva debería llevar a cabo dichas actividades, pero permitiendo la participación de los particulares de los demás procesos productivos del petróleo.

Así, estos breves antecedentes legislativos, nos dan un bosquejo de las visiones que en cada momento histórico se tuvieron desde el Ejecutivo y el Legislativo, respecto a lo que debiera ser la ruta que se habría de seguir para detonar el desarrollo de la industria petrolera del país.

No pasa desapercibido para nuestro Grupo Parlamentario, otro antecedente legislativo, que por su contenido y alcance, cobró la mayor relevancia en la economía de nuestro país. Se trata de la incorporación del llamado

capítulo económico en nuestro texto constitucional, derivado de la iniciativa que en su momento envió el presidente Miguel de la Madrid, el 19 de enero de 1983 a la Cámara de Diputados, misma que proponía reformas a los artículos 16, 25, 26, 27, 28 y 73.

Dicha iniciativa tuvo como finalidad reservar para el Estado diversas actividades a las que denominó "estratégicas" y permitió la posibilidad de la participación del sector privado y social en otras actividades que el Estado consideró "prioritarias" para el desarrollo nacional. De la exposición de motivos de dicha iniciativa, puede desprenderse lo siguiente:

> *"Para llevar esos propósitos a la realidad se establecen y ordenan de manera explícita las atribuciones del Estado en materia económica, siempre referidas al interés general y limitadas, estas atribuciones, por la propia Constitución y las leyes. Con ello se afirma el principio de legalidad en la función rectora del Estado y se le hace consistente con los instrumentos de la política económica y de la estrategia de desarrollo nacional.*
>
> *En lo que concierne a la economía mixta mexicana se establece la concurrencia del sector público, del sector social y del privado a los propósitos generales del desarrollo nacional, incorporando a todas aquellas formas de actividad económica que contribuyen al desarrollo de la Nación.*
>
> *Para el sector público se establece que tendrá a su cargo exclusivo las áreas estratégicas que la Constitución especifica. Para fortalecer a la sociedad y lograr el mejor cumplimiento de los fines de los organismos descentralizados y empresas que se sitúan en las áreas estratégicas, se considera necesario que la ley defina formas de participación social en éstas, conservando el Estado en todo tiempo el control sobre la conducción y operación de las mismas. En las áreas prioritarias el sector público podrá participar por sí o conjuntamente con el sector social y privado de acuerdo con la ley para impulsadas y organizadas".*

No obstante lo anterior, la iniciativa de mérito no hizo explícitas las razones por las cuáles consideró llevar a cabo la clasificación de las áreas estratégicas y prioritarias, se limitó exclusivamente a realizar dicha diferencia, y reservarse para sí las actividades denominadas estratégicas. Así, la redacción al artículo 28 constitucional quedó aprobada de la siguiente manera:

> *"No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a que se refiere este precepto: Acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite, emisión de billetes por medio de un solo banco, organismo descentralizado del Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión*
>
> *Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del primer párrafo de este artículo la prestación del servicio público de banca y crédito. Este servicio será prestado exclusivamente por el Estado a través de instituciones, en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria, la que también determinará las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquellas en apoyo de las políticas de desarrollo nacional. El servicio público de banca y crédito no sería objeto de concesión a particulares".*

Dicha reforma constitucional, publicada el 3 de febrero de 1983, además de incorporar el capítulo económico al texto constitucional, reservó al Estado las actividades de banca y crédito, con motivo de la expropiación de la banca llevaba a cabo el año previo a dicha reforma. Sin embargo, con la reforma constitucional de 1990 se eliminó dicho precepto constitucional, permitiendo nuevamente la participación del sector privado en las actividades de banca y crédito.

Ya en el año de 1993, se reformó nuevamente el artículo 28 constitucional, para incorporar las áreas "prioritarias" dentro del texto constitucional, redacción que se mantiene hasta ahora en los siguientes términos:

> *"No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia".*

Así pues, a grandes rasgos, estas reformas constitucionales han marcado la línea a seguir por parte del Estado, respecto de las políticas que habrá de implementar para explotar los recursos naturales, particularmente en materia energética. Por lo que es importante no perder de vista, como ya se dijo, el valor histórico que han tenido estas reformas a nuestro máximo ordenamiento, pues han atendido a momentos muy particulares de la vida, social, política y económica de nuestro país.

Para Acción Nacional, la historia nos ha enseñado que México ha sido capaz de reinventarse, de fortalecer sus instituciones y, a través de la construcción de las mayorías democráticas, lograr cambios estructurales en el régimen de gobierno. Por ello, comprometidos con las luchas democráticas ganadas y con la convicción de que la ruta para alcanzar un verdadero desarrollo nacional radica en hacer posible una reforma energética de gran calado, es que proponemos reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, a fin de impulsar una economía de libre mercado y consecuentemente con las condiciones óptimas para la competencia, acotar los monopolios del Estado, asegurar y maximizar la renta petrolera a favor de la Nación, transformar al Estado en el diseñador y regulador de la política energética del país, atraer mayores inversiones, crear empleos bien remunerados y convertir a México en un país líder mundial en el fomento de la sustentabilidad energética y las energías limpias.

La sociedad mexicana ha esperado por muchos años una reforma como la que hoy planteamos, estamos ante un momento histórico y esta es la respuesta de Acción Nacional a los grandes reclamos sociales, estamos convencidos que una reforma en la que se privilegie el interés de la Nación sobre el de unos cuantos, nos permitirá contar con energías limpias y competitivas, así como explotar de manera eficiente y responsable los recursos con los que el país cuenta.

UNA REFORMA ENERGÉTICA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS

De acuerdo con el índice de competitividad internacional 2013, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.,(IMCO) México se encuentra en el lugar 32 de 46 países seleccionados, teniendo su mejor calificación en el año 2005 en donde se ubicó en el lugar 29[4].

El estudio referido indica que México ha registrado un ligero avance en los rubros de "Economía" y "Sociedad", pero ha tenido un retroceso en materia de "Gobierno". Entre los principales avances que ha habido de 2001 a 2011 se puede reconocer la estabilidad en los pasivos del gobierno los cuales se redujeron del 36 % en 2001 al 35% en 2011 del Producto Interno Bruto (PIB). La deuda externa se ha mantenido en un

[4]De acuerdo al Índice de Competitividad Internacional 2013, los primeros 10 lugares son ocupados por 1. Suiza, 2. Dinamarca, 3. Suecia, 4. Holanda, 5. Irlanda, 6. Reino Unido, 7. Bélgica, 8. Japón, 9. Australia y 10. Noruega.

25% entre los mismos años, mientras que el riesgo del sector bancario se redujo del 44 al 33% de 2001 a 2011.

No obstante lo anterior, señala el índice antes mencionado que ha habido grandes retrocesos en otras áreas; por ejemplo, se incrementó el costo de la nómina del gobierno de 12 al 16%, asimismo ha habido una caída en la inversión extranjera directa, mientras que el porcentaje de las fuentes de energía no contaminantes pasó del 7 al 6%, todo ello en el mismo período de 2001 a 2011.

Los datos señalados por dicho índice resultan más alarmantes cuando se hace referencia al sector energético. En este sentido, resulta conveniente señalar algunos datos comparativos a nivel internacional que nos permitan identificar en qué hemos fallado como Nación para ser más competitivos, atraer inversión, crear y mejorar los empleos y sobre todo, contar con fuentes de energía limpias y baratas para los mexicanos.

En primer término, es interesante hacer mención de lo que ha sucedido en nuestro vecino país del norte. Estados Unidos ha comenzado una nueva etapa de industrialización, particularmente en materia de gas natural. Sus importaciones de este producto se han disminuido considerablemente a partir del año 2000, como consecuencia del aprovechamiento extractivo por parte de empresas establecidas en los Estados Unidos. Así, de mantenerse la tendencia en la que se encuentra actualmente, se espera que para el año 2020 se convierta en exportador neto de gas natural.

Específicamente, cabe señalar que la producción de gas natural en los Estados Unidos aumenta 1.3% al año, lo que le permitirá superar su consumo interno para el año 2019, estimulando así las exportaciones netas de gas natural, mismas que crecerán a 3.6 billones de pies cúbicos para el año 2040[5].

Finalmente refiere el estudio de mérito que, gracias al gas natural, los Estados Unidos tendrán una mayor inversión en los sectores intensivos en energía como la metalurgia, la industria química y las manufacturas pesadas. Asimismo, la explotación del gas de Lutitas ya representa 600,000 empleos y 77,000 millones de dólares en valor agregado para los Estados Unidos. Así, se estima que los Estados Unidos podrían generar un millón de empleos manufactureros en los próximos años.

Por otro lado, diversos países como Noruega, Brasil, Colombia, Arabia Saudita e incluso Cuba, tienen esquemas en los que permiten la participación del sector privado en los diversos procesos de su industria petrolera, lo cual ha sido un elemento importante para detonar su competitividad. De lo anterior, es de destacar un comparativo elaborado por el IMCO, respecto de esos países, en el que se da cuenta de la participación del Estado y del sector privado en dichos procesos. Lo anterior, sirve para ejemplificar las condiciones que imperan en México actualmente respecto a la apertura de la industria petrolera y la inversión del sector privado:

Comparativo de la participación del sector privado en los procesos productivos petroleros[6]

		Noruega	Brasil	Colombia	Arabia Saudita	Cuba	México
Exploración y	**Concesiones + Asociaciones con terceros**	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**NO**

[5]U.S. Energy Information Administration.http://www.eia.gov/forecasts/aeo/source_natural_gas_all.cfm#netexporter
[6]Información del estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. "índice de competitividad internacional 2013".

	Empresa estatal con operaciones internacionales en *upstream*	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**		**NO**
Refinación, Petroquímica y Comercialización	**Asociación en *downstream***	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**NO**
	¿Participación privada o extranjera en refinación?	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**NO**
	Múltiples empresas y precios liberalizados en combustibles	**SÍ**	**SÍ**	**SÍ**	**NO**	**NO**	**NO**
	Empresa estatal con operaciones internacionales en *downstream*	**SÍ**	**SÍ**	**NO**	**SÍ**	**NO**	**SÍ (Deer Park Houston con Shell)**

De lo anterior, es de advertirse claramente que, a diferencia de otros países, México prácticamente ha cerrado las puertas a cualquier tipo de inversión del sector privado en la cadena productiva de los hidrocarburos, lo cual nos coloca en una situación de desventaja frente a los otros países competidores.

Esto es así, porque ni el Estado mexicano ni ningún otro cuentan con la capacidad económica para, por sí solos, para adquirir y desarrollar la tecnología que le permita la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas, o bien, para potencializar al máximo el uso del gas natural, del cual México tiene en abundancia.

Cabe hacer notar que los recursos que recibía Petróleos Mexicanos en 2001 eran del orden de 4800 millones de dólares, mientras que para 2013 la inversión fue de 26,000 millones de dólares. Dicha inversión equivale, para 2013, a 2.5 veces el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, 4.6 veces el presupuesto asignado al Programa Oportunidades o a 7.5 veces el presupuesto para seguridad pública.

En síntesis, se estima que son muchos los esfuerzos que se tienen que llevar a cabo no sólo para modernizar a Petróleos Mexicanos sino para lograr ser competitivos a nivel internacional. Es por ello, que la propuesta de Acción Nacional está justamente encaminada a detonar la competitividad del país, generar las condiciones necesarias para atraer tecnología e inversiones, pero sobre todo, que esto se refleje en el bienestar para las familias mexicanas.

Cabe recordar que de manera reciente el Constituyente Permanente aprobó reformas a nuestra ley suprema justamente tendientes a lograr dichos objetivos. Nos referimos a la reforma constitucional en materia de competitividad, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de junio de 2013.

Mediante dicha reforma al artículo 25 constitucional se estableció que el Estado deberá garantizar el desarrollo nacional mediante la competitividad (además de los elementos que ya contiene dicha disposición constitucional), a fin de que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Asimismo, se definió a la competitividad como el **conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.**

La competitividad del país no puede entenderse de manera aislada, ésta se mide en función a la productividad,

la cual permite a un país soportar salarios altos, una divisa fuerte y una rentabilidad atractiva del capital. Y con ello, un alto nivel de vida.

En la reforma constitucional en materia de competitividad, las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados, señalaron en las consideraciones respectivas, respecto de este tema lo siguiente: *"Lo que más importa no es la propiedad o las exportaciones o si las empresas son de propiedad nacional o extranjera, sino la naturaleza y la productividad de las actividades económicas que se desarrollan en un país determinado. Y las industrias puramente locales sí contribuyen a la competitividad porque su productividad no sólo fija el nivel de los salarios en cada sector, sino también tiene un impacto importante sobre el coste de la vida y el coste de hacer negocios en ese país.*

En ese orden de ideas, el concepto de "Competitividad" constituye un principio que requiere el país para alcanzar el desarrollo económico, a través de políticas públicas sustentadas en la competitividad, entendida ésta, como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión, fomentando el bienestar social a través de la generación de empleos".

Así, el Órgano Reformador de la Constitución, al aprobar la reforma de mérito, previó que el Estado mexicano mejoraría en el desempeño económico generaría la eficiencia del gobierno para permitir el desarrollo de negocios e infraestructura. Con ello, se obtendrían resultados sólidos con un futuro de crecimiento en la economía, lo que impactaría directamente a nuestra sociedad.

Por tales razones, es indispensable que el Estado mexicano implemente urgentemente una política industrial desde el punto de vista de la competitividad, que se traduzca en la creación de empresas con tecnología de punta, eficientes y con compromiso social y con el medio ambiente, al tiempo que se requiere que la industria ya establecida en México, transite hacia una economía más competitiva, que genere empleos bien remunerados y que permita al país contar con las herramientas necesarias para competir a nivel internacional en cualquier área productiva.

Carlos Elizondo Meyer-Serra ha advertido con claridad esta situación, identificando que uno de los mayores problemas que tenemos para ser competitivos es:

"…la ineficiencia de los monopolios de las empresas energéticas propiedad del gobierno, y de los propios bienes y servicios que el gobierno presta. Los costos son directos para el consumidor (tanto el doméstico como el empresario), e indirectos, cuando se hacen transferencias fiscales, para el causante. El caso extremo era Luz y Fuerza del Centro, que, costaba una fortuna al erario y nos daba un servicio caro y malo.
El consumidor no siente del todo el daño de las ineficacias de nuestras empresas públicas, ya que el gobierno le ha dado por subsidiar los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad para la mayoría de los hogares, ***lo cual lleva un costo fiscal que pagamos todos, pero que beneficia sobre todo a los más ricos, que consumen más estos combustibles.*** *El subsidio es sólo para el consumo doméstico: el sector industrial paga precios en electricidad superiores a los de sus competidores en otros países, incluido Estados Unidos.*
Los subsidios energéticos sumaron en 2008 más de 240,000 millones de pesos. Las ineficacias de nuestro sector eléctrico se calculan en casi 150,000 millones de pesos; las de Pemex no se saben, pero deben ser muy altas. Estos costos, que benefician a los que más tienen, son muy superiores a los casi 50,000 millones de pesos gastados en ese año en el programa gubernamental más favorable a los pobres: Oportunidades."

Ejemplifica lo anterior, que el subsidio de las gasolinas en el año 2012 fue de 222,751 millones de pesos. En lo que va del presente año se han ejercido cerca de 60,000 millones de pesos para el subsidio a consumidores de diesel y gasolina, según el nuevo cálculo contenido en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013, recientemente remitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública al Congreso de la Unión.

Debido a que el mayor consumo se encuentra entre la gente con más dinero, las personas con mayores

ingresos se benefician más del precio artificialmente bajo de la gasolina. La parte de la población más pobre está financiando este programa sin recibir casi ningún beneficio. Para ilustrar esto basta señalar que el 20 por ciento de la población con mayores ingresos consume el 50 por ciento de la gasolina. Así, lo ha señalado la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público: *la distribución de este apoyo entre las familias mexicanas es regresiva: 20% de la población de mayores ingresos absorbe más de 57% del apoyo.*

Lo anterior resulta contrastante con los recursos que son destinados al programa Oportunidades que para 2012 y 2013 se le destinaron los siguientes recursos:

	2012	**2013**
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	34,941.40 (millones de pesos)	36,177.68 (millones de pesos)

Como se observa, este subsidio abarcó en 2012 más de 6 veces los recursos destinados al programa oportunidades, y conforme al ajuste comunicado por Hacienda (91,206 millones), lo previsto para este año abarcará casi 3 veces dicho programa.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO

Se estima que para el 2020 la demanda mundial de energía aumentará un 50%. La exploración y desarrollo de nuevos yacimientos requerirá una inversión de 100,000 millones de dólares por año en toda la industria petrolera. Los países que dependen de la actividad petrolera tienen un plazo perentorio para aprovechar esta riqueza natural, dada la inevitable aparición de fuentes alternas de energía. Debido a su situación geográfica y a su disponibilidad de reservas, México tiene una oportunidad que se debe aprovechar durante los próximos 20 ó 30 años. Después de este lapso el petróleo tendrá un valor mucho más bajo.

De acuerdo al anuario estadístico 2013, publicado por Petróleos Mexicanos, los índices estadísticos presentados por la paraestatal reflejan los siguientes números:

Producción Mbd	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Hidrocarburos líquidos	3,585	3,789	3,825	3,760	3,683	3,471	3,157	2,971	2,954	2,937	2,913
Petróleo crudo	3,177	3,371	3,383	3,333	3,256	3,076	2,792	2,601	2,577	2,553	2,548
Condensados y líquidos del gas	408	418	442	426	427	395	366	370	377	384	365
Gas natural (MMpcd)	4,423	4,498	4,573	4,818	5,356	6,058	6,919	7,031	7,020	6,594	6,385
Proceso de crudo	1,245	1,286	1,303	1,284	1,284	1,270	1,261	1,295	1,184	1,167	1,199
Petrolíferos y gas licuado	1,481	1,556	1,587	1,554	1,546	1,512	1,491	1,525	1,416	1,379	1,405

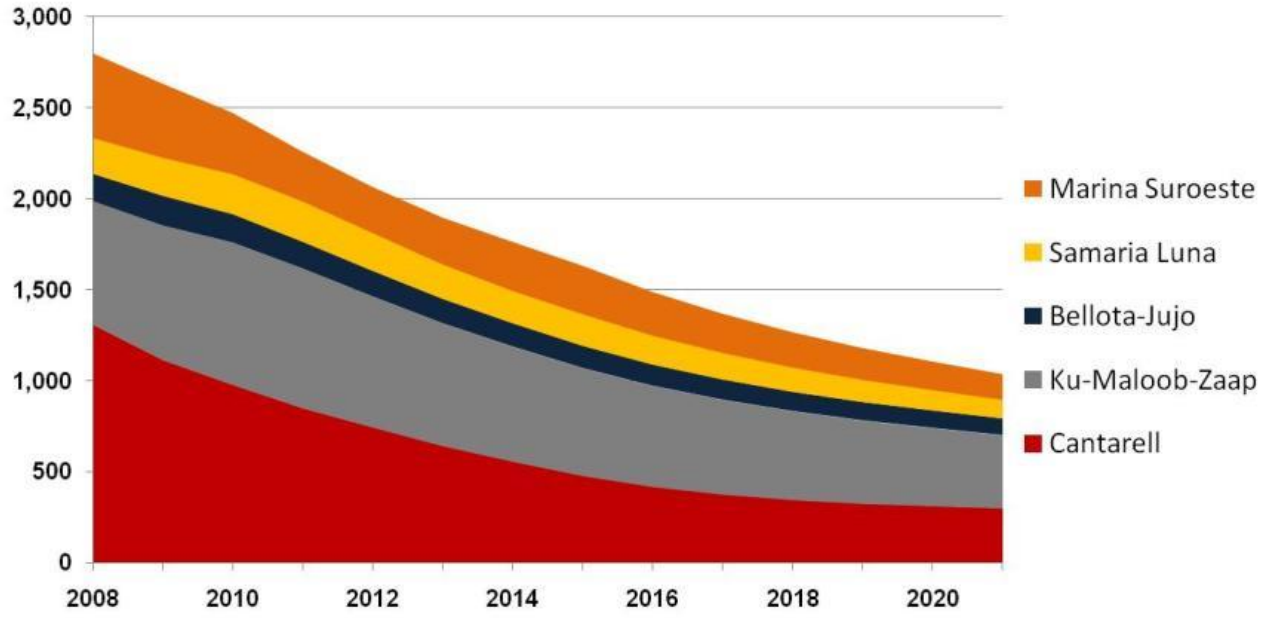
Petroquímicos (Mt)	9,880	10,298	10,731	10,603	10,961	11,757	11,973	11,956	13,192	12,384	10,673
Naftas (Mt)	3,243	3,347	3,486	3,402	3,543	3,273	2,884	2,931	3,045	3,163	2,808

La anterior tabla nos muestra la tendencia de Petróleos Mexicanos en los últimos 10 años: una caída en la producción de prácticamente todas las actividades operativas de la paraestatal. Lo anterior puede tener diversas justificaciones, entre ellas, el agotamiento de los recursos naturales con los que se cuenta, la falta de inversión en diversas áreas de producción de PEMEX, la falta de tecnología y la falta de exploración y explotación en lugares en los que el estado mexicano no cuenta con las posibilidades tecnológicas y de inversión requeridas.

En cualquier caso, lo que es claro es la urgente necesidad de mayor inversión en el sector energético del país, particularmente en materia de petróleo y de hidrocarburos pues, de continuar con esta tendencia para el año 2020, las reservas de hidrocarburos se encontrarán en una situación crítica, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:

DECLINACIÓN EN LA PRODUCCIÓN CON RESPECTO A 2008

(Miles de barriles diarios)



Activos	2012	2018	2021

Cantarell	565	964	1,010
Ku-Maloob-Zaap	0	189	295
Resto	212	380	492
Total	**777**	**1,533**	**1,797**

En lo que respecta a las reservas probadas, se observa que 83% de éstas se encuentran en campos en franca declinación o cerca de alcanzar su punto inicial de declinación. Esto se ha traducido en la caída en la producción de crudo ya mencionada. La única región que no presentará declinación en el mediano plazo es Chicontepec, pero ello es debido a que se trata de un proyecto en etapa inicial. En términos de producción de crudo, Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Samaria Luna, Marina Suroeste y Bellota Jujo aportaron en 2008 el 92% de la producción total. La trayectoria de declinación de estos activos indica la relevancia y urgencia de buscar proyectos alternativos que permitan sostener los niveles de producción actuales. Para 2012 la producción de estas cuencas disminuyó en cerca de 800 mil barriles diarios; para 2018, se reducirá en 1.5 millones de barriles diarios; y para 2021, en 1.8 millones de barriles diarios. Esto, ya considerando incrementos en las tasas de recuperación.

En lo que se refiere a aguas profundas, de acuerdo a datos de Petróleos Mexicanos, por el tiempo de maduración de dichos proyectos, PEMEX requiere iniciar a la brevedad el desarrollo de esta región a gran escala para poder garantizar en los próximos años al menos la misma producción de hidrocarburos con que actualmente cuenta y sobre todo incrementarla para financiar el desarrollo acelerado del país.

En comparación con la explotación de yacimientos convencionales, el desarrollo de campos en aguas profundas impone dos grandes retos:

- Adquirir el conocimiento para poder administrar y operar las nuevas tecnologías que se emplean en este tipo de yacimientos; y
- Multiplicar la capacidad de ejecución.

En lo que respecta a la capacidad de ejecución y al reto tecnológico, el desafío no es menor. Entre 2004 y 2007, PEMEX Exploración y Producción perforó seis pozos en tirantes de agua superiores a 500 metros. De éstos, sólo uno tiene reservas suficientes para su operación comercial, así como para iniciar el desarrollo del área donde se localiza. En los próximos años, será necesario llegar a profundidades de hasta 3,000 metros.

En función de lo anterior resulta claro que para alcanzar los resultados necesarios en el mediano plazo es necesario multiplicar la capacidad de ejecución de PEMEX Exploración y Producción.

En México, se estima que más de 50% de los recursos prospectivos del país se localizan en la cuenca del Golfo de México Profundo, lo que equivale a un potencial a recuperar de 29500 de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce), en una extensión de más de 575,000 kilómetros cuadrados. Este volumen de hidrocarburos es superior a la reserva original total de Cantarell. Con base en los estudios geológicos y geofísicos realizados hasta la fecha, y de disponerse de la tecnología, el entrenamiento técnico, la experiencia operativa, los recursos financieros requeridos y una mayor capacidad de ejecución, se anticipa

que podrían identificarse ahí campos con volúmenes importantes de hidrocarburos, sustancialmente mayores a los que se estiman en tierra y en aguas someras.

El área de aguas profundas presenta características distintas a las de otras áreas donde PEMEX ha realizado actividades de exploración y producción: tirantes de agua superiores a 500 metros; variedad de estructuras geológicas complejas; inversión de alto riesgo en un área con conocimiento incipiente; desarrollo y explotación con altos costos de descubrimiento, desarrollo y producción.

A nivel internacional, la posibilidad de encontrar yacimientos de fácil acceso, baja complejidad técnica y magnitud relevante, está prácticamente agotada. Por ello, las perspectivas de producción de hidrocarburos se orientan en buena medida a los yacimientos ubicados en aguas profundas. De hecho, mientras que hace 10 años, la contribución de la producción en aguas profundas no llegaba a 1% de la producción mundial total, actualmente es cercana a 8%.

Esta tendencia internacional ha llegado a las fronteras de México. En aguas profundas del Golfo de México pueden encontrarse recursos prospectivos localizados en yacimientos transfronterizos (estructuras geológicas con hidrocarburos, comunicadas hidráulicamente en dos o más países que comparten fronteras). Se han realizado diversos estudios que indican posibilidades reales de que alguna de estas estructuras sea un campo petrolero comunicado a través de la frontera.

Considerando el reto que implica acceder a yacimientos en aguas profundas para mantener el nivel actual de producción y los tiempos de maduración de los proyectos en esta zona, es necesario que PEMEX pueda hacerse acompañar de otras empresas al desarrollar diversas actividades propias de su giro, bajo mecanismos eficientes que le permitan obtener la mejor tecnología y conduzcan a maximizar la renta petrolera para el país.

Es por ello, que como parte de las propuestas que Acción Nacional presenta ante el Congreso, está la relativa a una mayor inversión en el sector petrolero a través del sector privado, allegarnos de tecnología de punta y explorar en aguas profundas, que como ya se dijo, por su complejidad se requiere de la inversión o coinversión en proyectos que garantice eficiencia y sustentabilidad energética en el largo plazo.

GAS NATURAL DE LUTITAS (SHALE GAS)

Durante los últimos años, en el mercado de gas natural de fuentes convencionales, se ha desarrollado la producción de gas natural no convencional o gas de Lutitas (shale gas), el cual se produce con tecnología diferente a la del petróleo y gas natural convencional y que ha permitido que el precio del gas natural haya disminuido significativamente en América del Norte.

Así, de acuerdo a un artículo publicado por la revista Forbes México, los precios relativos del gas natural en el mercado internacional se han regionalizado en forma importante, destacando el altamente competitivo precio en la región Norteamérica.

En el mercado de referencia para la región, el Henry Hub de Estados Unidos, el precio del gas natural por millón de BTU (mmbtu) es de alrededor de 3.5 dólares, mientras que en la Unión Europea el precio es de aproximadamente 12 dólares por mmbtu, y en Asia alcanza hasta los 21 dólares por mmbtu.

Según dicho artículo nuestro país cuenta con abundantes reservas de gas natural convencional que rondan el orden de los 61 millones de millones de pies cúbicos. Además de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, cuenta con las terceras reservas más grandes en el mundo de gas de lutitas que aún no se han explotado, con aproximadamente más de 600 millones de millones de pies cúbicos. Sin embargo, existen varias razones que han impedido explotar las reservas con las que se cuenta, principalmente relacionadas con

la falta de inversión para producir el gas natural convencional asociado al petróleo o el no convencional (de Lutitas) que requiere altos montos de inversión.

Además de esta falta de explotación de las reservas existentes, la falta de capacidad de transporte, almacenamiento y distribución vía ductos impide acceder a la abundante oferta y a los precios históricamente bajos que tenemos ahora en la región.

A pesar de que se cuenta con un marco jurídico que permite la inversión privada en la comercialización y transporte de gas natural para asegurar el abasto del combustible, durante los últimos años hubo una falta de visión a largo plazo, así como de inversión estratégica en la creación de infraestructura de transporte.

El resultado ha sido la saturación del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), que opera muy cerca del límite de su capacidad, con niveles de utilización de más de 85%, mismos que por seguridad son los niveles máximos permisibles. Esto implica que no podemos importar todo el gas natural que requerimos para abastecer a la demanda nacional.

De esta forma, a pesar de que existen reservas de gas natural que se podrían explotar, que en la región existe una abundancia sin igual del recurso y que contamos con un marco jurídico que permite la inversión en infraestructura para importar el combustible, nuestro país enfrenta una escasez crónica de dicho hidrocarburo que ha puesto en jaque a la industria.

Así las cosas, para Acción Nacional, se requiere una reforma energética que detone el desarrollo no sólo de gas natural sino del no convencional, pues en otros países se está aprovechando al máximo los recursos naturales con los que cuentan, por lo que en México hace falta impulsar el aprovechamiento de nuestras reservas, así como ampliar la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución del combustible para la industria nacional.

Es por ello, que resulta relevante que contemos con mayor inversión e infraestructura, sobre todo en aquellos lugares en donde se sabe hay amplios campos de gas no convencional. Actualmente México se encuentra dentro de los principales países que cuentan con ese valioso recurso natural, sin que hasta ahora haya una inversión en ese sector.

Hay un reto por delante en esta materia, particularmente ante el constante descenso de las reservas energéticas de México, las reservas en gas y aceites de lutitas pudieran compensar las carencias del país, pero para ello, se requiere de la actualización de nuestro marco jurídico, a fin de permitir la inversión privada en el desarrollo de nuevas tecnologías para la exploración y explotación de gas no convencional en México. La adecuación de nuestra legislación no puede esperar más, pues la producción de petróleo, gas y gasolina en México no ha crecido desde hace 15 años. Actualmente producimos 400 mil barriles diarios de gasolina y es necesario importar una gran cantidad de este combustible pues el consumo duplica la oferta.

Finalmente, la extracción del gas de lutitas supone, como se ha dicho, una gran oportunidad de crecimiento para nuestro país, sin embargo, ello no debe obviar en modo alguno, la necesidad de que en dicho proceso se observen las medidas ambientes más eficientes tendientes a minimizar los riesgos y daños al medio ambiente y a las personas, particularmente a los mantos acuíferos, lo anterior como consecuencia de los métodos y químicos utilizados para ello.

Resulta como referente obligado el cuidado que sobre el medio ambiente vienen implementando naciones más avanzadas en el desarrollo de esta fuente de energía.

Es por lo anterior que la legislación deberá establecer con claridad, los requisitos y condiciones generales que en materia ambiental deberán observar los operadores para la extracción del gas de lutitas, facultando a su vez

a la dependencia competente a emitir las disposiciones que resulten necesarias y adecuadas tendientes a preservar el medio ambiente, al cuidado de las personas así como los recursos hídricos del país.

SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL

De manera análoga a lo ocurrido en la industria petrolera, la industria eléctrica nacional ha sido objeto de diversos cambios en su estructura a lo largo del tiempo. En este proceso se pueden identificar tres etapas:

La primera comprende desde las primeras inversiones en electricidad en el último cuarto del siglo XIX hasta la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937. Esta etapa se desarrolló bajo un modelo de libre competencia que facilitó la industrialización incipiente del país con la instalación de diversas empresas privadas regionales, extranjeras principalmente, que hacia 1930 conformaban el 70 por ciento de la capacidad instalada del país. Debido a que dichas empresas no llegaban a todo el territorio, el papel de la CFE consistió básicamente en la ampliación de la cobertura eléctrica, especialmente en aquellas zonas más alejadas.

La segunda corresponde a la expansión de CFE y la integración del Sistema Eléctrico Nacional como producto de la nacionalización de 1960. Esta etapa se desarrolla bajo un modelo de un monopolio verticalmente integrado que, además de buscar expandir de manera ambiciosa la cobertura eléctrica, homologa las diferencias regionales de voltajes y frecuencias hasta alcanzar la unificación e interconexión del sistema en 1976. Bajo esta estructura la prestación del servicio público de energía eléctrica fue una actividad exclusiva del Estado a través de CFE y Luz y Fuerza del Centro, que opera como distribuidor en la zona central del país.

En esta etapa CFE se consolida como una empresa que lleva a cabo todas las etapas del proceso de los sistemas eléctricos: generación, despacho, transmisión y distribución de electricidad. Ello se justificaba debido a las características físicas y tecnológicas de la industria de entonces, que presentaba fuertes economías de escala y que, para lograr una cobertura nacional del servicio, requería de inversiones elevadas con periodos de maduración de muy largo plazo y muy baja rentabilidad que difícilmente hubiese podido efectuar la iniciativa privada en ese momento.

La tercera etapa comienza cuando el modelo de monopolio verticalmente integrado empieza a mostrar señales de agotamiento. Por una parte, el objetivo de lograr una amplia cobertura del servicio ya se había alcanzado y, por otra, el cambio tecnológico abatía las economías de escala en la generación y permitía la coordinación entre esta actividad y las correspondientes al despacho y entrega de la energía eléctrica en los lugares de consumo. Adicionalmente, el Estado empezó a enfrentar restricciones presupuestales importantes que justificaban la complementariedad de inversiones por parte del sector privado.

Así, en 1992 se efectuaron diversas reformas y adiciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la que se definieron diversas modalidades de generación que *no se consideran servicio público*, como son la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; la producción independiente de energía para venta a Comisión Federal de Electricidad (CFE); la exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción, así como la importación destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios. Ello dio lugar a las modificaciones en el Reglamento de dicha ley en 1993 con objeto de regular las nuevas modalidades de generación, las cuales podrían ser realizadas por particulares, siempre y cuando cumplieran las siguientes condiciones: que la venta de energía fuera exclusiva para CFE; que se satisficieran las necesidades de energía eléctrica de una persona física o moral, de copropietarios de instalaciones eléctricas o una sociedad de autoabastecimiento; o se trate de exportación o importación de energía.

Si bien las reformas de 1992 permitieron enfrentar las apremiantes necesidades de inversión, indujeron una

mayor eficiencia en el desempeño del sector eléctrico nacional y dieron alternativas competitivas de generación para la industria a través del autoabastecimiento, el modelo es lento y poco flexible para responder a los retos que implica un mayor crecimiento de la demanda, no permite aprovechar la eficiencia que podría aportar una mayor competencia en la generación y comercialización, y tampoco evita los conflictos de interés que tiene la CFE como generador, operador del sistema y prestador de servicios de conducción eléctrica.

De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados[7], en el que se analiza la situación actual del sistema eléctrico nacional en comparación con otros países, se destaca que los países más desarrollados consumen una cantidad de electricidad mayor debido a que tienen un aparato industrial más grande y su población cuenta con un mayor número de satisfactores y utensilios domésticos que requieren de electricidad para funcionar. Por ejemplo, Estados Unidos presentó en 2006 un consumo anual per cápita de electricidad de 13,564 kilowatts hora (kWh) de electricidad, mientras que países como España e Inglaterra mantienen consumos de 6206 y 6185 kWh respectivamente. Por su parte, los países menos desarrollados presentan un menor consumo de electricidad; en América Latina, por ejemplo, Chile presenta un consumo per cápita de 3207 kWh, mientras que el mismo indicador para el caso de México es de 2000kWh.

Según dicho estudio, la existencia y la calidad de la infraestructura de la economía es un elemento importante en la toma de decisiones de inversión. La producción y el consumo de electricidad son indicadores básicos del tamaño y el nivel de desarrollo de una economía, por lo que el incremento en su producción para satisfacer una demanda de zonas urbanas cada vez más grandes y del sector industrial, sin incrementar los costos sociales, económicos y ambientales, es uno de los retos más importantes para las economías en desarrollo.

En México, la capacidad instalada del sector paraestatal disminuyó su ritmo de crecimiento de 5.6% a tasa media anual en el periodo de 1980-1990 a 3.8% entre 1990 y 2000 y, aunque se incrementó 4.2% en el periodo de 2000-2008, permaneció en niveles moderados de crecimiento acorde a su evolución. Por su parte, la capacidad instalada del sector privado muestra el comportamiento contrario: es decir, después de haber registrado tasas medias de crecimiento de 2.9 y 2.5 en los periodos 1980-1990 y 1990-2000 respectivamente, la capacidad instalada en el periodo 2000-2008 tuvo un crecimiento medio anual de 10.3%.

En su conjunto, la evolución de la capacidad instalada del sector eléctrico a nivel nacional ha respondido al crecimiento de la demanda de energía eléctrica. No obstante, es importante señalar que si el crecimiento económico del país hubiera sido mayor, la demanda eléctrica habría sido muy superior y las inversiones actuales no habrían sido suficientes para satisfacerla.

Por otra parte, un gran problema del sector eléctrico nacional es la ineficiencia de CFE, sobre todo a nivel de la distribución. Las pérdidas promedio que tiene varían entre el 16 y el 18% y en algunas zonas del país son cercanas al 30%. Compárese estos valores con los de Estados Unidos que llegan apenas al 6.0 por ciento de su producción. Lo anterior, así como los elevados costos administrativos en su operación, es producto de la falta de incentivos y las presiones políticas que tiene una paraestatal que no opera como una verdadera empresa.

Tomando en cuenta los anteriores problemas y los enormes retos para satisfacer de manera eficiente el crecimiento de la demanda en los próximos años, Acción Nacional presenta, como parte de una reforma energética integral, una propuesta que fortalece y da sentido al sector eléctrico nacional, a través de una mayor competencia en la generación y comercialización de la electricidad, así como de esquemas que

[7]Estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas CEFP, 2009, consultable en la página de Internet de dicho centro: www.cefp.gob.mx

redunden en mejorar nuestras instituciones, particularmente a la CFE, dotándola de herramientas útiles para hacerla competitiva, sin soslayar la participación de inversión privada que atienda de manera eficaz las necesidades de la población.

LA REFORMA ENERGÉTICA A LA LUZ DEL PACTO POR MÉXICO

El Partido Acción Nacional, convencido de que los cambios estructurales que México requiere, no pueden ser objeto de un capricho personal, ni de visiones que pretendan favorecer sólo a unos cuantos, propone al Congreso de la Unión una reforma constitucional que marcará un antes y un después en la vida económica de México, particularmente porque estamos convencidos que el desarrollo de la industria petrolera en nuestro país requiere un nuevo impulso, que lo convierta en el motor del desarrollo nacional y que asegure a las futuras generaciones de las condiciones mínimas para acceder a fuentes de energía limpias, eficientes, sustentables y competitivas a favor del ciudadano.

Por ello, conscientes de que una reforma de esta envergadura requiere del consenso de todas las fuerzas políticas del país, el pasado mes de diciembre de 2012, los tres principales partidos políticos: PAN, PRI y PRD, firmamos el "Pacto por México", en el que se establecieron 95 compromisos y un calendario de trabajo para concretar éstos.

Este Pacto Nacional comprometió al gobierno y a las principales fuerzas políticas dispuestas a impulsar un conjunto de iniciativas y reformas para realizar acciones efectivas para que nuestro país mejore. Se acordó que este Pacto se formalizaría con los puntos coincidentes de las diversas visiones políticas de México, a fin de construir un espacio común para realizar los cambios que el país necesita y que ninguna fuerza política puede llevar a cabo por sí sola.

Con dicho Pacto se sentaron las bases de un nuevo acuerdo político, económico y social para impulsar el crecimiento económico que genere los empleos de calidad que demandan los mexicanos y construir una sociedad de derechos que ponga fin a las prácticas clientelares, ampliando los derechos y las libertades con transversalidad y perspectiva de género, así como materializar los que ya están consagrados en la Constitución para generar bienestar para toda la población, disminuir la pobreza y la desigualdad social.

El Pacto por México se sentó sobre la base de cinco acuerdos:

1. Sociedad de Derechos y Libertades.
2. Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad.
3. Seguridad y Justicia.
4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
5. Gobernabilidad Democrática.

En lo que toca a los acuerdos para el Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad, se estableció como compromiso realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo, lo anterior, a fin de impulsar una reforma que convierta a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. Por tal motivo, la reforma energética se sustentaría en los siguientes principios:

En el área de Petróleo y Gas se realizarán las siguientes acciones:

- Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación, por lo que se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Petróleos Mexicanos como empresa pública. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de

la producción de Hidrocarburos. (Compromiso 54)

PEMEX como empresa pública de carácter productivo.

- Se realizarán las reformas necesarias, tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales, como en el del sector energético y fiscal para transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial. Para ello, será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa productiva de su importancia. (Compromiso 55).

Multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos.

- Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano. (Compromiso 56)

Competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.

- Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de PEMEX. (Compromiso 57)

Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

- Se reformarán las leyes reglamentarias para ampliar las facultades y fortalecer al Órgano Regulador, es decir, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, e incluir obligaciones que permitan someter a PEMEX a las exigencias de eficiencia y transparencia que enfrentan las empresas petroleras del mundo. (Compromiso 58)

PEMEX como promotor de una cadena de proveedores nacionales.

- Se convertirá a PEMEX en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes. (Compromiso 59)

PEMEX como eje de la lucha contra el cambio climático.

- Se hará de PEMEX uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía. (Compromiso 60)

Derivado de lo anterior y comprometidos con impulsar las reformas que asumimos las principales fuerzas políticas del país, el Partido Acción Nacional, propone los siguientes cambios constitucionales que permitirán concretar los compromisos asumidos en el Pacto por México:

COMPETITIVIDAD EN EL SÉCTOR PETROLERO

Mucho se ha hablado acerca de la necesidad de dotar a Petróleos Mexicanos de mejores mecanismos financieros que le permitan desarrollar al máximo sus capacidades productivas, conviertiéndola en el detonante económico del país que maximice la renta petrolera y asegure un mejor futuro energético para las nuevas generaciones. No obstante que PEMEX estaba llamada a consolidarse como una empresa líder a nivel

mundial en los procesos productivos del petróleo y sus hidrocarburos, lamentablemente, el esquema fiscal al que está sujeta la paraestatal no le ha permitido desarrollar al máximo las capacidad con las que cuenta, al tiempo que su pasivo laboral y la falta de inversión que se requiere para modernizar sus instalaciones ocasionará en poco tiempo que dicha empresa requiera un rescate financiero.

Muchas son las causas que pudieran atribuirse a que Petróleos Mexicanos se encuentre en la situación actual; basta con señalar por ahora que la enorme dependencia del Estado mexicano a los ingresos petroleros no le han permitido detonar esquemas de inversión y coinversión en zonas estratégicas de exploración y explotación de petróleo y de hidrocarburos, y que le hace falta una regulación legislativa adecuada que le permita actuar bajo un verdadero esquema de gobierno corporativo, que tenga la posibilidad de determinar los mejores esquemas para invertir, extraer, producir y comercializar el petróleo, los hidrocarburos y sus derivados.

Es necesario señalar que aunque Pemex detenta un monopolio legal en los procesos de exploración y extracción del petróleo y sus hidrocarburos, el petróleo así como todos los recursos naturales, son propiedad originaria de la Nación, es decir, de todos los mexicanos, no de una empresa en particular. Esta aclaración es conveniente, pues en muchas ocasiones se piensa equivocadamente que el operador único del Estado es el que detenta la propiedad original de los mismos.

Es así, que la reforma que propone Acción Nacional propone por un lado, dotar a PEMEX de todas las características necesarias para que se convierta en una verdadera empresa con un gobierno corporativo eficiente, que teniendo por objeto maximizar la generación de valor a través de la exploración y producción de hidrocarburos, cuente con la libertad de determinar cuáles son los mejores esquemas de inversión, coinversión y desarrollo de tecnología. Al mismo tiempo, sin embargo, introduce esquemas de competencia en estas actividades a través de otros operadores, ya sean nacionales o extranjeros, lo que permitirá también el desarrollo de nuevas tecnologías, inversión en territorio nacional, generación de empleos bien remunerados y detonar la industria petrolera nacional. Así, la concurrencia de operadores estatales y privados, nacionales y extranjeros, junto con un adecuado régimen fiscal, garantizarán la maximización de la renta petrolera en beneficio de todos los mexicanos.

Una reforma de esta magnitud requiere garantizar que las reservas del petróleo y los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas son propiedad de la Nación, por lo que su registro corresponderá al Estado a través del Fondo Mexicano del Petróleo. Por otro lado, PEMEX y los demás operadores deberán pagar los derechos por petróleo e hidrocarburos extraídos a este mismo fondo que será el encargado de su administración. Es decir, serán propietarios del petróleo y los hidrocarburos a partir del pago de los derechos en boca de pozo en términos de la legislación correspondiente. En su caso, el Fondo Mexicano del Petróleo podrá realizar la correspondiente comercialización del hidrocarburo y el operador recibirá la parte que le corresponda. El monto de los derechos a pagar dependerá del riesgo, los precios del petróleo, el tipo de yacimiento y recursos que contenga, así como las necesidades de inversión, entre otros.

Es por ello que se propone reformar el sexto párrafo del artículo 27 constitucional para señalar que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación por conducto de los operadores que realicen las actividades de exploración y producción del petróleo y los hidrocarburos. Por lo que se elimina del texto constitucional la prohibición de que en el caso del petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, que como se vio en los antecedentes legislativos del artículo 27 constitucional fue incorporada en la reforma de 1960.

En el caso de los minerales radioactivos y de la energía nuclear permanecerá la restricción vigente, que establece que el Estado no otorgará ningún tipo de concesión ni de permiso, reservándose estas materias para

su explotación exclusiva, por tratarse de elementos que pondrían en riesgo la seguridad nacional. Así, para mayor claridad de las reformas que se proponen sobre este rubro, se adjunta el siguiente cuadro comparativo para identificar los cambios propuestos a los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 constitucional:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los ~~carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.~~ Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.	En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento **sustentable** de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones**.** Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los **hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación por conducto de los operadores que realicen las actividades de exploración y producción conforme al artículo 28 de esta Constitución. Asimismo, para asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, el Estado desarrollará estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.**
Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la	**Tratándose de minerales radioactivos, no se podrán otorgar concesiones ni contratos,** corresponde a la Nación el aprovechamiento de

regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.	los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR ELÉCTRICO

Como se ha señalado, uno de los elementos de la reforma propuesta por Acción Nacional tiene que ver con la modernización y competitividad del sector eléctrico.

México ha firmado numerosos tratados de libre comercio, lo que abre oportunidades para que la planta productiva establecida en el país pueda participar en nuevos mercados. Sin embargo, estos mismos tratados obligan a la competitividad de la industria. Por esta razón, es fundamental que la economía cuente con las mismas ventajas que ofrecen nuestros competidores y entre ellas se debe considerar la oportunidad que tiene la industria para escoger en condiciones de competencia su proveedor de electricidad.

Por otra parte, de acuerdo con datos de la prospectiva del sector eléctrico 2012 a 2026 de la Secretaría de Energía, el crecimiento inercial esperado de la demanda eléctrica ronda el 4%. Dicho crecimiento implica adiciones de capacidad eléctrica superiores a los 40,000 MW en los próximos dos sexenios. Si adicionalmente se toman en cuenta las metas que establece la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la nueva capacidad necesaria puede llegar a los 65,000 MW.

Independientemente del costo de oportunidad que tiene para el Estado hacer inversiones en el sector eléctrico, estas adiciones de capacidad no pueden ser realizadas de la manera más eficiente bajo el modelo actual de industria ni con el esquema tarifario vigente, mismo que, además de no ser competitivo, afecta las finanzas de la CFE. Al respecto, es importante señalar que en los últimos años los ingresos tarifarios vigentes no han permitido compensar los subsidios implícitos en la tarifa con el pago del aprovechamiento que se tiene que hacer a la Secretaría de Hacienda. Aunado al mayor problema que implica el pasivo laboral, el resultado es que el patrimonio de CFE se ha reducido de 449,894 millones de pesos en 2007 a 109,144 millones de pesos en 2012.

Lo anterior es un claro indicativo de la reestructura y reorganización que requiere llevarse a cabo en el sector eléctrico, donde es necesario que los recursos económicos se inviertan de manera eficiente, que la CFE opere como una verdadera empresa en condiciones de competencia justa, que las tarifas reflejen los costos eficientes de la prestación del servicio y los subsidios se otorguen a la demanda. Todo ello, además, garantizando que el país cumple con las metas que se impuesto en materia de generación limpia y sustentable.

Ante ello, se propone llevar una reforma constitucional que elimine las restricciones vigentes a la competencia y, posteriormente, una reforma legal que lleve a cabo la separación de las actividades de generación, despacho, transmisión y distribución de energía eléctrica, a fin de lograr dicha competencia de manera plena en generación y comercialización. Estas reformas deberán de ir acompañadas en un nuevo modelo de gestión de negocios y administración del sector eléctrico. Así, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se deberá transformar en un Operador Independiente del Sistema y del Mercado propiedad del Estado. La red de transmisión de CFE estaría a cargo de una filial con separación legal, contable y operativa, y la expansión podría ser efectuada por privados. Finalmente, la distribución también se separaría regionalmente bajo reglas análogas a la transmisión.

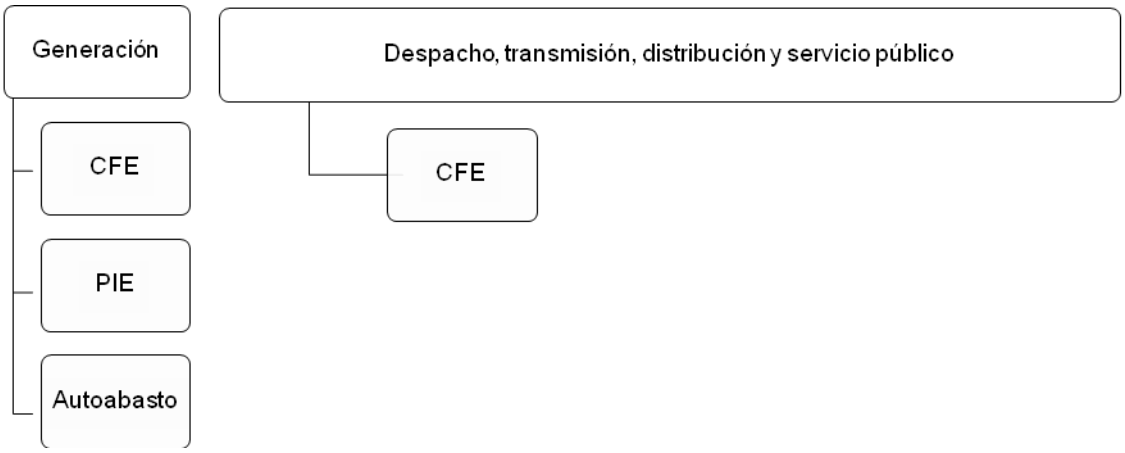
En la reforma de mérito, la Secretaría de Energía será la responsable de la política y la planificación del

sector eléctrico, misma que tomará como base las recomendaciones del Operador Independiente del Sistema y la Comisión Reguladora de Energía. Esta última entidad regulará la transmisión y la distribución (tarifas, condiciones contractuales, calidad del servicio) y vigilará la competencia en generación (a través de permisos y reglas de mercado), sujetando en su caso a CFE a una regulación asimétrica. A su vez, CFE operaría como una verdadera empresa que estando sujeta a competencia debería contar con autonomía de gestión y flexibilidad de colocación accionaria.

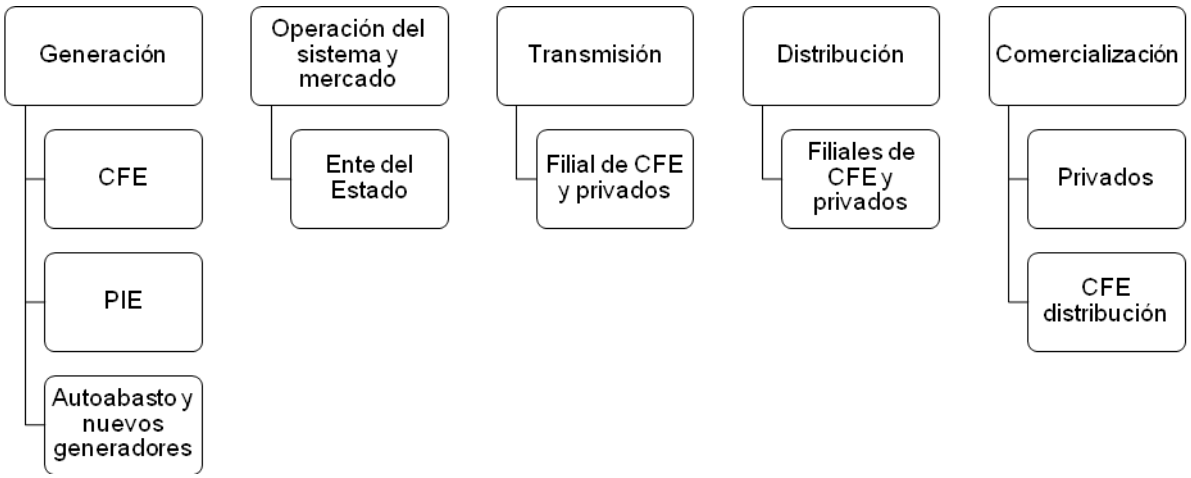
Por último, se propone que el Ejecutivo Federal proponga al Congreso de la Unión un programa de substitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos.

Para mayor claridad de los procesos que actualmente están a cargo de la CFE y en los que se estaría permitiendo la inversión privada, sirven los siguientes esquemas:

ESTRUCTURA ACTUAL DEL SECTOR



NUEVA ESTRUCTURA DEL SECTOR



Para lograr lo anterior, es indispensable la desintegración horizontal de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el entendido, como se ha mencionado, que el Estado dictaría las políticas en materia energética y tendría su cargo el operador del sistema eléctrico nacional.

Así, la reforma constitucional propuesta propone reformar la última parte del párrafo sexto del artículo 27 constitucional que actualmente señala:

> *"Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".*

La reforma que Acción Nacional propone está encaminada a eliminar dicha restricción, para que sea a través de la legislación secundaria en donde se establezcan las modalidades de la participación del sector privado. Para ello, se requerirá la expedición de una ley orgánica de la Comisión Federal de Electricidad, que reorganice las funciones administrativas y corporativas de dicha empresa. Además se deberá expedir una nueva ley para el sector eléctrico que considere la participación de nuevos operadores en la generación de energía eléctrica y su comercialización en condiciones de competencia efectiva, el papel que jugará el nuevo operador del sistema y del mercado, así como las distintas filiales de CFE que, bajo condiciones de separación operativa efectiva, lleven a cabo las actividades de generación, transmisión y distribución.

Finalmente, al igual que Petróleos Mexicanos, se insiste que la Comisión Federal de Electricidad seguirá siendo propiedad del Estado, contará con autonomía de gestión, podrá determinar su mejor organización dentro del nuevo marco legal y no será parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá enviar a la Cámara de Diputados la propuesta del techo financiero para dichas paraestatales (PEMEX y CFE), así como el nivel de capitalización al que ambas se sujetarán.

Para mayor claridad de la reforma propuesta, se anexa el siguiente cuadro comparativo al párrafo sexto del artículo 27 constitucional que prevé tanto la reforma en materia de petróleo como de electricidad:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los ~~carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.~~	En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento **sustentable** de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones**.** Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los **hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación por conducto de los operadores que realicen las actividades de exploración y producción conforme al artículo 28 de esta Constitución. Asimismo, para asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, el Estado desarrollará estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.**

NUEVO DISEÑO INSTITUCIONAL EN MATERIA ENERGÉTICA

A. FONDO MEXICANO EL PETRÓLEO

Se propone la creación de un órgano constitucionalmente autónomo denominado Fondo Mexicano del

Petróleo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tenga por objeto la administración de la renta petrolera y conseguir, a través de las facultades que se le otorgarán mediante la ley que el Congreso de la Unión expida, su máximo beneficio. Dicho Fondo estará conformado por un Presidente y una Junta de Gobierno, designados a propuesta del Ejecutivo Federal, con ratificación del Senado.

Se prevé que sea a través de la ley que expida el Congreso en donde se determine el número de integrantes de la Junta de Gobierno del referido Fondo, así como su estructura orgánica.

La creación de un Fondo como el que se propone ha tenido éxito en otros países, que les ha permitido colocarse como líderes de la industria petrolera a nivel mundial. Quizá el caso más emblemático es el de la empresa PETORO en Noruega.

El modelo noruego de explotación de hidrocarburos cuenta con una estructura de libre mercado en todos los niveles, desde la exploración hasta la entrega al usuario final, pero se reserva tres empresas que desde el gobierno controlan actividades estratégicas: Statoil, Petoro y Gassco, diseñadas en diversos momentos para atender diferentes necesidades.

Statoil, fundada en 1972, fue la respuesta del gobierno ante el hallazgo de crudo por parte de empresarios estadounidenses en el Mar de Barents a finales de la década de los 60, cuando fue necesario competir en el negocio de la exploración, producción, refinación, distribución y exportación de hidrocarburos. Actualmente, tiene 30,000 empleados y ventas anuales de 135,000 millones de dólares, de los cuales paga 54,000 millones en impuestos y se queda con ganancias para reinvertir en su operación por 11,000 millones.

En sus inicios, Statoil pasó de recibir licencias por adjudicación directa, a entrar en consorcios sin colocar capital, a realizar proyectos en sociedad con las grandes petroleras en el rol de asistente técnico, a iniciar actividades en el resto del mundo para finalmente salir al mercado accionario, por lo que actualmente es 67% propiedad del estado, cotiza en las bolsas de valores de Oslo y Nueva York, y tiene actividades en 35 países distintos.

El control estatal en la petrolera fue reorganizado en el año de 1985, con la creación de los "Intereses Financieros Directos del Estado" (SDFI), a través del cual el Estado noruego participaba como inversionista.

Durante el año 2000 el parlamento resolvió permitir que las acciones que mantenía en el SDFI, pudieran cotizarse en las Bolsas de Oslo y de Nueva York (New York Stock Exchange).

Mientras tanto, las reservas de petróleo en Noruega ascendieron a 6.7 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) al cierre del año 2010, pero han estado disminuyendo desde el año de 2003 en virtud del agotamiento de sus campos, particularmente los ubicados en el Mar del Norte, en donde aún se cuenta con un potencial por desarrollar; las mareas son bastante irregulares, hay mucha lluvia y niebla durante todo el año, y es una región sujeta a violentas tormentas que hacen la navegación peligrosa.

Al ritmo de producción de 2010, sus reservas de petróleo se agotarían en 8.5 años. En cambio sus reservas de gas natural se han estado incrementando desde los ochenta hasta llegar a 13 mmbpce, y se agotarían en cerca de 19 años al ritmo de producción también de 2010.

Del total de recursos petroleros recuperables, una tercera parte se han vendido y entregado para su explotación, del resto, 28% son reservas probadas, 11% recursos contingentes para desarrollo y el resto recursos por descubrirse.

La industria petrolera noruega ha sido fundamental en el desarrollo de esepaís. Hacia los años setenta su participación era marginal en la economía; sin embargo, con el paso del tiempo fue aumentando hasta

alcanzar en el año de 2009 el 21% del PIB. Su estrategia ha sido el obtener ventajas de la exploración y explotación de los hidrocarburos y de actividades conexas, más que de la elaboración de productos petroleros y petroquímicos, aun a pesar del importante mercado que representa la cercana zona europea.

La máxima producción de petróleo se alcanzó en el año 2001 con 3.418 millones de barriles diarios (mbd), luego de no contar con producción en 1970. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un agotamiento de sus campos, por lo que durante el 2010 la producción pasó a 2,137 mbd.

La producción de gas natural ha compensado la declinación de la de petróleo, lo que le ha convertido en el segundo más importantes proveedor de gas a Europa, después de Rusia.

Durante 2010 la producción de hidrocarburos se obtuvo de 69 campos, de los cuales 55 se ubicaron en el Mar del Norte, 13 en el Mar de Noruega y uno en el Mar de Barents. En ese mismo año Noruega fue el séptimo exportador más grande de petróleo en el mundo, con cerca de 1.8 millones de barriles diarios, lo que le permitió contribuir con el 4.3% de las ventas mundiales del hidrocarburo. El total de exportaciones de hidrocarburos representó el 46% de sus ventas totales al exterior. Sin embargo, si se consideran las actividades ligadas a la industria petrolera, se estima que ese porcentaje se eleva a la mitad del total exportado.

La distribución y venta de hidrocarburos se lleva a cabo por empresas privadas, con base en los criterios legales, por lo que los precios incluyen los costos de producción, transporte, almacenamiento; pero para crear condiciones de competencia se aplica el Acta de Impuestos de Petróleo.

La capacidad de refinación fue de 300 mbd al cierre del año 2010, lo que permite exportar alrededor de una cuarta parte de sus productos refinados. Sólo dos refinerías existen en el país: una en la que participan Statoil (79%) y Shell (21%), y otra que es propiedad de Exxonmobil.

La renta petrolera en Noruega se distribuye entre los participantes de la industria, es decir privados y gobierno, correspondiendo a este último la mayor parte a través del régimen fiscal aplicado, consistente en el cobro de regalías, impuestos y dividendos obtenidos en las empresas estatales. Las regalías son mínimas y se aplican a los yacimientos que empezaron a explotarse antes de 1986.

Existen dos elementos principales aplicables en materia fiscal a la industria petrolera noruega. “El primero es un impuesto corporativo normal (28%) y un impuesto especial sobre la producción petrolera (50%), lo cual arroja una tasa combinada de 78%” sobre las utilidades generadas en el año por cada empresa.

Una de las estrategias de Noruega ha sido la constitución de ahorros originados por las operaciones petroleras, lo que propicia menor volatilidad fiscal y disminuye el esfuerzo de contener las presiones inflacionarias. Así, en 1990 se creó el “PetroleumFund”, el cual fue rebautizado en 2006 con el nombre de “Government Pension Fund Global”.

Su propósito es ser un instrumento de la política económica, diseñado para asegurar que los ingresos petroleros sean usados en beneficio de las actuales y posteriores generaciones, ya que en años futuros la población de Noruega registrará un aumento en el sector de las personas mayores, que demandarán más recursos para satisfacer sus necesidades. Además, también podría usarse en caso de que exista un déficit en el balance fiscal no petrolero.

El fondo es administrado por el Norges Bank Investment Management (NBIM), que depende del Banco Central de Noruega y es considerado uno de los cuatro más grandes en el mundo, pues acumuló activos al cierre de 2010 por 525 mil millones de dólares. Los rendimientos que se obtienen de las inversiones se cuentan como “ingresos petroleros de caja netos” del gobierno.

Por su parte, la empresa PETORO tiene una organización pequeña que cuenta con poco menos de 70 empleados, especializados en la industria petrolera. La política de inversiones del Estado noruego en las áreas estratégicas de la economía es explícita en el hecho de que el Estado debe ser propietario mayoritario y de largo plazo para asegurar el anclaje de las grandes empresas, como lo serían StatoilHydro en el caso del petróleo, o Telenor en el caso de telecomunicaciones.

También existen políticas de propiedad estatal para el sector salud, educación etcétera. Lo que es importante subrayar es que en Noruega existe un amplio marco normativo sobre las funciones que debe realizar el gobierno para manejar el sector petrolero, pero particularmente para invertir en él.

El Estado es el gran inversionista en el sector y lo hace a partir de distintos instrumentos, pero principalmente a partir de empresas, todas ellas, sociedades anónimas.

Además de que el Estado detenta la mayoría de las acciones en StatoilHydro, el Estado también invierte en el sector petrolero a través de la cuenta pública Inversiones Directas del Estado en el Sector Petrolero (SDFI). Esa cuenta fue establecida en 1985 para reducir el poder que se acumulaba en Statoil, convirtiéndolo en un Estado dentro del Estado, y para transparentar el papel de Statoil como empresa y separarlo del papel del Estado en tanto que inversionista y dueño de la riqueza petrolera que subyace en el territorio nacional.

El SDFI es el mayor inversionista en el sector petrolero, ya que tiene intereses en 114 licencias. Este esquema funciona ya que el Estado se compromete a realizar las inversiones que requiera el desarrollo de los campos en los que tiene intereses.

Nunca ha fallado en ese compromiso. Probablemente si el Estado llegara a fallar en ese compromiso se derrumbaría la lógica y la predictibilidad del actual modelo. Sin embargo, ese compromiso ha sido renovado a partir de la creación de la empresa administradora "Petoro" la cual lleva el control de las inversiones que el Estado realiza por medio del SDFI.

a) Política de propiedad. El gobierno da prioridad a que el Estado sea un propietario importante y de largo plazo para asegurar el anclaje de las grandes empresas como StatoilHydro o Telenor.
b) Inversión directa del Estado en el sector petrolero (SDFI). El arreglo del SDFI implica que el Estado participa como inversionista en los proyectos petroleros (1985). Tiene participación en 114 licencias de explotación e intereses en 14 grandes instalaciones.
c) PETORO AS. Empresa que administra los intereses comerciales de las inversiones del Estado ligadas al SDFI. Petoro es la empresa que detenta los intereses del Estado en las licencias.
d) StatoilHydro ASA. Petrolera integrada con actividades en 41 países, con producción de 1.9 MMBDpe. Opera 80% de la producción en Noruega.
e) Fondo del Estado para la Aseguradora Petrolera. El Estado está autoasegurado. El fondo es una reserva para el pago de daños y responsabilidades que afecten al Estado como inversionista en el sector.

Por lo anterior, el Partido Acción Nacional, propone reformas que retomen modelos de éxito a nivel mundial, con resultados que han permitido a los países contar con órganos administradores de sus recursos de manera eficiente, responsable y con una visión a largo plazo. No se trata de crear más burocracia, por ello, el modelo noruego ofrece una alternativa viable, a través de un fondo independiente del Parlamento y del gobierno, que está constituido con menos de 70 empleados, incluidos su Junta de Gobierno y su Presidente. Este modelo permite una alternativa viable para la mejor administración de las reservas y de la renta petrolera. Por lo que, Acción Nacional prevé que en un plazo de 10 años, México deje de depender mayoritariamente de los recursos petroleros para su incorporación en la Ley de Ingresos de la Federación y su destino en el Presupuesto de Egresos.

Dicha independencia de los recursos provenientes del petróleo le permitirá al país, llevar a cabo inversiones productivas en otras áreas del desarrollo nacional, con lo que se fomentará un detonante adicional para generar mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

Así, se establece la obligación para el Ejecutivo Federal de ejecutar un plan de adaptación con un periodo de transición no mayor a diez años, tendiente a lograr la disminución de la dependencia fiscal de los recursos petroleros y a eliminar el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos. Al tiempo que se obliga al Congreso de la Unión a expedir en un plazo no mayor a un año la ley que regule la organización y funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo, en el que se señalará:

- El proceso de selección, el número y la forma de integración de la Junta de Gobierno y del Presidente del referido Fondo.
- La estructura orgánica, operativa y funcional del Fondo.
- Las facultades de la Junta de Gobierno y de su Presidente.
- El régimen de sanciones administrativas, civiles y penales al que estarán sujetos los trabajadores del Fondo.

El modelo del Fondo que se propone, tendrá bajo su responsabilidad recibir los derechos de los recursos petroleros de PEMEX y de los demás operadores, retener y enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el porcentaje de los derechos que le corresponda. Los derechos petroleros estarán sujetos a un nuevo esquema que le permitirá al Fondo, con plena autonomía, definir los mejores esquemas y mecanismos que estime convenientes, a fin de garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera. Con este nuevo esquema se obtendrá el máximo beneficio para la Nación.

Para garantizar que los recursos del Fondo sean usados de manera prudente y eficiente, se propone que los integrantes de la Junta de Gobierno, incluido su Presidente, presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, deberán comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de la Constitución, cada vez que se les sea requerido. Además podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones y estarán sujetos a las responsabilidades, administrativas, civiles y penales que pudieran derivarse con motivo de sus actividades.

En resumen, el Fondo propuesto representa una de las parte medulares de la reforma energética que el Partido Acción Nacional presenta ante el Congreso de la Unión, su creación permitirá garantizar un nuevo esquema en el uso y el destino de los recursos petroleros. No se debilitarán las finanzas públicas del país, pues los ingresos provenientes del petróleo y de los hidrocarburos seguirán siendo administrados para beneficio de la Nación, sin embargo, para maximizar la renta petrolera, será necesario que los derechos petroleros estén a cargo de un órgano autónomo en su gestión, organización y decisión, a fin de que, en el marco de esa autonomía, pueda tener la libertad de invertir de mejor manera dichos fondos. Lo cual deberá ser de forma transparente, por lo que la ley determinará la forma y los mecanismos en que deberá hacerse del conocimiento público, las actividades y destino de las inversiones del Fondo Petrolero. Reconocemos que actualmente la dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros hacen necesario un periodo de transición para hacer efectiva al 100 por ciento la función del Fondo Petrolero bajo los principios arriba expuestos. Proponemos que dicho período de transición no sea mayor a diez años, durante el cual una parte del fondo petrolero seguirá siendo incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación. Para tal fin, durante la discusión del Paquete Económico propuesto por el Ejecutivo, la Cámara de Diputados determinará la parte que cada año será aprobada, entendiendo que la misma será un porcentaje decreciente y que al final de los diez años no podrá ser mayor al 50 por ciento del recurso que se proyecte captar por el fondo durante el ejercicio presupuestal.

En Acción Nacional estamos ciertos que una reforma energética como la que se propone requiere dotar al Estado de todos los mecanismos posibles para maximizar la renta petrolera, eficientar los esquemas de inversión y detonar el desarrollo de nuevas tecnologías para el país.

B. COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Como parte de las reformas que el Partido Acción Nacional pone a consideración del Congreso de la Unión, es el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia energética. No podría entenderse una reforma como la que aspiramos y la que la sociedad demanda, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas. Es por ello, que proponemos reformar el artículo 28 constitucional, con varios objetivos: en primer término, reorganizar la estructura de dicho artículo, a fin de que todas las disposiciones relativas a los monopolios queden agrupadas de tal forma que nuestro texto constitucional tenga coherencia normativa.

Asimismo, se propone que dicho artículo se convierta en el referente constitucional de los órganos reguladores, es decir, que contenga al Banco de México como regulador de la política monetaria del país, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, incorporados de manera reciente a nuestro texto constitucional, por lo que se reagrupan en apartados específicos para cada uno de dichos órganos, pero además se incorpora al Fondo Mexicano del Petróleo, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del país.

La necesidad de crear estos órganos a nivel constitucional y dotarlos de plena autonomía atiende a las necesidades de la sociedad en general, a fin de que las funciones que lleva a cabo el Estado en materia energética se atiendan de manera eficaz. Ante ello, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de señalar cuáles son las características de este tipo de órganos incorporados en nuestra Ley Suprema:

> **ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS[8].**
> El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1.- Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2.- Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requeríaautonomía de los clásicos poderes del Estado. 3.- La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la

[8]Controversia constitucional 31/2006.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.- 7 de noviembre de 2006.- Mayoría de nueve votos; votó en contra Genaro David Góngora Pimentel (Ausente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia).- Ponente: José RamónCossíoDíaz.- Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Por lo anterior, se propone elevar a rango constitucional a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órgano encargado de regular la exploración y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, cualquiera que fuere su estado físico. Para lograr lo anterior, dicha Comisión tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento de concesiones tanto para Petróleos Mexicanos como para los demás operadores que tengan el interés de explorar y explotar petróleo y los hidrocarburos en territorio nacional.

Cabe señalar que Petróleos Mexicanos recibirá del Estado apoyo para su modernización y mejora tecnológica y que tendrá en un periodo inicial el derecho de elegir los campos que desea explorar y explotar (ronda cero), cuyo alcance deberá determinar la Comisión Nacional de Hidrocarburos conforme a la política pública que para tal efecto establezca la Secretaría de Energía. Así, los nuevos operadores, a través del procedimiento de asignaciones que prevea la ley, realizarán los trabajos de exploración o explotación en aquellos lugares en los que PEMEX actualmente no lleva a cabo dichas actividades, lo que garantizará que haya no sólo competencia sino mayor eficiencia en la extracción de los recursos naturales del país.

En el otorgamiento general de concesiones, éstas serán asignadas a través de procesos de licitación internacional abierto a empresas públicas o privadas, así como a asociaciones público-privadas, ya sean nacionales o extranjeras.

En suma, esta reforma ni debilita ni privatiza a PEMEX, por el contrario, la fortalece, a través de hacerla más eficiente en aquellos lugares y procesos productivos en donde ha demostrado mayor éxito, y en aquéllos donde la propia empresa decida participar..

C. COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, y como ya se dijo, se incorpora dentro del artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realicen los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que prevea la legislación que el Congreso de la Unión apruebe.

Así, como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía será un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, deberá regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realicen el Estado y los particulares. Con la reforma propuesta dicha Comisión será el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realice el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta.

Fomentará una sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

En ese sentido, la reforma permitirá, como se mencionó líneas arriba que haya nuevos operadores en materia eléctrica, que participarán en los procesos de generación y comercialización de la energía eléctrica. Así, en

pocos años los mexicanos podremos elegir de manera libre la empresa que nos brindará las mejores condiciones en precio, suministro y atención a las necesidades propias de cada familia o industria para el consumo de energía eléctrica.

Con esta reforma, la Comisión Federal de Electricidad usará de manera más eficiente sus recursos para potenciar al máximo las actividades eléctricas en las que participe. Esto es, podrá destinar su capital humano y económico, en aquellas actividades en las que ha resultado mucho más eficiente. Pero al mismo tiempo, el capital privado podrá intervenir en aquellas otras actividades en las que pudiera resultarle a dicha Comisión mucho menos atractivo o más onerosa su participación.

Así, no se debe dejar de mencionar que la política energética del país, tanto en materia de hidrocarburos como de electricidad seguirá estando en manos del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, por lo que la legislación secundaria deberá garantizar los mecanismos de comunicación y coordinación entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Ejecutivo Federal.

En suma, la incorporación de estos 3 órganos constitucionales autónomos se suman a los ya existentes en el artículo 28 constitucional, por lo que de manera genérica, les aplicarán las mismas reglas para la elección de los comisionados que integren sus órganos de gobierno, los requisitos que habrán de cumplir, los casos en los que podrán ser removidos, así como las demás disposiciones contenidas en dicho artículo, salvo la constitución del Fondo Mexicano del Petróleo, que estará sujeta a la integración que determine la ley en la materia.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Acción Nacional ha planteado con claridad y firmeza su compromiso con un desarrollo humano sustentable, considerado como aquél conjunto de condiciones sociales, políticas y económicas que permiten el crecimiento de las personas de la generación actual sin comprometer el potencial de las futuras, lo cual implica la preservación y defensa del medio ambiente y la recuperación de los recursos naturales que la actividad del hombre ha consumido, para garantizarles a ambas generaciones una vida digna.

Esta propuesta de reforma energética está basada en el interés nacional, que fortalezca la seguridad energética y enfatice el uso eficiente de energía, así como la creciente sustitución de la producción de la energía eléctrica basada en fuentes fósiles por fuentes renovables, estimulando en ello la producción y exploración de gas natural.

En este sentido, no puede entenderse una reforma energética que no atienda a un compromiso del Estado, la sociedad y los inversionistas en materia ambiental, es necesario garantizar que en todo proceso productivo que genere riqueza para el país haya un compromiso social de protección, salvaguarda y, en su caso, reparación del daño al medio ambiente.

Este ha sido un reclamo social que ha cobrado gran relevancia sobre todo en los últimos 20 años, en donde la participación social ha sido el factor detonante para que los gobiernos de todo el mundo hayan iniciado programas de concientización respecto al grave deterioro ambiental ocasionado por los procesos industriales. Así, durante décadas no se consideró que la industrialización, además de propiciar el bienestar de la población, producía también una degradación de los sistemas naturales. El impacto ambiental producido por los energéticos comprende los efectos de todas y cada una de las fases de un ciclo energético, como son: la exploración, extracción, refinamiento, transporte, almacenamiento, consumo y la producción de éstos.

Hoy en día nos enfrentamos al gran reto de hacer compatible el desarrollo industrial del país y la protección de nuestros recursos naturales, es por ello, que debemos llevar a cabo una reforma integral no con una óptica

meramente industrial ni ser miopes en el deterioro del medio ambiente o el daño a las personas. Así, para Acción Nacional cobra especial relevancia la conservación de nuestros recursos, la mitigación de los gases y compuestos de efecto invernadero y la restauración o compensación del daño, cuando éste sea causado como consecuencia de una actividad industrial, sea del Estado o de los particulares.

Por ello, la presente reforma establece como principio constitucional el uso sustentable de todos nuestros recursos naturales, haciendo énfasis en la obligación del Estado de **asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, desarrollando para tal efecto las estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático. La ley deberá** establecer así las bases para que los operadores, es decir, el Estado, los particulares o ambos, incorporen **criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones así como la menor huella de carbono en todos sus procesos.**

Señoras y señores legisladores:

Estamos ante una oportunidad única, nunca antes como ahora, se ha requerido una reforma de gran calado, que fortalezca nuestras instituciones, que detone de una vez por todas el desarrollo de la Nación y que los ciudadanos verdaderamente sientan en sus bolsillos los beneficios de una reforma como la que se propone.

Ha llegado el momento de tomar decisiones trascendentales para el país, la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no puede ni debe estar ajena a los cambios que a nivel mundial se presentan todos los días. Otras naciones han aprovechado al máximo sus recursos naturales, otros países han dado pasos importantes en el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos. México no debe ser la excepción, estamos llamados a ser una de las 8 economías más importantes a nivel global y la más importante en América Latina.

La reforma energética que el Partido Acción Nacional presenta hoy ante la sociedad mexicana, la presenta con absoluta responsabilidad, con la convicción de que sólo con una reforma estructural como ésta podremos dar a nuestras familias la seguridad de un futuro energético limpio y sustentable.

La propuesta que aquí presentamos está construida con base en esos ideales que nos hacen distinguibles como opción política, atentos a las complejidades y retos que nos presenta la realidad, local y global, considerando de manera incluyente a las personas y las comunidades, con la perspectiva y el compromiso de generar el mejor porvenir posible para nuestra gran nación en una era de interdependencia global. Con esta iniciativa queremos garantizar un México con futuro. No hay futuro sin libertad ni valores, pero tampoco sin competitividad y sustentabilidad. Por eso nuestro compromiso no sólo es con la presente generación, también tenemos en cuenta las que vienen, por eso queremos conquistar un Estado social de derecho que contemple la seguridad en el suministro de energía, el respeto al medio ambiente y finanzas públicas sanas para la atención de los más desfavorecidos y de nuestros próximas generaciones.

En Acción Nacional estamos seguros que la suma de voluntades y de esfuerzos de la sociedad mexicana, de las autoridades y de todas las fuerzas políticas reunidas en el Congreso de la Unión, nos dará la seguridad energética a la que aspiramos. Hacemos un llamado a la sociedad mexicana a ser partícipes de este gran cambio estructural, a los Partidos Políticos a debatir de manera seria y responsable.

Que quede claro, el petróleo es de la Nación, el petróleo es de los mexicanos, el petróleo es de todos; PEMEX no se privatiza, la Comisión Federal de Electricidad no se vende. Son y serán órganos del Estado al servicio de todos los mexicanos. El Partido Acción Nacional impulsará una economía de libre mercado en la que participe el Estado y en la que se garantice las mejores condiciones de energía a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética para quedar como sigue:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable **y con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero,** que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

…

…

…

…

Bajo criterios de equidad social, productividad **y sustentabilidad** se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

…

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial **sustentable** que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Artículo 27. …

…

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento **sustentable** de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación **y su uso eficiente**, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas **sustentables** y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, ~~y~~ para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los **hidrocarburos** sólidos, líquidos o gaseosos **provenientes de formaciones geológicas**; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y

términos que fije el Derecho Internacional.

…

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento **sustentable** de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones**, así como las relativas a la exploración y explotación del petróleo y los demás hidrocarburos que serán otorgadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos.** Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los **hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación por conducto de los operadores que realicen las actividades de exploración y producción conforme al artículo 28 de esta Constitución. Asimismo, para asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, el Estado desarrollará estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.**

Tratándose de minerales radioactivos, no se podrán otorgar concesiones ni contratos, corresponde a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.

…

…

…

I. a XX. …

…

Artículo 28.- …

…

…

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; **el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y la administración de los recursos producto de la renta petrolera.** La comunicación vía satélite, los ferrocarriles, **la exploración y producción del petróleo y los demás hidrocarburos; así como la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica** son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio **sobre el petróleo, de todos los hidrocarburos y de** las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

Para dar cumplimiento a los objetivos de la banca central, en materia de competencia económica, telecomunicaciones y en energía, el Estado contará con los siguientes organismos:

Apartado A. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Apartado B. El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para

eliminar efectos anticompetitivos.

Apartado C. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Apartado D. El Estado contará con un organismo autónomo denominado Fondo Mexicano del Petróleo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la administración de la renta petrolera y conseguir su máximo beneficio.

Dicho Fondo estará conformado por un Presidente y una Junta de Gobierno, designados a propuesta del Ejecutivo Federal, con ratificación del Senado.

La ley que expida el Congreso de la Unión determinará el número de integrantes de la Junta de Gobierno del referido Fondo, así como su estructura orgánica.

El Presidente del Fondo y los integrantes de la Junta de Gobierno estarán sujetos a las disposiciones que señalan esta Constitución.

Apartado E. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto regular la exploración y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, cualquiera que fuere su estado físico.

Apartado F. La Comisión Reguladora de Energía es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realicen el Estado y los particulares. Asimismo, será el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realice el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta, conforme a los términos que prevea esta Constitución y las leyes respectivas.

Para lograr lo anterior, la Comisión fomentará una sana competencia entre los distintos operadores, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

Los organismos autónomos a que hacen referencia los Apartados B, C, D, E y F del presente artículo, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:

I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;

II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;

III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;

V. Las leyes garantizarán, **en su caso,** la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;

VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas;

IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos;

X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución;

XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y

XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna **especializada,** cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.

Los órganos de gobierno de los organismos previstos en los apartados B, C, E y F de este artículo, se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

El Presidente de cada uno de los órganos **referidos en el párrafo anterior** será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de treinta y cinco años;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

IV. Poseer título profesional;

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones, **energética o financiera,** según corresponda;

VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;

VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.

…

…

…

…

…

…

…

…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía y previa opinión de las dependencias responsables en materia ambiental, hacendaria y económica, establecerá los planes y programas para la política energética nacional, con el fin de garantizar el aprovechamiento sustentable de la energía y el

cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, así como la mayor generación posible de valor agregado y la competitividad del país.

TERCERO. El Ejecutivo Federal, conforme al artículo anterior, propondrá al Congreso de la Unión un programa de substitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos.

CUARTO. Las actividades industriales de extracción y transformación de los hidrocarburos, de generación eléctrica y de la comercialización de ambos, se desarrollarán conforme a condiciones de competencia efectiva y estricta separación legal y operativa con respecto de las actividades de transporte, almacenamiento y distribución que se encuentren en condiciones de monopolio natural. La entidad a cargo del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional será independiente de cualquier participante en esta industria.

QUINTO. Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad son propiedad del Estado, contarán con autonomía de gestión, podrán determinar su mejor organización y no serán parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. A propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados aprobará el techo financiero así como el nivel de capitalización al que ambas se sujetarán.

SEXTO. La responsabilidad de la dirección y planeación de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad será atribución de sus propios Consejos de Administración, los cuales seguirán las prácticas internacionales de gobierno corporativo. Los Consejos de Administración estarán compuestos de cinco consejeros independientes, cuatro consejeros del gobierno y el Secretario del ramo como presidente y con voto de calidad. El Director de cada uno de dichos organismos será nombrado por el Consejo de Administración correspondiente.

SÉPTIMO. El Ejecutivo Federal deberá ejecutar, en un periodo de transición no mayor a diez años, un plan de adaptación tendiente a lograr la disminución de la dependencia fiscal de los recursos petroleros y a eliminar el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos. Los Derechos de extracción que paguen los operadores serán administrados por el Fondo Mexicano del Petróleo. Durante la discusión del Paquete Económico propuesto por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados determinará la parte del Fondo que seguirá siendo incorporada al Presupuesto de Egresos de la Federación, entendiendo que la misma será un porcentaje decreciente y que al final del período antes señalado, el porcentaje que se apruebe no podrá ser mayor al 50% del recurso que se proyecte captar por el Fondo durante el ejercicio presupuestal.

OCTAVO. El Congreso de la Unión deberá expedir en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la ley que regule la organización y funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo, en la que se preverá, entre otros temas, los siguientes:

I. El proceso de selección, el número y la forma de integración de la Junta de Gobierno y del Presidente del referido Fondo;
II. La estructura orgánica, operativa y funcional del Fondo;
III. Las facultades de la Junta de Gobierno y de su Presidente, y
IV. El régimen de sanciones administrativas, civiles y penales al que estarán sujetos los trabajadores del Fondo.

NOVENO. El régimen de concesiones a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá estar definido en los términos que para tal efecto establezca la legislación correspondiente. Dicha legislación preverá el procedimiento especial de asignación inicial de concesiones, en la cual se deberá garantizar la preeminencia de Petróleos Mexicanos respecto de los demás operadores, teniendo dicho organismo preferencia en la designación, elección y asignación para los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos, conforme a los criterios de política energética que defina el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía. En el otorgamiento general de concesiones, éstas serán asignadas a través de procesos

de licitación internacional abierto a empresas públicas o privadas, así como a asociaciones público-privadas.

DÉCIMO. Petróleos Mexicanos y los operadores previstos en el artículo 28 de esta Constitución, al acceder al régimen de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos se someterán a un proceso de licitaciones públicas en las cuales se reconocerá la propiedad de los hidrocarburos por parte de la Nación y se determinarán los esquemas de concesión que tomen en cuenta el riesgo, los precios del petróleo, el tipo de yacimiento y recursos que contenga, así como las necesidades de inversión, entre otros. Los operadores pagarán además las contribuciones que procedan en la forma y términos que señalen las leyes fiscales.

DÉCIMO PRIMERO. Corresponde a la Comisión Reguladora de Energía el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realicen los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que prevean la legislación de la materia.

DÉCIMO SEGUNDO. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a su entrada en vigor, y en ello deberá:

I. Reformar las leyes de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a fin de incorporar las disposiciones contenidas en el presente Decreto.
II. Expedir las leyes reglamentarias de los artículos 27 y 28 constitucionales en materia de hidrocarburos y del servicio de energía eléctrica, respectivamente, que prevean el régimen de concesiones, sus modalidades, la participación de los operadores y el marco regulatorio que permita lograr una competencia efectiva entre todos los participantes del mercado.
III. Expedir la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y reformar la Ley de Petróleos Mexicanos, a fin de incorporar los principios establecidos en los artículos 27 y 28 constitucionales conservando el Estado la rectoría de las áreas estratégicas y de la política nacional de la energía y estableciendo como uno de sus ejes la prohibición de la integración vertical de los servicios de energía eléctrica y de hidrocarburos, evitando con ello la conformación de monopolios.
IV. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente en materia energética.
V. Establecer las bases para que el Estado mexicano garantice la protección y cuidado al medio ambiente, en todos los procesos en los que intervengan empresas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones así como la menor huella de carbono en todos sus procesos.
VI. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente Decreto.

DÉCIMO TERCERO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía y en un plazo no mayor a 365 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá emitir un plan para la sustitución del uso de combustóleo y otros combustibles de alta emisión de gases efecto invernadero por gas natural en la generación de energía eléctrica. El plan deberá contemplar también el crecimiento en el uso de energías renovables.

DÉCIMO CUARTO. Los actuales Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, concluirán su encargo, en los términos y períodos para los cuales fueron designados.

Con el objeto de asegurar la permanencia de los actuales y el escalonamiento en el cargo de los nuevos

Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los dos comisionados faltantes para cada uno de los órganos deberán ser ratificados por la Cámara de Senadores en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará los periodos respectivos.

Para los nombramientos de los dos Comisionados faltantes, tanto de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, deberán observarse lo siguiente:

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto;

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la República dentro de los diez días naturales siguientes;

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará con un plazo de diez días naturales para resolver sobre la propuesta, y

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución.

DÉCIMO QUINTO. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las disposiciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestaria a los órganos a que se refiere este Decreto para el desempeño de sus funciones, así como las previsiones presupuestarias para el buen funcionamiento del organismo que se crea conforme al Apartado D del presente Decreto.

DÉCIMO SEXTO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley.

DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 71 CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente Iniciativa de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El pueblo no sólo debe ser tomado en cuenta, sino que debe decidir. El artículo 6º de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, dispone que la ley es la expresión de la voluntad general y que todas y todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente, o por sus representantes, en su formación.

El 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, algunas de éstas con la finalidad de dar una real participación ciudadana en la toma de las decisiones, porque de lo contrario no se estarían tomando con seriedad los derechos de los ciudadanos.

En dicha reforma cobró especial importancia las adiciones a los artículos 35, 36 y 71 del orden constitucional a través de las cuales se reconoció como derecho de los ciudadanos el poder iniciar leyes y el derecho a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

El artículo segundo transitorio de la publicación referida dispuso que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en dicho Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. En consecuencia, dentro de los primeros días de agosto tiene que ser aprobada la ley secundaria que regule el procedimiento de consulta popular. Estamos en un momento histórico para dar a este instrumento la máxima importancia ya que permitirá asegurar la validez de las decisiones relevantes para la Nación mexicana, que atañen a todos los mexicanos y mexicanas.

En este contexto y con la finalidad de desarrollar el marco legal que permita dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la reforma política referida, el miércoles 24 de julio del año en curso, diversos senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 71 CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en la que se destaca, en lo particular, los mecanismos mediante los cuales podrá hacerse efectiva la participación ciudadana en la toma de las decisiones trascendentes para la Nación, así como su derecho para iniciar leyes. La propuesta presentada es adecuada ya que regula los aspectos importantes de los derechos de los ciudadanos reconocidos en la reforma política llevada a cabo en el ejercicio 2012.

Dando continuidad a la propuesta referida, se presenta esta iniciativa que retoma el texto de la iniciativa que fue presentada en días próximos anteriores y solamente pretende fortalecer y complementar el cuerpo

normativo presentado por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática con dos puntos importantes que se presentan a continuación:

1. La participación ciudadana no debe estar sujeta a los tiempos electorales ya que decisiones trascendentes y de importancia para la Nación se toman en cualquier época del año, por lo que en términos del artículo 1º Constitucional deben garantizarse los derechos de los ciudadanos en todo momento, y

2. En los instrumentos de participación ciudadana deben considerarse las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información.

En consecuencia, el objetivo de la presente iniciativa es complementar la iniciativa presentada en días anteriores con estos dos puntos que deben formar parte del desarrollo y del funcionamiento de la participación ciudadana por las siguientes razones:

El primer punto, referente a que la participación ciudadana no puede sujetarse a los tiempos electorales retoma su importancia al considerar que decisiones trascendentes y de importancia para la Nación se toman en cualquier época del año y no exclusivamente el día de la jornada electoral federal.

Cierto es que debe reconocerse como regla general que estas puedan llevarse a cabo el día de la jornada electoral federal, respetando el texto constitucional, pero no debe limitarse el derecho ciudadano a votar en las consultas populares sólo en esa circunstancia. Por ello, debe reconocerse la posibilidad de que las consultas populares puedan ser realizadas en cualquier momento siempre que exista alguna decisión trascendente en la que los ciudadanos deban ser participes. Debe dejarse abierta la posibilidad de que las consultas populares y la participación ciudadana en éstas pueda realizarse en cualquier época y no sólo de manera limitativa el día de la jornada electoral federal, lo cual no vulnera el espíritu de la reforma constitucional del 2012, pues se trata de una ampliación de derechos, lo que es perfectamente acorde con el modelo de protección a los derechos humanos, establecido en el artículo 1° constitucional.

Por su parte, el segundo punto recobra importancia ya que los mecanismos de participación vinculante para los ciudadanos ya no pueden limitarse a las urnas.

Una meta esencial en la lucha por una mayor apertura gubernamental y transparencia es darles a los ciudadanos más poder. Y para que el gobierno pueda ser receptivo necesita tener una manera rápida y eficiente de trabajar con los votantes y de entender cómo se sienten sobre temas específicos. Hoy, a partir de las innovaciones tecnológicas y científicas, los ciudadanos se han empoderado para interactuar entre sí y, crecientemente, también con las instituciones tradicionales de gobierno.

Una de las claves para una democracia más vibrante es una ciudadanía informada y comprometida. Hoy debemos facilitar la vinculación y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones transcendentes y la mejor forma de lograrlo es utilizando las tecnologías de la información.

En los últimos años el número de usuarios en las redes sociales ha crecido exponencialmente. Además, también ha crecido la proporción de usuarios que publican noticias políticas, que siguen a un candidato o funcionario o que se unieron a algún grupo organizado en torno a un tema de interés político o social. Los adultos jóvenes se identifican con estas formas de participación. Muchas veces las discusiones que comienzan en línea pueden traducirse en compromisos políticos sostenidos. Los medios sociales como plataformas se han convertido en un espacio en donde la gente intenta convencer a la gente para que vote o se posicione de cierta manera. El mundo de la política en las redes sociales no es –para muchos usuarios- un dominio separado de la actividad política.

Hoy los gobiernos necesitan a los ciudadanos para enfocar y resolver los retos de manera colaborativa; se puede acelerar el progreso democrático diseñando las plataformas tecnológicas precisas, que permitan aportar nuevos métodos para la participación ciudadana integrando las virtudes de las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica.

Por las anteriores razones, sometemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, para quedar como sigue:

ARTÍCULO UNICO.- Se expide la Ley de Participación Ciudadana como ley reglamentaria de los artículos 35, fracción VIII, 36, fracción III y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación e iniciativa ciudadanas en los siguientes términos:

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA

TÍTULO I
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 35, fracción VIII, 36, fracción III y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional en materia de consulta popular y de iniciativa de leyes ciudadanas.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Garantizar, promover y proteger el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional.

II. Establecer las normas y principios para regular la consulta popular y la iniciativa ciudadana.

III. Promover y fortalecer la participación democrática de la ciudadanía a través de la consulta popular.

IV. Regular la figura de la iniciativa ciudadana.

V. Establecer las figuras de observatorios ciudadanos y recorrido de autoridades.

Artículo 3. La consulta popular es el derecho de los ciudadanos mexicanos a participar en la toma de decisiones respecto de temas de trascendencia nacional mediante los siguientes mecanismos:

I. Consulta popular: procedimiento por medio del cual los ciudadanos mexicanos expresan su aprobación o desaprobación sobre proyectos legislativos que tengan por objeto expedir, modificar, derogar o abrogar disposiciones de la Constitución o de leyes del Congreso de la Unión.

II. Iniciativa ciudadana: La facultad de un numero de ciudadanos equivalente, al menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores de iniciar el proceso legislativo de leyes o decretos ante el Congreso de la Unión o cualquiera de sus cámaras;

III. Observatorios ciudadanos: órganos de colaboración ciudadana, cuyo objetivo es vigilar el desempeño de los funcionarios públicos de la Federación, alegrados de manera voluntaria y con la facultad de realizar análisis y recomendaciones con relación al desempeño de estos

funcionarios.

IV. Recorridos de autoridades: instrumento de participación directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

Artículo 4.- No podrá ser objeto de consulta popular, en términos del apartado 3° de la fracción VIII del artículo 35 constitucional lo siguiente:

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. La restricción de los principios consagrados en el Artículo 40 de la Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Republica representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación;

III. La materia electoral;

IV. Los ingresos y gastos del Estado;

V. La seguridad nacional, y

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 5. La consulta popular, por regla general, se realizara el mismo día de la jornada electoral federal. No obstante y para garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional, de manera excepcional, las consultas populares podrán celebrarse cuando sea necesario, en cuyo caso la convocatoria precisará las fechas y modalidades de participación de la ciudadanía, considerando las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información.

La relevancia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por el Congreso de la Unión.

Artículo 6. En cada consulta popular, la cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse a la ciudadanía será de tres. Los cuestionamientos deberán formularse de manera clara y comprensible.

Artículo 7. En la interpretación de las disposiciones de esta ley se deben garantizar los principios del artículo primero de la Constituci6n para maximizar el derecho a la participación ciudadana y los principios democráticos. En caso de ambigüedad, la interpretación deberá ser extensiva, ampliando en todo momento, los derechos del ciudadano.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a las tesis y jurisprudencia que, en aplicación de la misma, establezca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su competencia.

En caso de que no exista disposición expresa, ni criterio interpretativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estará a los principios generales del derecho.

TITULO II
CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACION DE LA CONSULTA

Artículo 8. Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

I. El Presidente de la Republica;

II. El treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

III. AI menos el dos por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 9. La solicitud para la consulta podrá presentarse en todo momento. En caso de que se realice la consulta popular el día de la jornada electoral federal, la solicitud deberá ser presentada antes del 31 de enero del año de la elección federal.

Artículo 10. La solicitud deberá presentarse ante la Mesa Directiva de cualquiera de las Cámaras o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; serán presentadas por escrito, con la documentación comprobatoria correspondiente.

Las comisiones competentes en materia de participación ciudadana, ejercerán las facultades que sobre esta materia disponga la legislación aplicable, asimismo tendrán la participación que determinen las mesas directivas de ambas cámaras y de la Comisión Permanente.

Artículo 11. En caso de tratarse de una petición ciudadana, los interesados deberán:

I. Presentar en medio magnético la lista de ciudadanos a que se refiere el inciso c) del apartado 1° de la fracción VIII del Artículo 35 Constitucional, con el nombre completo, el numero de folio de la credencial para votar con fotografía y la firma de cada uno de los solicitantes.

II. Nombrar a un representante común.

III. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional.

Artículo 12. Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no cumpla con las formalidades de ley, sea incomprensible o ilegible, la Cámara correspondiente deberá prevenir a los peticionarios para que subsanen los errores u omisiones en un plazo de 48 horas.

Artículo 13. El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, turnara de inmediato la petición ciudadana al Instituto Federal Electoral para que este, en un plazo no mayor a treinta días naturales, verifique la lista de ciudadanos a que se refiere el Artículo anterior.

El Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, turnara de inmediato la petición ciudadana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el mismo plazo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

Artículo 14. En los casos establecidos en las fracciones I y II del Artículo 8 de esta Ley, las Cámaras del Congreso de la Unión otorgaran a la petición de consulta popular tramite preferente.

Aprobada la petición, el Congreso de la Unión emitirá, en un plazo no mayor a diez días naturales, la declaración de procedencia de la consulta popular, y ordenará que se emita la convocatoria correspondiente y que se publique en el Diario Oficial de la Federación, en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

Asimismo, turnará la convocatoria al Instituto Federal Electoral para que inicie el procedimiento de organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados a que se refiere la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

En el procedimiento de organización, desarrollo, computo y declaración de resultados, el Instituto Federal Electoral deberá considerar las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información para garantizar el derechos de la ciudadanía de votar en las consultas ciudadanas.

Artículo 15. Cuando se presenten dos o mas peticiones de consulta popular, el Congreso de la Unión emitirá una (mica convocatoria y procurara integrar los temas de la consulta, garantizando el limite de cuestionamientos establecido en el Artículo 6 de esta Ley.

Artículo 16. Las peticiones de consulta popular serán improcedentes en los siguientes casos:

I. Cuando la petición no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello;

II. Cuando no contenga la información y documentación comprobatoria correspondiente, de conformidad con esta Ley;

III. Cuando se refiera a alguna de las materias a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley.

Artículo 17. La convocatoria para la consulta popular contendrá al menos la siguiente información:

I. Lugar y fecha de emisión;

II. El acto que se somete a consulta;

III. Las preguntas especificas que se someterán a la decisión ciudadana;

IV. La declaración de procedencia de la consulta popular, emitida por el Congreso de la Unión;

V. La fecha en la que se llevara a cabo la consulta; y

VI. Los requisitos para participar en la consulta.

CAPÍTULO II

DIFUSION DE LA CONSULTA POPULAR EN RADIO Y TELEVISION

Artículo 18. El Instituto Federal Electoral dispondrá del tiempo que le corresponde en radio y

televisión para difundir la materia de la consulta popular.

Artículo 19. El Instituto Federal Electoral promoverá ante los medios masivos de comunicación la realización de mesas de análisis sobre los asuntos que serán sometidos a consulta. En esos debates deberán regir los principios de equidad y de pluralismo político y social.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL

Artículo 20. El Instituto Federal Electoral a través de sus órganos centrales y delegacionales, tendrá en materia de consulta popular, las siguientes competencias:

I. Verificar que al menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores promueva la consulta popular;
II. Organizar el proceso de consulta popular considerando las nuevas tecnologías participativas y la innovación cívica, así como cualquier mecanismo que aporte el desarrollo de las tecnologías de la información.

III. Ordenar, supervisar y vigilar las etapas de desarrollo de la consulta popular;

IV. Realizar los cómputos que se deriven de la consulta popular; y

V. Declarar los resultados de la consulta popular.

Artículo 21. El Instituto Federal Electoral tomará las medidas conducentes para garantizar la suficiencia presupuestal para la organización, desarrollo, compute y declaración de resultados de las consultas populares, así como para financiar programas de capacitación y difusión en materia de consulta popular.

Artículo 22. El Consejo General del Instituto Federal Electoral emitirá los lineamientos necesarios para la organización, desarrollo, compute y declaración de resultados de la consulta.

Artículo 23. En los procedimientos para la realización de la consulta popular serán aplicables, en lo que no se oponga a la presente ley, las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y demás disposiciones aplicables.

Artículo 24. El Consejo General del Instituto Federal Electoral realizara el cómputo final de la consulta y, declarara los resultados el domingo siguiente al de la jornada electoral.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I
RESULTADOS VINCULATORIOS DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 25. El resultado de la consulta popular será vinculante para los poderes Ejecutivo y legislativo

federales, y para las autoridades e instancias competentes encargadas de su ejecución, siempre y cuando participen en la consulta, al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 26. Los plazos aplicables para el debido cumplimiento del mandate popular serán los previstos en los artículos 42 y 49 de la presente Ley.

TÍTULO V
CAPÍTULO I
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION

Artículo 27. Las decisiones y determinaciones que adopten los Órganos del Instituto Federal Electoral y que no correspondan al Consejo General, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión en los términos que establece la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral.

Contra las resoluciones que emita el Instituto Federal Electoral en materia de consulta, proceden los recursos de apelación y el juicio para la protección de los derechos político electorales en términos de lo que dispone la Ley de la materia.

TÍTULO V
DE LA INICIATIVA CIUDADANA

CAPÍTULO I
DE LOS REQUISITOS DE ADMISION Y TRÁMITE

Artículo 28. Los ciudadanos mexicanos, a !raves de la iniciativa ciudadana, podrán presentar proyectos de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa del Congreso General, salvo en las materias siguientes:

a) Penal;

b) Seguridad pública y nacional;

c) Suspensión de garantías;

d) Amnistía;

e) Relaciones internacionales;

f) Tributaria y fiscal, así como de Egresos de la Federación;

g) Régimen interno de la Administración Publica Federal;

h) Regulación interna del Congreso de la Unión y de la Auditoria Superior de la Federación;

i) Regulación interna de los tribunales de justicia del fuero federal; y

j) Las demás que señalen las leyes.

Artículo 29. Los proyectos de iniciativa de Leyes o Decretos que se presenten ante cualquiera de las dos Cámaras, deberán ir acompañados de una exposición de motivos en la cual se fundamente y motive las razones del proyecto, así como de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos, firmados cuando menos por su proponente. Asimismo, deberá ir acompañado de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros.

Las iniciativas ciudadanas serán turnadas de inmediato a la Comisión competente en materia de participación ciudadana para que verifique que se cumplan con los requisitos establecidos en el presente ordenamiento y, de ser procedente, la remitirá a la Mesa Directiva para que se de el turno para su dictaminación. En caso contrario, se desechara de plano la iniciativa presentada.

La Comisión competente en materia de participación ciudadana deberá decidir sobre la admisibilidad de la iniciativa dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

Artículo 30. Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Escrito de presentación de iniciativa ciudadana dirigido al Congreso de la Unión;

II. Nombres, firmas y claves de las credenciales de un mínimo del 0.13% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, debiendo nombrar a un comité integrado por cinco representantes;

III. Presentación de parte expositiva que, en el caso de los anteproyectos de ley, se denominara siempre «exposición de motivos»; parte dispositiva en Ia que se incluye el articulado; y, la parte final que se integrara por disposiciones adicionales, disposiciones transitorias o disposiciones derogatorias.

Artículo 31. En caso de que se incumpla el requisito establecido en el numeral 3 del artículo anterior, l a Comisión correspondiente prevendrá a los promoventes para que, en un plazo de 48 horas, subsane las observaciones.

En caso de que se incumpla el requisito establecido en el numeral 2 del artículo anterior, la iniciativa se tendrá por no presentada.

Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no sean de la competencia del Congreso de la Unión, la Comisión o el Plena, la Mesa Directiva de la Cámara respectiva la turnara a las autoridades competentes.

La Mesa Directiva de la Cámara respectiva notificara **al** promotor de la iniciativa ciudadana sobre el dictamen de admisión de la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión. Esta decisión se difundirá en la página electrónica de la Cámara respectiva.

Una vez declarada la admisión de la iniciativa ciudadana se someterá al proceso legislativo establecido en las leyes y reglamentos respectivos, debiendo ser analizada, dictaminada y votada en el mismo periodo de sesiones en el que fue presentada.

TÍTULO VI

DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS

Artículo 32.- Los Observatorios Ciudadanos son entes de interés publico, de participación y colaboración ciudadana, sectorial y especializada, en el ámbito federal desde los que se analizan y fortalecen las actuaciones de los servidores públicos, órganos o políticas públicas, en búsqueda del beneficia de la sociedad, en los que los ciudadanos de forma honoraria, voluntaria, individual o colectiva, tienen la finalidad de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones publicas y canalizar la reflexión, el análisis crítico, la vigilancia y la construcción de propuestas, en torno a los diferentes temas de la vida publica, hacienda posible una mayor corresponsabilidad entre autoridad y ciudadano, armonizando con ella, los intereses individuales y colectivos, para construir y garantizar de manera conjunta el desarrollo social.

Los observatorios ciudadanos podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad de cualquiera de las funciones de la Federación, salvo en aquellas cuya publicidad este limitada por mandata constitucional o legal.

Artículo 33.- Es obligación de los órganos del Estado, garantizar el acceso a la información que los observatorio ciudadanos requieran para cumplir sus objetivos.

Artículo 34.- Los Observatorios Ciudadanos tienen por objeto:

I. El fortalecimiento de la participación, deliberación y organización ciudadana;

II. La construcción de análisis objetivos y especializados sobre la actuación de los órganos del Estado, las políticas publicas o los servidores públicos, así como de las diversas problemáticas de la vida publica de la Federación;

III. El monitoreo y evaluación de los 6rganos del Estado, la gestión publica, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos;

IV. La generación de propuestas sobre las diversas problemáticas de la vida publica; y,

V. Servir de apoyo especializado para la realización de los procedimientos de Consulta Ciudadana e lniciativa Popular, siempre que sean relacionados con su materia.

Artículo 35.- Los ciudadanos que integren estos órganos, serán honorarios y tendrán el carácter de observadores ciudadanos. AI momento de instalarse, quedaran acreditados por la autoridad electoral respectiva ante el 6rgano del Estado o servidor publico de que se trate.

En ningún caso, podrán ejercer funciones propias de los 6rganos del Estado, de los servidores públicos o ejecutar políticas públicas.

Artículo 36.- Los Observatorios Ciudadanos, sin importar la modalidad y el objeto con los que se constituyan, podrán durar un mínimo de seis meses y un máximo de dos años.

Podrán solicitar su renovación hasta en tres ocasiones, siempre que garanticen la sustitución de por lo menos la mitad de sus integrantes, a través de un procedimiento de convocatoria ciudadana en un plaza que no exceda de treinta días a partir de la fecha en que se autorizó su permanencia, en case de no hacerlo se

tendrá por disuelto.

Las personas que se acuerde sean sustituidas serán aquellas que resuelva el Observatorio Ciudadano, de entre las que tengan mayor antigüedad dentro del mismo, en case de que todas tengan el mismo tiempo, deberá decidirse en los términos que ellos determinen.

Artículo 37.- Los Observatorios Ciudadanos quedaran adscritos a los 6rganos o servidores públicos, según la materia que corresponda; si resultaran ser varias las posibles de adscripción, se atenderá, primero al objeto del observatorio ciudadano en cuestión y, segundo, a quien encabeza la política pública a observarse.

Artículo 38.- Los órganos y servidores públicos coadyuvaran con los ciudadanos y las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil para la integración, organización y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos.

Los Observatorios Ciudadanos, una vez instalados, recibirán todo el apoyo técnico y material del órgano del Estado o servidor publico al que se adscriban, para lograr su objetivo, una vez concluida su función, si aquellos contaran con algún bien, deberán reportarlos al órgano del Estado o servidor publico al que estuvieron adscritos, a efecto de que se integren al patrimonio publico.

Artículo 39.- Los poderes Legislativo Federal y el Ejecutivo federal y dentro del trimestre siguiente de iniciado su periodo constitucional podrán integrar un Observatorio Ciudadano que coadyuve a la elaboración de la Agenda Legislativa, así como los Programas de la Administración Publica Federal, conforme a las bases siguientes:

I. Se garantizara la representación de los principales sectores econ6micos del Estado con conocimientos en su área, así como de instituciones académicas y científicas relacionadas con la materia; y,

II. Todas aquellas que estimen necesarias conforme a la legislación aplicable.

Artículo 40.- Los Observatorios Ciudadanos para su integración deben observar los lineamientos siguientes:

I. La transparencia en el ejercicio de sus funciones; y,

II. La cultura democrática de participación ciudadana.

Artículo 41.-La conformación y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos, se sujetara a lo siguiente:

I. Los ciudadanos presentaran, por escrito, una solicitud ante el órgano electoral respectivo, la cual deberá reunir los requisitos siguientes:

   a. Los generales de los solicitantes;

   b. La firma, ya sea autógrafa o mediante huella dactilar;

   c. Proponer en la solicitud, la denominación con que se desea, se nombre al Observatorio Ciudadano que habrá de crearse;

En caso de que dicho nombre haya sido o este siendo utilizado, o bien, haya alguna imposibilidad para admitirlo, el Instituto Electoral deberá fundar y motivar la resolución en que lo rechace, debiendo proponer uno nuevo que refleje con claridad el objeto del Observatorio Ciudadano;

d. Señalar un representante y domicilio para oír y recibir toda clase de documentos o notificaciones. Este domicilio será su Iugar de residencia;

Para todos los efectos legales, se entenderá que el representante designado podrá realizar todos los aetas necesarios para tramitar el procedimiento de conformación del Observatorio Ciudadano;

e. Señalar el objeto, logotipo y demás elementos que identifiquen al Observatorio Ciudadano;

f. Los solicitantes deben ser, no menos de tres ni mas de quince ciudadanos; y,

g. La solicitud deberá contener una leyenda en la que se exprese la voluntad de los ciudadanos suscribientes de formar parte del Observatorio Ciudadano que se pretende crear.

II. El Instituto Electoral, podrá verificar los requisitos solicitados mediante los mecanismos de seguridad que determine así como el grado de especialización en la materia de quienes pretenden constituirlo.

Si de la revisión determina que no se reúnen los requisitos, requerirá a los solicitantes para que dentro de los cinco días hábiles siguientes cumplan con lo observado.

Por el contrario, si califica como acreditados los requisitos, o bien, estos se han subsanado después de haberse prevenido, el órgano electoral expedirá la constancia de conformación del Observatorio Ciudadano.

III. De expedirse la Constancia de Creación del Observatorio Ciudadano, la misma autoridad que la emitió citara a los integrantes de aquel, señalando día, Iugar y hora para su instalación. La sesión de instalación será valida si existe el quórum legal para ello.

En caso de que no exista quórum legal, el órgano electoral emitirá un segundo citatorio, si en esta no se tiene el quórum de asistencia, el órgano electoral declarara tal hecho y cancelara la Constancia de Creación del Observatorio Ciudadano. Ninguno de los ciudadanos que solicitaron pueden volver a hacerlo, sino hasta después de un año de la fecha de cancelación.

IV. El Instituto electoral llevara un registro de los Observatorios Ciudadanos, con los datos de sus miembros y demás necesarios para su identificación. Se deberá actualizar en forma permanente. El registro será público.

V. El Instituto electoral se encargara de vigilar y certificar que los Observatorios Ciudadanos se integren y funcionen en los términos que establece la normatividad aplicable, en caso de que el observatorio o sus integrantes dejen de cumplir con los requisitos de ley, o Ia contravengan, el órgano electoral podrá cancelar su registro.

VI. Los Observatorios Ciudadanos, previa acuerdo entre ellos, podrán dividirse, fusionarse o

disolverse. El 6rgano lectoral certificara el acto de que se trate.

Artículo 42.- Cada Observatorio Ciudadano expedirá su reglamentación, en que normara su organización y funcionamiento interno, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 43.- Son derechos de los Observadores Ciudadanos:

I. Recibir capacitación, información, y asesoría complementaría a su especialización, para el desempeño de su encargo;

II. Ser convocados con oportunidad por los órganos del Estado o servidores públicos a los eventos y reuniones en que hayan sido designados, previa acuerdo de sus pares, para el análisis y discusión de acciones trascendentales para la vida pública y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

III. Participar con derecho a voz en dichas reuniones y eventos;

IV. En caso de tener conocimiento de aetas que contravengan las normas que rigen la administración o de los aetas que afecten el ejercicio del gasto publico, los observadores ciudadanos deberán dar vista a las autoridades correspondientes; y,

V. Integrar una red de Observatorios Ciudadanos con la finalidad de participar en sus grupos de trabajo, socializar sus logros y sistematizar la información.

Artículo 44.- Son obligaciones de los Observadores Ciudadanos:

I. Asistir a los eventos y reuniones en que hayan sido invitados para el análisis y discusión de acciones trascendentales para la vida publica y estén relacionadas con el objeto del Observatorio;

II. Conducirse con respeto y veracidad durante los eventos y reuniones al expresar sus puntas de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados;

III. Estar en contacto permanente con los habitantes y ciudadanos, según el ámbito de acción y el objeto del Observatorio Ciudadano;

IV. Ser conducto para canalizar los intereses de los habitantes y ciudadanos de su entorno;

V. Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casas que tenga conocimiento por motivo de su encargo;

VI. Informar semestralmente a la sociedad en general sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones;

VII. Realizar permanentemente el monitoreo ciudadano, profesional e interdisciplinario para identificar los problemas de Ia comunidad;

VIII. Enviar trimestralmente un informe detallado de las acciones, programas o políticas publicas

realizados por el órgano del Estado o funcionario publico al que estén adscritos, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a los órganos para la Transparencia y Acceso a la Información de las entidades federativas según se trate, en los términos de las leyes de la materia; y,

IX. Las demás que expresamente se le asignen.

TÍTULO VII
CAPÍTULO I
DE LOS RECORRIDOS DE AUTORIDADES

Artículo 45.- Recorridos de autoridades son un instrumento de participaci6n directa para los habitantes de una demarcación, que les permiten acompañar a una determinada autoridad a la inspección física sobre la forma y condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés, para con ello formular de manera verbal o escrita, sus opiniones y propuestas de mejora o solución.

Artículo 46.- Los recorridos serán convocados obligatoriamente por el Poder Ejecutivo de la Federación, estados y municipios, de manera trimestral a través de los principales medios de comunicación, estableciendo con claridad, la fecha, hora y Iugar del mismo.

Artículo 47.- La autoridad publica para cumplir con este mecanismo, podrá convocar y delegar a los funcionarios de los ramos de la administraci6n publica correspondientes.

Artículo 48.- La autoridad correspondiente, durante la realización de un recorrido, podrá acordar, basado en la necesidad y peticiones que oiga, que se realice una audiencia publica.

Artículo 49.- Los ciudadanos participantes bajo los principios rectores de esta Ley, plantearan de manera clara y específica a la autoridad las necesidades colectivas, así como sus propuestas de soluci6n.

Artículo 50.- Los resultados obtenidos deberán ser oportunamente difundidos por los Organismos de Transparencia para que la ciudadanía pueda darles seguimiento.

TÍTULO VIII
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 51. Las autoridades, partidos y ciudadanos que transgredan las disposiciones de esta ley, estarán sujetos a los diversos procedimientos de responsabilidad y a las sanciones que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, independientemente de las demás responsabilidades que establezca la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, contenidas en decretos, acuerdos y circulares, y en general todas aquellas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

TERCERO.- En un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto expedirá los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización de las consultas populares.

A T E N T A M E N T E

DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS IN FINE A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y EL ARTÍCULO 24 BIS A LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO.



SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS

Marco Antonio Blásquez Salinas
SENADOR DE LA REPÚBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

SENADO DE LA REPUBLICA.

P r e s e n t e.

El suscrito **MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS,** Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS IN FINE A LA FRACCION I DEL ARTICULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y EL ARTICULO 24 BIS A LA LEY DEL BANCO DE MEXICO;** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La Paradoja de Gasolina cara en un país productor de petróleo.

México se ha mantenido como uno de los primeros productores en el planeta desde que los avances tecnológicos permitieron la utilización del petróleo como combustible. Hoy en dia somos el sexto productor de petróleo en el mundo y el precio de las gasolinas afecta las finanzas de las familias mexicanas. En las postrimerías del Siglo XIX los hallazgos de crudo en suelo nacional atrajeron a empresas extractoras principalmente del viejo continente que junto con las estadounidenses prácticamente aprovechaban en su totalidad para sí este recurso no renovable. La expropiación petrolera tradujo en hechos la propiedad establecida en nuestra Ley Fundamental a favor de la Nación. Y comenzó así una fuente de recursos financieros para el desarrollo nacional. La industria del petróleo en manos de mexicanos permitió a los habitantes de la república disfrutar de gasolinas a precios accesibles y paulatinamente estimuló la instalación de plantas armadores automotrices en el país. Sin embargo, en los últimos años los precios de la gasolina se han incrementado hasta impactar de manera seria y grave el patrimonio de las familias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de establecer, con base en

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 26, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Conmutador: 5345 3000 exts. 3850 / 3246 marcobla@senado.gob.mx

Marco Antonio Blásquez Salinas
SENADOR DE LA REPÚBLICA

análisis técnicos, los precios de las gasolinas y el diesel dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Si bien la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios donde se contiene la referencia, en co-relación con el artículo 31, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para fijar el precio de las gasolinas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, la medida que generó el aumento que afecta a las familias viene del 2007. ¿Cómo tuvo lugar este acontecimiento? Desde 2007, el gobierno optó por eliminar el subsidio a la gasolina vía incrementos mensuales al precio.

La **Agencia Internacional de Energía** creó una metodología para medir los subsidios. Para países importadores, como en el caso de México, la Agencia propone usar el precio de referencia internacional o costo de oportunidad como: *"el precio del producto en el hub internacional más cercano, ajustado por las diferencias en calidad en caso necesario, más el costo de transporte (flete) y seguro que debe pagar el importador (CIF), más el costo de distribución interna y la comercialización, más cualquier impuesto al valor agregado (IVA); otros impuestos, incluyendo los impuestos especiales, no están incluidos en el precio de referencia".*

En nuestro país, el precio de oportunidad se toma con referencia al promedio del precio spot de la gasolina regular sin plomo vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América pues se trata del hub más próximo (Véase el apartado 1 del inciso f) de la Fracción I del Artículo 2°-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios).

La idea del "*costo de oportunidad*" aplicada en México toma en cuenta los precios a los que el país podría colocar sus productos petrolíferos en el exterior y obedece a la concepción de no verse privado de dichos recursos para invertir en la industria nacional. Sin embargo, para los mexicanos el petróleo es propiedad de la Nación en términos del Artículo 27 constitucional de ahí que considero que al fijar el precio de las gasolinas se debe armonizar, por efecto de dicho precepto fundamental, el privilegio de los mexicanos como dueños originarios del petróleo con la necesidad de fondear a Petróleos Mexicanos PEMEX. Es cierto que la gasolina importada hay que pagarla pero dicho renglón asciende aproximadamente al 42% mientras que la fórmula se aplica para la totalidad de las gasolinas que se consumen en el país, aun las producidas por PEMEX siendo que en mayo Petróleos Mexicanos alcanzó el volumen de producción de gasolinas más alto de los últimos 40 años, al lograr un promedio diario de 471 mil barriles diarios, 8% más comparado a igual mes de 2012.

En consecuencia, la finalidad de la presente iniciativa consiste en armonizar la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fijar el precio de las gasolinas con los

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 26, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Conmutador: 5345 3000 exts. 3850 / 3246 marcobla@senado.gob.mx

Marco Antonio Blásquez Salinas
SENADOR DE LA REPÚBLICA

dispositivos constitucionales protectores tanto del pueblo como dueño originario del petróleo como del poder adquisitivo de los trabajadores a través de la facultad-deber del Banco de México de contener la inflación. Para lograr lo anterior, se propone que en la fórmula para determinar el precio de las gasolinas se armonice el costo de oportunidad con el costo de producción nacional de las gasolinas tomando en cuenta que en la forma en que está planteada dicha fórmula hoy día no hace el distingo de qué porcentaje de gasolina se trae del exterior en contraste con la que produce PEMEX. Nótese que no se opta por simplemente vender la gasolina a costos de producción nacional quizás como se hace en Venezuela. Se trata de que el aumento no sea tan grande disminuyendo así el impacto en las finanzas de las familias pero sin desconocer la fluctuación de los precios internacionales del petróleo y la necesidad de PEMEX de invertir. Cabe señalar que de aprobarse esta Iniciativa rescatariamos a los mexicanos de la acción de los especuladores pues la razón principal del incremento en el precio del crudo es la "*escasez artificial*" impuesta por algunos de los principales productores.

De la necesidad de proteger el poder adquisitivo de las familias.

La H. Cámara de Diputados, a través de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, llevó a cabo el estudio denominado ***Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diesel en México, 2007, 2013*** el cual revela que los incrementos mensuales desde enero del 2007 acumulan un aumento de 69.6% al litro de Magna, y de 44.7%, en el caso de Premium. El valor del diesel se ha incrementado 106.4%. Estos aumentos afectan el poder de compra de la población. El mismo estudio indica que la compra de gasolina absorbe 3.4% del ingreso por persona. Casi el triple de lo que eroga un habitante de cualquier país desarrollado. Mientras que en México una persona destina 3.4% de su ingreso a la compra de gasolina, Reino Unido y Argentina tienen una relación gasto/ingreso de 1.8%. Alemania e Italia reportan 1.4%; Chile, 2.4%; Francia, 0.7%; España 0.9%; Brasil 1.2% y China 1.7% del ingreso per cápita usado para comprar gasolina.

Aún con los "gasolinazos", el consumidor mexicano recibe un subsidio, al tiempo que su consumo promedio anual es de 397 litros por persona, superior a muchos países de Europa y Asia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en el primer cuatrimestre del año en curso el subsidio fue equivalente a cuarenta y dos mil trescientos millones de pesos. El subsidio representó entre 3 y 4% del presupuesto del

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 26, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Conmutador: 5345 3000 exts. 3850 / 3246 marcobla@senado.gob.mx

Marco Antonio Blásquez Salinas
SENADOR DE LA REPÚBLICA

país para 2011. Este subsidio costó 212 mil millones de pesos en 2012. La re-estimación para 2013 es de 91 mil 206 millones de pesos.

No obstante el subsidio, el impacto no se circunscribe únicamente al alza del combustible ya que éste provoca la elevación de los precios en otros productos repercutiendo en el alza generalizada de precios ya que toda la mercancía de consumo tiene que ser trasladada de un lugar a otro y cuando sube la gasolina, por ende, suben todos los precios. A continuación un comparativo de los precios al arranque de la medida y al último incremento:

Precios 2007/2013

Combustible	Precio 2007	Precio 2013
Premium	8.31 pesos	$12.14
Magna	6.76 pesos	$11.58
Diesel	5.73 pesos	$11.94

"A ese ritmo de deslizamiento, en diciembre 2013 los consumidores mexicanos pagarían el litro a 12.25 pesos", concluye el documento de la H. Cámara de Diputados a que hemos hecho mención con anterioridad. Las familias mexicanas se ven privadas de satisfacer otras necesidades básicas ante la necesidad imperiosa de adquirir la gasolina.

De la necesidad de mayor transparencia.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados elaboró el análisis denominado ***"Determinación de los precios de las gasolinas y el diesel en México"***. Entre sus conclusiones destaca el que el aumento mensual a las gasolinas que realiza el gobierno federal requiere de mayor transparencia. Señala también, en referencia a los aumentos a la gasolina, lo siguiente:

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 26, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Conmutador: 5345 3000 exts. 3850 / 3246 marcobla@senado.gob.mx

Marco Antonio Blásquez Salinas
SENADOR DE LA REPÚBLICA

"Exigen un mayor análisis sobre el marco jurídico que acoge los posibles cambios en la metodología y la definición de los responsables para su determinación".

El texto puntualiza también que el fortalecimiento de la transparencia obedece a la necesidad de esclarecer los factores que contiene la metodología inherente al mercado, los que inciden en los consumidores y aquellos que afectan las finanzas públicas.

Se señala que se deben reformular los esquemas para la determinación de precios, dotándolos de selectividad y objetivos temporales precisos, con eficacia en el sentido de preservar los mecanismos de los precios y potenciar la expansión del mercado, así como la procuración de la estabilidad de los ambientes social, económico y político.

Indica además que la modificación de los precios sin una visión integral ni la participación plena de los responsables que están definidos en el marco legal, podría significar costos económicos para los individuos y falta de saneamiento en las finanzas públicas.

Además, aclara, con la intervención de otros actores se evita que una sola institución extralimite sus capacidades, lo que mejora la asignación de recursos y mejora la calidad y disponibilidad de información; de lo contrario, se crean mecanismos de decisión rígidos y centralizados que inhiben la participación de algunos grupos y favorecen a otros.

Finalmente, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) menciona que en esos mandatos legales no existe la obligatoriedad para los responsables de transparentar las decisiones que se toman en la política de precios, ni de dar a conocer los análisis técnicos que sustentan las modificaciones que hasta la fecha ha concretado el gobierno federal.

Bajo el contexto anterior, esta iniciativa recoge dichas valoraciones y las incorpora al proyecto de decreto propuesto para el efecto de que el Banco de México expida criterios que sirvan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer la facultad derivada del Artículo 31, fracción X e la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En otras palabras, se trata de que al fijar los precios de las gasolinas, la Secretaría procure mantener la estabilidad del poder adquisitivo de las familias mexicanas. Conviene transcribir el precepto correspondiente de la Ley del Banco de México:

> Artículo 2.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 26, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Conmutador: 5345 3000 exts. 3850 / 3246 marcobla@senado.gob.mx

Marco Antonio Blásquez Salinas
SENADOR DE LA REPÚBLICA

como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Bajo la convicción de que las familias mexicanas deben disfrutar de precios acordes a la condición de la Nación de propietaria original del petróleo, sin pasar por alto la necesidad de re-inversión de PEMEX, me permito poner a consideración de esta Cámara de Senadores el siguiente proyecto de,

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PARRAFOS IN FINE A LA FRACCION I DEL ARTICULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y EL ARTICULO 24 BIS A LA LEY DEL BANCO DE MEXICO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan dos párrafos in fine a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Bienes y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2°-A...

I...

Del a) al f)...

Del 1 al 6...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará en la fórmula para calcular el precio de las gasolinas los factores siguientes:

I. La armonización del precio internacional que se tome como referencia al efecto con el costo de producción nacional hasta colocar el combustible en el punto de venta final,
II. La ponderación que haga el Banco de México sobre el precio de las gasolinas en función de su atribución de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación los factores que haya tenido en cuenta para fijar los precios de las gasolinas y el razonamiento correspondiente.

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 26, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Conmutador: 5345 3000 exts. 3850 / 3246 marcobla@senado.gob.mx

Marco Antonio Blásquez Salinas
SENADOR DE LA REPÚBLICA

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 24 bis a la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 24 bis.- El Banco de México expedirá los criterios que permitan armonizar el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda con la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fijar el precio de los combustibles a que se refiere el artículo 31, fracción X e la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS

México, Distrito Federal a 24 de Julio de 2013.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

msalaiza.senado@gmail.com Ext. 5302

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 26, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Conmutador: 5345 3000 exts. 3850 / 3246 marcobla@senado.gob.mx

DE LOS DIPUTADOS RICARDO MONREAL ÁVILA, ALFONSO DURAZO MONTAÑO Y RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.



DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA



DIP. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

RICARDO MONREAL ÁVILA, ALFONSO DURAZO MONTAÑO y RICARDO MEJÍA BERDEJA integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente **Iniciativa con Proyecto de Decreto Que Adiciona el Artículo 31 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal** al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro del sistema constitucional mexicano se encuentran dispositivos referentes a la atribución exclusiva del Senado de la República para ratificar los nombramientos de los Empleados Superiores de Hacienda, designados por el Presidente de la República, lo anterior con fundamento en los artículos 76, fracción II y 89, fracción III, de nuestra Carta Magna, pero a la fecha dicha reglamentación no ha cobrado la relevancia que merece.

La función ratificadora del Senado es una de contrapesos sobre el Poder Ejecutivo, ya que por ser la economía un factor real de poder y en especial la materia hacendaria, se inserta en el texto constitucional, significando con ello, una excepción a la facultad presidencial de nombrar y remover libremente a los altos funcionarios de la Administración Pública Federal.

La validez de esta excepción se funda en el principio de equilibrio de poderes que, en todas las constituciones mexicanas se han otorgado al Congreso de la Unión.

La atribución de ratificar a los empleados superiores de Hacienda, cuenta con numerosos antecedentes constitucionales, tales como los artículos 110, fracción VI, de la Constitución Federal de 1824, en la cual se consagró la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar a los "empleados de la oficinas generales de Hacienda", sin especificar cuáles eran.

La Constitución de 1836, también consagró en su artículo 52 fracción III, la función de ratificar a los altos empleados de Hacienda, pero tal facultad la atribuyó no al Senado, sino a la Cámara de Diputados. Ésta misma disposición se repitió en el segundo proyecto de Constitución de 1842 en su artículo 74.

El proyecto de Constitución sometido al Congreso Constituyente del 56 no contemplaba a tales funcionarios, sino que, por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez, fue incluida en la fracción respectiva, manifestando que al Congreso de la Unión le correspondía la participación en el nombramiento de todos aquellos funcionarios que manejaran el tesoro público, denominados altos empleados de Hacienda, entre los cuales se cuentan ministros tesoreros administradores y empleados de aduanas.

En el mismo Congreso Constituyente de 1856-57, el Diputado José Antonio Gamboa expresó que tales empleados superiores eran **los ministros, tesoreros, directores de rentas y administradores de correos y aduanas**. Ignacio Ramírez en forma más sistemática, encuadró como altos empleados de Hacienda, a todos aquellos funcionarios del ramo que efectuaran las funciones de recaudación, inversión y dirección.

Con estas consideraciones, la función de ratificación fue establecida originariamente en la fracción XXII, del artículo 72 de la Constitución de 1857; sin embargo, con las adiciones y reformas del 13 de noviembre de 1874, se transformó este precepto en la fracción II, del apartado B, del mismo artículo, quedando como atribución exclusiva del Senado de la República.

No obstante, durante la segunda mitad del siglo pasado, la denominación de cargos y la asignación de atribuciones, fueron objeto de múltiples cambios, debido a la desorganización administrativa y a la precaria situación económica del país, que obligó a la variación de políticas y de organismos.

Por ello, representa un serio problema, no sólo saber quiénes son los empleados superiores, sino también determinar cuál es el ramo de Hacienda al cual deben referirse dichos empleados.

Los decretos antes mencionados no detallan que tal ramo de Hacienda se reducía, en esa época, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino que además de esta Secretaría se encontraban las Oficinas Generales, cuyas atribuciones compartían la función hacendaria del Estado.

La expresión "empleados superiores de hacienda" debe circunscribirse a los jefes de esas oficinas generales y a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando implicaran funciones de recaudación o de distribución de los caudales públicos.

Mediante el reglamento del 16 de agosto de 1861 se permitió la creación de una Oficina General, a la cual se le confió la función de recaudar las rentas nacionales. Su titular, como todo funcionario dependiente de la Secretaria de Hacienda, tenía que ser ratificado por el Senado, dejando en claro que ningún dependiente de la citada Secretaría, está excluido del concurso de la Cámara Alta.

Ahora bien, la respuesta final y actual sobre quiénes son los empleados superiores de Hacienda, difiere en mucho con la que no se pudo dar en el siglo pasado, pues aunque pueden anotarse algunas constantes para determinarlos, resulta una interpretación analógica, fuente de errores y de criterios maleables políticamente para fines completamente distintos a aquellos que los constituyentes determinaron.
La disposición constitucional resulta totalmente ambigua, y lo que es más grave, lo es desde 1917.
Hoy por hoy, la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que:

> *"Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:*
> *...*
> *II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;*
> *..."*

Sin embargo, no existe aún en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la determinación de quienes son los empleados superiores de Hacienda, por lo que el Ejecutivo no tiene la obligación de someter los nombramientos que haga para las oficinas de Hacienda, pues la falta de norma jurídica impide no solamente que se conozca quiénes son los empleados a quienes se refiere la Constitución, sino los trámites que deban observar para la ratificación de éstos.
El artículo 239 numeral 2, y 275 del Reglamento del Senado de la República en su fracción V, estipula cuales son los nombramientos, hechos por el Presidente de la República, los cuales deben estar sujetos a ratificación, y en ellos se menciona a los Empleados Superiores de Hacienda.
Aunque también se menciona que será a través de un acuerdo por parte de la Mesa Directiva la que especificará cuáles y cuántos son, a libre albedrío, los cargos a considerar.
En el acuerdo que para esta nueva administración Federal se entendió como "empleados superiores de Hacienda", se encuentran los titulares de las siguientes áreas:
1.- Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;
2.- Subsecretario de Egresos;

3.- Subsecretario de Ingresos;
4.- Procurador Fiscal de la Federación;
5.- Tesorero de la Federación;
6.- Jefe del Servicio de Administración Tributaria;
7.- Administrador General de Recaudación;
8.- Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;
9.- Administrador General de Aduanas;
10.- Administrador General Jurídico;
11.- Administrador General de Grandes Contribuyentes;
12.- Jefe de Unidad de Crédito Público, y
13.- Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.

Sin embargo, es inconcebible que en el acuerdo en comento sean sujetos a ratificación sólo algunas Administraciones Generales del Servicio de Administración Tributaria y Jefes de Unidad de la SCHP.

El acuerdo antes mencionado no contempla a los titulares de la Oficialía Mayor, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos descentralizados y desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de igual o mayor importancia como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los cuales también son designados directamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, la fracción constitucional en comento no es clara y no dice cuales son los empleados superiores de Hacienda, ni hace una enumeración de ellos.

Por lo tanto, lo que esta iniciativa propone es garantizar que los Titulares de las Comisiones antes mencionadas también sean ratificados por el Senado de la República, debido a la gran importancia que estas instituciones tienen sobre la Hacienda Pública de México.

Es por eso que proponemos, modificar la normatividad correspondiente de cada organismo, a favor de que también sean ratificados por la Cámara Alta.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de la H. Asamblea la presente iniciativa que adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 31bis de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 31bis.- Para los efectos del artículo 76 fracción II y 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entenderá por empleados superiores de Hacienda a los siguientes funcionarios:

1. **Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;**
2. **Subsecretario de Egresos;**
3. **Subsecretario de Ingresos;**
4. **Procurador Fiscal de la Federación;**
5. **Tesorero de la Federación;**
6. **Jefe del Servicio de Administración Tributaria;**
7. **Oficial Mayor;**

8. **Administrador General de Recaudación;**
9. **Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;**
10. **Administrador General de Aduanas;**
11. **Administrador General Jurídico;**
12. **Administrador General de Grandes Contribuyentes;**
13. **Jefe de Unidad de Inteligencia Financiera;**
14. **Jefe de Unidad de Crédito Público;**
15. **Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas;**
16. **Titular de la Comisión Nacional;**
17. **Titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, y**
18. **Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.**

Texto Vigente	**Texto Propuesto**
No existe este artículo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente.	**Artículo 31bis.- Para los efectos del artículo 76 fracción II y 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entenderá por empleados superiores de Hacienda a los siguientes funcionarios:** **1. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;** **2. Subsecretario de Egresos;** **3. Subsecretario de Ingresos;** **4. Procurador Fiscal de la Federación;** **5. Tesorero de la Federación;** **6. Jefe del Servicio de Administración Tributaria;** **7. Oficial Mayor;** **8. Administrador General de Recaudación;** **9. Administrador General de Auditoría Fiscal Federal;** **10. Administrador General de Aduanas;** **11. Administrador General Jurídico;** **12. Administrador General de Grandes Contribuyentes;** **13. Jefe de Unidad de Inteligencia Financiera;** **14. Jefe de Unidad de Crédito Público;**

	15. Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; **16. Titular de la Comisión Nacional;** **17. Titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, y** **18. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.**

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República a los 31 días del mes de julio de 2013.

DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.



SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES ESTACIONALES

La que suscribe, **DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO**, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de ésta Cámara de Senadores, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En fecha 19 de febrero del año en curso[9], la suscrita presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en materia de trabajadoras y trabajadores estacionales, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

Al respecto, la Iniciativa de mérito fue declarada *precluída* por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en fecha 15 de julio del presente año, según se informa en la comunicación emitida a través de la *Gaceta Parlamentaria*, número 3813, cito:[10]

> "Honorable Asamblea
>
> En cumplimiento del punto primero del acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de ley o decreto cuyo plazo o prórroga para ser dictaminadas ha precluído o vencerá en el lapso restante del primer año de ejercicio, aprobado por el pleno el 30 de abril del año en curso, y con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia declara como precluídas las siguientes iniciativas que no fueron dictaminadas dentro del plazo reglamentario correspondiente:"
>
> 1. (…) a la 19 (…)

[9] Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, "Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adicional diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, México, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, LVII Legislatura, Diario de los debates 6, Segundo Periodo Ordinario, martes 19 de febrero de 2013, en línea, dirección, URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=3&id=41096 [consulta: 28 de julio de 2013

[10] Comunicación de preclusión relativa a la "Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social", México, Cámara de Diputados, LVII Legislatura del Congreso de la Unión, *Gaceta Parlamentaria*, año XVI, número 3813, lunes 15 de julio de 2013, documento en línea, dirección URL: http://gaceta.diputados.gob.mx/ [consulta:29 de julio de 2013].

20. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
Presentada por la senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, PRI
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
Segunda sección.
Expediente 1287.
Fecha sesión: 21 de febrero de 2013.
Fecha vencimiento: 3 de julio de 2013.

21(…) a la 37 (…)

Respecto de ello, considero lo siguiente:

1. La importancia que reviste el tema en cuestión, relativo al derecho a la seguridad social de las y los trabajadores estacionales detallada en la Iniciativa de mérito, es digno de su discusión y análisis en el Congreso de Unión.

2. Es recomendable, realizar consultas públicas plurales, respecto al tema, con la finalidad de que participen todos los sectores involucrados, tales como el campesino, los y las jornaleras, autoridades de los diferentes órdenes en la materia, organismos de particulares, así como especialistas de la comunidad científica local y nacional, entre otros, y;

3. Es pertinente que las comisiones legislativas a las que les corresponda el turno sobre el presente asunto legislativo, se apoyen para su Dictamen, en valoraciones de impactos presupuestarios, principalmente del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de Cámara de Diputados de acuerdo a la legislación vigente, entre otros estudios de viabilidad técnica y financiera.

4. Establecer reuniones bicamerales de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, a fin de encontrar puntos de confluencia que permitan establecer soluciones viables a la problemática de las y los jornaleros agrícolas y sus derechos de acuerdo al marco constitucional vigente y a los instrumentos internacionales en la materia.

Por lo anteriormente fundado, la suscrita Senadora de la República, presenta nuevamente, en sus términos originales de fecha 19 de julio del año en curso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en matera de trabajadoras y trabajadores estacionales de acuerdo a lo siguiente:

"Con la promulgación de la Constitución Política de 1917, el Estado mexicano se distinguió por ser la primera en reconocer a nivel constitucional las garantías y los derechos de las clases trabajadora y campesina, constituyéndose de esta forma en el primer Estado Social de Derecho, el cual enarbola como valores fundamentales la igualdad y la justicia social.

En efecto, nuestra Constitución, en su artículo 123 y, posteriormente, la Ley Federal del Trabajo, establecieron los derechos fundamentales de los trabajadores con el objeto de lograr el equilibrio entre los factores de la producción y una distribución más justa de la riqueza. Además, con la finalidad de garantizar el bienestar de la clase trabajadora y sus familias, se estableció su derecho a gozar de seguridad social, creándose para tal efecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, a más de un siglo de nuestra gesta Revolucionaria, el derecho al trabajo y los beneficios de la seguridad social no han llegado a todos los trabajadores, ya que han quedado excluidos los trabajadores

más desprotegidos y vulnerables del país, los trabajadores del campo.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo levantada en el año 2012 por el INEGI, revela que en nuestro país existen 6.5 millones de trabajadores en el sector agropecuario, localizados en zonas no urbanas.[11] De este universo, 1,727.349 personas trabajan por su cuenta explotando su parcela, es decir, practican la agricultura de subsistencia, y 2,653,711 personas declararon haber percibido un ingreso por un trabajo remunerado con un patrón, cifra mayor en aproximadamente 400,000 personas respecto de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2007.

Sin embargo, según datos de la encuesta de 2007, el 84 por ciento de los trabajadores del sector declaró haber trabajado menos de 48 horas a la semana, mientras que el otro 16 por ciento, declaró haber laborado semanas completas, lo que es un claro indicador de que en el sector agropecuario el trabajo no es permanente y la demanda de fuerza laboral se da en forma estacional.

Esto está determinado porque en las actividades agropecuarias el trabajo va en relación a la duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año. El trabajo, por tanto, es intermitente y está sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas, por lo que es de una alta demanda laboral al final del ciclo (con la recolección de las cosechas), pero el resto del año no hay labores que desempeñar. Asimismo, existe una alta rotación patronal, ya que los trabajadores llegan a prestar su fuerza laboral a diversos patrones en un mismo periodo de 27 semanas, incluso a diversos patrones en una misma semana.

Este tipo de trabajo, es prestado por trabajadores conocidos como "jornaleros agrícolas", quienes se caracterizan por ser personas con un alto grado de marginación que, ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, se ven obligados a trasladarse a los Estados en los que se encuentra concentrada la producción agrícola, para laborar en los campos.

Datos del "Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas" (en adelante "PAJA") de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que se trata de un universo de, al menos, 3.3 millones de personas, de los cuales al menos 1.2 millones son migrantes.

Esta población está conformada en un 42.6 por ciento por mujeres, un 57.4 por ciento por hombres, y cerca del 40 por ciento de la población total son menores de 15 años. Asimismo, el 40 por ciento de esta población pertenece a algún grupo indígena; por su número, destacan mixtecos (42.7 por ciento), nahuas (23.6 por ciento) y zapotecos (12.4 por ciento), el resto se distribuye en 16 grupos diferentes.

Cabe señalar además, que el 29 por ciento de los jornaleros de 15 años y más es analfabeto. Poco más de la mitad de los jornaleros (55.6 por ciento) migra en grupos familiares y cerca del 61.1 por ciento de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela; 12 por ciento no cuenta con acta de nacimiento y casi el 90 por ciento no tiene cartilla militar. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Estos datos, sumados al hecho de que en muchos casos se ven involucrados en relaciones laborales informales, prestaciones de seguridad social inexistentes en muchas regiones del país, y la incorporación de los menores al trabajo, la mayoría de las veces con la anuencia de los padres, para obtener un mayor ingreso familiar, son una muestra del grado de marginalidad y pobreza de este sector de la sociedad.

Cabe mencionar que los programas de gobierno que se han desarrollado para atenderlos son apenas un

[11] La "Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012", elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el número de trabajadores del sector agropecuario asciende a 6,580,206.

paliativo, ya que para el desarrollo de muchos de estos programas no se toman en cuenta ni las diferencias regionales del país ni la diversidad cultural del campesinado mexicano, ni la característica propia de las actividades agropecuarias que son de carácter aleatorias. Asimismo, no representan una solución de fondo a las necesidades de esta clase de trabajadores, la cual únicamente podrá provenir de las reformas legislativas que garanticen el goce de los derechos que en estos momentos sólo tienen en papel.

En efecto, hasta ahora el Estado ha mostrado su incapacidad para hacer efectiva la garantía constitucional inherente al derecho al trabajo durante todo el año para los trabajadores estacionales del campo. Para ellos, que tienen trabajo cuando mucho durante 27 semanas, el resto del año esta garantía se convierte en letra muerta, y con ello también el derecho a la seguridad social.

Es importante señalar que en esta Legislatura ya dimos los primeros pasos para la protección de los jornaleros agrícolas al discutir y aprobar la reforma laboral. Efectivamente, a la iniciativa de reforma laboral que presentó el Presidente de la República el pasado 1º de septiembre de 2012, los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional propusimos y aprobamos modificaciones a fin de reconocer a los trabajadores estaciones del campo en los siguientes términos:

Ley Federal del Trabajo

"Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón.

...

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o ***estacionales****."*

"Artículo 279. Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural."

Sin embargo, aún queda pendiente modificar la Ley del Seguro Social a efecto de ajustar sus disposiciones a la reforma de la Ley Federal del Trabajo y garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores estacionales del campo.

Al respecto, cabe mencionar que, del total de la población ocupada en el sector agropecuario, para el año 2006 los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante "IMSS") sumaban únicamente 456 mil trabajadores. Es decir, el 93 por ciento de los 6.5 millones de trabajadores del campo estaban excluidos de la cobertura de la seguridad social.

En el caso de los jornaleros agrícolas afiliados las cifras son aún más alarmantes, ya que para el año 2006,

los trabajadores eventuales del campo afiliados sumaban apenas 140,000 personas. Cifra que no ha aumentado significativamente en los últimos años, toda vez que el IMSS reportó que para el año 2011 el número de afiliados era de apenas 147,909. Si se toma en cuenta que el número de jornaleros agrícolas puede llegar a los 3.3 millones de personas, están excluidos de la seguridad social más del 97 por ciento de estos trabajadores.

Cabe señalar que la seguridad social en el campo está concentrada principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, que aportan el 89% de las cuotas de origen agrícola al IMSS. El otro 11% proviene de la agricultura del resto de los 28 estados del país, a pesar de que en el Noroeste sólo se cultiva el 9% de los 22 millones de hectáreas; trabajan apenas el 12% de los jornaleros y se genera el 14.5% del PIB agrícola nacional. En tanto que en las otras regiones del país, donde reciben sus salarios 2.0 millones de trabajadores del campo, importantes sectores de la agricultura no contribuyen a la seguridad social.

Esto pone de manifiesto que son los trabajadores del campo una de las clases más desprotegidas del país, los cuales, junto con sus familias, alcanzan la cantidad aproximada de 10.5 millones de mexicanos a los que la seguridad social, con sus limitantes, no ha podido otorgarles los beneficios que les corresponden, principalmente en los Estados del Sureste.

La falta de afiliación en el IMSS es ocasionada por una gran diversidad de factores, dentro de los que cabe mencionar el alto costo que representa para los patrones del campo cubrir las aportaciones de seguridad social de sus trabajadores, la alta rotación de los trabajadores y el enorme burocratismo que impone el Instituto para que las patrones agrícolas puedan cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, un factor esencial es la naturaleza estacional del trabajo del campo lo que, aunado a los costos de inscripción en el IMSS, hacen incosteable para los empleadores la afiliación de sus trabajadores a dicho Instituto. En efecto, como lo señala la propia encuesta, el trabajo en el sector agropecuario es predominantemente estacional, con una proporción muy baja de trabajadores de planta. El trabajo, por tanto, es intermitente, volátil y siempre sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas.

Esto queda de manifiesto en los propios datos publicados por el IMSS, los cuales muestran el comportamiento marcadamente estacional del trabajo del campo, toda vez que el mayor número de trabajadores no permanentes se alcanza en el mes de marzo y el menor registro se presenta alrededor del mes de julio de cada año.

El alto costo que representa la seguridad social para el campo y la complejidad administrativa que impone la ley vigente, son los principales obstáculos para que un mayor número de patrones se registren y un mayor número de jornaleros sean afiliados. En los últimos 10 años, el costo de la seguridad social al campo se ha incrementado 10 veces, afectando seriamente la economía de los productores que ya cotizan, lo que ha desincentivado la afiliación de más trabajadores. Las propias cifras del IMSS confirman que a mayor costo, menor afiliación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es una extraordinaria institución, pero su accionar es fundamentalmente urbano. En efecto, en las ciudades con un solo cotizante el IMSS se obliga a prestar atención a toda la familia hasta que los hijos terminan su educación universitaria y se incorporan a la fuerza de trabajo. En cambio, en el campo la incorporación de la familia a la fuerza de trabajo ocurre desde los 16 años y en una sola familia puede haber más de 3 cotizantes.

A diferencia de las ciudades, en el campo la actividad es estacional y por tanto el tiempo de exposición al riesgo no supera las 27 semanas al año. Mas del 80% de las actividades son manuales y el contacto con maquinas y herramientas es mínimo en comparación con la industria y los servicios. Las altas primas por

riesgos de trabajo, con que son tasadas las actividades agropecuarias, inciden en el costo de la seguridad social lo que en los hechos termina ahuyentando la afiliación.

Asimismo, los trabajadores afiliados en ningún momento logran laborar el número de semanas consecutivas suficientes para recibir la protección de la seguridad social. Por ejemplo, el artículo 102 vigente de la Ley del Seguro Social, establece que la trabajadora, para obtener el derecho a recibir su seguro por maternidad, debe cotizar al menos 30 semanas durante los últimos doce meses, cuando las trabajadoras jornaleras laboran, a lo sumo, 27 semanas al año.

Sin embargo, el caso más dramático es el de los seguros del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, en donde se establece que un asegurado para poder obtener el derecho a recibir una pensión, debe acreditar haber laborado al menos 1,250 semanas. Si un trabajador urbano, que labora las 52 semanas al año, le toma 24 años en obtener su derecho a recibir una pensión, a un trabajador estacional del campo, que labora 27 semanas al año, le toma al menos 46 años en cumplir con el número de semanas solicitados.

Por ello resulta inaceptable que el actual modelo de la Ley del Seguro Social y el IMSS, pretendan trasladar el modelo urbano de altos costos de seguridad social a los trabajadores estacionales del campo, ya que en las ciudades los obreros trabajan todo el año y en el campo cuando mucho seis meses. De ahí que sea inequitativo pretender cobrar las mismas contribuciones que pagan los patrones y trabajadores de las ciudades a los que hacen producir la tierra, así como exigir que los jornaleros cubran el mismo número de semanas para obtener el derecho a recibir las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social.

La iniciativa que se propone, parte del principio indiscutible de que para que los trabajadores estacionales del campo tengan acceso a todos los beneficios de la seguridad social, primero tienen que estar afiliados.

Lo anterior sólo podrá lograrse si se toma en consideración que la actividad económica del sector primario está condicionada por múltiples factores tanto ambientales, como sociológicos y económicos, por lo que la actividad del campo no puede estar gravada en la misma forma que lo está la actividad urbana.

La forma de cotizar debe ser diferenciada en tanto que el trabajador del campo sólo puede laborar durante medio año en el mejor de los casos. Sin embargo, las necesidades de salud, cuidado de sus hijos, jubilación y retiro para los trabajadores eventuales y estacionales del campo son las mismas que para los trabajadores urbanos. Un sistema de cotización justo debe considerar esta circunstancia para garantizar el acceso de los trabajadores del campo a los seguros y beneficios de la seguridad social.

Por otra parte, la infraestructura de Guarderías y Clínicas para la atención de jornaleros y madres trabajadoras en el campo, es insuficiente para los incrementos en la demanda estacional que generan los jornaleros.

Apenas el 1% de las guarderías del IMSS están en el campo, y los esquemas de subrogación establecidos en las reglas de operación aprobadas por el Consejo Técnico, no fomentan el interés de los patrones en este esquema ya que el establecimiento del pago por los costos en los que incurrieron brindando estancia infantil a los hijos e hijas de los trabajadores, queda a la discrecionalidad del Instituto.

La capacidad del IMSS para prestar los servicios médicos en general, se ha deteriorado. Los indicadores de camas y consultorios por cada mil derechohabientes han caído más del 30% en los últimos 15 años, en tanto que la población asegurada, esencialmente urbana, ha crecido un 26%.

La expectativa de que la demanda de servicios de los trabajadores estacionales del campo afiliados y sus familias, sea cubierta apropiadamente por el IMSS, está cada día más lejana y esa carga está siendo subsanada gradualmente por algunos patrones bajo su propio costo.

En razón de lo anterior, para garantizar la seguridad social en el campo, la participación del gobierno es indispensable e irremplazable, pero debe ser soportada por la participación activa de los patrones del campo, sin que el gobierno delegue sus obligaciones constitucionales. En ese sentido, se debe garantizar la reversión del costo institucional de los servicios prestados por el patrón en subrogación de las obligaciones del Estado.

Por ello, resulta impostergable modificar diversos artículos de la Ley del Seguro Social, a fin de que se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales en el campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social.

Es el momento de hacer del campo mexicano el detonante del crecimiento y soporte del país y, para ello, se deben garantizar las mejores condiciones a sus principales recursos humanos, que son los trabajadores estacionales.

En ese sentido, como lo muestran las cifras del INEGI, si bien el sector agropecuario había sido el único que había mostrado un crecimiento constante desde la crisis económica de 2008 (ya que en el año 2009 el Producto Interno Agropecuario creció 1.8 por ciento mientras el Producto Interno Bruto Nacional sufrió una caída del 6.5 por ciento, en el año 2010 el PIB Agropecuario subió 5.7 mientras que el PIB Nacional creció 5.5 por ciento), en el año 2011 el PIB Agropecuario sufrió una caída del 0.6 por ciento, a pesar de que el PIB Nacional creció 3.9 por ciento.

Por ello es necesario adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer dicho sector y garantizar la creación y mantenimiento de las plazas laborales existentes.

La Iniciativa que ahora se propone busca no solo proteger los empleos, sino promover la mejora en las condiciones de cada trabajador estacional en el campo, fortaleciendo la seguridad social, y promoviendo la inversión privada.

La iniciativa que ahora se propone logra dicho objetivo, considerando que:

1. Se incrementa la demanda laboral en el cada vez más abandonado campo mexicano al mejorarse, radicalmente y de forma sostenible:

a. La determinación de las aportaciones de cuotas obrero-patronales con un factor benéfico para el trabajador y accesible al patrón, y

b. La vigencia del derecho a la seguridad social, aún en las temporadas en que no se encuentre laborando.

2. Se promueve la reinversión del capital privado en las actividades primarias al establecer un régimen de aportación y corresponsabilidad de los patrones y el Estado, sin que éste último delegue su obligación de prestar servicios de salud a toda la población y, en particular, a la de las zonas de mayor marginación en nuestro país.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer los mecanismos que garanticen:

- *El acceso a la seguridad social al mayor número de trabajadores estacionales del campo.*
- *La distinción entre trabajador estacional y eventual del campo, y de estos con los trabajadores eventuales de las zonas urbanas, tal como se logró con la reforma laboral.*

- *Un registro del trabajador estacional del campo, a fin de garantizar su protección desde el inicio de sus labores.*

- *La atención médica durante todo el año a pesar de haber laborado de forma intermitente durante el mismo.*

- *El cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales, en la justa proporción que requiere una actividad intermitente como la que realizan los trabajadores estacionales del campo.*

- *La corresponsabilidad del Estado y los patrones en el otorgamiento material y humano de la seguridad social en aquellos lugares en que el Instituto Mexicano del Seguro Social no pueda garantizar una inversión permanente ante una demanda volátil.*

- *La retribución justa por concepto de reversión del costo institucional a los patrones que cumplan con su obligación solidaria de otorgar seguridad social.*

- *La disminución del número de semanas que un trabajador debe cotizar para poder acceder a los seguros y beneficios de la seguridad social.*

El régimen vigente para los trabajadores del campo no contempla las peculiaridades que tiene un trabajador estacional, por lo que es necesario modificar el marco normativo actual, para brindar la seguridad social que requieren, además de la creación de un sistema de participación rentable, compartida y de amplio espectro para los jornaleros y patrones.

El nuevo régimen debe considerar la cobertura de los servicios y demandas aun cuando no se encuentren laborando en determinado periodo del año, pero se encuentren inscritos y hayan cotizado como trabajadores estacionales. Esto beneficiaría además a sus dependientes económicos. De ahí la necesidad de que la clase trabajadora estacional del campo tenga los mismos derechos que el resto de los trabajadores del campo.

Por otra parte, para solucionar el problema de la falta de atención médica, es necesario reconocer una nueva modalidad del trabajo en el campo, que refleje las características especiales del tipo de trabajo desarrollado.

La seguridad social es una corresponsabilidad entre Estado, patrones y trabajadores; sin embargo, esta responsabilidad debe ser regulada por un sistema de normas que garantice la sustentabilidad de la seguridad social a lo largo del tiempo.

A los trabajadores estacionales se les brindarían los beneficios de los seguros que presta el IMSS para el resto de los trabajadores, pero con un diseño tal que tanto Estado como patrones puedan sufragar en forma responsable y duradera, con la modificación de los factores para determinar las cuotas obrero-patronales.

Ahora bien, es una realidad que el IMSS, debido a su restricción presupuestal, tiene una cobertura limitada a nivel nacional de todos los seguros que ofrece, y esto es más notorio en el campo. A pesar del crecimiento en infraestructura para la prestación de servicios relativos a los seguros de ley, la misma se procura llevar a cabo donde existe una demanda más constante, regular o creciente, concentrándose de esta manera en zonas urbanas.

Para modificar esta situación, se propone rediseñar el esquema de subrogación. De esta forma, en beneficio de los trabajadores que laboran en áreas en las que no se prestan los servicios básicos de seguridad social, se pretende establecer un régimen de incentivos a los patrones para la creación de servicios básicos de

seguridad social: atención médica, maternidad y guarderías.

En todo caso, el régimen de subrogación establece que el patrón deberá recibir por concepto de reversión o contraprestación, al menos, el costo institucional que al IMSS hubiera representado la prestación del servicio a fin de garantizar la participación y la no simulación de los patrones.

Por otra parte, en la presente iniciativa se propone que, en materia de riesgos de trabajo, se establezca la cobertura al patrón y una fórmula de cálculo de la prima que redunda en la posibilidad del empleador de aportar al fondo de este seguro la tasa de la Clase I de 0.54355 del salario base de cotización, considerando que los riesgos en las actividades agropecuarias son mínimos, dada la alta proporción de actividades manuales y que la exposición al riesgo va en función del ciclo productivo que dura en promedio 27 semanas al año.

Cabe señalar que hoy día la agricultura está clasificada entre las actividades de la Clase III y la prima media de riesgos de trabajo que le corresponde es la de 2.59840 por ciento. Esta prima es comparable a la que tienen actividades como la fabricación de substancias químicas e industriales, resinas sintéticas, elaboración de pinturas, jabones, detergentes, fabricación de lavadoras, estufas, refrigeradores, alambres y cables de energía eléctrica, azulejos, por mencionar sólo algunas. Todas ellas son actividades en donde predomina el trabajo de planta y donde las fórmulas actuariales de los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento, consideran un periodo de exposición al riesgo de 300 días laborables al año, por lo que no son actividades equiparables o equivalentes a las labores propias del campo.

Por ello, esta es una de las principales causas que provocan el bajo índice de afiliación de los trabajadores del campo al IMSS. En ese sentido, al ser mayor el costo de una prima en este nivel de riesgo, se desalienta la inscripción de los trabajadores que, en el caso de la agricultura, están expuestos a un grado de riesgo que es mucho menor al que están expuestos trabajadores del sector de la transformación. Por tanto, en atención a que las labores del campo son actividades predominantemente manuales, en las que la exposición a máquinas y herramientas es menor que en ciertas áreas de la industria, y en las que la exposición al riesgo no es permanente, sino estacional y dura en promedio 27 semanas al año (equivalente a 155 días laborables en promedio, considerando el factor de 5.76 días laborables por semana al año), no se justifica la clase que actualmente tienen asignada conforme al artículo 73 de la ley vigente y por tanto, se propone que la prima de riesgos de trabajo para las actividades primarias sea la que le corresponde a la Clase I, de cero punto cinco por ciento sobre el Salario Base de Cotización.

Por otra parte, con la finalidad de facilitar el pago de las cuotas obrero-patronales, se propone el establecimiento de un salario de referencia, que brindará seguridad tanto a patrones como a trabajadores. Al respecto, es de señalarse que el salario de referencia que se propone, es el mismo que el Ejecutivo determinó y estableció en el "Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, y cuya vigencia se ha extendido mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero de 2008, 30 de diciembre de 2008 y 28 de Diciembre de 2010.

Al respecto, es de señalarse que no se propone que el Estado destine recursos demagógica e irresponsablemente con medidas paternalistas que no dan una solución de fondo, sino que garantice sólidamente el cumplimiento de su obligación constitucional de otorgar seguridad social a los más desprotegidos.

Finalmente, la presente iniciativa propone la creación de Formatos de Autorización para la Atención Médica, los cuales serán expedidos por el IMSS y entregados por los patrones a sus trabajadores, con la finalidad de evitar que se les niegue atención médica por no encontrarse actualizados los registros de afiliación del propio Instituto.

Son muchas las razones que se han considerado para plantear la propuesta que ahora se somete a la consideración de esta Soberanía, sin embargo, todas parten del hecho de que el Estado mexicano no ha podido garantizar a los trabajadores estacionales del campo el derecho constitucional inherentes a la seguridad social y a la estabilidad laboral.

La Iniciativa que proponemos busca replantear los modelos que ya se quisieron instrumentar en esta materia, pero que han probado su ineficiencia. Es necesario, simplificar el cumplimiento de las obligaciones patronales, favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano, reconocer las condiciones del trabajo en el campo para la determinación de las cuotas obrero-patronales; y permitir a los jornaleros el goce de una pensión al finalizar sus actividades laborales por el tiempo equivalente de cualquier otro trabajador.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de éste honorable Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

***ARTICULO ÚNICO**. Se reforman los artículos 5-A en sus fracciones XVIII y XIX, 12 en su fracción I, 15 en su fracción I, 102 en su fracción I, 122, 154 en su párrafo segundo, 162 en su primer párrafo, 237, 237-A, 237-B en sus fracciones II y III, 237-C, 237-D y 287; y se adicionan una fracción XX al artículo 5-A, un tercer párrafo al artículo 9 recorriéndose el vigente, un párrafo a los artículos 16, 28 y 73, un párrafo tercero al artículo 154 recorriéndose los subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 162 recorriéndose el subsecuente, un segundo párrafo al artículo 212, un segundo párrafo al artículo 240, y los artículos 237-E y 237-F en su totalidad, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:*

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: ….

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. ***Para efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la ley;***

XIX. Trabajador estacional del campo: personas física que es contratada para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

El trabajador estacional del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser considerado trabajador permanente.

Los trabajadores estacionales del campo accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la presente Ley. Los criterios de cotización, el cálculo de las semanas laboradas y la forma de registro, presentación de movimientos y pago de cuotas correspondientes, se ajustarán a lo previsto en esta

Ley y el reglamento respectivo.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural; y,

XX. Salario de referencia: El importe estimado como ingreso promedio diario de los trabajadores estacionales del campo, el cual se calcula de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-D de la presente Ley.

Artículo 9. *….*

…

Por lo que se refiere a empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas y, en general, a los patrones de trabajadores del campo, se estará específicamente a lo señalado en el Código Civil Federal para lo relacionado con siniestros, caso fortuito y fuerza mayor, así como a la regulación relativa a desastres naturales; éstos supuestos son una excluyente para el pago de las cuotas de los trabajadores permanente, eventuales y estacionales del campo, de conformidad con las reglas generales del Instituto y le corresponde al Consejo Técnico aplicar estas reglas.

…

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. *Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente, eventual* ***o estacional****, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;*

Artículo 15. *Los Patrones están obligados a:*

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles, ***salvo tratándose de patrones de trabajadores estacionales del campo, en cuyo caso los plazos serán los establecidos en el artículo 237, fracción IV, de esta Ley.***

II a IX ...

*Artículo 16****.*** *…*
…

…

I. ...

II. ...

Para los efectos del párrafo primero del presente artículo, no se contabilizarán los trabajadores

estacionales del campo.

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

El salario base de cotización de los trabajadores estacionales del campo, se ajustará a las disposiciones del Capítulo X del Título Segundo de la presente Ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 73. ...

……(Tabla)

……

La prima de riesgos de trabajo para los patrones con actividades agropecuarias que contraten trabajadores estacionales del campo, será la correspondiente a la Clase I de 0.54355 por ciento sobre el Salario Base de Cotización y no estará sujeta a lo que señala el artículo 74.

Artículo 102. ...

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio, ***salvo que se trate de una trabajadora eventual del campo, caso en el cual deberán estar cubiertas por lo menos doce semanas de cotización en ese mismo periodo;***

II. ...

Artículo 122. *Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización,* ***a menos que el asegurado siempre se hubiese desempeñado como trabajador estacional del campo, caso en el que bastará que tenga acreditado el pago de setenta y cinco semanas de cotización.***

En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez, sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas de cotización, salvo que se trate de un trabajador estacional del campo, caso en el cual bastará tener cubiertas setenta y cinco semanas de cotización.

Artículo 154. ……

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. ***Cuando el asegurado se haya desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, solo requerirá haber cubierto, al menos, seiscientas veinticinco semanas de cotización para gozar de las prestaciones correspondientes a este ramo.***

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

….

….

Artículo 162. *Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.* ***En caso que el asegurado se hubiere desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, para gozar de las prestaciones del seguro de vejez deberá haber cumplido sesenta y cinco años de edad y tener reconocidas seiscientas veinticinco semanas de cotización por lo menos.***

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

…

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

Tratándose de los patrones de trabajadores del campo, la obligación establecida en la fracción XIII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, se cumplirá mediante el pago de la prima establecida en el artículo 211 de la presente Ley.

Artículo 237. *Los trabajadores asalariados* ***de carácter permanente, eventual y estacional*** *en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan la presente ley y los reglamentos que correspondan.*

Los trabajadores estacionales del campo y sus patrones se sujetarán a las siguientes modalidades:

I. El Estado cubrirá las prestaciones en dinero y en especie, así como los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad.

II. Los patrones cubrirán en términos de la presente Ley las cuotas para los seguros de Riesgo de Trabajo, Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

III. Las cuotas patronales se calcularán con base en el salario de referencia establecido en los artículos 5-A, fracción XX, y 237-D de la presente Ley.

IV. Para el registro, presentación de movimientos, pago de cuotas y obtención de beneficios fiscales, los patrones deberán:

a) Registrarse en el Instituto dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de sus actividades.

b) Presentar mensualmente ante el Instituto la relación de movimientos afiliatorios en un plazo no mayor a ocho días hábiles posteriores al mes de que se trate.

El Instituto brindará la atención correspondiente a los trabajadores que aún no hubiesen sido registrados, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, previa acreditación de los mismos de su calidad de trabajadores estacionales del campo mediante el Formato de Autorización para Atención Médica para

Trabajadores del Campo (AMTC) emitido por el Instituto y expedido por el patrón de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-F de la presente Ley.

c) Pagar las cuotas correspondientes dentro de los diecisiete días hábiles del mes siguiente al de la presentación de la relación de trabajadores a que se refiere el inciso anterior.

V. Las demás que establezcan los reglamentos que correspondan.

Artículo 237-A. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, ***éstas sean insuficientes en función de la oferta y la demanda estacional de servicios*** *o no pueda atender a los trabajadores del campo por razones de distancia, especialidad médica u oportunidad para prestar los servicios de salud* ***y guarderías*** *que tiene encomendados, eximirá al patrón y a los trabajadores del campo de las contraprestaciones correspondientes; sin embargo, cuando los patrones, así como las organizaciones de los trabajadores, otorguen por su cuenta las prestaciones de enfermedades y maternidad, así como las de guarderías que le corresponden al Instituto****,*** *estos* ***podrá****n* ***celebrar convenios con el Instituto*** *en el que se incluya la compensación por los costos incurridos en la prestación de tales servicios****.***

Dichos convenios se celebrarán de conformidad con *las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico,* ***pero el pago por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, no podrán ser inferiores al costo por servicio equivalente que represente al Instituto, brindar la atención en la unidad más próxima.***

En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligados a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio Instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico. Dichas instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia deberán ser acordes a las circunstancias en que desarrolle su actividad el patrón del campo, dentro del medio rural en que se desenvuelve en virtud de que, de no poder dar el servicio el Instituto, éste no podrá exigir más de lo que pueda otorgar.

Artículo 237-B.- *...*

I. ...

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos ***y dentro de los plazos que establece la presente Ley y el reglamento correspondiente; y,***

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan ***la presente Ley y*** *los reglamentos respectivos.*

Artículo 237-C.- *Los patrones del campo podrán excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 27 de esta Ley como integrante del salario base de cotización* ***o de referencia, según el caso,*** *los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización* ***o de referencia, según el caso,*** *observando lo dispuesto en el artículo 29, fracción III de esta Ley. Para que el concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya como integrante del salario base de cotización, deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.*

Artículo 237-D. Los patrones del campo que contraten trabajadores estacionales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el

factor de 1.68, sobre el salario mínimo diario general vigente del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario real percibido por el trabajador.

El salario resultante de aplicar el factor de 1.68 al salario mínimo diario general vigente, se actualizará anualmente en base a los incrementos porcentuales que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para cada una de las zonas económicas determinadas.

Articulo 237-E. *Para el cumplimiento de los servicios de salud, el Instituto expedirá los formatos de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC), mismos que obtendrá el patrón del campo sin costo alguno al inicio de cada ciclo agrícola o al principio del año, según prefiera.*

Cuando alguno de los trabajadores del campo requiera servicios médicos, deberá de obtener del patrón uno de los formatos firmados, conservando el patrón del campo el talón del mismo para futuras revisiones del Instituto. El derechohabiente entregará el formato AMTC en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS Régimen Obligatorio o en la Unidad de Medicina Rural del IMSS Oportunidades que corresponda, a fin de acceder a los servicios médicos. Los formatos serán de vigencia anual, intransferibles, inalienables y personales.

El patrón que requiera más formatos durante el ciclo agrícola que corresponda o durante el año, deberá solicitarlo por escrito a la Subdelegación que le corresponda, a fin de que ésta pueda proporcionarle formatos adicionales, previa comprobación del uso total de los que se le hubieren entregado, conforme a los informes mensuales proporcionados por el mismo patrón del campo.

Los formatos que no hayan sido utilizados al término del año calendario, deberán ser devueltos al Instituto y podrán ser canjeados por los del siguiente año calendario.

El patrón del campo y los trabajadores estacionales del campo a quienes se les otorguen, serán responsables del correcto uso de los formatos AMTC que hayan recibido.

En caso de que se propicie u obtenga algún beneficio indebido, con motivo de la utilización del formato AMTC, el patrón o trabajador estacional del campo, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 314 de la Ley.

Los patrones del campo deberán informar, después de cada ciclo agrícola o anualmente para los dedicados a actividades ganaderas, al Instituto en la subdelegación correspondiente, por escrito y bajo protesta de decir verdad, sobre los formatos usados en el año anterior, indicando el nombre del trabajador a quien se le haya proporcionado cada formato, el número de folio del formato y la fecha de entrega del formato. Asimismo, deberá indicar sobre los formatos usados, si corresponden a una enfermedad o a un accidente de trabajo.

Artículo 237-F. Es obligación de las personas físicas o morales que adquieran cultivos en pie, así como explotaciones ganaderas, acuícolas o forestales, respecto a los cuales se requiera el empleo de trabajadores estacionales o eventuales del campo para culminar el ciclo productivo, registrarse y registrar a sus trabajadores ante el Instituto a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha en que tales actos ocurran.
El instituto deberá proveer de los medios técnicos para facilitar y vigilar el cumplimiento expedito de la presente obligación.

Artículo 240. ……

Los trabajadores estacionales del campo y sus familias disfrutarán de manera gratuita de las prestaciones aludidas en el párrafo anterior en los períodos en que permanezcan desempleados, siempre y cuando acrediten que en los doce meses anteriores, cubrieron ante el Instituto por lo menos veintisiete semanas de cotización como asegurados, en los términos del reglamento respectivo.

Artículo 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de esta Ley, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. Quedan exceptuados de ser embargados, así como ser sustraídos, o inmovilizados los bienes materiales de producción agropecuaria, las cuentas bancarias destinadas a tales operaciones y los predios y terrenos en que se realicen o empaquen los cultivos o produzcan los animales; se exceptúa lo anterior si los adeudos al Instituto superan el setenta por ciento del valor de avalúo del predio o predios rústicos donde se llevan a cabo tales labores.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. *El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.*

Segundo. *Los patrones de trabajadores estacionales del campo que a la entrada en vigor del presente Decreto no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, podrán hacerlo en la forma y términos establecidos en el artículo 237, fracción IV, inciso a), de la Ley del Seguro Social, sobre la base de 1.05 salarios mínimos como Salario Base de Cotización y con las actualizaciones y recargos que correspondan. No se impondrán multas o algún otro tipo de sanción a los patrones que se acojan a lo dispuesto en el presente Artículo Transitorio.*

Tercero. *El Director del Instituto del Seguro Social y los titulares de las direcciones, secretarías, unidades, órganos y coordinaciones, así como de sus delegaciones estatales, serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones en el otorgamiento de los servicios y prestaciones que deberán proporcionar a los trabajadores estacionales del campo en los términos del presente Decreto, y conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos."*

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Salón de Sesiones del Senado de la República, a 31 de julio de 2013

DEL DIP. MARCOS AGUILAR VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I Y EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

El que suscribe, **MARCOS AGUILAR VEGA**, con carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA Y EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,** con el objeto de incrementar la recaudación a través del dictamen de estados financieros para efectos fiscales, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El dictamen de estados financieros para efectos fiscales fue creado por el Gobierno Federal el 21 de abril de 1959 mediante un Decreto Presidencial, con el objeto de ampliar indirectamente las facultades de fiscalización y recaudación, así como para comprobar el correcto y oportuno cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Como auxiliar de las autoridades en el proceso fiscalizador se eligió al Contador Público, en razón de la estrecha relación que guarda la profesión con la práctica contable y de auditoria así como la pericia, disciplina, honradez y responsabilidad que desde hace más de cien años ha demostrado la Contaduría Pública organizada en nuestro país.

El dictamen ha trascendido al tiempo, -- que ahora se cuenta en más de 50 años de antigüedad --, así como demostrado su valía por ser una herramienta eficaz para la fiscalización, hecho que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reconocido de forma expresa al haber implementado reformas a su alcance, contenido y forma de presentación, que al día de hoy involucra el uso de un software especializado y una poderosa plataforma de recepción y análisis conocida como Sistema de Presentación del Dictamen (SIPRED).

El dictamen de estados financieros para efectos fiscales actualmente se integra con la información establecida en el artículo 32-A y 52 del Código Fiscal de la Federación en conjunción con los artículos 60 a 82 de su Reglamento.

Como muestra de la trascendencia de este instrumento jurídico que está a disposición tanto de los contribuyentes como del SAT mismo, es que en los últimos años se han presentado de forma constante en promedio 88,500 dictámenes por ejercicio, tal como se muestra en la siguiente Tabla:

Ejercicio Fiscal	Número de Dictámenes Presentados
2005	87,521
2006	89,665
2007	92,005
2008	91,694
2009	89,066
2010	86,073

2011	84,210

Esta labor de apoyo al SAT es practicada por al menos 5,800 Contadores Públicos Registrados que durante el último ejercicio fiscal presentaron al menos un dictamen, de entre los más de 17,500 Contadores Públicos que cuentan con dicha autorización para emitir dictámenes con efectos fiscales.

Así las cosas es que del significado jurídico y económico que detenta el dictamen fiscal para las partes que intervienen en él, -contribuyente, contador público y autoridad-, que la Contaduría Pública organizada solicita que este documento otorgue certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes dictaminados, puesto que contrario a la lógica son precisamente estos contribuyentes los más fiscalizados, es decir, son estos últimos los que con mayor frecuencia son sujetos de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, cuando son ellos los que sin duda alguna aportan más y mejor información acerca de sus operaciones a los entes fiscalizadores.

Ahora bien, es el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) el que establece la obligatoriedad de que las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que se encuentren en alguna de las hipótesis prescritas por dicho numeral, deberán hacer dictaminar sus estados financieros por Contador Público Registrado en los términos del artículo 52 del Código de Marras; así también, se establece la opción para que aquellos contribuyentes que no encontrándose en los supuestos de ley puedan optar por hacer dictaminar en los mismos términos.

No obstante que la obligación formal de entregar a las autoridades fiscales el citado informe es exclusivamente de los contribuyentes, son los Contadores Públicos Autorizados, en su calidad de terceros independientes en quienes tanto particular como autoridad, depositan su confianza atendiendo a su ética, profesionalismo y capacidad profesional.

Sin embargo el Contador Público se ve limitado para cumplir en tiempo y forma con la entrega del dictamen fiscal, faltando a la confianza otorgada por el contribuyente y las autoridades en razón de lo siguiente:

I. El número de anexos contenidos en el SIPRED se incrementa año tras año.
II. Se han incorporado cuestionarios acerca de cumplimientos de múltiples obligaciones fiscales, corporativas, laborales y de comercio exterior, tanto a ser contestados por el contribuyente como por el Contador Público Registrado, respuestas todas que requieren de un minucioso análisis debido a lo delicado y trascedente de su contenido, sin mencionar que en varias de las preguntas la redacción es en extremo confusa.
III. El plazo establecido para que el contribuyente dictaminado entere al fisco las cantidades que se determinen a su cargo por concepto de diferencias en impuestos es escaso, tan sólo diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se presente el dictamen por parte del Contador Público. Pago que para el caso de no realizarse, obliga al contribuyente a enterar no solamente los accesorios de ley sino además una cuantiosa multa que no está sujeta a disminución ni condonación. Siendo que en múltiples ocasiones a pesar de que el Contador Público está listo para entregar a las autoridades el citado dictamen, no lo puede hacer porque el contribuyente no tiene el dinero necesario para pagar sus obligaciones.
IV. Anualmente el SIPRED sufre cambios en su contenido, forma de operación y requisitos para su entrega, mismos que van desde el aspecto tecnológico hasta el informe fiscal así como la integración de las cifras y anexos que la autoridad considera indispensables para realizar su labor fiscalizadora. Cambios que representan demoras en la elaboración del trabajo a realizar, pues todo cambio implica transformación y adaptación de los recursos para lograr el objetivo final.

Así las cosas y en razón de lo hasta aquí expuesto es que se propone reformar el primer párrafo de la fracción I del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación así como el sexto párrafo, texto que en la actualidad

reza (columna izquierda) y que como resultado de la presente propuesta se pretende sea del tenor literal siguiente (columna derecha), como se muestra en la siguiente tabla comparativa:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 32-A.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.	**Artículo 32-A**.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.
I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $34,803,950.00, que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9o-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea superior a $69,607,920.00 o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.	**I.** Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a **$20,000,000.00**, que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9o-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea superior a **$35,000,000.00** o que por lo menos **ciento veinte** de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.
Para efectos de determinar si se está en lo dispuesto por esta fracción se considera como una sola persona moral el conjunto de aquéllas que reúna alguna de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá cumplir con la obligación establecida por este Artículo:	Para efectos de determinar si se está en lo dispuesto por esta fracción se considera como una sola persona moral el conjunto de aquéllas que reúna alguna de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá cumplir con la obligación establecida por este Artículo:
a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas.	**a)** Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas.
b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:	**b)** Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas.	**1.** Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas.
2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o morales vinculadas con ellas, una	**2.** Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o morales vinculadas con ellas, una

participación superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. En el caso de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando residan en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. **3.** Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se trate, de tal magnitud que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las operaciones de la empresa. Para los efectos de este inciso, se consideran sociedades controladoras o controladas las que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideren como tales.	participación superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. En el caso de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando residan en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. **3.** Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se trate, de tal magnitud que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las operaciones de la empresa. Para los efectos de este inciso, se consideran sociedades controladoras o controladas las que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideren como tales.
II. – IV. … **…** **…** **…** **…**	II. – IV. … **…** **…** **…** **…**
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código, a más tardar el 30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.	Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código, **a más tardar el 31 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.**
… **…** **…**	**…** **…** **…**

Por los motivos antes expuestos y fundados, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforma la fracción primera y el párrafo sexto del Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:

Artículo 32-A.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a **$20,000,000.00**, que el valor de su activo determinado en los términos del artículo 9o-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea superior a **$35,000,000.00** o que por lo menos **ciento veinte** de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior.

Para efectos de determinar si se está en lo dispuesto por esta fracción se considera como una sola persona moral el conjunto de aquéllas que reúna alguna de las características que se señalan a continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá cumplir con la obligación establecida por este Artículo:

a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o partes sociales con derecho a voto de las mismas.

b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, aun cuando no determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas.

2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o morales vinculadas con ellas, una participación superior al 50% en las acciones con derecho a voto de la sociedad de que se trate. En el caso de residentes en el extranjero, sólo se considerarán cuando residan en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información.

3. Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se trate, de tal magnitud que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las operaciones de la empresa.

Para los efectos de este inciso, se consideran sociedades controladoras o controladas las que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideren como tales.

II. – IV. …

…

…

…

…

Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código, **a más tardar el 31 de julio del año inmediato posterior**

a la terminación del ejercicio de que se trate.

…

…

…

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, D.F. 17 de julio de 2013.

MARCOS AGUILAR VEGA
DIPUTADO FEDERAL

DE LOS DIPUTADOS AMALIA GARCÍA MEDINA Y SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, QUE REGLAMENTA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, QUE REGLAMENTA LA FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Planteamiento del problema

Esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, responde a un mandato legal establecido en el Artículo Segundo Transitorio, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de agosto de 2012, mediante el cual se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho ciudadano a la Iniciativa Ciudadana y a la Consulta Popular.

En dicho artículo transitorio se estableció que el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación correspondiente en un plazo no mayor a un año, es decir, antes del día 9 de agosto de 2013.

Argumentación

En razón de la importancia que tiene para la democracia pasar de una sociedad de "electores", a una de "ciudadanas y ciudadanos", es decir, de personas que no solo eligen a sus representantes populares, sino que toman parte en los asuntos de la nación y deciden sobre asuntos fundamentales de la vida pública, la consulta popular puede ser un mecanismo que le dé calidad a la democracia, a condición de que los requisitos para llevarla a cabo sean viables, y no quede sólo en un buen propósito en el texto constitucional, pero impracticable; es por ello que en la presente iniciativa de ley incorporamos modificaciones presentadas en otra iniciativa de reformas a la constitución, relativas al derecho ciudadano a la Consulta Popular.

También, siendo una facultad del Congreso convocar a Consulta Popular, y considerando que la Universidad Nacional Autónoma de México es una Institución de Educación Pública Superior, que tiene los elementos materiales, la autoridad moral y el reconocimiento de la sociedad, proponemos que sea esta Institución que goza de prestigio nacional e internacional, la que diseñe y realice las consultas populares, auxiliadas por dos organizaciones ciudadanas seleccionadas previamente por la Cámara de Diputados mediante el método de insaculación, de entre todas las que se hayan inscrito para el efecto y que cuenten con su registro previo ante el Instituto Federal Electoral.

Asimismo, el Congreso de la Unión velará porque el Instituto Federal Electoral otorgue todo el apoyo material, humano y técnico que requiera la Universidad Nacional Autónoma de México, incluyendo el sorteo de las y los ciudadanos de la lista nominal de electores para conformar el equipo de voluntarios que se harán cargo de recibir la opinión ciudadana el día de la jornada de la consulta.

En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, igual que el Instituto Federal Electoral, auxiliarán a la Universidad Nacional Autónoma de México en la difusión de las preguntas sujeto de la Consulta Popular y en la difusión de las fechas, lugares y modalidades de la misma.

Es pertinente precisar que esta iniciativa retoma algunos de los conceptos sobre soberanía popular presentes

en la redacción y también una parte del contenido, de una importante iniciativa sobre Consulta Popular, suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna y el Senador Manuel Camacho Solís en el Senado de la República, el pasado 14 de febrero del año en curso, pero con modificaciones y agregados relativos a los requisitos y convocatoria que hagan posible la Consulta Popular, así como de la Institución designada por el Congreso de la Unión para el diseño, organización y resultados de la misma.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 39, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

Es así como el poder soberano sólo puede pertenecer legítimamente al pueblo, y solo éste puede elaborar, modificar y establecer las leyes que organizan y regulan tanto el funcionamiento del Estado como el de la sociedad civil. Cuando se dice entonces que el pueblo es soberano se quiere decir que la fuente última de todo poder o autoridad política es exclusivamente el pueblo; que no existe, por ende, ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y que la legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión en definitiva de la voluntad general.

Nuestra democracia debe ser estrictamente, el gobierno que se sustenta en el principio de la soberanía popular, es decir, el gobierno del pueblo por el pueblo.

Coincidimos en que la participación ciudadana en el proceso democrático de decisión se ha venido ampliando en nuestro país a través de múltiples reformas Constitucionales y legales que hoy permiten el ejercicio de las libertades políticas en un contexto jurídico e institucional caracterizado por la existencia de varios mecanismos de garantía, propios del constitucionalismo contemporáneo que complementan a la representación democrática tradicional.

También suscribimos que estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación política ciudadana más allá de las elecciones y permiten un pronunciamiento explícito de la ciudadanía. No podemos apartarnos de la plena convicción de que el plebiscito y el referéndum también son valiosos para resolver eventuales diferendos entre quienes ejercen la representación política y ponen a consideración del pueblo una solución viable y definitiva.

Por eso, resulta valido afirmar que la presente iniciativa de ley tiene el propósito de concretar jurídicamente la reglamentación federal de uno de los derechos fundamentales más apremiantes para la vida democrática de nuestro país. En efecto, la consulta popular reconocida y protegida por el artículo 35 constitucional, en su fracción VIII constituye uno de los pilares jurídicos trascendentales que hacían falta para avanzar hacia una democracia directa, participativa y deliberativa en la que garantice a los mexicanos la salvaguarda de su soberanía, incluso por encima de aquellas autoridades que han sido beneficiadas, directa o indirectamente, con la confianza del voto popular para ejercer la representación política del pueblo. No podría ser de otra manera si la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo por lo que todo poder público dimana de él pueblo y se instituye para beneficio de éste; es decir, el que manda es el pueblo, pero no solamente al momento de elegir a sus representantes, sino también durante toda la gestión de éstos.

Considerandos

La presente iniciativa propone disposiciones generales que establecen el objeto y ámbito de aplicación de la Ley Federal de Consulta Popular, así como los conceptos normativos de la consulta popular y sus mecanismos, el plebiscito y referéndum. Se destaca que para considerar que un asunto es de trascendencia nacional debe confirmarse que no se trata de alguna de las materias contempladas en el apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, por lo que todo asunto fuera de los supuestos anteriores, podrá ser considerado motivo de consulta.

Se especifica y detalla el contenido y alcances de cada uno de los principios que rigen la consulta, que son los siguientes: Autonomía; Corresponsabilidad; Democracia; Legalidad, y Solidaridad.

Se determina que a quienes corresponde la aplicación de esta Ley será al Congreso de la Unión, que es el poder al que le corresponde convocar; Ejecutivo Federal; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Universidad Nacional Autónoma de México; Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación; Instituto Federal Electoral y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin que ello evite que todo servidor público federal, en el ámbito de sus respectivas facultades, tendrá la obligación de cumplir y hacerla cumplir, así como facilitar la participación ciudadana y abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación.

Se aplicará de manera supletoria preferentemente lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ello debido a que la materia electoral es idónea para desarrollar las consultas populares.

Los derechos de las y los ciudadanos forman parte indispensable de la ley que se propone, toda vez que en el capítulo correspondiente se especifica cuáles son y se les proporciona de contenido normativo. Estos derechos, por cierto irrenunciables, son los siguientes: Promover, solicitar, participar directamente y votar en los mecanismos de consulta popular, así como impugnar sus resultados ante las instancias jurisdiccionales correspondientes; denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, y los demás que se establezcan en esta y otras leyes de ámbito federal.

Debe señalarse que uno de los requisitos más importantes que se debe cumplir para poder ejercer estos derechos es el de contar con Credencial para Votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la jornada de consulta, asimismo abstenerse de perturbar el orden y la tranquilidad públicos, así como afectar el desarrollo habitual de las actividades de las demás personas e instituciones públicas y privadas.

Con el objetivo de hacer lo más comprensible posible el contenido y los alcance de la Ley que se propone, se hace una especificación de que la consulta popular comprende al plebiscito y al referéndum por lo que ambos mecanismos tienen una regulación que comparten hasta llegar a la convocatoria y declaración de validez con efectos vinculatorios. También tienen en común, el plebiscito y el referéndum, que quienes pueden presentar las peticiones son el Presidente de la República; el veinte por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o al menos el 0.5 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. La cantidad máxima de preguntas que podrán realizarse a la ciudadanía en una consulta popular será de cinco, de manera comprensible y legible. Las jornadas de las consultas deben efectuarse, conforme lo determine el Congreso de la Unión y en las fechas que para tal efecto resuelva.

El procedimiento será en términos generales, el mismo para el plebiscito que para el referéndum, y se establece en un solo artículo con la finalidad de que su aplicación no se entorpezca debido a una dispersión normativa. El contenido de la convocatoria también será muy parecido tanto para el plebiscito como para el referéndum.

También será común, para ambos mecanismos, el procedimiento para la jornada de la consulta popular. En las campañas de difusión y capacitación podrán participar las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior, especializadas en la materia de esta Ley, y será obligación del Ejecutivo y todas las instituciones competentes tales como el IFE y el IFETEL facilitara la UNAM la instrumentación de la consulta. También debe destacarse que la cantidad, ubicación e instalación de las casillas, así como la integración de las mesas directivas será, en la medida de lo posible, equivalente a las del proceso electoral federal inmediato anterior.

Tendrán efectos vinculatorios los resultados de la consulta que sean aprobados por al menos 51% de quienes emitieron su opinión y cuando la votación total – en el sentido que sea – corresponda al menos al diez por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Para asegurar la plena aplicación de esta Ley, se prevé que el incumplimiento de sus disposiciones, por parte de las autoridades y ciudadanos, será sancionado administrativa y penalmente, de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable.

Finalmente, en el capítulo correspondiente al financiamiento se prevé que el Presupuesto de Egresos de la

Federación contemplará una partida especial dentro del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, así como para programas de capacitación y difusión en materia de consulta popular, y para el IFE en lo que le corresponda por el apoyo material y de infraestructura, quedando prohibido que las y los ciudadanos, individual o colectivamente, aporten recursos propios para llevar a cabo la organización ni la jornada de las consultas populares.

En cuanto a los artículos transitorios, cabe destacar que la UNAM, deberá expedir los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización y jornada de las consultas populares, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto que se propone.

Fundamento Legal

Por lo anterior expuesto y fundado, l**a suscrita, diputada federal** Amalia García Medina **y el diputado federal** Silvano Aureoles Conejo**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular:**

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de interés general y reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular en el ámbito federal.

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:

I. Garantizar y proteger el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a ser consultados para la toma de decisiones públicas sobre asuntos de trascendencia nacional.

II. Establecer las normas y principios para regular la consulta popular realizada mediante los mecanismos de plebiscito y referéndum.

III. Promover y fortalecer la democracia semidirecta concretada a través de la consulta popular.

Artículo 3.- La consulta popular es el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a participar en la toma de decisiones respecto de temas de trascendencia nacional mediante los siguientes mecanismos:

I. Plebiscito: Es el mecanismo de consulta popular, por medio del cual las y los ciudadanos mexicanos determinan su aprobación o desaprobación de aquellos actos, omisiones o decisiones ejecutados o de inminente ejecución por el Ejecutivo Federal, de trascendencia nacional, que son puestos a su consideración por convocatoria del Congreso de la Unión, y

II. Referéndum: Es el mecanismo de consulta popular, por medio del cual el Congreso de la Unión convoca a las y los ciudadanos mexicanos para que expresen su aprobación o desaprobación sobre la expedición, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o que se encuentren en discusión legislativa.

Artículo 4.- No podrá ser objeto de consulta popular, en términos del apartado 3º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional lo siguiente:

I. Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación;

III. Electoral;

IV. Ingresos y gastos del Estado;

V. Seguridad nacional, y

VI. Organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

VII. Nombramiento o destitución de los titulares de las secretarías o dependencias del Ejecutivo.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Carácter vinculatorio: Mandato ciudadano de obligado cumplimiento para las autoridades correspondientes derivado de una consulta popular;

II. Congreso: Poder Legislativo Federal;

III. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Ejecutivo Federal: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación

VI. Ley: Ley Federal de Consulta Popular;

VII. Promotor: Ciudadanas y ciudadanos que promueven la consulta popular sobre un tema de trascendencia nacional y recopilan las firmas y documentación electoral necesarias para presentar ante el Congreso de la Unión una probable petición en esta materia;

VIII. Peticionario: Presidente de la República, legisladores o ciudadanos que presentan ante el Congreso de la Unión una petición para someter a consulta popular un asunto de trascendencia nacional;

IX. UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México

X. Tribunal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

XI. Instituto: Instituto Federal Electoral;

XII. IFETEL: Instituto Federal de Telecomunicaciones; y

XIII. OSC: Organizaciones de la sociedad civil.

CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS RECTORES, ÁMBITO DE COMPETENCIA Y APLICACIÓN

Artículo 6.- Son principios rectores de la consulta popular los siguientes:

I. Autonomía: Capacidad que tiene la sociedad para tomar sus propias decisiones sin la intervención indebida de autoridades que derive en inducción ni manipulación;

II. Corresponsabilidad: Compromiso entre la ciudadanía y las autoridades correspondientes para acatar los resultados de las consultas populares, con la premisa de que la participación ciudadana es indispensable para un buen gobierno pero no la sustitución de responsabilidades de éste;

III. Democracia: Igualdad de oportunidades de las y los ciudadanos para participar en la toma de decisiones públicas en asuntos de relevancia nacional, sin discriminación por motivos políticos, religiosos, ideológicos, origen étnico, de género ni cualquier otro motivo;

IV: Legalidad: Obligación jurídica que tienen las autoridades de que sus actos y abstenciones en materia de consulta popular siempre deben ser apegados a derecho;

V. Trasparencia y Rendición de Cuentas: Las autoridades involucradas en las consultas populares deben hacer pública toda la información relacionada con el asunto de relevancia nacional que se somete a plebiscito o referéndum;

VI. Solidaridad: Disposición ciudadana a participar en la solución de los problemas de otras personas como propios, que propicie la convivencia social pacífica y fortalezca la sensibilidad social para enfrentar colectivamente la problemática común.

Artículo 7.- Esta ley regula los procedimientos de consulta popular sobre los actos u omisiones legislativas del Congreso de la Unión, así como actos, omisiones o decisiones administrativas, reglamentarias o normativas ejecutadas o de inminente ejecución por parte del Ejecutivo Federal, siempre que sean de relevancia nacional.

Artículo 8.- Corresponde la aplicación de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:

I. El Congreso de la Unión;

II. El Ejecutivo Federal;

III. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;

IV. El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación;

V. La UNAM;

VI. El IFE; y

VII. IFETEL.

Todo servidor público federal, en el ámbito de sus respectivas facultades, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la presente Ley, así como facilitar la participación ciudadana en las consultas populares y abstenerse de utilizar cualquier medio que inhiba dicha participación.

Artículo 9.- En lo no previsto por esta Ley será aplicable lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS CIUDADANOS

Artículo 10.- En el ámbito de la presente Ley, las y los ciudadanos tienen los siguientes derechos irrenunciables:

I. Promover, solicitar, participar directamente y votar en los mecanismos de consulta popular, así como impugnar sus resultados ante las instancias jurisdiccionales competentes;

II. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, a las personas y servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, y

III: Los demás que se establezcan en esta y otras leyes de ámbito federal.

Artículo 11.- En la votación de la consulta popular sólo podrán participar las y los ciudadanos mexicanos que cuenten con credencial para votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la jornada de consulta y se encuentren registrados en las respectivas listas nominales.

Artículo 12.- En las consultas populares el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Artículo 13.- Toda organización civil legalmente constituida y con domicilio en el territorio nacional, tiene el derecho de promover y solicitar formalmente, en representación de sus miembros, la realización de consultas populares.

Artículo 14.- Para ejercer el derecho de participar en las consultas populares, las y los ciudadanos deben cumplir con el requisito de tener credencial para votar vigente y que no se encuentren suspendidos en sus derechos por encontrarse dentro de alguno de los siguientes supuestos:

I. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir desde la fecha del auto de formal prisión o vinculación a proceso;

II. Durante la extinción de una pena corporal;

III. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

IV. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

V. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de derechos en materia política.

Artículo 15.- Los derechos reconocidos en esta ley no excluyen otros que se encuentren reconocidos y protegidos en instrumentos internacionales y en otras leyes de ámbito federal.

Artículo 16.- Los ciudadanos tienen la obligación de votar en las consultas populares reguladas por esta ley, en los términos de la legislación aplicable, sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos, y sin afectar el desarrollo habitual de las actividades de las demás personas e instituciones públicas y privadas.

CAPÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS
MECANISMOS DE CONSULTA POPULAR

Artículo 17.- Los mecanismos de consulta popular regulados por esta Ley son:

I. Plebiscito, y

II. Referéndum.

Artículo 18.- Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

I. El Presidente de la República;

II. El **veinte** por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o

III. Al menos el **cero punto cinco** por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 19.- La cantidad máxima de preguntas o cuestionamientos que podrán realizarse a la ciudadanía en una consulta popular será de **cinco**, de manera clara y comprensible.

Artículo 20.- Las jornadas de las consultas deben realizarse **cuando el Congreso de la Unión lo determine.**

Artículo 21.- No podrá ser objeto de la consulta popular cuando la misma trate sobre alguna de las siguientes materias:

I. Restricción de los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Restricción de los principios consagrados en el artículo 40 de Constitución que se refieren a que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación;

III. Electoral;

IV. Ingresos y gastos del Estado;

V. Seguridad nacional, y

VI. Organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Artículo 22.- Son causas de improcedencia de la consulta popular por inconsistencias en el contenido o procedimiento de la petición, las siguientes:

I. Que la petición no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello por la Constitución;

II. Que la petición no contenga la información y documentación correspondiente, según se trate de plebiscito o referéndum;

III. Que no se refiera a una de las materias que la presente ley establece como asunto de trascendencia nacional;

IV. Se refiera a alguna de las materias prohibidas por el artículo anterior;

V.- Cuando la petición no se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;

VI. Cuando la cantidad de ciudadanos peticionarios o sus firmas auténticas no superen el requisito Constitucional del **cero punto cinco** por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, y

VII. Cuando la causa que originó la petición de plebiscito se haya consumado y no sea posible restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad.

CAPÍTULO QUINTO
PROCEDIMIENTO DE LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR

Artículo 23.- El procedimiento inicia con la petición, ante cualquier Cámara del Congreso de la Unión, por alguno de los sujetos señalados en el artículo 18 de esta ley.

Cuando se presenten dos o más peticiones de plebiscito o de referéndum, el Congreso de la Unión no podrá emitir más de una convocatoria y establecerá la prelación de las mismas con base en las siguientes consideraciones:

I. Por tratarse del asunto más trascendental para el interés público, conforme a la naturaleza del asunto; por su impacto en el desarrollo sustentable; o en el rumbo de la Nación;

II. Si se trata de dos solicitudes ciudadanas, se dará preferencia a aquella que cuente con el número mayor de ciudadanas y ciudadanos peticionarios;

III. La fecha de presentación de la petición, y

IV. Si se trata de solicitudes ciudadanas y gubernamentales, se dará preferencia a la petición ciudadana.

Serán preferentes en primer lugar las solicitudes efectuadas por los ciudadanos, seguidos por las presentadas por alguna de las cámaras y en este orden posterior las presentadas por el Ejecutivo Federal.

Artículo 24.- El procedimiento para la petición de las consultas populares será el siguiente:

I. Las peticiones para realizar las consultas populares deben ser presentadas ante las mesas directivas de ambas Cámaras o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; serán presentadas por escrito, anexando las firmas y documentación suficientes. Las comisiones del Congreso de la Unión que se hacen cargo de los temas de participación ciudadana, ejercerán las facultades que sobre esta materia disponga la legislación aplicable, asimismo tendrán la participación que determinen las mesas directivas de ambas cámaras y de la Comisión Permanente;

II. En caso de tratarse de una petición ciudadana, los interesados deberán nombrar a un representante común, así como señalar domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional. El Congreso de la Unión turnará de inmediato la petición ciudadana al IFE para que éste, en un plazo no mayor a treinta días naturales, verifique el cumplimiento de lo establecido en el inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional y emita un acuerdo de aceptación a trámite o, en su caso, de desechamiento;

III. Cuando el escrito de petición ciudadana no cumpla con las formalidades de ley, sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios en los términos establecidos en el artículo 40, fracción I de esta Ley.

IV. Si se trata de una petición del Ejecutivo o de legisladores federales, el Congreso de la Unión emitirá un acuerdo de aceptación a trámite o, en su caso, de desechamiento; ello dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales.

Cuando el escrito de petición del Ejecutivo o de legisladores federales para realizar un plebiscito o referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios para que en un plazo no mayor a diez días naturales cumplan con el requerimiento correspondiente.

V. En todos los casos que sea declarada procedente una petición, ya sea por el Instituto o por el Congreso de la Unión, éste la turnará a la Suprema Corte para que, dentro del plazo no mayor a noventa días naturales, resuelva y notifique al Congreso de la Unión sobre la procedencia del asunto que se pretende someter a consulta, ello en cumplimiento al apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

VI. La Suprema Corte requerirá un informe justificado a las autoridades involucradas.

VII. Cuando la Suprema Corte resuelva a favor de la constitucionalidad de la petición y así lo notifique al Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo no mayor a diez días naturales, una declaración definitiva de procedencia de la consulta popular, ordenando que se emita la convocatoria para dicha consulta.

VIII. El Congreso de la Unión ordenará de inmediato la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

IX. El congreso turnará la convocatoria a la UNAM para que ésta inicie el procedimiento de organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, ello en apego a lo establecido en el apartado 4º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

X. La UNAM contará con el respaldo técnico, material y humano, tanto del IFE como del IFETEL para la realización de la consulta, tal como lo señale el reglamento de esta Ley.

La UNAM también será asistida por dos organizaciones ciudadanas, seleccionadas por la Cámara de Diputados mediante insaculación, de entre todas las que se hayan inscrito para el efecto y cuenten con registro previo ante el IFE.

XI. El desistimiento de la consulta sólo podrá hacerse valer por los peticionarios antes de que sea emitida la convocatoria correspondiente.

Artículo 25.- La convocatoria para la consulta popular contendrá al menos la siguiente información:

I. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria;

II. El acto, omisión o decisión ejecutada o de inminente ejecución del Ejecutivo que se somete a plebiscito o, en su caso, la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión que se encuentren en discusión sujetas a referéndum;

III. Declaración definitiva de procedencia de la consulta popular, emitida por el Congreso de la Unión;

IV. Fecha en que el Instituto deberá llevar a cabo la jornada de la consulta;

V. Requisitos y obligaciones para votar, y

VI. Pregunta o preguntas a responder por la ciudadanía.

CAPÍTULO SEXTO
PROCEDIMIENTO PARA LA JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 26.- La jornada de la consulta popular deberá llevarse a cabo en la fecha que el Congreso de la Unión lo determine y de acuerdo a la convocatoria que este expida.

Artículo 27.- El procedimiento para la jornada de la consulta popular comprende las etapas de:

I. Organización;

II. Desarrollo;

III. Cómputo, y

IV. Declaración de resultados.

Artículo 28.- La jornada se realiza mediante las siguientes acciones de:

I. Distribución de materiales de consulta y boletas;

II. Ubicación;

III. Publicación;

IV. Integración;

V. Instalación y apertura de casillas;

VI. Emisión, escrutinio y cómputo de los votos;

VII. Cierre y publicación de resultados de casillas;

VIII. Remisión de la paquetería a los Consejos Electorales Distritales.

Artículo 29.- Para la emisión del voto se imprimirán las boletas de consulta correspondiente, con base en el modelo que diseñe la UNAM, debiendo contener, cuando menos, los siguientes datos:

I.- Entidad federativa y distrito electoral;

II.- Sello y firmas impresas del Presidente y Secretario Ejecutivo;

III. Talón desprendible de cada boleta con número de folio consecutivo;

IV.- La pregunta o preguntas sobre si la o el ciudadano, está conforme o no, con el acto, decisión u omisión que se somete a plebiscito;

V.- Cuadros o círculos para la respuesta mediante el SÍ o el NO, y

VI.- Una descripción legible y comprensible del acto, decisión u omisión sometido a consulta.

Artículo 30.- La Universidad Nacional Autónoma de México deberá emitir una declaración firme de validez del resultado de la consulta popular en un plazo no mayor a quince días naturales posteriores a la realización de dicha consulta, publicarla en el Diario Oficial de la Federación, en su sitito electrónico y en por lo menos tres diarios impresos de circulación nacional, así como hacerla del conocimiento del Congreso de la Unión.

Artículo 31.- La Universidad Nacional Autónoma de México presentará al Congreso de la Unión los resultados de la consulta popular y acreditará el cumplimiento de las tareas que le fueron encomendadas.

Artículo 32.- En las campañas de difusión y capacitación podrán participar las organizaciones de la sociedad civil, universidades e instituciones especializadas en la materia de esta Ley. Es obligación del Ejecutivo y todas las autoridades competentes facilitar al Instituto la instrumentación de la consulta.

Artículo 33.- Se procurará que la cantidad, ubicación e instalación de las casillas, así como la integración de las mesas directivas sea equivalente a las del proceso electoral federal inmediato anterior.

Artículo 34.- En todo aquello que no esté previsto por la presente Ley, el procedimiento para la jornada de la consulta popular se sujetará a la legislación y normatividad electoral de ámbito federal.

CAPÍTULO SÉPTIMO
RESULTADOS VINCULATORIOS DE LA CONSULTA POPULAR

Artículo 35.- El resultado de la consulta popular será vinculatorio para el Ejecutivo o, en su caso, para el Congreso de la Unión y demás autoridades involucradas cuando sea aprobado por mayoría de votos y, de conformidad con lo previsto por el apartado 2º de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional, cuando la votación corresponda al menos al diez por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Artículo 36.- Los plazos aplicables para el debido cumplimiento del mandato popular serán los previstos en los artículos 42 y 49 de la presente Ley, según se trate de plebiscito o referéndum.

CAPÍTULO OCTAVO
PLEBISCITO

Artículo 37.- La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de plebiscito, debe ser presentada al Congreso de la Unión en cualquier momento antes de ser emitido o ejecutado el acto o la decisión que motivó la petición o, en su caso, debe ser presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que fue emitido o ejecutado dicho acto o decisión.

Artículo 38.- La petición de plebiscito deberá contener, por lo menos, la siguiente información y documentación:

I. Especificación del acto, decisión u omisión ejecutada o de inminente ejecución que es de trascendencia nacional;

II. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se

considera que el asunto es de trascendencia nacional, y

III. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.

Artículo 39.- El plebiscito será improcedente cuando se tenga alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de esta Ley.

Artículo 40.- El procedimiento para la realización del plebiscito se regirá, en lo conducente, por lo establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades:

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un plebiscito no cumpla con las formalidades de ley, o sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un plebiscito sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días naturales.

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá requerir a la autoridad de donde supuestamente emanó el acto, omisión o decisión ejecutada o de inminente ejecución que motivó la petición, para que ésta rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días naturales.

Artículo 41.- Cuando la petición de plebiscito sea motivada por un acto, decisión u omisión del Instituto, el procedimiento estará a cargo del Congreso de la Unión, salvo la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, así como la organización y realización de la jornada de consulta popular.

Ahora bien, una vez que se determine la procedibilidad del plebiscito en términos de la presente Ley, los actos u omisiones consultados en el mismo tendrán efectos suspensivos en tanto se conozca el resultado firme del mecanismo de consulta citado, para su ejecución o abstención de que se trate.

Artículo 42.- Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la decisión o el acto ejecutado o de inminente ejecución que fue sometido a consulta, el Ejecutivo Federal emitirá, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la celebración de la jornada de consulta, el decreto revocatorio correspondiente y ordenará a los integrantes de su gabinete que instrumenten todas las acciones necesarias y suficientes para que de inmediato cese la ejecución de la decisión o acto de que se trate. El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación, se publicarán en su portal de internet y en, por lo menos, tres diarios impresos de mayor circulación nacional.

Artículo 43.- Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar la omisión del Ejecutivo Federal éste deberá, dentro del plazo establecido en el artículo inmediato anterior, expedir un decreto o emitir acuerdo para ordenar que de inmediato se lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes para el debido cumplimiento del mandato ciudadano.

Artículo 44.- En ningún caso se podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante plebiscito, dentro de los tres años siguientes, contados a partir de la publicación del resultado en el Diario Oficial de la Federación.

CAPÍTULO NOVENO
REFERÉNDUM

Artículo 45.- La petición para realizar una consulta popular con el mecanismo de referéndum, debe ser presentada en cualquier momento antes de ser aprobada en definitiva la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o, en su caso, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de dicha aprobación legislativa.

Cuando la petición se refiera a una omisión legislativa, podrá ser presentada en cualquier momento.

Artículo 46.- La petición de referéndum deberá contener, por lo menos, la siguiente información y documentación:

I. Especificación del asunto de trascendencia nacional que no ha sido motivo de decreto legislativo;

II. Mención precisa del ordenamiento o los artículos correspondientes que se propone someter a referéndum.

III. Exposición de motivos en la que se señalen las razones políticas, económicas y sociales por las que se considera que el asunto es de trascendencia nacional.

IV. Documentación que acredite legalmente haber cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley para solicitar la realización del plebiscito.

Artículo 47.- El referéndum será improcedente cuando se tenga alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de esta Ley.

Artículo 48.- El procedimiento para la realización del referéndum se regirá, en lo conducente, por lo establecido en los capítulos Quinto y Sexto de esta Ley, con las siguientes particularidades:

I. Cuando el escrito de petición ciudadana para realizar un referéndum no cumpla con las formalidades de ley, o sea incomprensible o ilegible, el Instituto deberá prevenir a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción II del artículo 24 de la presente Ley, para que en un término máximo de diez días naturales cumplan con los requerimientos correspondientes, de lo contrario se tendrá por no presentada dicha petición.

II. Cuando el escrito de petición presentado por el Ejecutivo o los legisladores federales para realizar un referéndum sea incomprensible, ilegible o no cumpla con las formalidades de ley, el Congreso de la Unión prevendrá a los peticionarios, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 24 de esta Ley para que cumplan debidamente con los requerimientos correspondientes en un término máximo de diez días naturales.

III. Dentro del plazo establecido en la fracción IV del artículo 24 de la presente Ley, la Suprema Corte deberá requerir al Congreso de la Unión que rinda un informe justificado en un plazo no mayor a diez días naturales.

Ahora bien, una vez que se determine la procedibilidad del referéndum en términos de la presente Ley, los actos u omisiones consultados en el mismo tendrán efectos suspensivos en tanto se conozca el resultado firme del mecanismo de consulta citado, para su ejecución o abstención de que se trate.

Artículo 49.- Si el resultado del referéndum es en sentido de desaprobar la omisión legislativa, o la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión, éste emitirá, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la celebración de la jornada de consulta, un acuerdo para dar debido cumplimiento al mandato ciudadano. El acuerdo mencionado deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y será publicado en el portal de internet del Congreso, así como en, por lo menos, tres diarios impresos de circulación nacional.

Artículo 50.- En ningún caso el Congreso de la Unión podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante referéndum, dentro de los tres años siguientes, contados a partir de la publicación del resultado de la consulta popular en el Diario Oficial de la Federación.

CAPÍTULO DÉCIMO
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 51.- Conforme al apartado 6º. de la Fracción VIII del Artículo 35 constitucional, las impugnaciones se sustanciarán y resolverán conforme a la Ley aplicable y a lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Las resoluciones del Tribunal serán definitivas e inatacables.

Artículo 52.- Las resoluciones del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte serán definitivas para las autoridades, quedando a salvo el derecho de las y los ciudadanos de acudir ante las instancias correspondientes.

CAPÍTULO DÉCIMOPRIMERO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 53.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, por parte de las autoridades y ciudadanos, será sancionado administrativa y penalmente, de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable.

CAPÍTULO DÉCIMOSEGUNDO
FINANCIAMIENTO

Artículo 54.- El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida especial dentro del presupuesto de la UNAM, destinada para dar cumplimiento a lo establecido por el apartado 4º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional en lo que se refiere a la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, así como para programas de capacitación y difusión en materia de consulta popular.

Artículo 55.- La UNAM preverá los recursos suficientes para que las y los ciudadanos mexicanos en el extranjero ejerzan plenamente su derecho a participar en los mecanismos de consulta popular.

Artículo 56.- El presupuesto asignado a la UNAM que no se ejerza para los efectos de esta Ley, no será considerado como subejercicio presupuestal y, por tanto, no podrá ser reasignado a ningún otro programa ni a alguna otra institución o dependencia. Los recursos no aplicados se destinarán a capacitación y preparación profesional para ser aprovechados en las consultas populares que lleve a cabo esta Institución.

Artículo 57.- En ningún caso el Estado mexicano, podrán argumentar la insuficiencia o falta de recursos como motivo para no realizar las consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión.

Bajo ninguna circunstancia las y los ciudadanos, individual o colectivamente, aportarán recursos propios para llevar a cabo la organización ni la jornada de las consultas populares.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias, contenidas en decretos, acuerdos y circulares, y en general todas aquellas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

TERCERO.- El Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos Anual del año siguiente inmediato a la entrada en vigor de este Decreto, los recursos financieros que resulten necesarios y suficientes para la instrumentación de la presente Ley.

CUARTO.- En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la UNAM expedirá los reglamentos, normas y acuerdos que se requieran para la adecuada organización y jornada de las consultas populares.

QUINTO.- La UNAM deberá contar con todo el respaldo técnico, material y logístico del Instituto Federal Electoral para el diseño, organización, implementación y resultados de la consulta popular, así como del IFETEL para la difusión y publicación del contenido de la consulta, así como la fecha y las modalidades de lo que se llevará a cabo.

SEXTO.- La UNAM podrá contar con el apoyo y colaboración de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que cuenten con registro ante el IFE para la organización y desarrollo de la consulta popular.

SÉPTIMO.- La UNAM podrá invitar a la ciudadanía en general para participar de manera voluntaria en la observación del desarrollo y resultados de la consulta popular en todas las entidades federativas.

OCTAVO.- De acuerdo con la legislación estatal aplicable, las notarías públicas de las entidades federativas darán fe gratuitamente, a solicitud de la UNAM de la legalidad del desarrollo y resultados de la consulta popular.

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de julio de 2013.

Suscriben:

DIPUTADA FEDERAL AMALIA D. GARCÍA MEDINA

DIPUTADO FEDERAL SILVANO AUREOLES CONEJO

DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.



SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. (VS MALTRATO INFANTIL).

La Suscrita, **ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA,** Senadora de la República, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II, de la ***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,*** y los artículos 4, 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del ***Reglamento del Senado de la República,*** me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,** al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

En el mes de julio del presente, ocurrió un suceso en el Ayuntamiento de Centro en Tabasco, que fue difundido con la expansión y rapidez que las tecnologías de la información y las redes sociales permiten. Se trata de un video en el que se aprecia a un niño tirando dulces en la calle ante la mirada de un sujeto con gafete. Un funcionario municipal descubre a un niño vendiendo cigarros y dulces en la vía pública. En el video se aprecia al menor llorando mientras tira su mercancía a la calle; sólo cuando termina de vaciar la canasta el funcionario lo deja ir, pero se lleva los cigarrillos. El niño fue identificado como Manuel "N", tiene 10 años y es un estudiante huérfano de origen tzotzil. Es originario del Paraje Romerillo, San Juan Chamula, Chiapas. Vive con su tía María Díaz Díaz y vendía dulces en la calle para obtener recursos mientras estaba de vacaciones. El funcionario que se observa en el video, es Juan Diego López Jiménez, trabajador del ayuntamiento Centro, adscrito a la Coordinación de la Zona Luz. De acuerdo a la nómina de Juan Diego Jiménez López, su cargo no es inspector sino electricista, aun así agredió de manera verbal al vendedor menor de edad.

Gracias a la velocidad y amplitud de las redes computacionales el caso generó atención nacional y se convirtió en un suceso que propició reacciones inmediatas gracias a la presión de las redes sociales y los medios de comunicación. A las pocas horas el ayuntamiento publicó un comunicado para informar que el funcionario había sido separado del cargo y ya se preparaba el despido definitivo. Las entidades públicas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervinieron en el caso. Tal es el comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 26 de julio del presente. Ahí se informa que, "por instrucciones de su presidente, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, se inició una queja de oficio y atrajo el caso de un menor de edad que fue agraviado por un servidor público del Ayuntamiento de Centro en Tabasco. Se trata del caso ocurrido en la capital del estado de Tabasco, donde un servidor público obligó a un menor de edad, de origen indígena, a tirar al suelo los dulces que ofrecía, para vender, en una canasta y se apropió, al parecer, de unos cigarros que llevaba con el argumento de que los estaba vendiendo un menor de edad. Desde el momento en el que los medios de comunicación dieron a conocer el hecho, personal de este Organismo nacional acudió al lugar para buscar a la víctima y recabar testimonios. Asimismo, personal de la oficina regional en la entidad se puso en contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que había iniciado ya un expediente de queja. La Comisión Estatal informó que al desconocerse el paradero del menor, solicitó la colaboración de la Procuraduría del

Menor y la Familia del estado de Tabasco a fin de investigar en dónde está hoy el menor que, se dijo, había regresado al estado de Chiapas, lugar en el que nació. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha planteado, en reiteradas ocasiones, la necesidad de que la sociedad y las autoridades de los tres ámbitos de gobierno sumen esfuerzos para preservar la integridad personal, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de la niñez mexicana y ha hecho hincapié en que resulta inaceptable toda forma de violencia contra los menores, en especial contra los indígenas que constituyen uno de los grupos de la población más vulnerables de nuestro país. Esta Comisión Nacional investigará el caso y dará seguimiento a las pesquisas que hagan, la Procuraduría del Menor y la Familia y demás autoridades de Tabasco, a fin de proteger a la víctima, y en su momento determinará lo que a derecho corresponda.

Estamos en tiempos en donde la velocidad y la libertad de las redes sociales han creado fenómenos sociales insólitos que escapan de la administración informativa que generaciones anteriores de ciudadanos no experimentaron. Sucede así que, gracias a ello, las instituciones de gobierno y diversas estancias reaccionan a velocidades insospechadas para sumarse a la presión ciudadana y responder a la legitimidad de las demandas; sin embargo este suceso posee una riqueza mucho más amplia de significados que describe la calidad política y cultural del sistema mexicano. En primer lugar el hecho, ya acostumbrado en esta sociedad de desigualdad, de que un niño venda dulces en vía pública. De sólo esta imagen se desprende ya una calificación del sistema que genera, sistemáticamente, cientos de miles de infantes vendiendo en la calle, ejerciendo una actividad que se tiene por retributiva como limpieza de parabrisas, o apostando por el entretenimiento, en el mejor de los casos cuando no se trata de otras actividades degradantes para los infantes.

El suceso fue atendido y como colofón una institución del gobierno estatal ofreció una beca, antes se buscó a la parentela del niño y se presentaron las posiciones de diversos actores políticos; sin embargo este suceso dice mucho más, entre ello la vigilancia que practican los funcionarios municipales o delegacionales del comercio informal que en nuestro país generan millonarias entradas producto de la extorsión o el permiso para vender; segundo, que los funcionarios que están eventualmente en contacto con la realidad social no están preparados para tratar con los grupos vulnerables, que son, en muchos casos, quienes recurren a la venta pública informal. Tercero la evidencia de los gobiernos municipales, muchos de los cuales, se sirven de los trabajadores de diversas áreas a atender áreas de cuidado extremo, como el caso que nos ocupa y cuarto, la opción hacia la informalidad que es una opción, casi siempre la última, de conseguir dignamente, -aunque ilegal mientras se esté fuera de los grupos corporativos de ambulantaje muchas veces asociados a las corruptelas de gobiernos-, una retribución. Y cuarto, la falta de una legislación adecuada o inoperante en los términos de maltrato infantil.

Cuando se trata de presentar una iniciativa se tiene la costumbre de presentar diversos recursos argumentales que representan una influencia positiva para que los plenos camarales acepten materializar una ley. Tal es el caso, en este ejemplo de las diversas legislaciones que se tejen alrededor de una propuesta; sin embargo, esta propuesta de iniciativa tiene un cimiento de legitimidad poderosa, se trata de sancionar fuertemente a funcionarios públicos que ejerzan cualquier tipo de maltrato hacia los infantes, se encuentren en la instancia gubernamental en que se encuentren. Los gobiernos, entonces, tienen que crear programas de capacitación lo suficientemente convincentes para todos aquellos de sus empleados que tengan algún tipo de contacto o relación con los infantes y, que en esa relación respeten absolutamente sus derechos humanos. La referencia de suficientemente convincentes se da porque hay administraciones locales que hacen el esfuerzo por capacitar en esas necesarias materias a sus empleados y los empleados, por la fuerza de su psicología, por la costumbre o por una capacitación débil, no desarrollan una conducta gubernamental adecuada y respetuosa.

Estamos en tiempos, también, en donde los capitales argumentales para generar una exposición de motivos pueden concentrarse en estudios que sintetizan y puntualizan una situación, en este caso el maltrato infantil. Tal es el caso de un estudio importante que la Cámara de Diputados ha generado a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Este estudio reciente, de marzo del 2013, a cargo del licenciado Salvador Moreno Pérez, llamado "Algunas consideraciones sobre el maltrato infantil en México" contiene los

argumentos necesarios para sostener la necesidad de impulsar el trabajo legislativo para aprobar las legislaciones necesarias que protejan a la infancia que se encuentre en nuestro país, sea nativa o se encuentre de paso por nuestro país.

Con frecuencia se recurre a una serie de fuentes y estructuras argumentales de diversos estudios y publicaciones oficiales. El estudio que aquí se reproduce, como eje argumental, contiene todos los elementos pertinentes, tanto políticos, como institucionales, técnicos, legales y de proceso parlamentario que aluden al tema del maltrato infantil en México. Es un estudio fresco, emitido por una institución parlamentaria y generada con recursos públicos. Existe una mala creencia que una iniciativa se deba sostener con una cierta cantidad de hojas y textos variados. Me atrevo a presentar un sólo documento argumentativo que reúne todas las características y que fue elaborado por un grupo de estudiosos especialistas y profesionales en el tema y con el aval de la H. Cámara de Diputados. Considero que es un documento de alta calidad, pertinente para una toma de decisiones que impactaría en las conductas de las administraciones públicas. Declaro, tomo el recurso de ese documento público cuyo eficiencia reúne una requisitoria justificatoria de un cambio legislativo y felicito ampliamente por los estudios valiosos que las instituciones pueden generar, ello presenta certezas que sólo una actitud política negligente puede negar.

Para comenzar recordemos que "El concepto de maltrato infantil ha ido evolucionando con el tiempo en un intento de englobar todos los aspectos relacionados con el desarrollo del niño. Puede definirse como aquella acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenace o interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. Así se distinguen varios tipos de maltrato, que no son excluyentes entre sí y pueden aparecer simultáneamente en un mismo niño:

- Maltrato físico (daño físico o enfermedad);
- Negligencia o abandono (omisión de las acciones necesarias en alimentación, vestimenta, higiene, educación, atención sanitaria, supervisión, vigilancia y seguridad en el hogar, etc);
- Abuso sexual (voyeurismo, exhibicionismo, tocamientos y penetración, incesto, así como la inducción a la prostitución o la producción de materiales pornográficos por parte de un familiar); y
- Maltrato emocional (activo, pasivo o inducción en los menores de comportamientos antisociales).

(Suárez Saavedra, S. y J. Rodríguez Suárez,«Maltrato infantil»,*Boletín de Pediatría*, 46 (Supl. 1), 2006, págs. 119-124.)

1. Marco teórico y conceptual sobre la violencia

Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana y es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el "uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause —o tenga muchas probabilidades de causar— lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones". Se excluye de la definición a los incidentes no intencionales.

La misma organización establece una tipología de la violencia. La divide en tres categorías generales -según las características de los que cometen el acto de violencia-: la violencia autoinfligida; la violencia interpersonal y la violencia colectiva.

La violencia autoinfligida comprende el comportamiento suicida y las autolesiones. La violencia interpersonal se divide en dos subcategorías: violencia familiar o de pareja, y la comunitaria; la primera es la violencia que se produce sobre todo entre los miembros de la familia o de la pareja, y que por lo general —aunque no siempre— sucede en el hogar. La violencia comunitaria es la que se produce entre personas que no guardan parentesco y que pueden conocerse o no; por lo común sucede fuera del hogar. Por lo que toca a la violencia colectiva se subdivide en violencia social, política y económica. Aquí caben los actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados, las acciones terroristas y la violencia de masas. La violencia política incluye la guerra y otros conflictos violentos afines, así como la violencia del Estado. En tanto que la violencia económica comprende los ataques por parte de grupos motivados por el afán de lucro económico o crear división económica y fragmentación.

La violencia hacia los menores generalmente se presenta en la subcategoría de la violencia familiar o de pareja; en ella también se dan casos de violencia hacia las personas mayores.

La misma organización ilustra la naturaleza de la violencia en cuatro tipos: física, sexual, psíquica y privaciones o descuido. De esa forma ejemplifica que "la violencia contra los niños cometida en el seno del hogar puede incluir abuso físico, sexual y psíquico, así como negligencia o descuido".

La OMS considera que su clasificación puede constituir un marco útil para comprender los tipos y motivos de violencia en el mundo. La violencia entonces, en el presente trabajo, es un concepto general, pero en el caso de la violencia hacia los niños se utilizará el término "maltrato" como concepto que integra todos los tipos que violencia de los que pueden ser objeto los menores. En los siguientes apartados se revisa la definición y tipos de maltrato hacia los menores, los problemas en la medición y la magnitud del problema tanto a nivel mundial y de forma particular en México y sus entidades federativas.

1.1. Definición de maltrato infantil

En el presente documento se adopta la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre el maltrato de menores. El maltrato o vejación abarca todas las formas de violencia: abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Casi de la misma manera el informe sobre violencia hacia los niños y adolescentes de las Naciones Unidas define el abuso infantil como cualquier tipo de daño causado a los niños, las niñas o los adolescentes, incluyendo el abandono o la violencia física, sexual o psicológica por parte de alguien que deba cuidarlos, que tenga responsabilidad sobre ellos o en quien confíen.

En el documento se considera como "niño" a la definición recogida en el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño: "todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad".

Otra forma de maltrato es la discriminación contra los niños definida como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la edad de las y los niños que tenga por objeto o por resultado la anulación o la disminución de la igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se consideran prácticas discriminatorias, entre otras, que se obstaculicen las condiciones mínimas necesarias para su crecimiento y desarrollo saludable, y que a los niños y niñas se les impida declarar durante procedimientos judiciales o administrativos.

Sobre el mismo tema, Gloria Elena López Navarrete clasifica las formas de maltrato, según el grado de conocimiento de ellas, en: conocidas, poco conocidas y poco conceptualizadas

El maltrato físico, considera López Navarrete, es la lesión externa o interna que presenta un niño (a) o adolescente como consecuencia de un fenómeno de violencia intencional.

El Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas asegura que toda violencia física y sexual implica daño psicológico y las consecuencias incluyen tanto el impacto personal inmediato como el daño que éste transmite en las etapas posteriores de la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Destaca que la violencia puede atrofiar el potencial de desarrollo personal y representar altos costos para la sociedad en su conjunto.

Al respecto, Rocío Mojica considera la violencia contra la niñez como una vulneración de los derechos fundamentales de las personas menores de 18 años, pues "algunos tipos de violencia son considerados delitos y otros no, pero todos son una vulneración de derechos y son inaceptables".

La misma autora considera que cuando la violencia se ejerce justificándola en la necesidad de "corrección", se denomina "castigo"; la violencia se da porque los adultos consideran a los niños de su propiedad, y que se puede disponer de su cuerpo y de su voluntad; no se reconocen como iguales en dignidad.

Existen algunos mitos en torno a la violencia como ejercicio de poder. Rocío Mojica enumera los siguientes: castigar a los hijos porque a uno lo castigaron y no le pasó nada malo; a veces la violencia es necesaria para educar a los niños; el castigo físico se da porque los niños y niñas necesitan aprender a respetar a sus mayores, a distinguir el bien del mal; y, el más importante: si el castigo no existiera serían indisciplinados.

El informe demuestra que las diferentes formas de violencia a las que estará expuesto un niño variarán según su edad y etapa de desarrollo, especialmente cuando comienzan a interactuar con el mundo fuera del hogar; los menores estarán expuestos a las diferentes formas de violencia ejercida sobre ellos por familiares cercanos y progenitores; posteriormente los niños mayores tienen más probabilidad de ser agredidos por personas de fuera de su hogar.

Una conclusión importante del informe es que la violencia resulta de una combinación de factores personales, familiares, sociales, económicos y culturales. Además que algunos niños pueden estar expuestos a varios tipos de violencia de múltiples fuentes en el transcurso de muchos años.

Diagnóstico: el maltrato infantil y los problemas de medición

Marco jurídico de protección a los niños

Los tratados que protegen y reconocen los derechos humanos de los niños y adolescentes en el ámbito universal son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos relativos a la participación de niños en conflictos armados y los relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

Mientras que en la esfera interamericana se puede citar la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional de carácter obligatorio que reconoció los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes.

En él se establece que los Estados parte respetarán tales derechos y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

La convención establece que los Estados parte deberán tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o tutores o familiares.

México es uno de los países que ratificaron la convención y por ello está obligado a desarrollar acciones para combatir la discriminación de niños, niñas y adolescentes.

El marco jurídico mexicano de protección a los niños tiene como base el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional que establece que "en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez".

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se publicó en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2000 y se fundamenta en el artículo 4o. constitucional. La ley tiene como objetivo asegurar a los niños y niñas un desarrollo pleno e integral; ello implica formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

De los principios rectores de la ley se pueden mencionar: el interés superior de la infancia, la no-discriminación; igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición; el de vivir en familia y tener una vida libre de violencia, entre los más importantes.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 aporta un avance al establecer en el artículo 1o. que toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Este ámbito de reconocimiento y protección se amplió con la reciente modificación a los artículos 4o. y 73 (Diario Oficial de la Federación, 12 de octubre de 2011) en los que se reconoce a nivel constitucional la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado.

Los niños maltratados en México: un acercamiento cuantitativo

En 1999 el INEGI llevó a cabo la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar cuyo objetivo fue obtener información estadística sobre el número de hogares y personas en situaciones de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual.

Los resultados de esa encuesta muestran que una tercera parte de los hogares mexicanos padece violencia. La mayoría de los miembros del hogar padecen violencia emocional (34%), intimidación (5.4%), violencia física (3.9%) y sexual 0.5 por ciento. La violencia hacia los menores de cuatro años tiene una

proporción mayor de violencia física (5.9%) y sexual 0.7 por ciento.

Durante el período de 1999 a 2004 los maltratos más frecuentes detectados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fueron el físico, 29.7% del total, lo que representó en ese período poco más de 43 mil menores; le sigue en importancia la omisión de cuidados (25.2%) que representó un acumulado de 37 mil niños; y el maltrato emocional (22.9%) equivalentes a 33,518 menores.

En el Anexo 1del documento se muestran los datos comprobados de maltrato durante 2001 a 2011 recopilados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, con base en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

De los indicadores más relevantes se puede destacar que durante ese período, en promedio, en poco más de 21 mil menores por año se comprobó algún tipo de maltrato y representó 20% del total de casos presentados ante el Ministerio Público.

El año en que se comprobó el mayor número de casos de maltrato infantil fue en 2008 con casi 34 mil casos. Las entidades federativas que aparecen con mayor frecuencia en las primeras posiciones con el mayor número de casos de maltrato infantil comprobado fueron: Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

Las entidades con menor frecuencia de casos de maltrato infantil comprobado durante el período fueron: Veracruz, Hidalgo, Baja California Sur, Michoacán y Nayarit.

Llama la atención el caso de Chiapas y Oaxaca que, aunque no ocupaban los primeros lugares, fueron las entidades con el mayor número de casos comprobados de maltrato infantil en 2008 con casi 8 mil casos y poco más de 4 mil, respectivamente.

Otro indicador importante es que no existe información disponible para ciertas entidades; los estados con alta frecuencia de falta de datos durante el periodo fueron: Hidalgo, Colima y estado de México.

Por último, el Servicio Público de Localización Telefónica, entre 2007 y 2010, recibió un total de 4,106 menores reportados con maltrato infantil. En 79% de los casos la agresión proviene de la madre y la edad promedio de los agresores oscilaba entre los 20 y 40 años.29

La opinión pública sobre maltrato infantil

En 2005 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) levantaron la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis). Los resultados mostraron que somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos y que la discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y que se reproduce por medio de valores culturales.

En 2010 se realizó la más reciente Enadis, ahora por el Conapred y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La Enadis profundiza en la percepción de discriminación y violencia de varios grupos vulnerables, entre ellos los niños.

Al respecto, es importante destacar que en casi 2 de cada 3 personas (65.5%) están de acuerdo en que los niños deben tener los derechos que la ley les reconoce. Otro 28% opina que son los padres quienes deben definir sus derechos y cerca de 4% sostiene que no tienen derechos por ser menores de edad

Con relación a la violencia hacia la población infantil dentro del hogar, la encuesta reportó que casi 3 de cada 10 niñas y niños dijeron que sus papás los han hecho llorar, y uno de cada cuatro, que les han pegado en su casa

Las prácticas discriminatorias y de violencia hacia los niños no sólo se viven en el hogar; la escuela es otro de los lugares donde los niños sufren violencia y discriminación: a 1 de cada 4 les han dicho groserías; 1 de cada 5 le han quitado o escondido sus cosas; la misma cantidad sufre por burlas y a 13 de cada 100 le han pegado.

En la Cámara de Diputados las iniciativas relacionadas con los niños y adolescentes se canalizan a varias comisiones ordinarias, entre las que se pueden destacar: la de Derechos Humanos, de Atención a Grupos Vulnerables, además de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

A continuación se hace un breve recuento del número de iniciativas presentadas durante las Legislaturas LIX, LX y LXI cuyo objetivo fue reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; enseguida se describen las que se relacionan con el maltrato, discriminación y violencia hacia los menores.

En la LIX Legislatura se presentaron 21 iniciativas con propuestas para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A continuación resaltamos las que tienen por objeto prevenir y castigar la violencia contra los niños y adolescentes.

El 11 de diciembre de 2003 la Cámara de Senadores envió una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El dictamen tenía como propósito proteger a la niñez mexicana a través de las siguientes acciones: 1) aumentar la penalidad en los delitos de abuso sexual y violación, 2) ampliar de 10 a 15 años de cárcel cuando el delito sea cometido por un ascendiente contra su descendiente; 3) incluir como delitos graves los delitos sexuales no contemplados (hostigamiento, abuso, estupro y violación) perpetrados a menores, 4) tipificar el delito de agravio a menores; y, 5) estipula que el tráfico de menores pueda atacarse desde el ámbito local y federal.

La minuta fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2006 y se remitió a la Cámara de Senadores para continuar con el proceso legislativo.

En septiembre de 2004 se presentó una iniciativa que tenía por objeto impulsar la coordinación en los ámbitos local y federal para que los ordenamientos penales de los estados establecieran el delito de violencia intrafamiliar, determinando como agravantes de dichas conductas las que se cometan en perjuicio de mujeres embarazadas, y niños y adolescentes con discapacidad.

En marzo de 2006 se presentó una iniciativa que pretendía fortalecer la protección de aquellos niños que se encuentran en estado grave de vulnerabilidad, resultado del abandono, maltrato, explotación y abuso, en cualquiera de sus modalidades.

Otras iniciativas buscaban fortalecer la protección a la niñez y adolescencia que habita en la calle; algunas pretendían dotar de mayores elementos a las instancias públicas encargadas de la defensa y protección de los niños y adolescentes; otra preocupación en las iniciativas fue el mejoramiento de los mecanismos de participación de la sociedad civil para dar seguimiento a los procesos judiciales que enfrentan

los menores que han cometido delitos.

En la LX Legislatura se presentaron 33 iniciativas con diferentes propuestas para reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A continuación se describen las relacionadas con las diferentes formas de violencia hacia esa población.

De los aspectos más importantes se puede destacar la iniciativa que propone la creación de sistema de protección de los derechos de la niñez que garantice la participación de organizaciones de la sociedad civil, niños y adolescentes en el diseño, ejecución, implantación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a este sector de la población.

Otra iniciativa considera la creación del Consejo Nacional para la Protección y Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes; además, crea el Instituto para la Protección y Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes y regula las instituciones públicas y privadas que albergan o tienen en acogimiento a personas menores de 18 años de edad.

Por último, se puede mencionar una iniciativa que pretendía que las autoridades en los diferentes niveles de gobierno desarrollaran programas, mecanismos y protocolos de seguridad que tuvieran por objeto la búsqueda de menores de edad desaparecidos.

En la LXI Legislatura el número de iniciativas se incrementó a 60, lo que da una idea de la importancia creciente del tema. Una de ellas proponía la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México cuyo objetivo era prevenir y sancionar el delito de secuestro o robo de niños, así como establecer el Sistema Nacional de Alerta sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México, establecía las bases para la cooperación en esta materia entre la federación, los estados y los municipios; entre las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Otra más creaba mecanismos de protección de los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidad. Durante la misma legislatura se presentó la iniciativa que tiene por objeto la creación de una Ley Federal para Prevenir, Atender y Eliminar la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas.

Otra iniciativa buscaba reformar algunos artículos de la misma ley; entre otros aspectos establece que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de los niños y adolescentes, e instrumentar programas para garantizar su protección y su desarrollo integral que por alguna situación de vulnerabilidad social se encuentran en riesgo, abandono o situación de calle.

Una más establece una serie de reformas para proteger a niños y adolescentes contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación por parte de padres, dueños de escuelas, directivos, educadores, maestros o personal administrativo.

Otros temas de preocupación de los diputados se relacionan con la protección de niños en albergues, la abolición del trabajo infantil, política nacional integral de protección, la tipificación como delito grave de la venta de menores y la violencia intrafamiliar, la prevención de la práctica de lesiones no suicidas, mejor conocida como cutting (es la grabación de las heridas que se autoinfligen los jóvenes) y el establecimiento de medidas para evitar el bullying.

Durante la LXI Legislatura se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo

461 de la Ley General de Salud el 12 de diciembre de 2011, que fue producto de una iniciativa presentada por el entonces diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN, en marzo del mismo año. La reforma aumenta la pena de prisión y multas cuando se acredite en el delito de tráfico de órganos que éstos hayan sido obtenidos de una persona menor de 12 años de edad.

En septiembre de 2012 la Cámara de Diputados creó por vez primera una Comisión Ordinaria para los Derechos de la Niñez. La creación de dicha comisión da continuidad a la reciente Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, especialmente a la incorporación del Interés Superior del Niño en la Constitución; así como a la facultad del Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia en materia de derechos de la infancia y la adolescencia.

Los especialistas en la materia coinciden en la necesidad de una política integral en la que participen los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los tres niveles de gobierno, con la finalidad de mantener a los niños y adolescentes al margen de la violencia.

Finalmente el caso que ahora nos ocupa es inhibir las conductas propiciatorias del maltrato infantil, que todavía forman parte de una cultura negativa socialmente conforme. Fracturar con legislaciones y acciones gubernamentales la inconmensurable cultura patriarcal es una tarea de dimensiones colosales. En estos tiempos en donde las transformaciones constitucionales que colocan la primacía de los derechos humanos aun no estructuran constitucionalmente a todos y cada uno de los artículos constitucionales, es pertinente que una legislación ubique la sanción pertinente para inhabilitar a todo aquel funcionario que atente contra la integridad de un infante sea la manifestación que sea.

Para ello, y para contribuir con un aspecto que continuamente se presenta en la relación de los gobiernos con la ciudadanía y en específico con los infantes, se presenta esta propuesta de iniciativa que tiende sancionar y vigilar la relación, con aspectos de gobernabilidad, que los funcionarios, empleados o personal de gobierno tienen al entrar en contacto con infantes y adolescentes se encuentre bajo el cuidado de respetar sus derechos humanos irrestrictamente. La Ley afectada sería la de LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

LEY VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO 47.- ... **I.-** a **XXIII.-** … **XXIV.-** Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.	**ARTÍCULO 47.- ...** **I.-** a **XXIII.-** … **XXIV.-*Abstenerse de maltratar física, verbal, psicológica o emocionalmente a un menor de edad, y*** **XXV.-** Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 53.- … **I.-** a **VI.-** … Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daño y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.	**ARTÍCULO 53.-** … **I.-** a **VI.-** … Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daño y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos, ***y cuando infieran maltrato físico, psicológico, verbal o emocional a un menor de edad.***

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

P R O Y E C T O D E D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO.-SE RECORRE EL CONTENIDO DE LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA UNA FRACCION XXV AL ARTÍCULO 47, SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, para quedar como sigue:

Artículo 47.- …

I.- a **XXIII.-** …

XXIV.- Abstenerse de maltratar física, verbal, psicológica o emocionalmente a un menor de edad, y

XXV.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.

Artículo 53.- …

I.- a **VI.-** …

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daño y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos, y cuando infieran maltrato físico, psicológico, verbal o emocional a un menor de edad.

Suscribe

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOSA

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los treinta y un días del mes de julio de 2013.

DE LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA, RICARDO MONREAL ÁVILA Y GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A EFECTO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA, RICARDO MONREAL ÁVILA y GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente**,INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A EFECTO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA,**al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los temas más relevantes que ha significado un parte aguas en el orden jurídico mexicano es el otorgamiento de rango constitucional a las normas de derechos humanos previstas en los Tratados Internacionales con la correspondiente obligación de su acatamiento por parte del Estado.

El texto derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del año 2011, en relación al artículo 1ro, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

Artículo 1o. *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[12]

Por lo que es de observarse que se deja muy en claro que el principio rector son los derechos humanos, los cuales se encuentran, por una parte en el texto constitucional y por la otra, en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es de resaltar que se contemplan no solo los tratados cuya naturaleza y esencia sea de derechos humanos, si no las disposiciones que contengan tales derechos.

En este sentido la proyección de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1ro constitucional es amplísima y de lo más beneficiosa al reconocimiento de los derechos humanos a favor de las personas.

En consecuencia los derechos humanos no solo adquieren un reconocimiento constitucional expreso, sino además se le sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico mexicano. En efecto se da un paso definitivo a favor de los derechos humanos de fuente internacional,

[12] Artículo 1º. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

al situarlos más allá del carácter infraconstitucional y supra legal reconocidos judicialmente en la actualidad. La reforma eleva a rango constitucional las normas de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, de manera que ahora estas servirán claramente, al igual que las normas constitucionales, como parámetro en la observancia de los actos y omisiones por parte del Estado, así como demás normas jurídicas.

A su vez, es de destacar que con la exigencia de la interpretación conforme a la observancia del principio pro persona, los derechos humanos consagrados en la constitución y los de fuente internacional, se armonizaran a efecto de contar con el mejor parámetro posible de derechos de las personas.
Por lo tanto de acuerdo a lo establecido por el artículo 1ro. Constitucional los derechos fundamentales suponen obligaciones precisas para las autoridades de los distintos niveles de gobierno y que en consecuencia la división vertical de poderes no puede ser alegada como excusa para dejar de cumplir con esas obligaciones.
Por ende los derechos fundamentales generan obligaciones para las autoridades de todos los niveles de gobierno, que bajo cualquier circunstancia debe de observar lo que en cada caso señala la constitución y los tratados internacionales.
En otras palabras, las autoridades de todos los niveles no solamente deben respetar los derechos humanos, sino que deben de hacer todo lo que este a su alcance para lograr la eficacia plena de los derechos, sin poder esgrimir ningún tipo de argumento, para dejar de tomar medidas a favor de los derechos.
Así mismo podemos afirmar compañeros legisladores que el poder legislativo en términos de lo que señala el párrafo 3ro del artículo 1ro. Constitucional también está obligado a hacer su parte en la tarea de garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales generando el marco normativo para que ello sea posible.
Bajo este análisis constitucional es de mencionar que existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, el derecho humano a la energía eléctrica, que es sin duda el tema central de la presente iniciativa, por lo que planteamos enérgicamente que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas, circunstancias que además encuentran sustento en el propio artículo 27 Constitucional.

Por tanto, los derechos humanos requieren de una base material para que sea posible su pleno ejercicio, y tomando en cuenta que éstos están sujetos a su progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la salud, el agua, la educación, la información, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener medios para el desarrollo de su dignidad y libre desarrollo de su personalidad.

Podemos observar que entre otros tratados internacionales que contemplan este derecho a la energía eléctrica son los siguientes:

1) La ***Declaración Universal de los Derechos Humanos*** (DHDH) fue la primera declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la materia y es la base de todo el sistema internacional de derechos humanos. Es una declaración de principios donde su contenido y significado son muy importantes pues establece los principios fundamentales de donde todo el sistema de derechos humanos se basa.

Además, no sólo establece los derechos civiles y políticos, sino también Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). La Declaración afirma que **"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad."**[13] Por otro lado declara que **"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el**

[13] Artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada el 10 de Diciembre de 1948.

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".[14]

2) El ***Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*** (PIDESC) indica **que los Estados miembros están obligados legalmente a cumplir con sus disposiciones una vez que lo ratifican.**

En su preámbulo manifiesta que "**no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos"**.[15]
También se establece que **"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos."[16]**

Las obligaciones jurídicas incluyen las de comportamiento (lo que los Estados deben hacer) y las obligaciones de resultado (lo que las acciones de los Estados deben producir como resultado). Así los Estados tienen obligación de procurar, por todos los medios incluyendo la adopción de medidas legislativas (que son las obligaciones de comportamiento), la realización y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para todos sus titulares (que son las obligaciones de resultado).

En el contexto de las fuentes de energía, el Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que ***"*Todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional.**

En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia."[17]

Por otro lado, el PIDESC establece que **"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia."[18]** Por lo que es de resaltar y hacer énfasis en el sentido que "el concepto de 'vivienda adecuada'... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos.

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que:

*"Todos los beneficiarios del **derecho a una vivienda adecuada** deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y **el alumbrado**, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia."*

Además que:

*"Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que **el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con***

[14] Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada el 10 de Diciembre de 1948.
[15] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entro en vigor el 3 de Diciembre de 1976.
[16] Artículo 2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultuales.
[17] Artículo 1º. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultuales.
[18] Artículo 11. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultuales.

los niveles de ingreso."

3) La **Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer** publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de Mayo de 1981, establece en su artículo 14, inciso h) "Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones"[19]

4) La **Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad** establece que el progreso científico y tecnológico se ha convertido en uno de los factores más importantes para el desarrollo de la sociedad humana, además reconoce que el progreso científico y tecnológico reviste gran importancia para acelerar el desarrollo social y económico de los países en desarrollo, por tanto el derecho de las personas a disfrutar del uso de la energía eléctrica como un avance científico y tecnológico resulta fundamental, en este sentido se establece que **"Todos los Estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población."**[20] Así como **"(…) extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología."**[21] Y **"(…) medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas."**[22]

Por tanto los Estados que han firmado y ratificado el Pacto, como México, están comprometidos a **reconocer, respetar, proteger y garantizar** los derechos humanos contemplados en nuestra Carta Magna y Tratados Internacionales.

En nuestro país la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro,[23] proporciona servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8%, durante los últimos diez años.

Usuarios por sector (%)[24]

SECTOR	% USUARIOS	% CONSUMO	% COBRO
Doméstico	88.46	25	19.75
Agrícola	0.34	5.23	2.04
Industrial	0.75	58.78	59.37
Comercial	9.94	6.73	13.16
Servicios	0.52	4.05	5.65

Por lo tanto el 88.46% de los usuarios corresponde al sector doméstico, quienes consumen el 25% del total de la energía eléctrica, y cuya población atendida con servicio eléctrico es de 110 millones (de un total de 112), lo que implica que hoy día, casi 97.72 % del pueblo mexicano cuenta con este servicio.
Cabe resaltar que el sector industrial representa sólo el 0.75% de los usuarios, que consumen el 58.78% del

[19] Artículo 14 inciso h), de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación.
[20] Artículo 3. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad
[21] Artículo 6. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad

[22] Artículo 7. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad

[23] Artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
[24] Estadísticas Comisión Federal de Electricidad

total de energía eléctrica.
Por tanto consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, exigimos **que se reconozca en la Constitución**, como sucedió con el derecho al agua. Reconocida la energía eléctrica como un derecho humano, nunca a nadie más debe negársele el acceso a la energía eléctrica en su vivienda.

Existen más de 200,000 quejas de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) por usuarios del servicio de energía eléctrica y se siguen multiplicando día con día sin ser resueltos. Muchos de los recibos de luz son arbitrarios, exagerados y no tienen que ver con los consumos de energía eléctrica de cada vivienda. Por ejemplo en viviendas los recibos han oscilado entre los 500 hasta los 15 mil pesos. Y en otros más hay cortes de energía sin aviso, variaciones de voltaje que causan daños en los aparatos domésticos y falta de mantenimiento en la infraestructura de distribución de energía. Aunado a ellos los cortes masivos de energía a barrios, colonias y comunidades, muchas veces van acompañados de represión y violencia, que constituye violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como a sus derechos políticos y civiles y la criminalización de la protesta social.

Es de comentar que la infraestructura de generación hidroeléctrica y geotermoelétrica del país, constituyen la columna vertebral del abasto eléctrico, al aportar un 23.26% de la capacidad efectiva de generación nacional, representa una riqueza del pueblo que ha sido producto de su esfuerzo histórico y está completamente asociada a la soberanía de la nación. El precio de venta de cada Kwh producido por esta infraestructura es de 40 centavos M.N. y no está sujeta al costo inestable de los energéticos de origen fósil. El consumo doméstico en el país representa el 25% del conjunto del consumo nacional total.[25]

La generación hidroeléctrica hoy, se encuentra subutilizada y con déficit de mantenimiento. Siendo, como es que en la actualidad se determina el precio de la energía eléctrica, y derivado de ello la política pública de tarifas a los usuarios, en virtud de la lógica de mercados mundiales de generación eléctrica que por la vía de la importación de insumos y la inversión extranjera directa, buscan el abasto vía tecnologías de ciclo combinado, y nuevas técnicas aplicadas a las energías renovables (atadas a su vez a nuevas inversiones que promueven la sustentabilidad y la obtención de bonos de carbono), se ha desatendido un área de producción sustentable que una vez rehabilitada la actual infraestructura, y sin mayores futuras inversiones más que las que impliquen su buen funcionamiento, puede garantizar lo que señala el PIDESC: "En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia."[26]

Por ello es menester desligar de la lógica de los precios fluctuantes del petróleo y el gas con que se determina el costo de consumo eléctrico y energético en general, para vincularlo a la lógica de la producción hidráulica y térmica nacional, que constituye un medio propio de subsistencia de todos los ciudadanos y ciudadanos mexicanos.

La progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales tendrá un avance sustancial en el país si se reacciona a tiempo, aprobando esta iniciativa de reforma constitucional que vendrá a hacer congruente el textoconstitucional adicionado el 11 de junio de 2011, con la condición que marca el PIDESC a cada uno de los Estados Partes firmantes, es decir, comprometerse a "adoptar medidas … especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, … la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.[27]

La electricidad es una condición material previa a la satisfacción del derecho al agua, a la salud, la educación, la vivienda, a la información, y es así mismo, un recurso disponible hoy, a través de la generación hidráulica y geotérmica.

Como se ha dicho y desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares no debe impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos de

[25]SENER (SIE Y CFE).
[26]Artículo 1º. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[27]Artículo 2º. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera, como actualmente ocurre en varias entidades del país. En tanto que la energía eléctrica constituye un derecho humano, o elemento fundamental para el disfrute de los demás *derechos humanos*, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su obligación para reconocerlo como tal en su Constitución Política; lograr que la luz llegue a todas las comunidades mexicanas, y que por disfrutar de la misma se erogue sólo aquella cantidad que permita la realización de otros derechos.

Esto significa que el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, además de incluirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el efecto de su aplicación debe reflejarse en una Tarifa Social Justa, es decir, que el precio unitario que fije el estado por el consumo de energía eléctrica para los diferentes sectores de la sociedad contribuyendo a la equidad social, encontrando sustento en el artículo 25 Constitucional.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de **DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A EFECTO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA, al tenor de la siguiente.**

Artículo Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, al tenor de la siguiente.

Artículo 4o.
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

……
……
……
……

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad. El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a los 31 días del mes de julio de 2013.

DE LOS SENADORES LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ERNESTO RUFFO APPEL, SONIA MENDOZA DÍAZ, JAVIER CORRAL JURADO, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT Y HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.



SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ



SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA

DE LOS SENADORES LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ERNESTO RUFFO APPEL, SONIA MENDOZA DÍAZ, JAVIER CORRAL JURADO, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT Y HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, QUE PRESENTAN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.

CC. SECRETARIOS
MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
EN LA LXII LEGISLATURA
Presentes:

Los suscritos senadores **LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ERNESTO RUFFOAPPEL, SONIA MENDOZA DÍAZ, JAVIER CORRAL JURADO,MARÍA MARCELA TORRES PEIMBER**t y **HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA,** integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemosa consideración de esta Soberanía la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANY ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES**. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS,

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional a la fracción II del artículo 35, sobre candidaturas independientes, que forma parte de la llamada Reforma Política de 2012, el Congreso mexicano debe expedir la legislación secundaria que regulará el derecho de los ciudadanos a participar en forma individual para ocupar un cargo de elección popular, esto es, sin el respaldo de un partido político.

La Enciclopedia Jurídica Latinoamericana señala que *"El esquema de las llamadas candidaturas independientes es uno de los posibles modelos bajo el que se puede presentar una candidatura electoral.Bajo la modalidad de las candidaturas independientes, se posibilita el ejercicio del derecho de los ciudadanos de presentar su postulación a un cargo de elección popular de manera desvinculada a los partidos políticos quienes tradicionalmente detentan esa prerrogativa.*

El reconocimiento legal de las candidaturas independientes implica que cualquier ciudadano, de manera directa, puede aspirar a ocupar un cargo público electivo sin tener que pasar los filtros y los procesos de selección internos establecidos por los partidos políticos para la designación de sus candidatos.

Además, la posibilidad de presentar una candidatura independiente significa que el ciudadano que compite de manera autónoma por un cargo electivo realiza por sí mismo, o con el apoyo de un grupo de ciudadanos, pero en todo caso de manera paralela a los partidos políticos, una campaña electoral promocionando su postulación. Cabe señalar, que esta figura no es per se excluyente respecto a la presentación de candidaturas electorales por parte de partidos políticos, sino que se presenta como una forma alternativa de postulación de aspirantes a un cargo público".[28]

El artículo 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (conocida como "Pacto de San José") adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI) del dieciséis de diciembre de 1996, respectivamente, señalan:

> ***"ARTÍCULO 23.- DERECHOS POLÍTICOS.***
> ***"1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:***
> ***"a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, "directamente o por medio de representantes libremente elegidos;***
> ***"b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, "realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que "garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y***
> ***"c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.***
> ***"2. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, "exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, "idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por "juez competente, en proceso penal."***
>
> ***"ARTÍCULO 25.***
> ***"Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:***
> ***"a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;***
> ***"b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;***
> ***"c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las "funciones públicas de su país."***
>
> En el artículo 5, apartado 1, del citado Pacto, se establece:
> ***"ARTÍCULO 5.***
> ***"1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él."***

Otro documento que cobra vital importancia, es la Observación General 25, emitida por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de doce de julio de 1996, relativo al derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las

[28] Enciclopedia Jurídica Latinoamericana. Tomo II. Instituto de Investigaciones Jurídicas Letra C. UNAM. Editorial Porrúa. México, 2006. Págs. 55 y 56

funciones públicas (artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que menciona:

> **"OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS"**
> ***"Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25)".***

En nuestro país, las candidaturas independientes no son un tema nuevo, ya que entre 1810 y 1910 estaban reguladas en la Ley, y fue en 1911 cuando por vez primera, se reconoció la personalidad de los partidos políticos; sin embargo, fue hasta 1946, con la Ley Electoral Federal, cuando se limitó el derecho a registrar candidatos para cargos de elección popular exclusivamente a favor de los partidos políticos. Privilegio refrendado en la Ley Federal Electoral de 1973 y en la reforma política de 1977. Ahora es necesario retornar a este origen con las adecuaciones que exigen los nuevos tiempos.

Para Acción Nacional la participación ciudadana en la política ha sido un tema prioritario, un compromiso para el fortalecimiento del vínculo existente entre la ciudadanía y nuestro sistema político. Así, entre muchas otras iniciativas, el 15 de diciembre de 2009, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa presentó una iniciativa en materia de reforma política que consideró nueve puntos, entre ellos, las candidaturas independientes a cargos de elección popular.

Como se expresó en la exposición de dicha propuesta, las candidaturas independientes no sólo abren el camino a la participación directa de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos sino que dan respuesta a la demanda expresada en diversos foros por funcionarios públicos, legisladores y sociedad civil. Se responde a la necesidad de crear nuevas vías de participación política para la ciudadanía distintas a la militancia partidista.

En el mismo sentido, durante la promulgación del decreto de estas reformas constitucionales, el 8 de agosto de 2012, el presidente Calderón señaló: *"No se trata solamente de brindarle mayor poder a los ciudadanos para que incidan cada vez más en las decisiones públicas. Se trata, también, de continuar aumentando la representatividad política…"*

Algunos expertos consideran que la crisis o deterioro que afecta a los partidos políticos se ha traducido en mayor aceptación de las candidaturas independientes, sin embargo, esta apertura no debe permitir el desorden que abra la puerta a ciertosriesgos, entre ellos al ingreso de fondos de origen ilegal en las contiendas. Las candidaturas independientes no debilitarán a los partidos políticos, sino que los fortalecerá ante una sana competencia, que redundará en mejores candidatos y mejores propuestas.

Por ello, no sólo es imperante armonizar el mandato constitucional vigente que permite las candidaturas independientes con las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que las prohíbe. Es preciso diseñar un marco normativo que garantice transparencia y rendición de cuentas para evitar que los candidatos independientes se conviertan en representantes de intereses ilícitos.

La legislación secundaria garantizará el equilibrio entre los requisitos que debe cumplir el aspirante independiente. Por un lado, los requisitos no deben resultar demasiado sencillos porque ello generaría la multiplicación de candidaturas, haciendo inmanejable y compleja la organización de la elección, además, pulverizaría las posibilidades de los candidatos para obtener el triunfo. Y, por otro, no deben ser tan estrictos porque sería imposible cumplirlos y la ciudadanía se sentiría burlada.

Para el Congreso de la Unión, además de una obligación constitucional, su regulación es una tarea pendiente, ya que a nivel local, las legislaturas estatales han dado los primeros pasos al aprobar reformas constitucionales y, en algunos casos incluso ya cuentan con las adecuaciones legales. En mayo de 2006, el

primero en hacerlo fue el estado de Yucatán y, posteriormente lo han hecho Jalisco,Quintana Roo, Estado de México y Zacatecas.

Debemos mencionar que se trata de un tema que ha recibido un gran interés por parte de la ciudadanía y como ejemplo de ello se encuentra la intensa labor realizada por el colectivo denominado *ReformaPolíticaYa*, quienes han enviado sus propuestas a los legisladores y esta iniciativa toma muy en cuenta dichos planteamientos.

Así, esta propuesta se enfoca en dar viabilidad a las candidaturas independientes, dotándose de reglas claras y asequibles para que verdaderos liderazgos sociales puedan postularse a cargos de elección popular, al tiempo que cuidamos el gasto público prudente y se establecen mecanismos que inhiban la participación de intereses ilegítimos en las jornadas electorales por medio de esta figura.

Se deben hacer exigibles los derechos de los mexicanos, promover la participación de los ciudadanos en la política, fortalecer la representatividad de nuestros gobernantes y velar que todo ello se dé en un marco armónico, lícito y equitativo.

Para ello concretamente proponemos lo siguiente:

- Adecuar la normatividad vigente, para incorporar a los candidatos independientes en el funcionamiento del Instituto Federal Electoral y en los procesos electorales.

- Homologar en los términos constitucionales, los derechos y obligaciones de los candidatos independientes con las de los candidatos de los partidos políticos, a efecto de generar equidad, salvo aquellas inherentes a su propia naturaleza.

- En cuanto al financiamiento:

• Deben tener una cuenta bancaria específica para su postulación.
• Deben presentar un informe de gastos ejercidos durante la etapa de búsqueda de respaldo ciudadano.
• El IFE administrará la totalidad de los recursos de fuente pública que utilizará para la campaña electoral;
• Para el desarrollo de la campaña, el financiamiento público podrá ser de hasta el cincuenta y uno por ciento del tope de gastos de campaña, definido para cada tipo de elección y el porcentaje restante será privado;
• El remanente de recursos privados se donarán a instituciones de beneficencia y asistencias pública, y
• Los candidatos independientes están obligados a devolver al Instituto los recursos públicos que no sean debidamente comprobados.

- En cuanto al proceso de registro de candidatura:

• Deberán entregar el aviso por escrito ante el órgano del Instituto que corresponda, de acuerdo al tipo de candidatura, durante el mes de julio del año previo al día de la jornada electoral;
• No podrán ser militantes de un Partido Político, o bien, deben renunciar a dicha militancia;
• Deben designar un representante ante el IFE y un responsable de sus finanzas;
• Deberán obtener el respaldo ciudadano de conformidad con lo siguiente:

a) Para el cargo a presidente de la República, deberán ser respaldados por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos ciento cincuenta distritos electorales de forma igualitaria;

b) Para el cargo a senador, deberán ser respaldados por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus distritos electorales de forma igualitaria, y

c) Para el cargo a diputado federal deberán ser respaldados por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus secciones electorales de forma igualitaria.

- El Registro estará a cargo del IFE, y los ciudadanos deberán asistir ante el órgano correspondiente para dar sus datos y firmas. Se podrán establecer módulos para facilitar esta tarea;
- Deben presentar su declaración de principios y su programa de acción;
- No se podrá apoyar a más de 2 candidatos independientes que se postulen para un mismo cargo;
- De cumplir con las firmas y requisitos se le otorgará su constancia de registro.

➢ No procede el registro de una candidatura independiente en los siguientes casos:

- Por no cubrir los requisitos para el registro previstos en el COFIPE;
- Por no haber obtenido la constancia de respaldo ciudadano;
- Por presentar información falsa para obtener la constancia de aviso o la constancia de respaldo ciudadano;
- Por comprobarse que se coaccionó a los ciudadanos para obtener su apoyo;
- Por haber obtenido recursos que no fueron informados al Instituto;
- Por alterar la contabilidad de los recursos utilizados en la precampaña, con la intención de desvirtuar los datos contenidos en el informe de gastos utilizados;
- Por el uso de recursos ilícitos durante la precampaña;
- Por haber sido condenado por delito que merezca pena privativa de la libertad;
- Por tener suspendidos los derechos de ciudadanía.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman el inciso b) del numeral 1 del artículo 1; numeral 3 del artículo 2; numerales 3 y 4 del artículo 11; inciso b) del numeral 1 del artículo 18; numerales 2, 4 y 5 del artículo 70; el inciso d) del numeral 1 del artículo 81; numeral 1 del artículo 90; incisos a), b), d), e), h), i) y j) del numeral 1 del artículo 91; incisos a), b) y c) del numeral 1 del artículo 92; incisos h), n) y t) del numeral 1 del artículo 118; inciso j) del numeral 1 del artículo 119; inciso d) del numeral 1 del artículo 122; inciso h) del numeral 1 del artículo 128; numeral 1 del artículo 138; inciso b) del numeral 1 del artículo 143; numeral 1 del artículo 149; incisos f) y h) del numeral 1 del artículo 152; numerales 1,2 y 3 del artículo 162; numerales 1, 2 y 3 del artículo 163; numeral 1 del artículo 164; numeral 1 del artículo 166; numeral 1 del artículo 168; numeral 4 del artículo 169; numeral 2 del artículo 170; numeral 1 del artículo 209; numeral 1 del artículo 211; numerales 1, 5 y 4 del artículo 212; numerales 1, 2 y 5 del artículo 218; numeral 1 del artículo 219; numeral 2 del artículo 225; numeral 1 del artículo 226; numeral 4 del artículo 228; numeral 1 del artículo 229; inciso b) del numeral 2 del artículo 230; numeral 1 del artículo 233; numeral 3 del artículo 237; numerales 2 y 3 del artículo 240; el numeral 1, así como sus incisos f) y g)del artículo 246; numeral 1 del artículo 247; incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 248; inciso a) del numeral 1 del artículo 249; incisos a) y g) del numeral 1 del artículo 250; inciso c) del numeral 2 del artículo 252; incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 255; numeral 3 del artículo 259; numeral 3 del artículo 263; numeral 5 del artículo 265; inciso b) del numeral 3 del artículo 266; numeral 1 del artículo 268; numeral 1 del artículo 269; inciso d) y f) del numeral 1 y numeral 4 del artículo 279; numerales 1 y 2 del artículo 280; numeral 1 del artículo 282; inciso b) del numeral 1 y numeral 4 del artículo 295; numeral 4 del artículo 329; numerales 2, 3 y 4 del artículo 332; numeral 2 del artículo 334; numerales 1 y 2 del artículo 336; incisos c), d) y e)del numeral 1 del artículo 344; numeral 1 del artículo 348; inciso f) del numeral 2 del artículo 362, e inciso b) del artículo 367. **Se adicionan:** un numeral 4 al artículo 14; un numeral 7 al artículo 18; un numeral 2 al artículo 50;un segundo párrafo al inciso c) del numeral 1 del artículo 91; un numeral 5 al artículo 93; un numeral 11 al artículo 110; un inciso f) recorriéndose el vigente a inciso g) del numeral 1 del artículo 136; un numeral 6 al artículo 211; un numeral 6 al artículo 216; un numeral 7 al artículo 224; un numeral 5 al artículo 245; un numeral 7 al artículo 252; un numeral 2 al artículo 253; un Libro Octavo que se integra de los artículos 395 a 426, todos del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Libro primero
De la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión

Título primero
Disposiciones preliminares

Artículo 1.
1. …
2. …
a) …
b) La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos**,** el régimen aplicable a las agrupaciones políticas **y a losciudadanos que se postulen de forma independiente a los partidos políticos por un cargo de elección popular federal**; y
c) …

Artículo 2.
1. …
2. …
3. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Federal Electoral, a los partidos políticos **y a los** candidatos **que contiendan**. El Instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones.
4. …

Artículo 11
1. a 2. …
3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos **o los candidatos independientes** deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político **o los candidatos independientes** que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Asimismo **los partidos políticos** deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de representación proporcional.

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos **y en su caso los candidatos independientes** señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos.

Artículo 14.
1. a 3. …
4. Los votos emitidos a favor de candidatos independientes no se tomarán en cuenta para efectos del presente artículo.

Artículo 18.
1. …
b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento de la votación emitida para la lista correspondiente**, los votos emitidos por los candidatos independientes** y los votos nulos.
2. a 6. …
7. Los votos emitidos a favor de candidatos independientes no se tomarán en cuenta para efectos del

presente artículo.

Artículo 50.
1. …
2. El Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales de las entidades federativas deberán promover las candidaturas independientes y dar a conocer a los candidatos que se postulen para cargos de elección popular.

Artículo 70.
1. …
2. Los debates serán realizados en el día y hora que determine el Consejo General, escuchando previamente la opinión de los partidos políticos **y de los candidatos independientes**. En todo caso, el primer debate tendrá lugar en la primera semana de mayo, y el segundo a más tardar en la segunda semana de junio del año de la elección; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General.
3. …
4. Las estaciones y canales que decidan transmitir, en vivo, los debates a que se refiere el presente artículo, quedan autorizadas a suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que correspondan a los partidos políticos, **a los candidatos independientes** y a las autoridades electorales.
5. Las reglas para los debates serán determinados por el Consejo General, escuchando previamente las propuestas de los partidos políticos **y de los candidatos independientes.**
6. …

Artículo 81
1. …
a) a c) …
d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos, sus candidatos **y los candidatos independientes**, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por este Código;
e) a t) …
2. …

Artículo 90.
1. Los partidos políticos **y los candidatos independientes** disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 91.
1. …
a) El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos **y candidatos independientes**; en años no electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al **cinco** por ciento;
b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos **y en los periodos aplicables a los candidatos independientes**;
c) …
En el caso de los candidatos independientes, el Instituto informará al Servicio Postal Mexicano el presupuesto que le corresponde al candidato que cuente con el registro, para las campañas electorales correspondientes.
d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de cada partido **y las personas que designen los candidatos independientes para tal efecto**. Los representantes de los partidos, **y en su caso, de los candidatos independientes** ante el Consejo General informarán oportunamente al Instituto sobre la asignación anual entre dichos comités de la prerrogativa que les corresponda;

e) Los partidos políticos **y en los periodos aplicables, los candidatos independientes** acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes autorizados por cada uno de sus comités para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus publicaciones periódicas. La propia Dirección Ejecutiva comunicará al Servicio Postal Mexicano los nombres de los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados;
f) a g) …
h) En la correspondencia de cada partido político **y de los candidatos independientes** se mencionará de manera visible su condición de remitente;
i) El Instituto Federal Electoral celebrará los convenios y acuerdos necesarios con el Servicio Postal Mexicano para los efectos establecidos en el presente artículo; este último informará, en los términos y plazos que se convengan, del uso que haga cada partido político **y los candidatos independientes** de su prerrogativa, así como de cualquier irregularidad que en el uso de la misma llegue a conocer; y
j) Los partidos **y candidatos independientes** informarán oportunamente a la Dirección Ejecutiva de la sustitución de sus representantes autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio Postal Mexicano.

Artículo 92.
1. …
a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacionales de cada partido político **y las personas que designen los candidatos independientes para tal efecto**;
b) Los comités nacionalespodrán usar las franquicias para sus comunicaciones a toda la República**. Los candidatos independientes podrán utilizar las franquicias para sus comunicaciones en la demarcación electoral del cargo por el que contiendan**;
c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes autorizados por cada uno de los comités nacionales **y por las personas que designen los candidatos independientes para tal efecto**. Los nombres y firmas de los representantes autorizados se registrarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a fin de que ésta los comunique al organismo público correspondiente;
d) a e) …
2. …

Artículo 93.
1. a 4. …
5. Los partidos políticos, no podrán formar coaliciones con candidatos independientes bajo ninguna circunstancia.

Artículo 110.
1. a 10. …
11. Los consejeros electorales deberán velar por la promoción de las candidaturas independientes durante los periodos aplicables.

Artículo 118.
1. …
a) a g) …
h) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales, las agrupaciones políticas **y los candidatos independientes** se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
i) a m) …
n) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos **y los candidatos independientes** en los términos de este Código;
ñ) a q)…
t) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos, **los candidatos independientes** o el proceso electoral federal;

u) a z) …
2. a 3. …

Artículo 119.
1. …
a) a i) …
j) Recibir de los partidos políticos nacionales **y de los precandidatos a candidaturas independientes** las solicitudes de registro de candidatos a la Presidencia de la República y las de candidatos a senadores y diputados por el principio de representación proporcional y someterlas al Consejo General para su registro;
k) a q) …

Artículo 122.
1. …
a) a c) …
d) Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos nacionales**,a los candidatos independientes** y a las agrupaciones políticas y sus respectivas prerrogativas;
e) a o) …

Artículo 128.
1. …
a) a g) …
h) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto, a los partidos políticos nacionales, **y en su caso, a los candidatos independientes,** las listas nominales de electores en los términos de este Código;
i) a p) …
2) ….

Artículo 136.
1. …
a) a e) …
f) Registrar las firmas de apoyo a los ciudadanos que desean contender como candidatos independientes a una senaduría o diputación federal en términos del Libro Octavo del presente Código, y
g) **Las demás que les confiera este Código.**

Artículo 138.
1. Los consejos locales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales, **y en su caso, de los candidatos independientes.** Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.
2. a 4. …

Artículo 143.
1. …
a) …
b) Recibir por sí mismo o por conducto del secretario las solicitudes de registro de candidaturas a senador por el principio de mayoría relativa, que presenten los partidos políticos nacionales **o ciudadanos que buscan una candidatura independiente;**
c) a i) …
2. a 3. …

Artículo 149.
1. Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como vocal ejecutivo distrital; seis consejeros electorales, representantes de los partidos políticos nacionales **y de los candidatos independientes**. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto.
2. a 4. …

Artículo 152.
1. …
a) a e) …
f)) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos **y los candidatos independientes** acrediten para la jornada electoral;
g) …
h) Expedir, en su caso la identificación de los representantes de los partidos **y los candidatos independientes** en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso, diez días antes de la jornada electoral;
i) a m) …

Artículo 162.
1. Los partidos políticos nacionales **ylos candidatos independientes** deberán acreditar a sus representantes ante los consejos locales y distritales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del Consejo de que se trate.

2. Vencido este plazo, los partidos **ylos candidatos independientes** que no hayan acreditado a sus representantes no formarán parte del Consejo respectivo durante el proceso electoral.

3. Los partidos políticos **ylos candidatos independientes** podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los consejos del Instituto.

Artículo 163.
1. Cuando el representante propietario de un partido **o delos candidatos independientes** y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su representante.
2. Los consejos distritales informarán por escrito a los consejos locales de cada ausencia, para que a su vez informen al Consejo General del Instituto con el propósito de que entere a los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes.**
3. La resolución del Consejo correspondiente se notificará al partido político respectivo, **o en su caso, alos candidatos independientes.**

Artículo 164.
1. Los órganos del Instituto expedirán, a solicitud de los representantes de los partidos políticos nacionales **o de los candidatos independientes**, copias certificadas de las actas de las sesiones que celebren.
2. ...

Artículo 166.
1. En las mesas de sesiones de los consejos sólo ocuparán lugar y tomarán parte en las deliberaciones los

consejeros y los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes**.

Artículo 168.
1. Los funcionarios electorales y los representantes de los partidos políticos nacionales **y de los candidatos independientes** debidamente acreditados ante los órganos del Instituto, gozarán de las franquicias postales y telegráficas y de los descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias oficiales, según lo acuerde el secretario ejecutivo del Instituto.

Artículo 169.
1. a 3. …
4. A solicitud de los representantes de los partidos políticos **o de los candidatos independientes** ante los consejos General, locales y distritales, se expedirán copias certificadas de las actas de sus respectivas sesiones a más tardar a los cinco días de haberse aprobado aquéllas. Los secretarios de los consejos serán responsables por la inobservancia.

Artículo 170.
1. …
2. Los consejos locales y distritales determinarán sus horarios de labores teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo anterior. De los horarios que fijen informarán al secretario ejecutivo del Instituto para dar cuenta al Consejo General del Instituto y en su caso, al presidente del Consejo Local respectivo, y a los partidos políticos nacionales **y los candidatos independientes** que hayan acreditado representantes ante el mismo.

Artículo 209.
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales, **los candidatos independientes** y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
2. …

Artículo 211.
1. Los procesos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades **internas** que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en este Código, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, **así como el conjunto de actividades que realizan los ciudadanos que pretenden postularse a un cargo de elección popular de forma independiente a los partidos políticos.**
2. a 5. …
6. Los precandidatos a candidaturas independientes a cargos de elección popular, se regirán por lo establecido en el Libro octavo de este Código.

Artículo 212.
1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes, los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido **y los precandidatos a candidaturas independientes a cargos de elección popular debidamente registrados en términos delLibro octavo de este Código.**
2. a 3. …
4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido **político o de forma independiente** como candidato a cargo de elección popular, conforme a este Código y **en su caso** a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.
5. …
6. Para las candidaturas independientes, la precampaña se entenderá como el periodo en el cual se

recabarán las firmas a favor de los precandidatos para lograr la obtención de la candidatura.

Artículo 216.
1. a 5. …
6. Los precandidatos a candidaturas independientes a cargos de elección popular se regirán por lo establecido en el Libro octavo de este Código.

Capítulo segundo
Del procedimiento de registro de candidatos

Artículo 218.
1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, **así como a los ciudadanos que cumplan los requisitos señalados en el Libro octavo de este Código.**
2. Las candidaturas **de los partidos políticos** a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.
3. a 4. …
5. Los precandidatos a candidaturas independientes a cargos de elección popular, se regirán por lo establecido en el Libro octavo de este Código.

Artículo 219.
1. De la totalidad de solicitudes de registro **de los partidos políticos**, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
2. …

Artículo 224.
1. …
a) a f) …
2. a 6. …
7.Para el registro de candidaturas independientes a cargos de elección popular, se regirán por lo establecido en el Libro octavo de este Código.

Artículo 225.
1. …
2. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido político **o al candidato independiente** correspondiente, para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 223 de este Código.
3. a 8. …

Artículo 226.
1. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la relación de nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulan, **así como de los candidatos independientes registrados.**
2. …

Artículo 228.
1. a 3. ….
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado **los partidos políticos o los candidatos independientes.**

Artículo 229.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, **así como los candidatos independientes** en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. a 4. …

Artículo 230.
1. …
2. …
a) …
b) Los partidos políticos **y los candidatos independientes** deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y sus instalaciones.
3. …

Artículo 233.
1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos **y los candidatos independientes** se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.
1. a 4. …

Artículo 237.
1. a 2. …
3. Las campañas electorales de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.
4. a 7. …

Artículo 240.
1. …
2. Los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** en los Consejos Distritales, podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto en este artículo.
3. En caso de sustituciones, las Juntas Distritales deberán informar de las mismas a los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** en forma detallada y oportuna.

Artículo 245.
1. a 4. …
5. Los candidatos independientes, una vez registrados y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios.

Artículo 246.
1. La actuación de los representantes generales de los **partidos y de los candidatos independientes** estará sujeta a las normas siguientes:
a) a e) …
f) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante de su partido político **o el representante del candidato independiente** ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente; y
g) Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político **o de sucandidato independiente** en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño.

Artículo 247.
1. Los representantes de los partidos políticos y de los **candidatos independientes** debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes derechos:
a) a f) …
2. …

Artículo 248.
1. …
a) …
b) Los Consejos Distritales devolverán a los partidos políticos **y a loscandidatos independientes** el original de los nombramientos respectivos, debidamente sellado y firmado por el presidente y el secretario del mismo, conservando un ejemplar; y
c) Los partidos políticos **y loscandidatos independientes** podrán sustituir a sus representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de la elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior.

Artículo 249.
1. …
a) Se hará mediante escrito firmado por el dirigente o representante del partido político que haga el nombramiento **o en su caso, por el candidato independiente;**
b) a d) …

Artículo 250.
1. …
a) Denominación del partido político **o nombre completo del candidato independiente al que representan;**
b) a f) …
g) Firma del representante o del dirigente del partido político que haga el nombramiento **y en su caso del candidato independiente**.
2. a 4. …

Capítulo sexto
De la documentación y el material electoral

Artículo 252.
1. …
2. …
a) a b) …
c) Emblema a color **del candidato independientey** de cada uno de los partidos políticos nacionales que participan con candidatos propios, o en coalición, en la elección de que se trate;
d) a j) …

3. a 6. …
7. Los emblemas a color de los candidatos independientes aparecerán en la boleta, después de los candidatos postulados por partidos políticos, en el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos o más candidatos independientes haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los candidatos independientes aparecerán en la boleta en el orden alfabético de su primer apellido.

Artículo 253.
1. …
2. Los votos para candidatos independientes cuyo registro haya sido cancelado se contarán como votos nulos.

Artículo 255.
1. …
a) …
b) La relación de los representantes de los partidos **y los candidatos independientes** registrados para la casilla en el Consejo Distrital Electoral;
c) La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político **y candidato independiente** en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión;
d) a i) …
2. a 4. …

Artículo 259.
1. y 2. …
3. A solicitud de un partido político **o de un candidato independiente**, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de **sus** representantes ante la casilla designado por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante del partido **o del candidato independiente** que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.
4. a 7. …

Artículo 263.
1. y 2. …
3. El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, que lo serán preferentemente, los integrantes de la mesa directiva o los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes**.
4. …

Artículo 265.
1. a 4. …
5. Los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

Artículo 266.
1. a 2. …
3. …
a) …
b) Los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** debidamente acreditados

en los términos que fijan los artículos 250 y 251 de este Código;
c) y d) …
4. a 6. …

Artículo 268.
1. Los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** podrán presentar al secretario de la mesa directiva escritos sobre cualquier incidente que en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto por este Código.
2. …

Artículo 269.
1. Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o a los representantes de los partidos **o de los candidatos independientes** durante la jornada electoral, salvo en el caso de flagrante delito.

Artículo 279.
1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:
a) a c) …
d) El número de representantes de partidos o **decandidatos independientes** que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de electores,
e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y
f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** al término del escrutinio y cómputo.
2. a 3. …
4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes**, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo.

Artículo 280.
1. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** que actuaron en la casilla.

2. Los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta.

Artículo 282.
1. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes**, recabándose el acuse de recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será destinada al programa de resultados electorales preliminares.
2. …

Artículo 295.
1. …
a) ..
b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el

secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 277 de este Código. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;
c) a k) …
2. y 3. …
4. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del Consejo Distrital dará aviso inmediato al secretario ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos **y de los candidatos independientes** y los vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos **y los candidatos independientes** tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.
5. a 9. …

Artículo 329.
1. a 3. …
4. Los partidos políticos **y, en su caso, los candidatos independientes** designarán dos representantes por cada mesa y un representante general por cada veinte mesas, así como un representante general para el cómputo distrital de la votación emitida en el extranjero.
5. y 6. …

Artículo 332.
1. …
2. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos **y de los candidatos independientes**, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por distrito electoral uninominal, que será asentado en el acta de cómputo correspondiente a cada distrito electoral.
3. Las actas de cómputo distrital serán firmadas por el funcionario responsable y por el representante general de cada partido político **y de cada candidato independiente** designado para el efecto.
4. Los actos señalados en los párrafos anteriores de este artículo serán realizados en presencia de los representantes generales de los partidos políticos **y de los candidatos independientes** para el cómputo distrital de la votación emitida en el extranjero.

Artículo 334.
1. …
2. Los partidos políticos **y candidatos independientes** recibirán copia legible de todas las actas.
3. …

Artículo 336.
1. Los partidos políticos nacionales y **los** candidatos a cargos de elección popular**,** no podrán realizar campaña

electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas en el extranjero, en cualquier tiempo, las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el artículo 228 de este Código.
2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos **o los candidatos independientes** utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

Artículo 344.
1. …
a) …
b) …
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña; **o al aviso previo y obtención de respaldo ciudadano, en su caso.**
d) No presentar el informe **correspondiente** de gastos **ejercidos durante las etapas de aviso previo y búsqueda de respaldo ciudadano,** de precampaña o campaña establecidos en este Código;
e) Exceder el tope de gastos de **las etapas de aviso previo, búsqueda de respaldo ciudadano,** precampaña o campaña establecido por el Consejo General; y
f) …

Artículo 348.
1. Constituyen infracciones al presente Código de los notarios públicos, el incumplimiento de las obligaciones de mantener abiertas sus oficinas el día de la elección y de atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos, los representantes de partidos políticos **y de los candidatos independientes,** para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

Capítulo Tercero
Del procedimiento sancionador ordinario

Artículo 362.
1. …
2. …
a) a e) …
f) Los partidos políticos **y los candidatos independientes** deberán presentar las quejas o denuncias por escrito. En caso de que los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.
3. a 9. …

Capítulo Cuarto
Del procedimiento especial sancionador

Artículo 367.
1. …
a) …
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos **y candidatos independientes** en este Código; o
c) …

Libro octavo.

De las Candidaturas Independientes
Título primero
Disposiciones preliminares

Artículo 395.
1. Es derecho de los ciudadanos poder ser votado para los cargos de presidente de la República, senador de la República o diputado federal, teniendo las calidades que establece este Código.

2. El derecho de solicitar el registro como candidato ante la autoridad electoral corresponde a cualquier ciudadano que lo requiera de manera independiente a los partidos políticos y siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que dispone este Libro.

Artículo 396.
1. En lo relativo al presente Libro, se entenderán por:
a) Precandidato: Al ciudadano que entregue su aviso de intención y que obtenga su constancia de aviso, por el consejo correspondiente.
b) Constancia de aviso: Documento que expida el consejo correspondiente del Instituto, para acreditar que un ciudadano cumple con los requisitos de elegibilidad para obtener una candidatura independiente.
c) Constancia de registro: Al documento que expedirá el consejo correspondiente del Instituto, para acreditar que el precandidato logró el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano para obtener la candidatura.
d) Candidato Independiente: Al ciudadano que cumplió con todos los requisitos y condiciones, así como el registro en los plazos y condiciones estipulados por el Instituto, para obtener la candidatura, sin ser registrado por un partido político.

Titulo Segundo
De los derechos y obligaciones de los candidatos independientes

Artículo 397
1. Son derechos de los candidatos independientes a cargos federales:
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en este Código, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;
b) Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente sus actividades;
c) Acceder al financiamiento público en los términos de este Código, y
d) Los demás que les otorgue este Código.

Artículo 398
1. Son obligaciones de los candidatos independientes:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política y los derechos de los ciudadanos;
b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;
c) Buscar y encauzar la obtención de firmas para su registro como candidato en los términos de este Código;
d) Ostentarse con el emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales;
e) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción;
f) Contar con domicilio, el cual deberá permanecer desde el registro de la precandidatura hasta la

conclusión del proceso electoral;
g) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por este Código así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;
h) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;
i) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en este Código;
o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.;
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;
s) Cumplir con las obligaciones que este Código les establece en materia de transparencia y acceso a su información; y
t) Las demás que establezca este Código.

Título segundo
Del proceso de Obtención de la Candidatura Independiente
Capítulo primero
Del aviso de intención

Artículo 399.
1. Los precandidatos que pretendan participar en una contienda electoral de manera independiente, deberán entregar el aviso por escrito ante el Consejo Electoral que corresponda del Instituto, de acuerdo al tipo de cargo de elección a la que se aspira, durante el mes de julio del año previo al día de la jornada electoral.

Artículo 400.
1. El aviso que presenten los precandidatos ante el órgano correspondiente del Instituto deberá contener la siguiente información:
I. Nombre completo del ciudadano que aspira a una candidatura independiente, anexando copia de su credencial de elector;
II. Cargo para el que se pretenda postular;
III. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en cualquier régimen, y la Clave Única de Registro de Población;
IV. Carta bajo donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, la no militancia en un partido político, o bien, que ha renunciado a dicha militancia;
V. Carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad que refiera el cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para acceder a los cargos de presidente de la República, diputado federal y senador, según sea el caso;
VI. Nombre completo del representante general, así como del representante sustituto ante el Instituto;
VII. Su declaración de principios y programa de acción, donde debe exponer los motivos que sustentan su intención de contender y sus propuestas en caso de resultar electo;
VIII. Cuenta bancaria de cualquier institución nacional que tenga un tiempo máximo de apertura de quince días anteriores a la entrega del aviso de intención, y
IX. Nombre de la persona autorizada para administrar los recursos de la precampaña y para presentar los informes firmados por el precandidato, ante el Instituto.

2. El Instituto verificará la autenticidad de los documentos presentados por los precandidatos, ante el órgano correspondiente y para el requisito marcado en la fracción IV, hará la consulta correspondiente con las dirigencias nacionales de los partidos políticos, salvo que la candidatura por la que se pretende contender permita presumir la filiación a un partido de registro local.

3. En el caso de que el aviso se refiera al cargo de senador de la República o diputado federal, los requisitos de las fracciones I a V deberán ser cubiertas de manera individual por los precandidatos propietarios y los suplentes.

Artículo 401.
1. En la revisión del aviso de los precandidatos independientes, el Instituto deberá:
I. Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en este capítulo, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presentación del aviso, y
II. Notificar al candidato independiente la resolución correspondiente sobre la resolución de su registro.

2. De aceptarse el registro de la candidatura independiente, el Instituto deberá expedir la Constancia de Aviso.

3. Obtenida la Constancia del Aviso, los precandidatos deberán sujetarse estrictamente a los tiempos estipulados en este Código para la búsqueda del respaldo ciudadano.

Capítulo segundo
De los requisitos del respaldo ciudadano

Artículo 402.
1. Durante la precampaña, los precandidatos independientes buscarán el respaldo ciudadano de conformidad con lo siguiente:
I. Para el cargo a presidente de la República, deberán ser respaldados por al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos ciento cincuenta distritos electorales de forma igualitaria;
II. Para el cargo a senador, deberán ser respaldados por al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus distritos electorales de forma igualitaria, y
III. Para el cargo a diputados federales deberán ser respaldados por al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores correspondiente, distribuidos en por lo menos cincuenta por ciento de sus secciones electorales de forma igualitaria.

2. Los ciudadanos que brinden su respaldo a un precandidato independiente, deberán asistir ante el órgano correspondiente del Instituto para indicar su nombre, domicilio, clave de elector, firma autógrafa o su impresión dactiloscópica en el formato correspondiente, si no pudiere firmar, y presentar el original y copia de la credencial de elector.

Artículo 403.
1. El Instituto expedirá:
a) Los lineamientos a que se sujetarán los procesos de respaldo ciudadano, y
b) Los topes máximos de recursos que podrán erogarse por los precandidatos, durante la precampaña, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 413.

2. La persona designada para administrar los recursos, deberá elaborar un informe pormenorizado de cada una de las actividades realizadas por el precandidato y los gastos erogados en cada caso, especificando el origen de los recursos, mismo que deberá ser firmado por el precandidato y

presentado ante el Instituto, el que en todo tiempo tendrá la facultad de verificar por cualquier medio, la veracidad de dichos informes.

Artículo 404.
1. El registro de firmas que respalden la candidatura de los precandidatos será llevado por el Instituto de la siguiente forma:
I. Para candidaturas a la presidencia de la República, se registrará ante el Consejo General del Instituto;
II. Para candidaturas a senadurías de la República, ante la Junta Local Ejecutiva, y
III. Para candidaturas a diputaciones federales, ante la Junta Local Ejecutiva.

2. Los ciudadanos que respalden a la candidatura independiente de otro ciudadano deberán presentarse con la credencial de elector ante el órgano correspondiente a efecto de firmar la lista de respaldo correspondiente.

3. Cada órgano deberá facilitar la recepción de firmas de apoyo de los ciudadanos, teniendo una ventanilla permanente durante la precamapaña, y de así determinarse, instalando módulos de atención en lugares que faciliten la participación de los ciudadanos, así como los mecanismos que el propio Instituto determine para cumplir con dicha tarea.

4. Los precandidatos independientes podrán solicitar al Instituto la instalación de módulos de atención o mecanismos que faciliten la participación de los ciudadanos, en los lugares y fechas que consideren idóneos, justificando dicho requerimiento.

5. Los ciudadanos que hayan respaldado una candidatura independiente no podrán hacerlo de nuevo, para otro precandidato que se postule para el mismo cargo.

6. El órgano correspondiente del Instituto validará las firmas, velarán porque no haya réplicas de respaldo de un ciudadano para dos o más precandidatos y contabilizarán el número de firmas. Se integrará un expediente y se remitirá al Consejo General del Instituto, para los trámites correspondientes.

Artículo 405. El órgano correspondiente del Instituto deberá, dentro de los quince días naturales siguientes al de la entrega de la lista de respaldo ciudadano, solicitar la compulsa con la lista nominal de electores al Registro Federal de Electores, a efecto de verificar que cumple con los requisitos previstos por el artículo 402, que no tenga firmas iguales al de otro precandidato y que estén distribuidas geográficamente como lo estipula este Código.

Artículo 406.
1. Si de la compulsa a que se refiere el artículo anterior se determina que un precandidato satisface los requisitos, el órgano correspondiente del Instituto deberá emitir un acuerdo para expedir la Constancia de Respaldo Ciudadano.

2. Si de la compulsa a que se refiere el artículo anterior se determina que un precandidato no satisface los requisitos, el Instituto lo desechará.

3. Terminada la precampaña, el órgano correspondiente integrará en el expediente el cómputo de las firmas obtenidas por cada precandidato, dentro de los quince días naturales siguientes.

Capítulo Tercero
Del Registro

Artículo 407.
1. La solicitud de registro se presentará en el periodo previsto por este Código y deberá acompañarse de:
I. Constancia de aviso;
II. Constancia de Respaldo;
III. El documento que contenga su declaración de principios y su programa de acción;
IV. Datos de la cuenta bancaria que se utilizó para recibir los recursos en la precampaña;
V. Informe de gastos ejercidos durante la etapa de búsqueda de respaldo ciudadano, precisando la cuenta bancaria que se utilizó para financiar las actividades y el origen de los recursos, acompañándolo de la documentación correspondiente;
VI. Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no recibió en numerario o en especie recursos adicionales a los señalados en el informe referido en la fracción anterior, ya fuera de manera directa, indirecta o por medio de terceros;
VII. El nombre de la persona autorizada para gestionar la recepción de los recursos y presentar los informes de la administración de los mismos, ante el Instituto;
VIII. Documento en el que acepta que el Instituto administre la totalidad de los recursos que utilizará para la campaña electoral, sean de fuente privada o pública, y
IX. El color o combinación de colores y formas con las que se distinguirá para promover su candidatura, la cual no podrá ser igual a la de los partidos políticos o coaliciones con registro ante el Instituto, así como el logotipo, pseudónimo y lema con el que competirá y que se imprimirá en la boleta electoral.

2. El Consejo correspondiente recibirá la solicitud de registro y si detectara la falta de algún requisito, prevendrá al precandidato dentro de las veinticuatro horas siguientes para que en un plazo no mayor a tres días naturales, subsane la omisión.

3. De no subsanarse la omisión, se desechará la solicitud de registro y se cancelará de manera irrevocable el registro a la candidatura.

Artículo 408.
1. No procede el registro de una candidatura independiente en los casos siguientes:
I. Por no cubrir los requisitos para el registro previstos en el este Código;
II. Por presentar información falsa para obtener la constancia de aviso o la constancia de respaldo ciudadano;
III. Por comprobarse que se coaccionó a los ciudadanos para obtener su apoyo;
IV. Por haber obtenido recursos que no fueron informados al Instituto;
V. Por alterar la contabilidad de los recursos utilizados en la precampaña, con la intención de desvirtuar los datos contenidos en el informe de gastos utilizados;
VI. Por el uso de recursos ilícitos durante la precampaña;
VII. Por haber sido condenado por delito que merezca pena privativa de la libertad, o
VIII. Por tener suspendidos los derechos de ciudadanía.

Artículo 409.
1. Una vez cubiertos los requisitos que señala el artículo 407 del presente Código, el órgano correspondiente del Instituto aprobará el registro del precandidato como candidato independiente y emitirá la constancia correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sesión en que

aprueben el registro.

Artículo 410.
1. Las candidaturas independientes se sujetarán a las siguientes restricciones:
I. No se podrá realizar la sustitución de candidatos independientes registrados, y
II. Los partidos políticos o coaliciones no podrán registrar como candidatos a ciudadanos que se hayan postulado como candidatos independientes.

Capítulo cuarto
De la Organización de los Candidatos Independientes en el proceso electoral

Artículo 411.
1. El candidato independiente deberá nombrar al momento del registro, a un responsable titular y a un sustituto de finanzas y a un representante general ante el consejo correspondiente, así como un responsable sustituto, e indicar sus nombres, domicilios y teléfonos donde puedan localizarse.

Artículo 412.
1. El Instituto protegerá los derechos de los candidatos independientes ante el Consejo General, designando de entre sus miembros, a quien fungirá durante el proceso electoral de que se trate, como su representante.

2. De igual manera, emitirá los lineamientos correspondientes para que los candidatos estén debidamente representados ante los Consejos y Juntas Distritales, así como ante las mesas directivas de las casillas electorales.

3. El Instituto será el responsable de proveer los materiales y herramientas para capacitar a quienes representen a los candidatos independientes, con cargo al presupuesto del propio Instituto.

Título Tercero
De los Recursos Económicos utilizados en las Campañas Electorales

Capítulo primero
De los Ingresos

Artículo 413.
1. Para la administración de los recursos, los candidatos deberán depositar a la cuenta que el Instituto apruebe, la totalidad de los recursos privados que consigan para financiar sus actividades de campaña, de manera adicional a los recursos públicos que el Instituto les asigne.

2. Al inicio de la campaña, el Instituto hará una ministración inicial a los candidatos, equivalente al veinte por ciento del total de recursos públicos y hará ministraciones posteriores, condicionadas a la comprobación de la primera ministración. En caso contrario, se suspenderán la liberación de los recursos públicos y sólo se podrán ministrar los recursos privados depositados.

3. La cuenta bancaria que se abra para tal efecto, será exclusiva para el uso de los recursos que se utilizarán durante el proceso electoral. El Instituto emitirá los lineamientos para la apertura y manejo de la cuenta bancaria.

4. Los donativos que reciban los candidatos deberán ser hechos únicamente a la cuenta bancaria referida en este artículo.

5. Los candidatos deberán acreditar los gastos que realicen con los recursos que se encuentran depositados en la cuenta, y si al final del proceso electoral la cuenta tuviera remanentes, el Instituto velará porque sean donados a instituciones de beneficencia y asistencia pública.

Artículo 414.
1. Para el desarrollo de la campaña, el financiamiento público podrá ser de hasta el cincuenta y uno por ciento del tope de gastos de campaña, definido para cada tipo de elección y el porcentaje restante será privado.
Artículo 415.
1. No podrán realizar aportaciones a los candidatos independientes, en dinero o en especie, por sí o a través de terceros, los siguientes:
I. Los servidores públicos de los recursos públicos asignados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de los estados, de los organismos autónomos o de los ayuntamientos;
II. Los servidores públicos de los recursos públicos asignados a las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizados, paraestatales o que tenga cualquier otra figura jurídica o administrativa de organización a la que se le otorguen recursos públicos;
III. Los partidos políticos;
IV. Los Sindicatos,
V. Las personas físicas o morales extranjeras;
VI. Los ministros, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier culto o denominación religiosa, y
VII. Cualquier persona física o moral que no pueda justificar la lícita procedencia de los recursos que pretenda aportar.

2. El incumplimiento a este artículo dará lugar a las sanciones previstas en este Código.

Artículo 416.
1. Los gastos que realicen los candidatos independientes en propaganda electoral y en las actividades de campaña se sujetarán, en lo aplicable, a las disposiciones previstas para los candidatos postulados por los partidos políticos.

Artículo 417.
1. Los candidatos independientes están obligados a devolver al Instituto los recursos públicos que no sean debidamente comprobados conforme a los lineamientos que se hayan emitido.

Artículo 418.
1. Están obligados los candidatos independientes a devolver al Instituto el financiamiento público no ejercido.

Capítulo tercero
De los informes de gastos

Artículo 419.
1. El Instituto emitirá los reglamentos para el control y vigilancia del origen y destino de todos los recursos erogados por los candidatos independientes durante el proceso electoral y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 420.
1. Los candidatos independientes deberán presentar ante la Unidad de Fiscalización del Consejo General del Instituto, un informe quincenal del origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados desde la entrega del aviso de aspiración, la búsqueda del respaldo ciudadano, así como de la

campaña electoral, en los formatos que establezca el Instituto.

Artículo 421.
1. El procedimiento para la revisión, fiscalización y dictamen de los informes de gastos de campaña de los candidatos independientes, se ajustará a lo siguiente:
I. La Unidad de Fiscalización, con la Dirección Ejecutiva de Revisión y Fiscalización, revisará los informes presentados por los candidatos independientes en un plazo de treinta días, contados a partir de su recepción;
II. Si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones, notificará al candidato independiente que hubiere incurrido en ellos para que en un plazo de quince días, contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;
III. Al vencimiento del plazo señalado en la fracción I del presente artículo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización dispondrá de un plazo de diez días para elaborar un dictamen consolidado y un proyecto de resolución que deberá presentar al órgano correspondiente dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y
IV. El dictamen deberá contener por lo menos:
a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes de los candidatos independientes, y
b) Los errores, omisiones y las irregularidades encontradas en los mismos, en su caso;
c) El contenido de las aclaraciones o rectificaciones que, en su caso, hayan presentado los candidatos independientes, y
d) El proyecto de resolución que se presentará ante el Consejo General, para que proceda a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. El dictamen elaborado en términos de la presente fracción deberá ser notificado dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo otorgado para su elaboración, a todos los integrantes del Consejo para los efectos legales a que haya lugar.

Capítulo cuarto
Del régimen fiscal

Artículo 422.
1. Los candidatos independientes no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes:
a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines;
b) Sobre la renta, en cuanto a los ingresos provenientes de donaciones en numerario o en especie;
c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus programas y en general para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma; y
d) Respecto de los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá adecuar en un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos de cada una de las Cámaras.

TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá adecuar en un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO.-El Instituto deberá adecuar y expedir en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los reglamentos y formatos para implementar lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre candidaturas independientes.

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ.

SEN. ERNESTO RUFFOAPPEL.

SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ

SEN. JAVIER CORRAL JURADO

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 31 días del mes de julio del año 2013.

DE LOS DIPUTADOS TRINIDAD MORALES VARGAS, MARIO MIRANDA SALGADO Y LIZBETH ROSAS MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA CIUDADANA.



DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO

CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA CIUDADANA, A CARGO DE LOS DIPUTADOS TRINIDAD MORALES VARGAS, MARINO MIRANDA SALGADO Y LIZBETH ROSAS MONTERO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Planteamiento del Problema

El derecho de la ciudadanía a iniciar el engranaje legislativo mediante la entrega de un proyecto de iniciativa marca, sin duda, un componente toral en todo proceso democratizador. A nivel internacional, en concordancia con este proceso, nueve de cada diez países presentan algún tipo de influencia directa de los ciudadanos en el proceso legislativo o de toma de decisiones.

En nuestro país, a nivel local, las constituciones de 30 entidades federativas y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señalan la existencia de esta figura. No obstante, fue hasta el pasado 9 de agosto de 2012 –tras más de una década de haber arribado a la agenda política y legislativa del país– que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en materia de reforma política que incluye el establecimiento, a nivel federal, de diversos derechos de participación ciudadana, entre ellos, el de la iniciativa ciudadana.

El decreto estableció, en su artículo segundo transitorio, que el Congreso de la Unión tendría que expedir la legislación secundaria para hacer efectivos los cambios constitucionales, a más tardar, un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo. La exigencia de legislar en la materia es mayor si consideramos que los ciudadanos ya han decidido ejercer estos derechos, que no podrían, por tanto, ser conculcados a falta de una regulación expresa.

La formulación de la legislación secundaria conlleva, pues, el reto de hacerlos asequibles, de proveer las garantías y los mecanismos legales, procesales y administrativos que, lejos de inhibirlos o convertirse en un obstáculo para su ejercicio, los haga efectivos, accesibles y eficaces.

En este marco, el objetivo central de la presente iniciativa es cumplir el mandato constitucional en lo que a la tramitación, análisis, dictamen, discusión y, eventual, aprobación de las iniciativas ciudadanas en el Congreso de la Unión se refiere. Lo anterior, desde una perspectiva plural y de ampliación de los derechos humanos individuales y colectivos, lo cual permitirá, además, promover la construcción de ciudadanía, proceso por demás relevante en una democracia como la nuestra que ha tendido a la fragmentación, la dispersión y la anomia social, a lo largo de las últimas décadas.

Argumentación

Sin duda alguna, el siglo XX marcó el triunfo de la democracia como el sistema de gobierno dominante en el mundo. A lo largo de dicha centuria y tras las guerras mundiales y conflictos armados regionales y locales asociados a regímenes totalitarios, dictatoriales, militares, autocráticos, e incluso coloniales, la democracia moderna emergió como la forma más perfecta –y perfectible– de gobierno, al lograr sustentarse, en mayor o menor grado, en lo que posteriormente se reconocería en el Derecho Internacional, como los derechos fundamentales de la humanidad.

En particular, de acuerdo con Norberto Bobbio, "el desarrollo de la democracia desde comienzos del siglo

pasado coincidió con la extensión progresiva de los derechos políticos, es decir, del derecho de participar [en la decisión de los asuntos públicos], por medio de la elección de representantes"[29]. Ciento cuarenta de los casi doscientos países del mundo convocan a elecciones multipartidistas, más que en cualquier otro momento de la historia. No obstante, el funcionamiento de la democracia representativa o indirecta plantea diversos desafíos, relacionados con los límites que imponen las sociedades modernas en las que la pluralidad, la complejidad de la realidad política, social y económica, así como el desgaste de las instituciones públicas han mermado la capacidad del sistema para articular, agregar y representar legítima y eficazmente los intereses ciudadanos.

En este sentido, a la euforia e ilusiones generadas por las diversas olas democratizadoras les sucedieron el descontento y, a la postre, la insatisfacción y el alejamiento ciudadano de lo público. A decir de Miguel Carbonell, "en el mundo moderno, se ha producido un tránsito cuando menos paradójico en los escenarios de la participación política: cuanto más se han ensanchado esos escenarios, tanto más se han multiplicado las actitudes displicentes o claramente abstencionistas por parte de los votantes", aunque como más adelante señala, el abstencionismo no es sólo electoral, sino también cívico. Lo anterior se ve claramente reflejado en los datos que el Latinobarómetro presenta periódicamente con relación a lo que denomina "la menor adhesión ciudadana al régimen democrático" que en América Latina se halla encabezada por Perú (7%), pero seguido muy de cerca por Paraguay (13%), Ecuador (14%), Bolivia (16%) y México (17%)[30].

De este modo, mientras que el siglo XX significó la instauración del régimen democrático como sistema de gobierno dominante, particularmente, en lo que respecta a la institucionalización de la vía electoral como mecanismo de *acceso al poder*; el siglo XXI está llamado a dotar de contenido a la democracia en lo que al *ejercicio* y *distribución* –o en el caso de las democracias maduras, *redistribución– efectiva del poder* se refiere.

Por ello, la continuidad y el avance democrático en el siglo XXI se hallan fuertemente relacionados y condicionados por la revitalización y reconfiguración de los canales de participación que hagan realidad la inclusión plena de la ciudadanía y de sus intereses en la arena pública. Esto es, de trascender el primordial pero circunscrito –tanto en contenido como en temporalidad– ejercicio del voto y, de esta forma, redimensionar el elemento central de la democracia: la radicación de la soberanía en el pueblo.

Este contexto llevó al Secretario General de la ONU –tras el compromiso que los gobiernos del mundo asumieron en la Cumbre Mundial de este organismo en 2005 con el principio democrático de "plena participación ciudadana" – a iniciar en 2010 la década para "la democratización de la democracia"[31].

Una ruta de cambio en este escenario –comúnmente considerada excluyente, pero cada vez con mayor auge en el ámbito internacional– son los mecanismos de participación ciudadana semi-directos, los cuales brindan la posibilidad a la ciudadanía de incidir en la toma de decisiones en materias que tradicionalmente están circunscritas a instancias políticas representativas o gubernamentales.

Tales mecanismos se hallan enmarcados en lo que la teoría política contemporánea ha denominado como "democracia deliberativa", la cual aspira a profundizar la democracia con base en el principio de razonamiento público entre ciudadanos, rehusándose a concebirla como un mero sistema de selección de representantes o de promoción de determinadas políticas públicas, a partir de la agregación de las preferencias de los individuos. Este modelo se presenta, pues, como una opción a aquellos de corte elitista y económico; así como una estrategia que permite reconstruir los principios de legitimidad y fortalecer la

[29] En González Schmal Raúl, Programa de Derecho Constitucional, p. 78.
[30] "La adhesión a la democracia en México era del 45% en 1997 (año en el que el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados) y todavía del 36% en el 2000 (cuando el PRI pierde la Presidencia de la República), pero desciende hasta un 26% en 2001 y hasta el 17% en 2002 y 2004". En Carbonell Miguel, "La participación política en el Estado Constitucional".
[31] En Manual de la Iniciativa Ciudadana Europea, p. 23.

gobernabilidad democrática en las democracias contemporáneos, en la que la deliberación pública no es sólo un elemento central para el mejoramiento de la calidad democrática, sino que constituye la esencia del proceso democrático mismo.

En consecuencia, para este modelo resulta de igual relevancia tanto la libertad de los ciudadanos de expresar sus opiniones políticas, como el derecho a que se protejan el resto de sus derechos fundamentales, a través de su participación en la toma de decisiones políticas por la vía mayoritaria. No obstante, el proceso deliberativo no necesita apelar al consenso como criterio de legitimidad política, toda vez que basta con que los participantes tengan razones públicamente accesibles –aunque sean divergentes– para apoyar el proceso y sus resultados, así como para seguir participando en él. De ahí que dos características torales de la democracia deliberativa sean la razonabilidad y la publicidad, en tanto procesos sociales de comunicación.

Así, la iniciativa legislativa ciudadana se inscribe como un procedimiento de carácter deliberativo, toda vez que permite a los ciudadanos introducir temas en la agenda legislativa que, de otra manera, difícilmente formarían parte de ésta, ya sea porque son contrarios a los intereses de los legisladores o porque no les son relevantes política o electoralmente. Pero sobre todo porque constituye un ejercicio en el que la comunicación y la argumentación pública son un factor central para el respaldo que le brinde el resto de la ciudadanía.

De este modo, la iniciativa ciudadana permite acercarse al ideal democrático descrito puntualmente por Abraham Lincoln en su célebre discurso de Gettysburg: un gobierno democrático debe ser "del, por y para el pueblo". O en palabras de José Woldenberg, "…la democracia es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno –lo que hay que gobernar– sino también el sujeto que gobierna"[32].

Su ejercicio contribuye entonces a determinar el nivel de evolución del sistema político, en la medida en que, por un lado, da forma a la idea central de la democracia representativa moderna, a saber: el ejercicio del máximo nivel posible de soberanía a través de la representación de la mayor variedad de preferencias e intereses ciudadanos. Pero, por otro, en la medida en que responde a las exigencias ciudadanas. De acuerdo con una encuesta realizada por la organización World Public Opinion (Opinión Pública Mundial), en diecinueve países, el 85% de las personas encuestadas creen que *la voluntad del pueblo* debería ser la base de la autoridad de gobierno, y el 74% cree que el principio de la soberanía popular aún no se ha materializado adecuadamente en la práctica. En otras palabras, una gran mayoría de todo el mundo está de acuerdo en que la democracia participativa y deliberativa debe constituir un pilar central de la vida pública.

De este modo, la puesta en práctica de la iniciativa legislativa ciudadana permite avanzar no sólo en la construcción de un modelo democrático que incentive una mayor pertenencia social, restablezca la cohesión social y promueva la figura del ciudadano activo, elevando con ello el nivel de legitimidad para el sistema en su conjunto; sino también en la aplicación de los principios de participación que defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Específicamente, el artículo 21 de la Declaración establece que: "Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente..." y "La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público".

Desde luego, ello depende de la calidad de los ordenamientos que regulen su promoción, análisis, discusión y aplicación, así como de la transparencia con la que se apliquen.

Contexto internacional

En Europa, prácticamente todas las nuevas constituciones de los países que la integran –aproximadamente treinta– han sido aprobadas por sus ciudadanos mediante referéndum. Y, en la actualidad nueve de cada diez

[32] En Salazar Luis y Woldenberg José, "Principios y valores de la democracia", p. 15.

cuentan con algún tipo de influencia directa de los ciudadanos en la toma de decisiones política o legislativa.

Suiza constituye el país pionero en el proceso de incorporación de mecanismos de democracia participativa y deliberativa y cuenta con una larga tradición en su uso. En el caso de la iniciativa popular, ésta se incorporó desde 1874 en la Constitución, permitiendo efectuar reformas a ésta, y en el año 2003 se incorporó, con el voto favorable de la ciudadanía, una reforma que introdujo mejoras que permiten no sólo que los ciudadanos puedan efectuar reformas a la Constitución, sino crear y modificar leyes federales. Lo anterior, bajo la forma de una propuesta genérica, presentando 100,000 firmas, en un plazo de 18 meses contados a partir de su publicación oficial.

En Hungría, la Constitución marca un número mínimo de 50,000 ciudadanos electores para presentar una propuesta en la Asamblea Nacional. Dicha propuesta debe estar formulada de manera explícita para ser discutida en el recinto. La iniciativa popular nacional puede tener por objeto obligar a la Asamblea Nacional a incluir en el orden del día un asunto que está dentro de su competencia. Se destaca el hecho de que para la recolección de firmas la Constitución establece un plazo de dos meses, mientras que el plazo de dictaminación, según su ley reglamentaria, es de tres meses a partir de que el Presidente de la Asamblea Nacional recibe el informe de admisibilidad del Comité Nacional Electoral.

En España, la Constitución prevé la iniciativa popular a nivel nacional y provincial y está regulada desde 1984. En este país, se requieren 500,000 firmas acreditadas de ciudadanos, lo que equivalente al 1.26 por ciento de su lista electoral. El proceso se inicia mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados, la cual examina la documentación remitida y se pronuncia en el plazo de 15 días sobre su admisibilidad.

Cabe destacar que la comisión promotora puede entablar un recurso de amparo contra la no admisibilidad ante el Tribunal Constitucional. Para la recopilación de firmas, se establece un plazo de seis meses, el cual puede ser prorrogado por causa mayor. Por último, el Estado compensa a los promotores los gastos realizados en la difusión y recolección de firmas, siempre que se alcance el número de firmas requerido y se inicie el proceso parlamentario.

Por su parte, en el continente americano, las herramientas de democracia participativa y deliberativa se encuentran presentes a nivel federal en prácticamente todos los países –siendo Estados Unidos y Canadá dos excepciones relevantes– y en un gran número de ellos, también a nivel local.

En el caso de Estados Unidos, no obstante que la iniciativa ciudadana no forma parte de la legislación a nivel federal, alrededor del 70 por ciento de la población vive en un estado o ciudad que dispone de esta herramienta. En algunos estados como Utah y Oregon, la iniciativa ciudadana se incorporó en sus constituciones incluso desde hace más de 100 años. En el caso de California, para que un proyecto de ley sea presentado en la siguiente votación general se requiere que los promotores (sponsors) recopilen el 5 por ciento de los votos de la última elección para gobernador. Asimismo, para las reformas a la Constitución se exige un 8 por ciento. Todas las firmas deberán juntarse en un período de 150 días. Los promotores generalmente ofrecen una paga a los recolectores de las mismas.

Este mecanismo ha jugado un papel central en la legislación local estadounidense, lo que implica que junto con Suiza sean de los países con mayor experiencia legislativa ciudadana en el mundo, por lo menos a nivel local.

En el resto del continente americano, casi la totalidad de las constituciones reformadas durante los años 80 y 90 (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela) incorporaron estos mecanismos y procedimientos. Uruguay conforma un caso atípico, pues inició este proceso en 1919.

En el caso de Brasil esta figura se encuentra en su Constitución Federal desde la reforma de 1988. Sus primeras experiencias se concentraron en temas presupuestarios, particularmente en el presupuesto participativo. Sin embargo, la puesta en práctica de la iniciativa popular se ha visto obstaculizada debido a la exigencia de alcanzar a nivel federal, aproximadamente, 900 mil firmas (1 por ciento del electorado), distribuidas por lo menos en cinco estados, con no menos del 0.3 por ciento de firmas del electorado de cada uno de ellos.

En Colombia, la iniciativa popular legislativa fue incorporada en la Constitución Política en 1991. La ley reglamentaria fijó los requisitos para la utilización del mecanismo en los ámbitos nacional, departamental y local, siendo necesario que el promotor se acredite como tal, mediante el respaldo de al menos el 5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo electoral correspondiente. Una vez acreditado, tiene la facultad de presentar la respectiva iniciativa, contando con un plazo de seis meses para recabar las firmas.

Paraguay incorporó el mecanismo de iniciativa popular en su Constitución de 1992, cuya reglamentación se encuentra en su Código Electoral, el cual establece que para la presentación de una propuesta legislativa deben reunirse las firmas de por lo menos el 2 por ciento de los electores inscritos en el Registro Cívico Permanente. Los promotores pueden presentar al Congreso el texto de la ley y su exposición de motivos sin contar aún con el número mínimo de firmas requerido, a fin de establecer si existe un proyecto igual en trámite sobre la misma materia, o si el proyecto versa sobre materias vedadas para este tipo de procedimientos. En estos casos, la iniciativa se rechaza y no se admite recurso alguno.

Si no existen estos impedimentos, los promotores tienen 180 días para presentar el resto de los pliegos con las firmas necesarias. Durante este período, el proyecto tendrá prioridad en su tratamiento sobre cualquier otro proyecto. Si al término de los 180 días los promotores no reunieron las firmas, pero presentaron el 75 por ciento de las requeridas, el plazo puede prorrogarse por 60 días más. Agotado éste, caduca el derecho a la iniciativa, la que no podrá ser promovida de nuevo hasta después de transcurridos dos años. Esta misma restricción se mantiene para los proyectos que hayan sido rechazados por el Congreso.

En Perú, la ley establece que se requieren las firmas comprobadas del 0.3 por ciento de la población electoral nacional para presentar un proyecto de ley. Este recibe preferencia en el trámite del Congreso, que ordena su publicación en el diario oficial, y debe ser dictaminado y votado en un plazo de 120 días calendario.

En Argentina, este mecanismo fue incluido en la Constitución Nacional, al igual que la consulta popular, con la reforma constitucional de 1994, la cual señala que la cámara de origen para presentar proyectos ciudadanos es la Cámara de Diputados. El porcentaje mínimo requerido es el 3 por ciento del padrón electoral nacional, debiendo contemplarse una "adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa", a fin de que no quede excluida la participación de regiones en relación con la totalidad del territorio. Cumplidos estos requisitos, el Congreso está obligado a dictaminar las propuestas dentro del término de doce meses.

Por su parte, la ley reglamentaria exige un porcentaje de firmantes no inferior al 1.5 por ciento del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales. Dicho porcentaje debe representar como mínimo a seis distritos electorales, salvo que la iniciativa tenga alcance regional. En este último caso, el porcentaje se obtiene sobre el total empadronado de todas las provincias que integran la región.

Ni la Constitución ni la ley prevén una medida para el caso en el que el Congreso no las dictamine en el plazo de doce meses. Además, el plazo de doce meses "es objeto de dilación en la ley", ya que parece correr desde su presentación, según la Constitución, mientras que la ley da inicio al proyecto desde que la Cámara lo admite. Además, la Comisión de Asuntos Constitucionales es la primera que interviene después de la presentación del proyecto, en caso de rechazarla, no admite recurso alguno y la iniciativa queda bloqueada definitivamente.

Contenido de la iniciativa

En función del análisis anterior, la presente propuesta busca desarrollar las bases jurídicas que garanticen a la ciudadanía el pleno derecho de participar en la toma de decisiones públicas, a través de la presentación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana ante el Congreso Federal, sin exclusiones por razones de género, edad, residencia, lengua, nivel educativo, estado civil o capacidad mental.

La propuesta consiste en que todo ciudadano y ciudadana tiene la posibilidad de iniciar un trámite legislativo relativo a la promulgación, abrogación o reforma a leyes secundarias federales e incluso modificar la Carta Magna –exceptuando las materias claramente definidas, independientemente de si cuenta o no con experiencia legislativa, con instrucción superior, con un lugar de residencia urbano o rural o, de inicio, con el respaldo ciudadano necesario.

Con esta propuesta, todo ciudadano o ciudadana, podrán a acudir a la Cámara de Diputados con la finalidad de presentar un proyecto de iniciativa. Dicho proyecto, se acompañará de un formato de presentación previamente proporcionado por la Cámara; una vez admitido el proyecto, éste órgano legislativo deberá publicar en su Portal de Internet el mismo a fin de comenzar el proceso de recolección de firmas.

La propia Cámara, proporcionará vía Portal de Internet, los formatos de adhesión, los cuales podrán ser descargados por todo ciudadano o ciudadana a fin de suscribirse al mismo, y podrán hacerlo incluso, por correo certificado si éstos vivieran en un estado distinto al del promotor.

Este proyecto por tanto pretende, incentivar que se reconozca y fortalezca el derecho de reunión, de asociación, entre otros, así como a establecer legalmente que toda persona tiene deberes con la familia, la comunidad y la humanidad, mediante su incidencia en las decisiones políticas públicas nacionales, los cuales constituyen factores esenciales en la conformación de todo Estado democrático participativo y deliberativo.

En cuanto a su procedimiento, se propone brindar la oportunidad de recolectar el número de firmas que marca la Constitución en un plazo de 180 días hábiles posteriores a la entrega y publicación del proyecto de iniciativa, y permite que la recolección de apoyos sea tanto de manera personal como por correo certificado.

Se dispone que el proceso de recolección de firmas sea responsabilidad absoluta del promotor y ofrece la opción de solicitar prórroga de 30 días en el caso de que faltando 20 días para el vencimiento de recolección de apoyos, falte por recolectar el 10% de las firmas, facilitando con esto las herramientas necesarias que permitan hacer realidad esta propuesta, es decir, posibilita el conocimiento y eventual apoyo por parte de la ciudadanía, así como su eficaz proceso legislativo. Quedará prohibido cualquier tipo de pago por concepto de intercambio en especie o en efectivo para la obtención de firmas de adhesión.

Por tanto, la presente iniciativa no sólo reconoce y fomenta los derechos fundamentales, sino que además provee las garantías sustantivas y procesales para hacerlos efectivos, es decir, provee recursos de capacitación, información, difusión, apelación, garantía de audiencia, inconformidad y dictaminación, respetando en todo momento el principio de inclusión.

A través de la capacitación y la información, garantiza a la ciudadanía contar con las herramientas y los conocimientos básicos necesarios que le permitan ejercer este derecho. Por su parte, mediante la difusión de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, a través de su colocación en el portal de internet de la Cámara de Diputados, así como en la Gaceta Parlamentaria y su transmisión en el Canal del Congreso, se garantiza el acceso de los ciudadanos a conocer los detalles que fundamentan y dan origen a las iniciativas presentadas, lo que permite que no se conviertan en coto de poder solamente de los grupos de la sociedad civil más activos.

Las garantías de apelación y audiencia, por su parte, están plenamente garantizadas en este proyecto. La

primera, a través, del derecho que tendrán los promotores de acudir ante el Tribunal Electoral Federal en caso de que el Instituto Federal Electoral rechace las firmas presentadas en apoyo a su Iniciativa Legislativa Ciudadana. La segunda, mediante, el derecho que tendrán de alegar verbalmente cualquier duda, durante el proceso de dictaminación, e incluso, a través de la posibilidad de solicitar un nuevo dictamen, ante una inconformidad producto de que, a su juicio, en dicho proceso se haya pervertido el espíritu de su propuesta o no cumpla con sus expectativas.

Ahora bien, en lo que respecta su trámite o proceso legislativo, la iniciativa propone que la cámara de origen sea la Cámara de Diputados. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que en tanto que el Estado Mexicano se halla organizado en una Federación, el Congreso se integra con dos cámaras: la de Diputados, que representa los intereses de la nación y la de Senadores, que representa los intereses de las entidades federativas. Por tanto, en nuestro régimen representativo, la representación del pueblo reside, esencialmente, en la Cámara de Diputados.

Siguiendo con su proceso legislativo, la iniciativa propone un plazo exclusivo de dictaminación en ambas cámaras, únicamente computable en periodos ordinarios. Particularmente, subraya la obligación inexcusable de dictaminar los proyectos ciudadanos en dichos plazos, garantizando con ello su debido proceso y su independencia de la agenda de los partidos, a fin de que no se queden en la llamada "congeladora legislativa", o bien, se venza el plazo para este procedimiento.

En suma, esta iniciativa busca respetar el principio de calidad normativa, al hacer efectiva y accesible la participación a todas y todos los ciudadanos que así lo dispongan, quedando claro que su aplicación estará encaminada en todo momento a favorecer y garantizar el principio pro persona.

No desconocemos el hecho, de que una nueva ley del Congreso está a debate, sin embargo, el Congreso está facultado para legislar en materia de iniciativa ciudadana con fundamento en el artículo 73 fracción XXIX-Q de la Constitución. Además, la presente iniciativa forma parte del Quinto Acuerdo: "Gobernabilidad democrática" de los compromisos establecidos en el Pacto por México, específicamente del número 93, el cual establece que para poder instrumentar plenamente la nueva reforma política, de la cual forma parte la iniciativa ciudadana, se aprobarán las respectivas leyes reglamentarias.
Con su presentación, el Grupo Parlamentario del PRD, por nuestro conducto, cumple con una parte fundamental de su Agenda Legislativa, aquélla relativa a dar certidumbre jurídica a los ciudadanos para hacer efectivo su derecho constitucional de iniciar leyes. Mediante este ordenamiento, hoy más que en ningún otro momento de la historia, la democracia participativa comienza a ser un concepto dotado de pleno contenido.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, Trinidad Morales Vargas, Marino Miranda Salgado y Lizbeth Rosas Montero, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea l**a Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana**

Artículo Único: Se crea **l**a Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana, para quedar como sigue:

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1.

La presente ley es de orden público e interés social, tiene como finalidad reglamentar la fracción VII del artículo 35 y la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer las normas y procedimientos por los que se regirá la presentación, discusión y aprobación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana en el Congreso Federal.

Artículo 2.

La Iniciativa Legislativa Ciudadana es un derecho político por el que los ciudadanos pueden iniciar proyectos de ley o decreto, consagrado en la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3.

Para efectos de la presente ley, la Cámara de Diputados fungirá como cámara de origen para la presentación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana ante el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores actuará como cámara revisora.

Las cámaras del Congreso se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y sus reglamentos respectivos en lo no previsto por la presente ley.

Artículo 4.

Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, organizados de hecho o de derecho, interesados en someter al conocimiento y discusión del Congreso de la Unión un proyecto de ley o decreto, presentarán ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el correspondiente proyecto.

En la interpretación de las disposiciones de esta ley deberá prevalecer el principio de ampliación de los derechos ciudadanos.

Artículo 5.

La presente ley tendrá las siguientes finalidades en cualquier materia de carácter federal, a excepción de las establecidas en el artículo 7:

I. Reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Aprobar una nueva ley.
III. Reformar, adicionar o abrogar una ley vigente.

Artículo 6.

Los elementos formales que debe contener una Iniciativa Legislativa Ciudadana son:

I. Título de la propuesta;
II. Exposición de Motivos;
III. Fundamento legal;
IV. Texto normativo propuesto;

V. Artículos transitorios;
VI. Lugar;
VII. Fecha, y
VIII. Nombre y firma del o los promotores. En caso de que sea una organización de la sociedad civil el ente promotor, denominación de la organización de la sociedad civil y firma del representante legal.

Artículo 7.

No podrán ser objeto de Iniciativa Legislativa Ciudadana los proyectos referidos a las siguientes materias:

I. Presupuestal, fiscal o tributaria;
II. Política exterior;
III. Regulación interna de la Administración Pública Federal;
IV. Regulación interna del Congreso;
V. Regulación interna del Poder Judicial de la Federación, y
VI. Seguridad nacional.

Capítulo Segundo
De su presentación

Artículo 8.

La Iniciativa Legislativa Ciudadana se ejercerá mediante la presentación de un proyecto suscrito por al menos el cero punto trece por ciento (0.13%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que el Instituto Federal Electoral determine.

Artículo 9.

El o los promotores de una Iniciativa Legislativa Ciudadana deberán presentar la siguiente documentación ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:

I. Formato de presentación debidamente requisitado, como se especifica en el artículo 10 de esta ley.
II. Breve exposición de motivos dirigida a la ciudadanía por el cual solicita su adhesión.
III. Proyecto de iniciativa en versión impresa con firma autógrafa y en versión electrónica.

Artículo 10.

El formato de presentación de una Iniciativa Legislativa Ciudadana será elaborado y proporcionado gratuitamente por la Cámara de Diputados a quien lo solicite, o bien, podrá descargarse la versión electrónica del Portal de internet de la Cámara de Diputados, y deberá contener las siguientes especificaciones:

I. Logo de la Cámara de Diputados de la Legislatura vigente;
II. Nombre o nombres de los promotores de la iniciativa;
III. Domicilio para recibir comunicaciones, formatos de adhesión por correo certificado, y demás documentación relacionada con la iniciativa;
IV. Título de la iniciativa;
V. Sinopsis de la iniciativa;
VI. Fecha;
VII. Número de folio (asignado al momento de su entrega);
VIII. Leyenda relativa al artículo 71 Constitucional: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: …. IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la

lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes".

IX. Leyenda relativa a la veracidad y autenticidad de la iniciativa: "Bajo protesta de decir verdad, hago constar que los datos asentados en este formato son auténticos y verificables".

X. Advertencia de que cualquier fraude en el proceso de recolección de firmas será sancionado con la suspensión del trámite.

Artículo 11.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados revisará la procedencia de la iniciativa en cuanto a lo establecido en los artículos 6 y 7 de esta ley, relativo a la estructura y materia de la propuesta de la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Para ello, contará con 10 días hábiles. Una vez transcurrido este periodo, deberá comunicar en un escrito su decisión al o los promotores y publicarlo en el portal de internet de la Cámara de Diputados:

I. De resultar procedente, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados publicará, igualmente y de manera íntegra, la versión electrónica del proyecto de la Iniciativa Legislativa Ciudadana en el portal de internet de la Cámara de Diputados, a efecto de ponerla a disposición de la ciudadanía.

II. En caso de que ser improcedente, el escrito a que hace referencia el primer párrafo de este artículo deberá estar debidamente fundamentado.

Artículo 12.

En caso de ser procedente, el o los promotores dispondrán de 180 días hábiles para la recolección de las firmas de quienes apoyen el proyecto, contados a partir de la publicación del proyecto de Iniciativa Legislativa Ciudadana en el portal de internet de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados deberá especificar en el portal de internet la fecha a partir de la cual comienza a contabilizarse el plazo señalado en el párrafo anterior, así como su vencimiento.

Artículo 13.

Si faltando 20 días hábiles para el vencimiento del plazo establecido para la recolección de firmas, ésta no hubiera alcanzado el total establecido por el Instituto Federal Electoral, el o los promotores podrán solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una prórroga, siempre y cuando la cifra faltante no exceda el 10 por ciento del total.

En caso de que la Mesa Directiva otorgue la prórroga, el o los promotores podrán subsanar las firmas faltantes en un plazo que no deberá exceder los 30 días hábiles adicionales al plazo original.

Artículo 14.

Está estrictamente prohibido que el o los promotores realicen cualquier tipo de pago por concepto de apoyo a una Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Capítulo Tercero
De las adhesiones

Artículo 15.

Para consignar el apoyo a una Iniciativa Legislativa Ciudadana, el ciudadano o ciudadana deberá seguir el siguiente procedimiento:

I. Requisitar el formato de adhesión de su puño y letra, conforme a lo especificado en el artículo 16 de esta ley, de forma completa y legible; si la persona no supiere escribir podrá imprimir su huella dactilar.
II. Entregar al o los promotores el formato de adhesión, de manera personal o bien, enviárselo vía correo certificado.
III. Está estrictamente prohibido recibir cualquier tipo de pago en especie o en efectivo en intercambio para la obtención de firmas de adhesión a una Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Artículo 16.

El formato de adhesión de una Iniciativa Legislativa Ciudadana será elaborado y proporcionado gratuitamente por la Cámara de Diputados a quien lo solicite, o bien, podrá descargarse la versión electrónica del Portal de internet de la Cámara de Diputados, y deberá contener las siguientes especificaciones:

I. Logo de la Cámara de Diputados de la Legislatura vigente;
II. Título de la iniciativa;
III. Sinopsis de la iniciativa;
IV. Número de folio, asignado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al proyecto a respaldar.
V. Fecha;
VI. Nombre del ciudadano o ciudadana;
VII. Clave de elector del IFE;
VIII. Leyenda relativa al artículo 71 Constitucional: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: …. IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes".
IX. Firma autógrafa.

Artículo 17.

En todo momento, el o los promotores serán los responsables del proceso de recolección de firmas y de informar a la Cámara de Diputados sobre éste.

La Cámara de Diputados, de acuerdo a los datos que proporcionen los promotores, informará diariamente a la ciudadanía el número firmas recolectadas en curso, a través de su portal de internet.

Capítulo Cuarto
De su validación y admisión

Artículo 18.

Para su admisión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados revisará que la Iniciativa Legislativa Ciudadana cumpla con el requisito establecido en la fracción IV del artículo 71 constitucional. Para ello:

I. De conformidad con la fracción VII del artículo 35 del mismo ordenamiento, remitirá al Instituto Federal Electoral los formatos de adhesión entregados en apoyo a la Iniciativa Legislativa Ciudadana, con la finalidad de verificar y validar la autenticidad de las firmas de cada suscriptor.
II. No serán contabilizados los formatos de adhesión suscritos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
    a. Fecha, nombre o clave de elector de la credencial para votar con fotografía ilegible;

b. Datos incompletos;
c. Firma no manuscrita o sin huella dactilar, y
d. Los demás que determine el Instituto Federal Electoral.

III. El Instituto Federal Electoral deberá dar respuesta en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
IV. La Cámara de Diputados deberá publicar en su portal de internet el resultado del proceso de autentificación y validación, remitido por el Instituto Federal Electoral.

Artículo 19.

Si la Iniciativa Legislativa Ciudadana no cubre el requisito del número de firmas validadas para su admisión, el o los promotores podrán solicitar una prórroga dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del resultado del proceso de autentificación en el portal de internet de la Cámara de Diputados, siempre y cuando el porcentaje faltante no exceda el 10 por ciento del total.

En caso de que la Mesa Directiva otorgue la prórroga, los promotores podrán subsanar las firmas faltantes en un plazo que no deberá exceder los 30 días hábiles.

Artículo 20.

Si la iniciativa no fuese admitida por no contar con el número de firmas validadas requerido, podrá ser nuevamente presentada en el transcurso del siguiente año legislativo, indistintamente de la legislatura que corresponda, siendo válidas las firmas anteriormente recabadas y autentificadas. En este supuesto, volverán a correr los plazos establecidos en el artículo 12 de esta ley.

Artículo 21.

Aquellas Iniciativas Legislativas Ciudadanas que conforme al Instituto Federal Electoral hayan cumplido con el requisito señalado en el artículo 8 de esta ley, serán consideradas como admitidas, dando inicio a su trámite legislativo, bajo el procedimiento especial de Iniciativa Legislativa Ciudadana.

No será admitida ninguna iniciativa que no reúna el número de firmas requerido, previamente autentificado.

Capítulo Quinto
De su publicación

Artículo 22.

Una vez admitida la Iniciativa Legislativa Ciudadana por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ésta ordenará:

I. Su publicación en la Gaceta Parlamentaria, cuyo encabezado deberá referirse expresamente a que se trata de un proyecto de ley o decreto bajo el procedimiento especial de Iniciativa Legislativa Ciudadana.
II. Su registro en el Orden del Día, durante las dos primeras sesiones del periodo ordinario que corresponda.

Capítulo Sexto
De su procedimiento de dictaminación

Artículo 23.

El plazo de dictaminación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana comenzará a computarse, a partir de que es recibida por la comisión o comisiones correspondientes, sin que deban de transcurrir más de cinco días hábiles desde que el Presidente de la Mesa Directiva haya dictado el turno.

No deberán transcurrir más de dos sesiones de publicación en el Orden del Día correspondiente sin que la Mesa Directa dicte el turno respectivo.

Artículo 24.

Si al momento de turnar una Iniciativa Legislativa Ciudadana, por ser inicio de legislatura, no se ha constituido la o las comisiones ordinarias a las que corresponda el turno, las cámaras ordenarán su integración.

I. El plazo para integrar la o las comisiones de dictamen no será mayor a cinco días hábiles, a partir de que la Iniciativa Legislativa Ciudadana se haya sido turnada.
II. La comisión o comisiones que examinen una Iniciativa Legislativa Ciudadana podrán incorporar, previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, aquellas que sobre la materia se hayan presentado.
III. La comisión o comisiones dictaminadoras deberán garantizar en todo el proceso legislativo, la participación del o los promotores al momento de estudiar y votar la Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Artículo 25.

Ambas cámaras del Congreso tendrán la obligación inexcusable de dictaminar las Iniciativas Legislativas Ciudadanas. El procedimiento de dictaminación se apegará a los siguientes plazos:

I. Un plazo máximo de 60 días hábiles para emitir el dictamen, si la Iniciativa Legislativa Ciudadana versa sobre proyectos de reforma constitucional o de creación de nuevas leyes.
II. El plazo será de máximo 30 días hábiles, si el proyecto versa sobre reformas a la legislación secundaria federal.
III. En caso de ampliación, modificación o rectificación de turno, los plazos volverán a computarse de conformidad con lo establecido en los reglamentos de ambas cámaras.
IV. Los plazos de dictaminación se interrumpirán en los periodos de receso y deberá continuar en el Periodo Ordinario inmediato indistintamente del año legislativo o legislatura que continúe.
V. En ningún caso los plazos establecidos en este artículo serán prorrogables.

Artículo 26.

Las Mesas Directivas de ambas cámaras deberán emitir una prevención o excitativa a la comisión o comisiones dictaminadoras, diez días hábiles antes de que se venza el plazo para dictaminar, a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria.

Artículo 27.

En la elaboración del proyecto de dictamen, así como en su discusión y aprobación por la o las comisiones, se aplicarán las disposiciones que para el efecto disponen los reglamentos de cada cámara, en lo relativo al trabajo en comisiones.

Si ha transcurrido el plazo máximo señalado para emitir dictamen por la comisión o comisiones dictaminadoras, el Presidente de la Cámara deberá someter de inmediato a la consideración del Pleno el proyecto de ley o decreto en sus términos, para su discusión y votación, observando lo dispuesto por esta ley

y por los reglamentos de cada cámara.

Capítulo Séptimo
De su discusión y votación en el Pleno

Artículo 28.

Una vez recibido el dictamen de la Iniciativa Legislativa Ciudadana por la Mesa Directiva, no podrán transcurrir más de dos sesiones sin que se someta a discusión y votación por el Pleno.

Artículo 29.

La discusión y votación de los dictámenes relativos a la Iniciativa Legislativa Ciudadana se sujetará a lo previsto en el reglamento de cada cámara.

Artículo 30.

Todo proyecto de Iniciativa Legislativa Ciudadana se discutirá sucesivamente en ambas cámaras, observándose lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y los reglamentos de cada cámara.

La discusión sucesiva entre ambas cámaras deberá apegarse a los plazos establecidos en la presente ley.

Artículo 31.

Aprobado un proyecto en la Cámara de Diputados, pasará para su discusión a la Cámara de Senadores en calidad de minuta, y continuará su procedimiento legislativo de conformidad con los artículos 72 y 135 constitucional, según el caso.

Cuando la minuta que contenga un proyecto de ley o decreto de Iniciativa Legislativa Ciudadana sea desechada, en todo o en parte, o modificada por la Cámara de Senadores, ésta deberá devolverla, acompañada de las observaciones pertinentes, a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72, apartados D o E, de la Constitución, la cual contará con plazo de diez días hábiles para resolver lo conducente.

Capítulo Octavo
De su difusión

Artículo 32.

La difusión de una Iniciativa Legislativa Ciudadana se realizará, únicamente, a través de los medios institucionales del Congreso de la Unión, conformados por el Canal del Congreso, los portales de internet y las Gacetas Parlamentarias de ambas cámaras.

Capítulo Noveno
De los derechos y obligaciones de los ciudadanos

Artículo 33.

Podrá ser promotor de una Iniciativa Legislativa Ciudadana cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, organizados de hecho o de derecho, que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano.
II. Contar con su credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el Instituto Federal Electoral.

Artículo 34.

Toda ciudadana y ciudadano tendrá derecho a recibir la información y capacitación correspondiente para la elaboración de una Iniciativa Legislativa Ciudadana, a través de los mecanismos que determinen las Mesas Directivas de las cámaras del Congreso de la Unión para ese propósito.

Artículo 35.

Para garantizar la eficacia de la participación ciudadana durante el proceso legislativo de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, se deberán respetar las siguientes garantías:

I. El promotor o promotores deberán ser convocados a todas las sesiones en que se discuta el proyecto y ser escuchados en comisiones, en número máximo de 5 representantes.
II. Deberá considerarse la opinión de aquellas organizaciones ciudadanas o expertos académicos que el o los promotores pongan a consideración de la comisión o comisiones dictaminadoras para la elaboración del dictamen.
III. El promotor o promotores tendrán derecho a inconformarse cuando la comisión o comisiones en su dictamen distorsionen el espíritu de la Iniciativa Legislativa Ciudadana. En este supuesto, el promotor o promotores podrán solicitar en escrito dirigido a la Mesa Directiva, que el dictamen se devuelva a la comisión o comisiones para elaborar un nuevo dictamen, el cual debe ser presentado en un plazo no mayor a 10 días hábiles. El escrito deberá contener los siguientes elementos:
    a. Exposición de motivos, conformada por el fundamento jurídico, los antecedentes y las consideraciones del o los promotores para llegar a dicha determinación.
    b. Firmas del o los promotores que apoyen dichas resoluciones.
    c. Sobre la solicitud, la Mesa Directiva deberá resolver sobre la petición en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

Artículo 36.

El o los promotores de la Iniciativa Legislativa Ciudadana tendrán el derecho a retirarla en cualquier momento, teniendo la posibilidad de presentarla durante el año legislativo siguiente a su admisión inicial, indistintamente de la legislatura a la que corresponda, apegándose a lo establecido en los artículos 8 y 9 de esta ley.

En este caso, las firmas que apoyaron la iniciativa y que fueron autentificadas por el Instituto Federal Electoral seguirán siendo válidas durante el periodo señalado, por lo que será necesario recolectar únicamente aquellas firmas que hagan falta para cubrir el requisito establecido en el artículo 8 de esta ley.

Artículo 37.

El promotor o promotores podrán solicitar el reembolso de los gastos erogados para la elaboración y presentación de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, previa exhibición de los comprobantes fiscales correspondientes, siempre y cuando el Congreso haya aprobado el proyecto y éste se encuentre publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los reembolsos corresponderán a los siguientes rubros:

I. Asesorías relacionadas con la materia de la iniciativa, y
II. Envíos por correo certificado.

Artículo 38.

El o los promotores tendrán la obligación de informar a la Cámara de Diputados el origen de los recursos económicos que empleen para la elaboración del proyecto de Iniciativa Legislativa Ciudadana, así como, en su caso, para el proceso de recolección de firmas correspondiente.

En caso de que el proyecto sea admitido, dicha información será publicada en el portal de internet de la Cámara de Diputados. De lo contrario, estará disponible para el ciudadano que lo solicite.

Capítulo Décimo
De los recursos de apelación

Artículo 39.

Contra las resoluciones que emita el Instituto Federal Electoral en materia de Iniciativa Legislativa Ciudadana, relativas a la autentificación de las firmas recolectadas por los promotores, procederá el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo que dispone la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Iniciativas Legislativas Ciudadanas que se hayan recibido en las cámaras del Congreso de la Unión, antes de entrar en vigor el presente decreto, se sujetarán a los trámites y tiempos de dictaminación establecidos en él.

Tercero. La Cámara de Diputados, a través de su Mesa Directiva, elaborará y pondrá en práctica, de manera periódica, un proyecto de capacitación ciudadana, a fin de contribuir con la correcta elaboración de los proyectos de Iniciativa Legislativa Ciudadana, así como de difundir este derecho ciudadano.

Cuarto. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, elaborará un Manual de Capacitación Ciudadana en materia de Iniciativa Legislativa Ciudadana, el cual será distribuido gratuitamente a quien lo solicite y se encontrará disponible en el portal de internet de la Cámara de Diputados.

Quinto. Las Mesas Directivas de cada cámara crearán el área técnica responsable de atender todo lo relativo a la Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Sexto. Las cámaras del Congreso realizarán las adecuaciones correspondientes a sus respectivos Reglamentos, en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la publicación del presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 31 de julio de 2013.

DIP. TRINIDAD MORALES VARGAS

DIP. MARINO MIRANDA SALGADO

DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO

Referencias

Concha Cantú, Hugo Alejandro. "Iniciativa legislativa popular". Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/191/4.pdf

Carbonell, Miguel. "El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional". Villaverde Ignacio en "La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad". Serie Justicia y Derechos Humanos.

Carbonell, Miguel. "La participación política en el Estado Constitucional", Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: http://www.miguelcarbonell.com/articulos/La_participacion_politica_en_el_Estado_constitucional.shtml

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de iniciativa legislativa ciudadana. Artículo Único. Se reforma la denominación del Título Quinto; se adicionan en este los artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 y 153; se adiciona el Título Sexto, con la denominación y artículos contenidos en el Título Quinto previo a la entrada en vigor del presente decreto, para que sus artículos anteriores pasen a tener los numerales 154, 155, 156, 157, 158 y 159 todo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Morales Vargas Trinidad. Partido de la Revolución Democrática. 12 de marzo de 2013.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana, sobre la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política.12 de octubre de 2011.

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados. "Iniciativa Popular, Estudio Comparativo de su regulación a nivel Constitucional y de las Leyes en la materia, en el ámbito local". 2012, p.2.

Elena Aguilar Villalobos y Felipe Alatorre Rodríguez. "La Iniciativa Popular, un ejercicio ciudadano en Jalisco". IGLOM-Congreso: Los Gobiernos Locales: El Futuro Político de México. Mesa: Participación Ciudadana.

Ferrajoli, Luigi. "Principia iuris. Teoría del derecho y la democracia", Madrid, Trotta, Vol. 2 (Teoría de la Democracia), 2011, pp. 9-157.

González Schmal Raúl. "Programa de Derecho Constitucional", Universidad Iberoamericana, 2007. 2ª ed.

Hevia de la Jara, Felipe. “La iniciativa popular en América Latina”. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 17, núm. 52, enero-abril, 2010.

Iniciativa que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal que Regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Grupo Parlamentario del PT. 18 de julio de 2012.

Instituto para la iniciativa y el referéndum Europa y Green European Foundation, Manual de la Iniciativa Ciudadana Europea, 2010.

Latinobarómetro 1997-2004, Corporación Latinobarómetro.

Monsiváis Carrillo, Alejandro. “Democracia deliberativa y teoría de la democracia: una revisión del valor de deliberación pública”, Revista Mexicana de Sociología 68, num. 2 (abril-junio, 2006): 291-330, México, D.F.

Olivos Campos, José René. “Gobernación democrática”. Primera edición, Editorial Novum 2012.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Profundizar la democracia en un mundo fragmentado” en Informe sobre Desarrollo Humano 2002, p. 1

Proyecto Iniciativa Popular. “La Iniciativa Popular en la Argentina y el mundo”, 2004.

Salazar Luis y Woldenberg José. "Principios y valores de la democracia", Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, IFE, México, 1997.

DEL DIP. MARCOS AGUILAR VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

El que suscribe, **MARCOS AGUILAR VEGA**, con carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,** de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa encuentra sustento y razón en el irrestricto respeto alos Principios de Certeza y Seguridad Jurídica que todo gobernado debe gozar por así prescribirlo la Constitución Política de nuestro país.

Es decir, el gobernado ve vulnerado el principio de certeza y seguridad jurídica en su perjuicio, en defecto de que la interpretación de una norma jurídica de carácter fiscal es interpretada en un sentido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en sentido opuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual lo coloca en una posición vulnerable ante los actos de fiscalización, pues quien los ejecuta (SAT), aplica las norma tributarias en un sentido diverso al interpretado y dado a conocer en forma de Jurisprudencia por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultando en cargas tributarias inaceptables por arbitrarias hacia el contribuyente.

Lo anterior es así en razón de que los contribuyentes de conformidad con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación tienen la obligación de autodeterminarse los impuestos a su cargo, siendo necesarias para ello la interpretación y aplicación literal de la norma fiscal. Sin embargo, pueden existir dudas respecto a su correcta integración y es por lo que los contribuyentes recurren a la interpretación que los Tribunales han realizado de la disposición jurídica tributaria, no habiendo mejor fuente de derecho que la Jurisprudencia emitida por nuestro máximo Tribunal funcionando en Pleno o en Salas.

Sin embargo, si el Servicio de Administración Tributaria está facultado para emitir indiscriminadamente criterios normativos incluso pudiendo ser estos totalmente contrarios a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, se genera un estado de incertidumbre en la población, porque el contribuyente no sabe cómo aplicar la Ley, pues ambas interpretaciones tienen consecuencias jurídicas, pues por un lado si aplica la Jurisprudencia de la Suprema Corte y es sujeto del ejercicio de facultades de comprobación por parte del SAT, este último podrá imponer sendos créditos fiscales a su cargo porque su criterio normativo (es decir una mera disposición administrativa de carácter interno), se pone por encima de la interpretación que los Ministros que integran las Salas y el Pleno han realizado sobre el tema,y por el otro lado si el contribuyente decide ignorar el Trabajo de los distinguidos Juristas y aplica el criterio administrativo interno le resultara en una carga fiscal inusitada y excesiva, violentando el principio de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria.

Lo anterior encuentra mayor fundamento en la diversa interpretación que de los artículos 9 fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 29 (antes 21-A) de su Reglamento han realizado el Poder Judicial de la Federación por medio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por principio es necesario citar el Criterio Normativo del Impuesto al Valor Agregado vigente el cual reza:

> **122/2012/IVA Enajenación de casa habitación. La disposición que establece que no se pagará el impuesto al valor agregado no abarca a servicios parciales en su construcción.**
>
> El artículo 9, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que no se pagará dicho impuesto en la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación.
>
> Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de dicha ley señala que quedan comprendidos dentro de la exención la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, la ampliación de éstas y la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para ese fin, siempre que el prestador del servicio proporcione la mano de obra y los materiales.
>
> Por lo anterior, los trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de cancelería de fierro o aluminio y, en general, cualquier labor que los constructores de inmuebles contraten con terceros para realizarlos o incorporarlos a inmuebles y construcciones nuevas destinadas a casa habitación, no se encuentran incluidos en la exención prevista en el artículo 9, fracción II de la mencionada ley y 29 de su reglamento, ya que dichos servicios por sí mismos no constituyen la ejecución misma de una construcción adherida al suelo, ni implican la edificación de dicho inmueble.

Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes Jurisprudencias:

> Época: Novena Época
> Registro: 164195
> Instancia: SEGUNDA SALA
> Tipo Tesis: **Jurisprudencia**
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Localización: Tomo XXXII, Julio de 2010
> Materia(s): Administrativa, Constitucional
> Tesis: 2a./J. 88/2010
> Pág. 314
>
> **VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), RELATIVA A LA ENAJENACIÓN DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN, ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CORRESPONDIENTE Y EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL**. De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado presentada por el Presidente de la República ante la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 1978, así como del proceso legislativo correspondiente, **se advierte que a la casa habitación se le conceptualizó en los términos en que el común de la gente la entiende, es decir, como el lugar adecuado en que vivirá una familia**, y atendiendo a ello, **el legislador consideró prudente y necesario exentar del pago del impuesto relativo**, en términos de los artículos 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su Reglamento,

vigente este último hasta el 4 de diciembre de 2006, la enajenación de construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación, así como **todos los trabajos accesorios tendentes a convertirla en una vivienda digna y decorosa, como lo exige el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, **como pudieran ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado, sanitarias (drenaje) y todas aquellas cuya finalidad sea proporcionar confort.** De lo anterior se advierte que para entender lo que el legislador conceptualizó como casa habitación no es necesario acudir a un ordenamiento legal distinto a los señalados, ya que su significación corresponde a lo que el común de la gente entiende respecto de tal concepto y la interpretación que debe dársele deriva de la exposición de motivos a que se alude y al referido artículo 4o. constitucional, en el sentido de que el gobernado cuente con una vivienda digna y decorosa, **por lo que en términos de la indicada exposición de motivos y los preceptos mencionados, deberán estar exentos del pago del impuesto al valor agregado los trabajos tendentes a cumplir con tal fin; es decir, los dirigidos a convertir a la casa habitación en una vivienda digna y decorosa.**

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 117/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de junio de 2010. Cinco votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de las consideraciones. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Tesis de jurisprudencia 88/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de junio de dos mil diez.

Época: Novena Época
Registro: 163902
Instancia: SEGUNDA SALA
Tipo Tesis: **Jurisprudencia**
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: XXXII, Agosto de 2010
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 115/2010
Pag. 445

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), OPERA RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACIÓN, CUANDO PROVEEN EN ELLA MANO DE OBRA E INSUMOS. De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como del proceso legislativo correspondiente, se concluye que **el propósito del creador de la norma fue exentar del pago de ese impuesto únicamente la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación**, quedando incluidas en ese concepto las instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente, de manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire

acondicionado y otras; **sin embargo, para que opere tal exención es necesario que esa actividad se desarrolle integralmente**, es decir, **que los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación se realicen en forma conexa con la prestación de servicios de construcción de dichos inmuebles, como pueden ser la mano de obra e insumos necesarios**, excluyendo por tanto los actos de adquisición de bienes o servicios, productos semiterminados o terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la realización de la obra.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 205/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, Sexto y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de julio de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 115/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de agosto de dos mil diez.

De igual forma la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época reitero el criterio tomado en las Jurisprudencias 88/2010 y 115/2010, al emitir la siguiente tesis aislada:

Época: Décima Época
Registro: 2000692
Instancia: PRIMERA SALA
Tipo Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1
Materia(s): Administrativa
Tesis: 1a. LXXXII/2012 (10a.)
Pág. 888

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO EXIME DE LA ACEPTACIÓN EN EL TRASLADO DEL MISMO. El hecho de que los citados preceptos establezcan que no se pagará el impuesto al valor agregado en la enajenación de bienes destinados a casa habitación ni por la prestación de servicios para la construcción de esos bienes, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales, no debe entenderse en el sentido de que también se les exime de aceptar el traslado del tributo, habida cuenta que la exención opera siempre y cuando se cumplan los dos requisitos, al realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación (prestar mano de obra y materiales), mas no por la contratación de servicios para la construcción.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 135/2012. Geo Oaxaca, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Bajo la misma tónica la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de agosto de 2012, por unanimidad de votos emitió la tesis siguiente:

> IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
> VII-TASR-2OC-7
>
> **EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 9º, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, 28 Y 29 DE SU REGLAMENTO.- QUÉ DEBE ENTENDERSE POR GASTOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN. LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007.-** Conforme a los citados artículos se considera que no se pagará el impuesto al valor agregado correspondiente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación; y que se consideran como destinadas a casa habitación las instalaciones y áreas cuyos usos estén exclusivamente dedicados a sus moradores, siempre que sea con fines no lucrativos; que la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione el material y la mano de obra. **Del estudio concatenado a los citados dispositivos jurídicos se colige que por construcción destinada a casa habitación, se entienden aquellas instalaciones adheridas a la edificación en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético y cuya finalidad sea hacerla funcionable para destinarla a una vivienda digna, funcional y decorosa, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; y ante esa consideración se deben entender como tales, las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado, sanitarias, etcétera, cuya finalidad sea convertirla en el lugar adecuado donde habrá de vivir una familia, por ende, quedan exceptuadas las instalaciones ubicadas en el exterior de inmueble que comúnmente integran la urbanización de la colonia, población o ciudad.
>
> Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 3014/10-07-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de agosto de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretario: Lic. David Fernando Castillón Dueñas.
>
> R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 334

Para mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizo razonamientos en el Considerando Noveno de la Ejecutoria de la **Contradicción de tesis 117/2010 que culminó con la emisión de la Tesis de jurisprudencia 88/2010 del nueve de junio de dos mil diez**, para establecer que la prestación de servicios de construcción de casa habitación, la enajenación de casas habitación así como la de bienes muebles destinados a casa habitación donde se proporcionen tanto la mano de obra como los materiales, se encuentran exentos de pagar el Impuesto al Valor Agregado, mismos que son del tenor literal siguiente:

> "**NOVENO.** Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en las consideraciones siguientes:

Para resolver el planteamiento de contradicción denunciado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se estima necesario hacer la transcripción del contenido de los artículos 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 21-A de su reglamento, vigente hasta el cinco de diciembre de dos mil seis y 750 del Código Civil Federal, los cuales son del tenor siguiente:

"Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción.

Artículo 21-A. La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. de la ley, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales.

Tratándose de unidades habitacionales, no se considerarán como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra obra distinta a las señaladas."

Del contenido de la fracción II del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se desprende que no se pagará el impuesto correspondiente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación.

Por su parte, el artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala que la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9o. antes señalado, pero el precepto de referencia, como en su momento lo destacaron, de manera coincidente, los tribunales con criterios contradictorios, no clarifica el significado de la acepción casa habitación, …

Ahora bien, para entender el sentido y alcance que el legislador en los preceptos de referencia, realmente quiso considerar como elementos exentos por formar parte de la casa habitación, no obstante que se trata de un término común y corriente que la generalidad de las personas entiende, se estima necesario acudir a la exposición de motivos correspondiente.

I. El treinta de noviembre de mil novecientos setenta y ocho el presidente de la República presentó iniciativa de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en la exposición de motivos, en lo conducente, razonó lo siguiente:

"Como características generales del impuesto que se propone, debe mencionarse que gravará la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles y las importaciones. A pesar de la generalidad de estos hechos, se establecen excepciones importantes en relación con las cuales no se pagará el impuesto.

"... Debe destacarse que la nueva ley no gravará los terrenos ni las construcciones destinadas a casa habitación, tanto cuando se enajenen como cuando sean motivo de arrendamiento. ...

El conjunto de exenciones representa más del 40% del consumo final y tienden a proteger el poder adquisitivo de la mayor parte de la población."

II. Las Comisiones Unidas Primera de Hacienda, Crédito Público y Seguros, y de Estudios Legislativos, Sección Fiscal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el ocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, formularon el dictamen relativo y en lo interesante consideraron lo siguiente:

"Las operaciones exentas están expresamente enumeradas en la iniciativa de ley, siendo las más importantes:"...

"La enajenación y arrendamiento del suelo y de construcciones que se utilicen o destinen a casa habitación.

"Se recuerda que actualmente se grava al arrendamiento de carácter mercantil, aun cuando se trate de casas habitación."

III. El dictamen de mérito se discutió el catorce de diciembre de mil novecientos setenta y ocho y ahí intervino la diputada Ifigenia Martínez Hernández, quien entre otras consideraciones externó las siguientes:

"No sólo esa es la idea general del impuesto, sino que además, este impuesto al valor agregado que ahora tenemos en debate y por cuya aprobación estamos hablando en pro del dictamen, tiene muchas exenciones y tiene otras características que hacen que la carga real resulte muy atenuada.

"Tiene muchas exenciones o sea, haya muchas ventas o enajenaciones que no pagan el impuesto.

"¿Cuáles son estos bienes o estos casos? Son el suelo, las construcciones adheridas al suelo, cuando sean para fines habitacionales, los animales y vegetales no industrializados, la carne en estado natural, las tortillas, masa, harina, pan, la leche natural y los huevos, el azúcar, la sal, el agua no gaseosa, la maquinaria y equipo, que sólo sean susceptibles de ser utilizados en la agricultura o la ganadería, así como los fertilizantes, todos estos están exentos del impuesto.

"Entonces, hay una parte muy importante, sobre todo de artículos de primera necesidad y de consumo popular, que no pagarán el impuesto."

IV. Las Comisiones Unidas Segunda de Hacienda y Única de Impuestos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, emitieron su dictamen, el cual fue discutido el día veintidós siguiente y ahí intervino el senador Ventura Valle, quien en lo interesante razonó lo siguiente:

"Al adoptarse el impuesto al valor agregado en México, se superarán los problemas que actualmente se tienen con el impuesto federal sobre ingresos mercantiles y con los que se derivan de la existencia de múltiples impuestos especiales.

"Las características esenciales son la sencillez en su administración ya que es un impuesto a las ventas, es decir, que afecta el ingreso total que se genera en las enajenaciones de bienes y servicios; además aunque es indirecto, el consumidor final siempre está en posibilidad de conocer y cuantificar el importe exacto del impuesto que se le traslada, tiene la característica de la generalidad, ya que grava todos los bienes y servicios, excepto los exentos, afecta todas las etapas del proceso económico o sea la producción y comercialización de bienes y servicios. ..."

Una vez concluido el proceso legislativo de mérito, el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho se publicó la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuyo artículo 9o., fracción II, quedó en los términos siguientes:

"Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:
"...
"II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción."

Cabe advertir que este precepto desde su emisión a la fecha no ha sufrido modificación alguna. Ahora bien, con base en el procedimiento legislativo precedente, **se advierte que la intención del legislador fue exentar del pago del impuesto al valor agregado únicamente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo utilizadas o destinadas a casa habitación, pues por su fin (vivienda) las consideró entre los artículos de primera necesidad y de consumo popular.** Además, del propio contenido del precepto inserto se advierte con claridad que su objetivo es incentivar la construcción de casas habitación, para resolver el problema de escasez de vivienda que desde esa época aqueja al país.

Sirve de apoyo a estas consideraciones la jurisprudencia, cuyos textos y datos de localización son:

"EXENCIONES TRIBUTARIAS. LAS RAZONES PARA JUSTIFICARLAS DEBEN ADVERTIRSE CLARAMENTE DE LA LEY O EXPRESARSE EN EL PROCESO LEGISLATIVO EN QUE SE SUSTENTAN. Cuando en una ley tributaria se establece una exención, ésta debe justificarse como situación de excepción, ya sea porque del propio contenido de la ley se advierta con claridad, o porque en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, en los dictámenes de las Comisiones Legislativas o en las discusiones parlamentarias de las Cámaras que sustentaron la norma que prevea la exención, se expresen las razones que den esa justificación."

(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, tesis 2a./J. 70/2006, página 353).

Así, de acuerdo a lo anterior y en atención a la intención del legislador y a la finalidad con la cual instituyó la exención contemplada en el artículo 9o., fracción II, preinserto, es inconcuso que únicamente quedan comprendidasen la misma las construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación, y aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la

construcción y cuya finalidad sea hacerla funcionable para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado y otras, pero no aquellas instalaciones de igual naturaleza ubicadas en el exterior de carácter general y público e independientes de la casa habitación, que comúnmente integran la urbanización de la colonia, población o ciudad.

Lo anterior hace patente que el legislador, en la exposición de motivos antes señalada, **consideró como conceptos de exención** las construcciones destinadas a la casa habitación (vivienda), por considerarlas entre los artículos de primera necesidad y consumo popular, **comprendiendo implícitamente dentro de tal exención a todos los elementos que forman parte de ella, como son aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma fija y permanente, cuya finalidad sea hacer de ésta una vivienda funcional, digna y decorosa**, pues sólo así se contribuye a dar una seguridad familiar y a satisfacer la garantía social contemplada en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

De ahí que debe concluirse que el legislador conceptualizó a la casa habitación, en los términos en que el común de la gente lo conceptualiza; es decir, como el lugar adecuado en que vivirá una familia, formando parte integrante de ella, todas las instalaciones accesorias como son la hidráulica, eléctrica, gas, aire acondicionado, sanitarias (drenaje), etcétera, cuya finalidad sea convertir a ésta en vivienda digna y decorosa por su naturaleza se convierten en parte de ésta, pues no es posible entenderlo de otra forma, porque la pura construcción en sí misma no es idónea para destinarla a habitación, sino que es necesario agregarle las instalaciones necesarias para considerarla una vivienda en toda la extensión de la palabra.

Consideraciones similares a las antes precisadas sostuvo esta Segunda Sala al resolver, en sesiones de fechas veintinueve de septiembre de dos mil seis y veintitrés de septiembre de dos mil nueve, los amparos directos en revisión 1264/2006 y 1293/2009, promovidos respectivamente por **********.

Consecuentemente, la tesis que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es la sustentada por esta Segunda Sala, la cual se redacta en los términos siguientes:

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), RELATIVA A LA ENAJENACIÓN DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN, ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CORRESPONDIENTE Y EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.

De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado presentada por el Presidente de la República ante la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 1978, así como del proceso legislativo correspondiente, **se advierte que a la casa habitación se le conceptualizó en los términos en que el común de la gente la entiende, es decir, como el lugar adecuado en que vivirá una familia**, y atendiendo a ello, **el legislador consideró prudente y necesario exentar del pago del impuesto relativo**, en términos de los artículos 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su Reglamento, vigente este último hasta el 4 de diciembre de 2006, la enajenación de construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación, así como **todos los trabajos accesorios**

tendentes a convertirla en una vivienda digna y decorosa, como lo exige el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **como pudieran ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado, sanitarias (drenaje) y todas aquellas cuya finalidad sea proporcionar confort.** De lo anterior se advierte que para entender lo que el legislador conceptualizó como casa habitación no es necesario acudir a un ordenamiento legal distinto a los señalados, ya que su significación corresponde a lo que el común de la gente entiende respecto de tal concepto y la interpretación que debe dársele deriva de la exposición de motivos a que se alude y al referido artículo 4o. constitucional, en el sentido de que el gobernado cuente con una vivienda digna y decorosa, **por lo que en términos de la indicada exposición de motivos y los preceptos mencionados, deberán estar exentos del pago del impuesto al valor agregado los trabajos tendentes a cumplir con tal fin; es decir, los dirigidos a convertir a la casa habitación en una vivienda digna y decorosa.**

Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizo razonamientos en el Considerando Quinto de la Ejecutoria de la **Contradicción de tesis 205/2010 que culminó con la emisión de la Tesis de jurisprudencia 115/2010 del dieciocho de agosto de dos mil diez**, para establecer que la prestación de servicios de construcción de casa habitación, la enajenación de casas habitación así como la de bienes muebles destinados a casa habitación donde se proporcionen tanto la mano de obra como los materiales, se encuentran exentos de pagar el Impuesto al Valor Agregado, mismos que son del tenor literal siguiente:

"QUINTO. Estudio de fondo. En primer término, es oportuno señalar que con fecha dos de junio de dos mil diez, este mismo órgano colegiado resolvió por unanimidad de cinco votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio Armando Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, presidente y ponente de esta Segunda Sala, la contradicción de tesis 117/2010, en la que se dilucidó si para hacer pronunciamiento en relación con el concepto de casa habitación, vinculado con las exenciones a que se refieren los artículos 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su reglamento, puede acudirse o no, de manera supletoria, al texto del artículo 750 del Código Civil Federal.

De la lectura de dicha ejecutoria se advierte que el punto de contradicción que ahora nos ocupa -concerniente al alcance de la exención prevista en esos mismos numerales-, fue abordado y resuelto parcialmente en su parte considerativa; sin embargo, el mismo no quedó reflejado de manera destacada en la jurisprudencia con la que culminó aquélla. (2)

Por ello, atendiendo al principio de seguridad jurídica que rige el establecimiento de la jurisprudencia por contradicción de tesis, esta Segunda Sala estima conveniente fijar el criterio que debe prevalecer al resolver el problema jurídico planteado, máxime si se tiene en cuenta que continúa suscitándose la diversidad de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como lo pone de manifiesto la presente denuncia.

…

De lo anterior se sigue que constituye ya un criterio reiterado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la determinación de que para fijar el alcance de la exención prevista en los artículos 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 9o. de la ley relativa, debe acudirse a la intención plasmada en el procedimiento legislativo, del que se concluye que el propósito del creador de la norma fue exentar del pago del impuesto al valor agregado

únicamente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo utilizadas o destinadas a casa habitación, pues por su fin (vivienda) las consideró entre los artículos de primera necesidad y de consumo popular.

Asimismo, quedan incluidas en ese concepto, aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcionable para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, aire acondicionado y otras, pero no aquellas instalaciones de igual naturaleza ubicadas en el exterior de carácter general y público e independientes de la casa habitación.

Ahora bien, en virtud de que como quedó puntualizado en el considerando que antecede, en la especie, constituyó materia de análisis por parte de los Tribunales Colegiados contendientes, la determinación sobre si los fines perseguidos por el legislador permiten establecer que la exención prevista en el artículo 9o., fracción II, de dicho ordenamiento requiere que el sujeto pasivo tenga como su objeto principal, la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, de manera integral, proporcionando la mano de obra y materiales, actividad que debe realizar de manera conexa con la venta de esos bienes, esto es, que se hacen cargo de la totalidad de la construcción, para luego proceder a su venta; o bien, si quedan comprendidos dentro de dicha exención, aquellos que sólo proveen de los insumos o materiales que emplean quienes se dedican a la construcción de ese tipo de viviendas, es decir, aquellos que prestan tales servicios en forma parcial.

Tal punto de disenso, también ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión **********, promovido por ********** y el amparo directo en revisión **********, promovido por **********, de la que se destaca la parte considerativa siguiente:

"...

"Tocante a este tópico de la exención, cabe ejemplificarlo, con la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, y con la impugnación del artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el diverso 9o. de la respectiva ley.

"Al respecto, se pronunció la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 835/2005, promovido por Desarrollos Urbanos El Encino, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el sentido de que conforme al artículo 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación 'no se pagará el impuesto', acotando que este enunciado, debe interpretarse en el sentido de una típica exención de impuestos que otorga una situación de privilegio para el contribuyente, al señalar, en la parte que interesa, lo siguiente: ...

"Ahora bien, en el caso concreto, por disposición expresa del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación, no se pagará el impuesto.

"El enunciado ‘no se pagará el impuesto’ debe interpretarse en el sentido de una típica exención de impuestos que otorga una situación de privilegio para el contribuyente.

"En efecto, la exención de un gravamen es aquella figura jurídica tributaria por virtud de la cual, conservándose los elementos de la relación jurídica tributaria (sujetos, objeto, cuota, tasa o tarifa) se eliminan de la regla general de causación, ciertos hechos o sujetos imponibles, por razones de equidad, conveniencia o política económica.

"Así, en el caso que nos ocupa, la enajenación como acto o actividad sigue teniendo relevancia como hipótesis de causación en materia del impuesto al valor agregado; sin embargo, por razones de política económica y social, la norma jurídica exenta a los contribuyentes que enajenen construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación.
…

"Asimismo, cabe señalar que los motivos por los cuales se determinó exentar del pago del impuesto de que se trata a los que enajenaran construcciones destinadas a casa habitación obedeció a una medida de política fiscal para prever de esta manera la solución del problema consistente en la escasez de viviendas que aquejaba y aqueja al país, ya que se estimó que tal medida estimularía la inversión destinada a este tipo de construcciones.

"...

"En la ejecutoria preinserta, esencialmente, se precisó, que la exención de un gravamen es la figura jurídica tributaria por la cual, conservándose los elementos de la relación jurídica tributaria (sujetos, objeto, cuota, tasa o tarifa) se eliminan de la regla general de causación, ciertos hechos o sujetos imponibles, por razones de equidad, conveniencia o política económica; por tanto, la enajenación como acto o actividad continúa teniendo relevancia como hipótesis de causación en materia del impuesto al valor agregado; sin embargo, por razones de política económica y social, la norma jurídica exenta a los contribuyentes que enajenen construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas como casa habitación cuando provén en ella mano de obra e insumos.

"**Con base en lo anterior, se indicó, que el hecho de que los causantes que enajenen bienes destinados a casa habitación y que también presten servicios para la construcción, estén exentos del pago del impuesto al valor agregado,** no debe concebirse en el sentido de que también se les exime de aceptar el traslado del tributo, **habida cuenta que la exención únicamente opera en caso de cumplir los dos requisitos (ya señalados) al realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación (prestar mano de obra y materiales)**, mas no por actos de adquisición de bienes o servicios, productos semiterminados o terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la realización de su objeto social.

"Cabe mencionar, que al establecerse en el artículo 21-A del Reglamento de la Ley delImpuesto al Valor Agregado combatido, que la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, la ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas utilizadas para ese fin, gozarán de la exención prevista en el artículo 9o., fracción II, de la ley que reglamenta, siempre que el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales; constituye una disposición que complementa y detalla la exención de referencia, haciendo posible en la esfera administrativa su exacta observancia, pues de tal forma, el contribuyente conoce con

certeza qué actos o servicios no están exentos del pago del tributo en comento, razón por la que, en conjunción con el precepto legal citado, se consideran como una sola unidad normativa liberatoria del tributo para efectos del presente estudio, y en esa medida, deben seguir la misma suerte.

…

De la parte considerativa de las ejecutorias transcritas se advierte -como se adelantó-, que este órgano colegiado ya se ha pronunciado en el sentido de que por razones de política económica y social, los artículos 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 9o. de la ley relativa, exentan a los contribuyentes que enajenen construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas como casa habitación cuando proveen en ella mano de obra e insumos; así como que ello no se traduce en que se les exima de aceptar el traslado del tributo, habida cuenta que la exención únicamente opera en caso de cumplir dos requisitos, esto es, que la actividad se desarrolle en forma integral, en tanto deben realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación y en forma conexa prestar mano de obra y materiales.

Consecuentemente, atendiendo a la línea argumentativa que sobre la problemática planteada ha observado esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, la siguiente:

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), OPERA RESPECTO DE QUIENES ENAJENEN CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACIÓN, CUANDO PROVEEN EN ELLA MANO DE OBRA E INSUMOS. De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como del proceso legislativo correspondiente, se concluye que **el propósito del creador de la norma fue exentar del pago de ese impuesto únicamente la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación**, quedando incluidas en ese concepto las instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente, de manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado y otras; **sin embargo, para que opere tal exención es necesario que esa actividad se desarrolle integralmente**, es decir, **que los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación se realicen en forma conexa con la prestación de servicios de construcción de dichos inmuebles, como pueden ser la mano de obra e insumos necesarios**, excluyendo por tanto los actos de adquisición de bienes o servicios, productos semiterminados o terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la realización de la obra.

Por lo que resulta **INCONCUSO**, que si un contribuyente diseña, fabrica e instala puertas, closets, barandales o cocinas integrales, -- sólo por mencionar algunos bienes --, en inmuebles destinados exclusivamente a Casa Habitación, proporcionando tanto los materiales como la mano de obra, ES QUE PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEBEN DE ESTAR EXENTOS, habida cuenta que la exención opera en caso de cumplir los dos requisitos (ya señalados) al realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación (prestar mano de obra y materiales).

En tal virtud, de la excelsa interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado del artículo 9 fracción II y 29 de su Reglamento (antes artículo 21-A), se debe entender que la

intención plasmada en el procedimiento legislativo, se concluye que el propósito del creador de la norma fue exentar del pago del impuesto al valor agregado no únicamente a la enajenación de construcciones adheridas al suelo utilizadas o destinadas a casa habitación, pues por su fin (vivienda) las consideró entre los artículos de primera necesidad y de consumo popular, sino también a la prestación de servicios de construcción de bienes inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación, así como a todas aquellas enajenaciones de bienes muebles que por su naturaleza estén destinados a permanecer unidas a los inmuebles destinados a casa habitación, de manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, gas, aire acondicionado, puertas, closets, barandales, ventanas, canceles de baño, cocinas integrales, sistemas alternativos de generación de energía, redes informáticas para dotar de internet, entre otras.

Por lo hasta aquí expuesto es que a fin de eliminar la controversia suscitada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial al momento de la interpretación de la Ley Fiscal, se propone incluir en el texto de ley la interpretación que de la misma ha realizado nuestro máximo tribunal a efecto de no dejar lugar al arbitrio de la fiscalizadora su correcta interpretación, así mismo limitar la facultad de las autoridades fiscales para que en caso de existir Jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, respecto de una norma jurídica de carácter fiscal, esta esté impedida de emitir criterios normativos de cualquier tipo que sean contrarios a la interpretación que nuestro máximo tribunal ha emitido.

Así mismo, a efecto de que la limitante aquí propuesta se haga respetar, se impone una sanción al funcionario público que la contravenga, consistente en la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, misma que habrá de aplicarse dependiendo la gravedad de la falta.

Se propone reformar la fracción II del artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto que en la actualidad reza (columna izquierda) y que como resultado de la presente propuesta se pretende sea del tenor literal siguiente (columna derecha), como se muestra en la siguiente tabla comparativa:

TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: I. … **II.-** Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción. III. – IX. … …	**Artículo 9o.-** No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: I. … **II.-** Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. **La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, asimismo, quedan incluidas en este concepto, aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, gas, aire acondicionado, puertas, closets, barandales, ventanas, canceles de baño, cocinas integrales, sistemas alternativos de generación de energía, redes informáticas para dotar de**

	internet, entre otras, siempre y cuando en todos los casos el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción. **Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra de igual naturaleza ubicadas en el exterior, de carácter general y público e independientes de la casa habitación.** III. – IX. … …

A efecto de cumplir con la exposición de motivos, así como evitar en un futuro controversias entre el Poder Ejecutivo y Judicial, se propone reformar el penúltimo párrafo Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio 2013, texto que en la actualidad reza (columna izquierda) y que como resultado de la presente propuesta se pretende sea del tenor literal siguiente (columna derecha), como se muestra en la siguiente tabla comparativa:

TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente: I. – III. … Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. …	**Artículo 33.-** Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente: I. – III. … Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. **Las autoridades fiscales estarán impedidas para emitir criterios de carácter interno para el cumplimiento de las disposiciones fiscales**

	que sean contrarios a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas haya emitido mediante Jurisprudencia. El funcionario público que violente esta disposición será sancionado con la inhabilitación por seis meses y hasta seis años dependiendo de la gravedad de la falta y la reiteración en la conducta. La notificación de un crédito fiscal deberá de estar fundamentado en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los contribuyentes podrán impugnar las resoluciones de la autoridad fiscal cuando no acaten dichos criterios jurisprudenciales, a través de los recursos legales previstos en las leyes aplicables. **…**

Por los motivos antes expuestos y fundados, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforma el artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los siguientes términos:

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

I. …

II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. **La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, asimismo, quedan incluidas en este concepto, aquellas instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente y fija, de tal manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, gas, aire acondicionado, puertas, closets, barandales, ventanas, canceles de baño, cocinas integrales, sistemas alternativos de generación de energía, redes informáticas para dotar de internet, entre otras, siempre y cuando en todos los casos el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales.**Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción.

Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra de igual naturaleza ubicadas en el exterior, de carácter general y público e independientes de la casa habitación.

III. – IX. …

…

SEGUNDO. Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:

Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

I. – III. …

Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquéllos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. **Las autoridades fiscales estarán impedidas para emitir criterios de carácter interno para el cumplimiento de las disposiciones fiscales que sean contrarios a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas haya emitido mediante Jurisprudencia. El funcionario público que violente esta disposición será sancionado con la inhabilitación por seis meses y hasta seis años dependiendo de la gravedad de la falta y la reiteración en la conducta. La notificación de un crédito fiscal deberá de estar fundamentado en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los contribuyentes podrán impugnar las resoluciones de la autoridad fiscal cuando no acaten dichos criterios jurisprudenciales, a través de los recursos legales previstos en las leyes aplicables.**

…

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, D.F. 17 de julio de 2013.

MARCOS AGUILAR VEGA
DIPUTADO FEDERAL

DEL DIP. CAROL ANTONIO ALTAMIRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CAROL ANTONIO ALTAMIRANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

CAROL ANTONIO ALTAMIRANO, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Como es del todo conocido, recién nos hemos enterado a través de los medios de comunicación respecto de la condonación de un crédito fiscal a una empresa por 3,334 mil millones de pesos. Dicha condonación generó la indignación generalizada de los contribuyentes y de este Congreso de la Unión.
Sobre el particular, el Servicio de Administración Tributaria puso de manifiesto no sólo la desinformación imperante en el Congreso, ---*pues dicho programa de condonaciones encuentra su fundamento en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 y en la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero pasado*---, sino también la imposibilidad de dicho órgano para atender a los requerimientos de información realizados por el Congreso, en razón del llamado "secreto fiscal" previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de revisar la figura del "secreto fiscal", toda vez que existe una clara asimetría en dicha figura, ya que, por un lado, existe "secreto fiscal" del contribuyente al que se condona un crédito fiscal frente a los contribuyentes que tenemos que pagar contribuciones para financiar el gasto público que se verá afectado por dicha disminución en los ingresos públicos, mientras que, por el otro lado, no existe tal secrecía respecto a los accionistas propietarios de las empresas beneficiadas por la condonación.
Así, la existencia de tales condonaciones fue del conocimiento del público contribuyente a través de los medios de comunicación, a partir de las revelaciones que dicha empresa tuvo que realizar a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores.

A pesar de la evolución y desarrollo que ha tenido el marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información en México en la última década, la gestión de las autoridades hacendarias, y en particular del Servicio de Administración Tributaria, continúan siendo opacas.

La razón es una concepción demasiado holgada de lo que debe considerarse como "secreto fiscal". Sin embargo, en una sociedad democrática, las autoridades deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público.

Es así que una vez queda de manifiesto que somos los contribuyentes personas físicas; y los pequeños empresarios que generan la mayoría de los empleos, quienes cargamos con el financiamiento del gasto público mediante el pago de impuestos, mientras que unos cuantos empresarios se enriquecen

ostensiblemente.
Por esta razón, consideramos indispensable reformular el llamado "secreto fiscal" previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para transparentar cualquier situación que pudiera impactar los ingresos y el gasto públicos, circunscribiéndolo exclusivamente a las personas morales.
Tratar de definir los límites y alcances del "secreto fiscal" no es una tarea fácil, puesto que la determinación de los elementos que lo integran no forma parte de la voluntad del individuo, sino de las obligaciones tributarias previstas en la ley y en el ejercicio de las potestades de la autoridad tributaria. En este sentido, el contribuyente se ve compelido a entregar información personal que la ley y la autoridad consideran de relevancia tributaria.
Al respecto, Ariel Wolfsohn y Carla Schuster nos dicen que la razón de existencia del "secreto fiscal" radica en la protección de los intereses del sujeto sobre el que se proyecta la trascendencia de las informaciones brindadas, de forma que éste encuentre la garantía de que las informaciones que sobre él se han facilitado a la Administración Pública, sean utilizadas exclusivamente para los fines para los cuales fue solicitada, y que el ámbito de intimidad quede restringido en aras a su armonización con otros derechos e intereses protegidos.

Por supuesto que compartimos lo expuesto por los autores citados, en relación a la protección de la información personalísima y sensible del sujeto pasivo de la relación tributaria, pero el "secreto fiscal" no puede ser entendido sólo como una faceta del derecho a la intimidad, con vinculación directa con la libertad individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por extraños significan una amenaza real o potencial a la intimidad.

Mucho menos, tratándose de las personas morales o jurídicas, y de las personas físicas con actividad empresarial, donde no es claro sostener en forma estricta que se esté protegiendo su derecho a la intimidad, sí bien reconocemos la necesidad de proteger un ámbito privativo de la persona jurídica, dado por determinados datos que la entidad tiene derecho a no divulgar a terceros, como son los secretos comerciales, las estrategias de comercialización, etc.

De otra parte, también debemos preguntarnos qué es lo que específicamente se encuentra resguardado por las reservas en la información pública previstas en el artículo 6º, Segundo Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

"Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión".

En este sentido, dicho dispositivo ordena al legislador determinar la información relativa a la vida privada y los datos personales que serán protegidos y cuáles no. Para tal efecto, el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, establece como información reservada, entre otras, la relacionada con el "secreto fiscal". Y el diverso artículo 18 prevé como confidenciales los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación no distingue entre los datos o información personal y la información pública, como si lo hace la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así, este último ordenamiento clasifica al secreto fiscal dentro de la información reservada (información pública), pero no dentro de la información confidencial (datos personales).

Asimismo, el "secreto fiscal" regulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se clasifica como "información reservada", pero sólo mientras las resoluciones no causen estado.

El mismo artículo 14 de la Ley de Transparencia establece la reserva temporal de la información, pero de ninguna manera prevé una reserva indefinida de la información.

En este sentido, la voluntad del titular de la información secreta no es absoluta para impedir que su contenido sea difundido, sino que es relativa y debe concurrir un interés razonablemente ponderable, el cual se desprende de la naturaleza misma del acto u hecho que se oculta. Así, el secreto como tal, no se encuentra establecido en ninguna parte de la Constitución mexicana.

En este sentido, la transparencia y acceso a la información tributaria opera en dos direcciones: de los contribuyentes hacia la autoridad hacendaria y de ésta hacia los contribuyentes. La primera se confecciona sobre la obligación constitucional de los contribuyentes de otorgar pleno acceso a la autoridad sobre sus finanzas y contribuciones, y el segundo sobre la información que detentan las administraciones tributarias sobre los contribuyentes.

Por su parte, el "secreto fiscal" se encuentra regulado en el multicitado artículo 69 del Código Fiscal de la Federación al establecer de forma expresa la absoluta reserva de los datos obtenidos por suministro o captación por parte del personal oficial que intervenga en los procedimientos para la determinación y pago de contribuciones, en relación con el artículo 2o, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que establece como tal el carácter reservado de los datos e informes o antecedentes que de ellos conozcan los servidores públicos de la administración tributaria.

Al efecto, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:

"*El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.*

(...)

Solo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público se podrán publicar los siguientes datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas".

Es así que, en directa contravención con el artículo 6º de la Constitución, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece una regla general para reservar toda la información en posesión de las autoridades que

intervienen en trámites fiscales, la cual admite ciertas excepciones.

Asimismo, la figura del "secreto fiscal" es tan asimétrica que el propio artículo 69 dispone que dicha reserva no comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia.

Otro desafortunado factor, es que en nuestro país la información sobre los ingresos públicos no tiene el mismo nivel de escrutinio y fiscalización que hemos desarrollado para el gasto público, a pesar de que los problemas de la recaudación son los problemas que más impactan en la capacidad de gasto del propio Estado para cumplir con sus obligaciones y asegurar que todos los mexicanos, incluidos los contribuyentes, tengan acceso a sus derechos.

Sobre esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mostró en sus orígenes una cierta flexibilidad en cuanto a la extensión del "secreto fiscal", considerando que las informaciones no resultaban secretas por ser tales, sino en cuanto revelaren secretos de terceros, reconociendo asimismo el derecho de los contribuyentes a ofrecer sus propias informaciones, ya que la reserva estaba establecida en beneficio de ellos.

La evolución jurisprudencial fue acentuando el rigorismo de la prohibición y extendiéndola, aún a datos que no guardaban vinculación con la situación patrimonial o de negocios del contribuyente hasta abarcar todo tipo de constancias administrativas obrantes en la Secretaría; así en el Amparo en Revisión 699/2011 estableció la "Constitucionalidad del secreto fiscal", señalando que: *"De una interpretación literal del artículo 69 del Código Fiscal, se desprende que el secreto fiscal comprende la obligación a cargo de las autoridades tributarias, de guardar reserva absoluta en relación con toda la información suministrada por los contribuyentes o captada por ellas en uso de sus facultades de comprobación."*

No obstante lo anterior, el desarrollo legislativo y jurisprudencial del derecho de acceso a la información que ha tenido lugar en años recientes obliga a entender de forma más restrictiva el secreto fiscal, de tal manera que sólo incluya una parte de la información tributaria que está en posesión de las autoridades hacendarias.

En el 2007, el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 de la Auditoría Superior de la Federación señaló que no existe un límite para la determinación de los créditos fiscales cancelados y condonados, particularmente porque el monto de los créditos fiscales cancelados en ese año ascendió a 73,960.4 millones de pesos.

Incluso, en diciembre de 2010, el IFAI interpuso amparo indirecto en contra de la negativa del SAT de brindar la información requerida sobre los montos, fechas de cancelación y motivos por los cuales fueron cancelados diversos créditos fiscales durante 2007, asunto que en principio, fue resuelto favorablemente por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región del Distrito Federal, en 2011, señalando que el SAT realiza una interpretación desafortunada del "secreto fiscal", pues dar a conocer datos sobre los nombres, cantidades y motivos relacionados con la cancelación de créditos fiscales, no perjudica el interés público, sino que por el contrario, va acorde con el mismo.

Derivado de lo anterior, el SAT interpuso recurso de revisión, caso que fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo que el artículo 69 y la expresión de "absoluta reserva" que contiene puede ser aplicado de forma inconstitucional por las autoridades hacendarias, o incluso podría considerarse que contraviene directamente el artículo 6º constitucional, porque:

I. Restringe indebidamente el derecho al acceso a la información.
II. Viola el principio de máxima divulgación previsto en el artículo 6º constitucional, mismo que dispone que la información únicamente podrá reservarse bajo un régimen restringido de excepciones.

III. Establece una reserva arbitraria que no obedece a criterios de interés público.
IV. La reserva general aplicable a toda la información en posesión del personal encargado de trámites tributarios obstaculiza el derecho de acceso a la información de forma particular al no permitir que el ciudadano verifique que se cumplen con los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.
V. No establece límite alguno basado en la temporalidad.
VI. Viola el principio de máxima publicidad, pues claramente restringe el derecho al acceso a la información en lugar de ampliarlo. Adicionalmente, esta restricción es artificial.
VII. Establece de manera genérica que la información es reservada en función de los sujetos que la detentan y no en función de la naturaleza pública de dicha información.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se presenta ante esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos Primero, Tercero y Quinto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Único.- Se reforman los párrafos Primero, Tercero y Quinto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos personales suministrados por los contribuyentes personas físicas o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento.

…

… La información que deba suministrarse en los términos de este artículo, sólo deberá utilizarse para los fines que dieron origen a la solicitud de información.

…

Solo se podrán publicar los siguientes datos por grupos de contribuyentes: localidad, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 25 de julio del 2013

Suscribe,

DIPUTADO CAROL ANTONIO ALTAMIRANO

DEL DIP. MARCOS AGUILAR VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

El que suscribe, **MARCOS AGUILAR VEGA**, con carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,** de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se propone reformar el antepenúltimo párrafo artículo 52 del Código Fiscal de la Federación así como adicionarle un inciso d) con un primer y segundo párrafos al mismo, texto que en la actualidad reza (columna izquierda) y que como resultado de la presente propuesta se pretende sea del tenor literal siguiente (columna derecha), como se muestra en la siguiente tabla comparativa:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:	Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
I. – III. …	I. – III. …
IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.	IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios.	Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios.
Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas	Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas

de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. ~~**En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión;**~~ para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento:	de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. Para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento:
a)Determinada la irregularidad, ésta será notificada al c	
La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Las pruebas se valorarán en los términos del artículo 130 de este Código.	a) – c) …
b) Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fra	
c) La resolución del procedimiento se notificará en un	**d) La resolución que imponga al Contador Público como sanción un exhorto, amonestación o suspensión, comenzará a cumplirse hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación. Si a más tardar al vencimiento del citado plazo se acredita la impugnación que se hubiere intentado, se suspenderán los efectos de la resolución hasta en tanto no exista sentencia firme.** **En estos casos se dará aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión hasta que haya causado estado la sentencia firme.** **…**

… …	…

Se considera que el actual texto del antepenúltimo párrafo en conjunción con los incisos a), b) y c) del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación que en conjunto contienen la facultad de las autoridades fiscales para sancionar al Contador Público por la comisión de irregularidades en la práctica profesional, así como el procedimiento que habrá de llevarse a cabo para imponer la sanción administrativa, transgreden el Derecho Humano contenido en el artículo 20 inciso B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la que nos ocupa establece:

> ***Artículo 20.*** *El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*
> *…*
> *B. De los derechos de toda persona imputada:*
>
> *I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa**;***

Lo anterior se advierte de la lectura conjunta del citado párrafo e incisos, en razón de que de su integración se colige que la sanción impuesta al Contador Público habrá de purgarse por este último de manera inmediata, lo cual como se señaló párrafos arriba compromete el derecho humano contenido en la fracción I del inciso B del artículo 20 de nuestra Carta Magna, esto es el principio de presunción de inocencia, lo que se traduce en una violación a los principios de certeza y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales, en atención directa con los artículos 5 y 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y los diversos 8 numeral 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sirva de apoyo a efectos de conocer el alance del Principio de Presunción de Inocencia el análisis jurídico que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que fue plasmado en la tesis 2a. XXXV/2007 que es del tenor literal siguiente:

> Época: Novena ÉpocaRegistro: 172433Instancia: SEGUNDA SALATipo Tesis: Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLocalización: Tomo XXV, Mayo de 2007Materia(s): Constitucional, PenalTesis: 2a. XXXV/2007Pág. 1186**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.** El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.SEGUNDA SALAAmparo en revisión 89/2007. 21 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Marat Paredes Montiel.

En razón de lo anterior es que se recurre a este Honorable Congreso de la Unión para denunciar la inconstitucionalidad de los numerales que se citan, inconstitucionalidad que radica de forma medular en la inmediatez con la que surte sus efectos la sanción, es decir se comienza a purgar la pena de forma instantánea y continua hasta agotarse el plazo ordenado, sin que para ello se cumplan las formalidades esenciales del

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Lo anterior sin duda trastoca la presunción de inocencia, en defecto de que de manera arbitraria se purgará la pena que se me impuso, sin que exista una sentencia o una resolución que confirme o revoque la presunta culpabilidad en la comisión de las conductas punibles.

Así las cosas resulta inconstitucional la aplicación conjunta del antepenúltimo párrafo del artículo 52 y sus incisos, en el sentido de que los efectos de las sanciones impuestas sean de ejecución instantánea o inmediata, teniendo que tolerar el gobernado la aplicación de la sanción o la pena sin que exista de por medio un procedimiento seguido en forma de juicio y/o resolución que confirme, revoque o modifique el contenido y efectos del acto de autoridad, violentando las garantías previstas en el artículo 14, 16 y 20 inciso B fracción I de la Carta Magna, así como los previstos en los artículos 5 y 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y los diversos 8 numeral 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

Artículo 5o.- *La Ley no puede prohibir más que las acciones dañosas para la sociedad, todo lo que no es prohibido por la Ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ésta no ordena.*

…

Artículo 9.- *Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se juzga indispensable su detención, la ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona.*

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS
CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

…

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Por otro lado, el multicitado antepenúltimo párrafo del artículo 52, violenta el perjuicio el derecho humano contenido en la fracción I del inciso B del artículo 20 de nuestra Carta Magna, pues transgrede el principio de presunción de inocencia al ordenar que se le de publicidad a la sanción que se impone, al señalar de forma expresa que "*En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión.*"

Circunstancia que violenta la presunción de inocencia en el sentido más amplio, pues como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha definido en la tesis 2a. XXXV/2007 su alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares, tal como la que ahora se tilda de inconstitucional.

Por lo cual es que se recurre a este Honorable Congreso de la Unión para denunciar la inconstitucionalidad de los numerales que se citan, inconstitucionalidad que radica en la publicidad inmediata que ordena la norma jurídica que se le dé a la pena impuesta, es decir, estará en entre dicho la dignidad, probidad profesional y buen nombre ante la sociedad en la cual se desenvuelve el ciudadano, sin que para ello se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En conclusión, el hecho de que la disposición jurídica ordene que la pena se debe purgar de forma instantánea y continua, **sin considerar siquiera para ello que dicho acto de autoridad debe ser firme**, -- ya sea: i) porque transcurrieron los 45 días hábiles que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece para la interposición del Juicio de Nulidad en vía Ordinaria sin que se haya recurrido el oficio sancionador o ii) porque habiéndose ejercido el derecho de acceso a la justicia y tras haber agotado los recursos e instancias procesales se emitió una sentencia definitiva donde se confirma la legalidad de la sanción --, violenta el principio de presunción de inocencia así como la garantía de seguridad y certeza jurídica que contemplan los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales, pues se le aplica al gobernado una medida disciplinaria, a pesar incluso, que de conformidad con el primer párrafo del artículo 52 del Código Fiscal, el Contador Público Registrado tiene la presunción de que ejerció su función atendiendo, entre otros, a los principios de honradez e imparcialidad, así como que ha cumplido con los requisitos previstos en los ordenamientos relativos para ser autorizado en su registro, lo que se traduce en que se le considere como persona responsable, honorable y competente que ha prestado sus servicios profesionales con eficiencia y probidad en la elaboración de los dictámenes de estados financieros para efectos fiscales, de enajenaciones de acciones y declaratorias formuladas con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado.

De igual forma, la reforma jurídica propuesta pretende que la autoridad se abstenga de dar aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a la que pertenece el Contador Público Registrado, sino hasta que exista de por medio un procedimiento seguido en forma de juicio y/o resolución que confirme, revoque o modifique el contenido y efectos del acto de autoridad que impone la sanción.

Sirva por identidad las siguientes tesis, para soportar la reforma propuesta:

> Época: Novena ÉpocaRegistro: 162693Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Tipo Tesis: Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaLocalización: Tomo XXXIII, Febrero de 2011Materia(s): ComúnTesis: VI.1o.A.312 A Pág. 2406
> **SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES PROCEDENTE CONTRA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL REGISTRO DEL CONTADOR PÚBLICO PARA**

DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES, DERIVADA DE UNA OMISIÓN O ERROR AL REALIZAR UN ASIENTO CONTABLE EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA. Ante la suspensión del registro del contador público registrado para dictaminar estados financieros de los contribuyentes, en términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, que tiene como presupuesto una omisión o error al realizar un asiento contable en el procedimiento de auditoría, y no la diversa hipótesis relativa a la comisión de un delito de carácter fiscal, procede la suspensión provisional, al darse los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, por solicitarse por el quejoso, sin que se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y porque de lo contrario se causarían al impetrante daños y perjuicios de difícil reparación. Lo anterior, pues la concesión de la medida cautelar no impide que la actuación del impetrante siga sujeta a la revisión que, en su caso, realice la autoridad sobre los dictámenes que éste emita, al ejercer las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y porque dada la naturaleza de las funciones del contador público registrado, la suspensión de su registro ocasiona que no culmine sus obligaciones respecto de dictámenes ya presentados, y limita la posibilidad de presentar nuevos mientras se ejecuta la suspensión de su registro, no obstante que se le concediera el amparo, al haber transcurrido los plazos legales relativos.
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Enero de 2010; Pág. 2237

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DEL AVISO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). En el supuesto de que la autoridad hacendaria determine suspender el registro de un contador público autorizado para dictaminar estados financieros de los contribuyentes, por disposición expresa de la fracción II del artículo 58 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, debe dar aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la federación de colegios profesionales a que pertenezca dicho contador. En un caso así, se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional, por ser solicitada por el quejoso, sin que se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, al limitarse a evitar darle publicidad a la suspensión del registro para efectos fiscales, pero con la subsistencia de las restantes consecuencias de la sanción impuesta, pues de lo contrario se causarían al impetrante daños y perjuicios de difícil reparación con la ejecución de lo dispuesto en la norma aludida, consistente en dar el o los avisos en la forma antes indicada, cuando la determinación emitida se encuentra sub júdice, cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad es el fondo del juicio de amparo y, por ello, sin gozar de firmeza ya demeritaría el expediente del quejoso en el colegio profesional y, en su caso, en la federación de colegios profesionales a los que pertenezca, con el desprestigio que de suyo ello acarrearía y que, aun de concederse la protección federal en el expediente principal, difícilmente se podrían retrotraer las consecuencias negativas que para su desempeño profesional se le habrían generado; todo lo cual evidencia lo procedente de conceder la suspensión provisional así solicitada.

Por los motivos antes expuestos y fundados, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo 52, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:

Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes

formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. – III. …

IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o responsables solidarios.

Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. Para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento:

a) – c) …

d) La resolución que imponga al Contador Público como sanción un exhorto, amonestación o suspensión, comenzará a cumplirse hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación. Si a más tardar al vencimiento del citado plazo se acredita la impugnación que se hubiere intentado, se suspenderán los efectos de la resolución hasta en tanto no exista sentencia firme.

En estos casos se dará aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión hasta que haya causado estado la sentencia firme.

…

…

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, D.F. 17 de julio de 2013.
MARCOS AGUILAR VEGA
DIPUTADO FEDERAL

DEL DIP. CAROL ANTONIO ALTAMIRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, INCISO A); TERCERO; Y CUARTO DE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO CAROL ANTONIO ALTAMIRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

CAROL ANTONIO ALTAMIRANO, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos años, los problemas de inseguridad experimentados en casi todo el territorio nacional han puesto de manifiesto la debilidad estructural de nuestros municipios, particularmente derivada de la ausencia de recursos financieros suficientes para afrontar sus principales responsabilidades.

Pero este no es el único problema de los municipios, en realidad es una consecuencia inevitable de la debilidad financiera histórica, estructural y endémica de nuestros municipios. Además de la seguridad pública, los problemas municipales tienen que ver con todo: con los servicios públicos, el medio ambiente, el desarrollo social, el cobro de contribuciones, la administración rezagada y rebasada por las circunstancias y la tecnología, o su virtual inexistencia, entre otros problemas, en el orden que se desee.

Al respecto, es menester recordar que los municipios obtienen sus ingresos a través de dos vías: sus ingresos propios derivados de las contribuciones locales, productos y aprovechamientos; y las participaciones y aportaciones federales y estatales previstas de la Ley de Coordinación Fiscal y en sus similares estatales.

Los municipios cuentan con un limitado catálogo de ingresos propios: en promedio, los impuestos representan el 45%; los derechos el 34%; los aprovechamientos 19%, y las contribuciones de mejoras apenas el 2%.

Sin embargo, los ingresos propios de los municipios promedian apenas el 15% de sus ingresos totales, siendo que los Fondos de Participaciones y de Aportaciones Federales completan el restante 85% de sus ingresos.

En efecto, exceptuando al Distrito Federal y a las capitales de los estados, donde los ingresos propios promedian el 48% de sus ingresos totales, el municipio promedio obtiene sólo el 14% de sus ingresos de fuentes propias, siendo que el 86% restante proviene de participaciones y aportaciones federales y estatales.[33]

[33] "Ingresos Brutos Municipales 2011", Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, Secretaría de Gobernación, Sistema de Información Hacendaria, Datos Financieros y Socioeconómicos, Municipios, ww.inafed.gob.mx, consultado el 12 de abril de 2013

Esta dramática situación de dependencia económica provoca que el centralismo existente en las relaciones entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas, se traduzca en una suerte de centralismo local o regional aún más agresivo al interior de los estados en las relaciones entre los gobiernos estatales y sus municipios, porque como dice el refrán norteamericano "quien tiene el oro pone las reglas del juego".

Esto es así porque nuestra carta fundamental no otorga a los municipios potestad tributaria, poder para establecer tributos, sino que éste reside en los congresos estatales, con las desventajas que para los municipios implica.

Resulta interesante que desde principios de los años setenta, algunos de los gurúes más referenciados por nuestra tecnocracia como Richard y Peggy Musgrave, en su obra "Hacienda Pública, Teórica y Aplicada", destacaban la necesidad de fortalecer las potestades tributarias de los municipios, e incluso responsabilizarlos directamente del gasto social, pues están más cerca de los problemas y de los ciudadanos que las burocracias federales y estatales. Sin embargo, extrañamente en este rubro nuestra tecnocracia ha sido omisa en atender a las recetas de descentralización fiscal del país provenientes de Norteamérica.

En este sentido, resulta urgente emprender una reforma constitucional para otorgar poder tributario a los municipios, como ocurre en todos los estados federales, con nuestros principales socios comerciales: los E.U.A. y Canadá, y en nuestros países hermanos Brasil y Venezuela.

Acorde con lo anterior, se propone avanzar hacia una reforma para que los municipios adquieran potestad tributaria plena, a partir de los siguientes ejes:

I. Facultad para establecer tasas, cuotas y tarifas.
II. Facultad para establecer todos los elementos de las de las contribuciones por servicios públicos (objeto, sujeto, base, tasas, cuotas y tarifas, periodo de pago, exenciones, etc.).
III. Facultad para aprobar su propia Ley de Ingresos.
IV. Facultad para aprobar su Ley de Hacienda, Códigos Fiscales, Códigos Financieros o Hacendarios.

Para tal efecto, es menester reformar el artículo 115, fracción IV, antepenúltimo y penúltimo párrafos de nuestra Constitución Política.

Es importante comentar que no todos los municipios tienen la capacidad material para hacer efectivas las facultades propuestas, debido a una diversidad de circunstancias, por lo que se considera necesario que sean los propios ayuntamientos quienes acuerden ejercer o no las facultades que se proponen, o continuar transitoriamente supeditados a las disposiciones que establezcan las legislaturas locales.

De igual manera, los ayuntamientos deberán observar los elementos de las contribuciones que establece la propia Constitución, quedando a salvo los derechos de los contribuyentes para impugnarlas.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se presenta ante esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforman los párrafos Primero, inciso a); Tercero; y Cuarto de la Fracción IV, del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Único.- Se reforman los párrafos Primero, inciso a); Tercero; y Cuarto de la Fracción IV, del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Art. 115.- ....

IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que los ayuntamientos establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan sus ayuntamientos sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

…

b)…

c)…

…

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, aprobarán las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Asimismo, aprobarán las leyes de ingresos de sus municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

…"

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el primer día hábil del año 2014.

Segundo.- Los Congresos Estatales deberán adecuar las constituciones de sus estados dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto.

Tercero.- Los propios ayuntamientos deberán aprobar por mayoría calificada, la asunción inmediata de facultades a que se refiere la Fracción IV del artículo 115, o continuar temporalmente sujetos a las disposiciones que establezca la legislatura local respectiva, mediante la suscripción del convenio de colaboración correspondiente.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 25 de julio del 2013

Suscribe,

DIPUTADO CAROL ANTONIO ALTAMIRANO

DEL DIP. MARCOS AGUILAR VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

Iniciativa de Ley que presenta el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de Ley de Coordinación Fiscal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos: 2, décimo párrafo; 2-A, fracción III; 3-A, primer párrafo y la fracción II, último párrafo; 4, penúltimo párrafo; 4-A, fracción II, penúltimo párrafo; 4-B, último párrafo; 6, primero, segundo y tercer párrafos; 7, segundo párrafo, y se adiciona el artículo 2-B, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de máximo ordenamiento jurídico de nuestro País, reconoce la concurrencia que existe entre la federación y las entidades federativas, estableciendo dentro del sistema tributario mexicano, la facultad de imponer contribuciones a los gobernados a efecto de contribuir con el gasto público.

La propia Constitución, en su artículo 115, fracción IV, inciso b) establece que el patrimonio de los municipios, se conforma, entre otros, por los ingresos incluyendo lãs que les correspondan por participaciones federales, em lós términos siguientes:

"... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:...

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados..."

Es bien sabido que uno de los objetivos principales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal lo es, precisamente, el armonizar el sistema tributario nacional, limitando la doble o triple imposición sobre una misma actividad, tratando, al mismo tiempo, que cualquiera de las tres instancias gubernamentales, entre ellos los municipios, obtengan los recursos necesarios para cumplir con sus fines.

A raíz de la concurrencia, surge la necesidad de implementar el Sistema de Coordinación Fiscal, cuya esencia lo es el fortalecimiento de la organización política federal, previendo en su esquema básico, la distribución de competencias fiscales entre la federación y las entidades federativas, considerando al municipio libre.

El Sistema de Coordinación Fiscal se encuentra regulado por la Ley de Coordinación Fiscal y como parte integral de ésta, en los convenios de adhesión y de colaboración administrativa suscritos entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.

En esta tesitura, los municipios obtienen a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: a) Participaciones de los Fondos General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y de los impuestos

asignados; e b) Incentivos que se derivan del convenio de colaboración administrativa y de sus anexos respectivos.

Considerando que la Ley de Coordinación Fiscal regula y coordina la participación de los municipios que integran las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, resulta indispensable incorporar, expresamente, dentro del objeto de la legislación citada, a los municipios.

La reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, originó la conceptualización del municipio como un órgano más de gobierno, asimismo, le fue reconocida la potestad de auto-organización.

Para cumplir con un requisito indispensable y dar viabilidad al esquema federalista de la organización política del Estado, nuestra Constitución reconoció la potestad de libre administración hacendaria de los municipios, toda vez que el constituyente advirtió que sin la autonomía del municipio, base de la división territorial y organización política de los estados, dicho esquema perdería eficacia, impidiendo alcanzar los fines constitucionales y legales de su existencia.

En aras de fortalecer las haciendas públicas municipales, y elevar el crecimiento de los municipios, se propone incrementar el porcentaje del fondo del 20% al 25%, así como modificar la forma de distribución de dichas participaciones federales, de tal manera que las mismas no sean sujetas a criterios arbitrarios o subjetivos por parte de las entidades federativas, y sea la propia federación a quien corresponderá dicha facultad. En concreto, la propuesta tiene por objeto alcanzar el fin previsto en la Constitución, el cual prevé que no exista autoridad intermedia entre la federación y los municipios en cuanto a la distribución, cálculo,

determinación y asignación de las participaciones federales a éstos; limitándose la intervención de los gobiernos estatales a su entrega.

Atendiendo a uno de los propósitos de la Ley de Coordinación Fiscal, particularmente, al contemplar el derecho de los Municipios para participar en el Fondo General de Participaciones (FGP), se justifica que la asignación de dichas participaciones sea a través de una vía directa a cargo de la federación, sin la intervención de los gobiernos de las entidades federativas, atendiendo al espíritu de la propia Constitución, que dispone que entre la federación y los municipios no podrá existir autoridad intermedia, con mayor razón tratándose de la asignación y entrega de los recursos económicos que les correspondan.

Atendiendo a la anterior exposición de motivos, es que surge la necesidad de modificar las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, materia de la presente iniciativa al tenor de las siguientes necesidades y justificaciones:

I. Respecto al párrafo décimo del artículo 2 de la Ley, se propone un incremento del 5% en los porcentajes que le corresponden a los municipios, modificándose la forma de distribución, que ya no dependerá de Gobierno Estatal, es menester dotar de congruencia y formular la remisión atinente para hacer aplicable el nuevo dispositivo legal.

II. Con la reforma al artículo 2-A, cuyo propósito es beneficiar realmente a los municipios en la asignación del Fondo de Fomento Municipal, resulta imprescindible y necesario que éste se incremente en por lo menos tres puntos porcentuales respecto de la recaudación federal participable.

III. Se adiciona un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de generar una fórmula ex profeso para el cálculo y asignación de los recursos a los municipios buscando que la distribución de las participaciones federales contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal sea de forma equitativa, proponiendo la forma de distribución que actualmente se aplica en el estado de Querétaro, incorporando un nuevo artículo que expone la distribución con los factores de población, ingresos propios, territorio y zona económica.

IV. Con la reforma propuesta al artículo 3-A, se incorpora a los municipios como participantes en la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, por lo cual en su último párrafo es adicionado el texto que correlaciona al artículo de la Ley para el cálculo de este fondo.

V. Al reformar el penúltimo párrafo del artículo 4, en lo que corresponde al Fondo de Fiscalización, se considera un incremento de por lo menos el 5% al porcentaje que recibirán los municipios como mínimo de este Fondo, y se adiciona la redacción que establece el procedimiento para su distribución.

VI. Respecto del artículo 4-A, se propone la homologación del porcentaje de distribución para los municipios, incrementando del 20 al 25% del fondo a distribuir y que se encuentra previsto en este artículo.

VII. En el artículo 4-B se sugiere, la homologación del porcentaje de distribución para los municipios, incrementando del 20 al 25% el fondo a distribuir, señalado en este artículo.

VIII. Con relación a la propuesta de reforma al artículo 6, en su primer párrafo, y atendiendo a que este Fondo representa para muchos municipios, la garantía de operatividad de su actuar de manera eficiente, es considerado dentro de las participaciones el de mayor relevancia en su tratamiento e importe. En principio se solicita un incremento de por lo menos un 5% para que la asignación a los municipios nunca sea inferior al 25%.

Por otro lado, se elimina la intervención de las Legislaturas Locales de los estados en la distribución y en el entero de las participaciones, por lo cual se propone que sea el gobierno federal quien realice los cálculos de distribución y entregue el importe a los gobiernos estatales para que este, a su vez, lo haga de forma directa a cada municipio. Lo anterior aplicando esquemas similares a los empleados para las aportaciones federales del fondo 33.

IX. Por lo que toca al segundo párrafo del artículo 6, con esta reforma se le permitirá, a los municipios que así lo requieran, que las participaciones ya calculadas por la federación sean entregadas a estos de manera directa por parte de la federación, sin la necesidad de establecer un vínculo ni la intervención de los gobiernos de los estados.

X. Respecto a la reforma del párrafo tercero del artículo 6, la reforma plantea, de nueva cuenta, un incremento de por lo menos el 5% de la recaudación que corresponda a cada uno de los estados.

XI. Finalmente, se propone la reforma del artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de prever la necesidad de que al realizar ajustes por los anticipos en participaciones, las entidades

federativas consideren la nueva forma de distribución propuesta, remitiéndose siempre a dicho precepto de la Ley.

Considerando lo anterior y a efecto de ilustrar, se presenta la siguiente tabla comparativa de las disposiciones vigentes y las propuestas de modificación:

Texto Vigente	Texto Propuesto
Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.	**Artículo 2o.-** El Fondo General de Participaciones...
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.	...
No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.	...
Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni el impuesto sobre automóviles nuevos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.-A de esta Ley; ni la parte correspondiente al régimen de pequeños contribuyentes; ni la recaudación obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o., fracción II, inciso B) y 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; ni las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.	...
El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente:	...
	...

$$P_{i,t} = P_{i,07} + \Delta FGP_{07,t}\left(0.6C1_{i,t} + 0.3C2_{i,t} + 0.1C3_{i,t}\right)$$

$$C1_{i,t} = \frac{\frac{PIB_{i,t-1}}{PIB_{i,t-2}} n_i}{\sum_i \frac{PIB_{i,t-1}}{PIB_{i,t-2}} n_i}$$

$$C2_{i,t} = \frac{\Delta IE_{i,t} n_i}{\sum_i \Delta IE_{i,t} n_i} \quad \text{con} \quad \Delta IE_{i,t} = \frac{1}{3}\sum_{j=1}^{3} \frac{IE_{i,t-j}}{IE_{i,t-j-1}}$$

$$C3_{i,t} = \frac{IE_{i,t-1} n_i}{\sum_i IE_{i,t-1} n_i}$$

Donde:

$C1_{i,t}$, $C2_{i,t}$, y $C3_{i,t}$ son los coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones de la entidad i en el año en que se efectúa el cálculo.

$P_{i,t}$ es la participación del fondo a que se refiere este artículo, de la entidad i en el año t.

$P_{i,07}$ es la participación del fondo a que se refiere este artículo que la entidad i recibió en el año 2007.

$\Delta FGP_{07,t}$ es el crecimiento en el Fondo General de Participaciones entre el año 2007 y el año t.

$PIB_{i,t-1}$ es la información oficial del Producto Interno Bruto del último año que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.

$PIB_{i,t-2}$ es la información oficial del Producto Interno Bruto del año anterior al definido en la variable anterior que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.

$IE_{i,t}$ es la información relativa a la recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad i en el año t contenida en la última cuenta pública oficial. Para tal efecto, se considerarán impuestos y derechos locales todos aquellos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos por suministro de agua. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá aprobar otros impuestos y derechos respecto de los cuales exista información certera y verificable, atendiendo a criterios de equidad entre las entidades federativas.

$\Delta IE_{i,t}$ es un promedio móvil de tres años de las

...

tasas de crecimiento en la recaudación de los impuestos y derechos locales de la entidad i, referidos en la variable anterior.	
n_i es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.	...
$\sum_i$ es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue.	...
Las entidades deberán rendir cuenta comprobada de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus impuestos y derechos locales. La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la recaudación federal participable sea inferior a la observada en el año 2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en el año 2007. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar a las entidades la información que estime necesaria para verificar las cifras recaudatorias locales presentadas por las entidades.	...
También se adicionará al Fondo General un monto equivalente al 80% del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto se actualizará en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales de tributación en el año de 1989.	...
Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos de la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, cuando provenga de venta o arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales.	...
Noveno párrafo (Se deroga)	...
Asimismo, las citadas entidades adheridas al	Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.	celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el **25%** a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma **prevista en el artículo 2-B de la presente Ley**.
Artículo 2-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los Municipios, en la forma siguiente:	**Artículo 2-A.-** ...
I.- En la proporción de la recaudación federal participable que a continuación se señala participarán los municipios, en la forma siguiente:	...
0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país.	...
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula:	...
CCiT = Bi / TB	...
Donde:	...
CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se efectúa el cálculo.	...
TB es la suma de Bi.	...
i es cada entidad.	...
Bi = (CCiT-1) (IPDAiT-1) / IPDAT-2	...
Donde:	...
CCiT-1 = Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.	...

IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.	...
IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en el segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.	...
II.- 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.	...
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Petróleos Mexicanos, informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior.	...
III.- 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma:	**III.- 3%** de la recaudación federal participable, en la siguiente forma:
a) El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal.	...
b) El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las entidades que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta Ley.	...
El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades conforme a la fórmula siguiente:	...
$F_{i,t} = F_{i,07} + \Delta FFM_{07,t} C_{i,t}$	...
$C_{i,t} = \frac{\frac{R_{i,t-1}}{R_{i,t-2}} n_i}{\sum_i \frac{R_{i,t-1}}{R_{i,t-2}} n_i}$	...
Donde:	...
$C_{i,t}$ es el coeficiente de distribución del Fondo de Fomento Municipal de la entidad *i* en el año en que se efectúa el cálculo.	...
$F_{i,t}$ es la participación del fondo al que se refiere este artículo de la entidad *i* en el año *t*.	...
	...

$F_{i,07}$ es la participación del fondo al que se refiere este artículo que la entidad *i* recibió en el año 2007.	
$\Delta FFM_{07,t}$ es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2007 y el periodo t.	…
$R_{i,t}$ es la recaudación local de predial y de los derechos de agua de la entidad *i* en el año *t*.	…
n_i es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad *i*.	…
Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos.	Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, ~~**de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales,**~~ garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos.
Las cantidades que correspondan a los Municipios en los términos de las fracciones I y II, se pagarán por la Federación directamente a dichos municipios.	…
La fórmula del Fondo de Fomento Municipal no será aplicable en el evento de que en el año que se calcula el monto de dicho Fondo sea inferior al obtenido en el año 2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en relación con la cantidad efectivamente generada en el año que se calcula y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido del Fondo de Fomento Municipal en el 2007.	…
Artículo 2-B.- **Se Adiciona.**	**Artículo 2-B.- Las cantidades que correspondan a los Municipios en los términos de la fracción III del artículo 2-A y demás disposiciones contenidas en esta Ley, se distribuirán por la Federación de acuerdo a la siguiente forma:** **I. El 40%, de acuerdo a la relación porcentual que represente el número de habitantes de cada Municipio (i) del Estado (j), respecto del número de habitantes en el Estado (j). Al inicio de cada ejercicio fiscal, el número de habitantes se tomará de la última información oficial que emita el Consejo Nacional de Población para el año en que se aplicarán los ingresos (RPM);** **RPMij = (No. Habitantes en el Municipio i del Estado j / No total de habitantes del Estado j) X 0.40**

	II. El 30%, de acuerdo a la relación porcentual que representen los ingresos propios por el Municipio (i) del Estado (j), del uno de octubre del año anterior al treinta de septiembre del año corriente, conforme a los datos con que cuenten las Entidades de Fiscalización de los Estados o la Entidad Homologa, en relación al total de los percibidos por todos los municipios del Estado j a que corresponda (RIMij); **RIMij = (Ingresos propios obtenidos por el Municipio i del Estado j / Total de ingresos propios del Estado j) X 0.30** **Los ingresos propios a que se refiere esta fracción, son los que perciba el municipio, distintos de las transferencias de recursos federales o estatales que reciban en los términos de la Ley de Ingresos respectiva.** **III. El 20%, de acuerdo a la relación porcentual que represente la superficie territorial de cada Municipio (i) del Estado (j), respecto de la superficie total del Estado (j), conforme a los últimos datos con que cuente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (RSMij); y** **RSMij = (Superficie territorial del municipio i del Estado j / Superficie total del Estado j) X 0.20 y** **IV. El 10% restante, de acuerdo a la relación porcentual que se denominará zona municipal, que se calculara para cada Municipio (i) del Estado (j) de acuerdo al número de habitantes, nivel de marginación y región socioeconómica, de acuerdo a la información publicada por CONAPO e INEGI (RZMij).** **Donde RZMij se calculará de la manera siguiente:** **RZMij = (CMHi + CMMi + CMRi) x 0.10** **Donde:** **a) El 30% del número de habitantes de cada Municipio (i) dividido entre el total en el Estado (j), que dará por ende el Componente Municipal de Habitantes (CMHij), con base en los datos que indique el último informe oficial emitido por el Consejo Nacional de Población para el año en que se aplicarán los ingresos.**

	CMHi = (población del Municipio i del Estado j / Población del Estado j) X 0.30; **b) El 35% por ciento del número asignado que por nivel de marginación establece el Consejo Nacional de Población para cada Municipio (i), dividido entre el resultado de la suma de los números de los niveles de marginación de los Municipios (i) del Estado (j), que dará por ende el Componente Municipal de Marginación (CMM), asignando los números a cada Municipio de la siguiente manera: uno, para los que establece el Consejo Nacional de Población con "Muy Alta marginación"; dos, para los que califican como "Alta marginación"; tres, para los que tienen "Media marginación"; cuatro, para los que establece con "Baja marginación" y cinco, para los que tiene "Muy Baja marginación".** **CMMi = (Componente de marginación del Municipio i del Estado j / Suma de los números de los niveles de marginación de los Municipios i de los Estados j) x (0.35)** **c) El 35% por ciento del promedio ponderado que resulte de aplicar el porcentaje de población por el número correspondiente que por región socioeconómica establezca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) obteniendo un promedio ponderado para cada Municipio i del Estado j, este promedio será dividido entre la suma de los promedios de todos los Municipios i del Estado j, que dará por ende el Componente Municipal de Región socioeconómica (CMR);** **CMR = Región socioeconómica del Municipio i del Estado j) / Suma de los promedios ponderados de los Municipios i de los Estados j) x 0.35.** **RZM = Redondear [(1/CMi) / ∑(1/CMi)][(100)-1** **Donde:** **CMij = CMHij + CMMij + CMRij por cada Municipio i del Estado j.** **∑ (1/CMij) = La suma de las fracciones (1/CMij) de cada Municipio i del Estado j.** **(RPM) + (RIM) + (RMS) + (RZM) =**

	Porcentaje por municipio i del estado j.
Artículo 3-A.- Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes:	**Artículo 3-A.-** Las entidades federativas y **municipios** adheridas **al** Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes:
I.- El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas.	**I.-** ...
II.- El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados.	**II.-** ...
Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno de los bienes a que se refiere este artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional, y se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7o. de esta Ley.	...
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al estado.	Los municipios recibirán como mínimo el **25%** de la participación que le corresponda al estado, **que se distribuirán de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 2-B de la presente Ley.**
Artículo 4o.- El Fondo de Fiscalización estará conformado por un monto equivalente al 1.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio.	**Artículo 4o.-** ...
El Fondo a que se refiere este artículo se distribuirá en forma trimestral a las entidades que se ajusten estrictamente a lo establecido en el artículo 10-A de esta Ley, de acuerdo a la siguiente fórmula:	...
$T_{i,t} = T_{i,0} + \Delta FOFIE_{nal}(0.3C1_{i,t} + 0.1C2_{i,t} + 0.25C3_{i,t} + 0.05C4_{i,t} + 0.25C5_{i,t} + 0.05C6_{i,t})$	...
$C1_{i,t} = \frac{\frac{CV_{i,t-1}}{PIB_{i,t-1}} n_i}{\sum_i \frac{CV_{i,t-1}}{PIB_{i,t-1}} n_i}$	...
$C2_{i,t} = \frac{VM_{i,t-1} n_i}{\sum_i VM_{i,t-1} n_i}$	...
$C3_{i,t} = \frac{\frac{RR_{i,t-1}}{RR_{i,t-2}} n_i}{\sum_i \frac{RR_{i,t-1}}{RR_{i,t-2}} n_i}$	...

$C4_{i,t} = \frac{RR_{i,t-1} n_i}{\sum_i RR_{i,t-1} n_i}$	...
$C5_{i,t} = \frac{\frac{RI_{i,t-1}}{RI_{i,t-2}} n_i}{\sum_i \frac{RI_{i,t-1}}{RI_{i,t-2}} n_i}$	...
$C6_{i,t} = \frac{RI_{i,t-1} n_i}{\sum_i RI_{i,t-1} n_i}$	...
Donde:	...
$T_{i,t}$ es la participación de la entidad i en el año t.	...
$T_{i,07}$ es la participación que la entidad i recibió en el año 2007, por concepto de coordinación de derechos (1% de la recaudación federal participable) y por la reserva de contingencia (0.25% de la recaudación federal participable).	...
$\Delta FOFIE_{07,t}$ es el crecimiento en el fondo de fiscalización entre el año 2007 y el año t.	...
$CV_{i,t}$ son las cifras virtuales de la entidad i en el año t que dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria.	...
$PIB_{i,t-1}$ es la información oficial del Producto Interno Bruto del último año que dé a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.	...
$VM_{i,t}$ es el valor de la mercancía embargada o asegurada por la entidad i en el año t que dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria.	...
$RR_{i,t}$ es la recaudación del régimen de pequeños contribuyentes de la entidad i en el año t que dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria.	...
$RI_{i,t}$ es la recaudación del régimen de contribuyentes intermedios de la entidad i en el año t que dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria.	...
n_i es la última información oficial de población que dé a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.	...
$\sum_i$ es la suma sobre todas las entidades de la	...

variable que le sigue. La fórmula del Fondo de Fiscalización no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de las entidades hayan recibido en el 2007 por concepto de coordinación de derechos y reserva de contingencia. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido por concepto de coordinación de derechos y reserva de contingencia en el año 2007. Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización corresponda a las entidades federativas. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verificar el cumplimiento de las labores de fiscalización efectuadas por las entidades federativas en los términos de este artículo.	... Los municipios recibirán como mínimo el **25%** de la recaudación que del Fondo de Fiscalización corresponda a las entidades federativas **que se distribuirán de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 2-B de la presente Ley.** Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales. ...
Artículo 4o-A.- La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos partes: **I.** Del total recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio, siempre y cuando se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y celebren con la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convenio de colaboración en términos del artículo 13 de esta Ley, mediante el cual se sujeten, entre otras cosas, al cumplimiento de las obligaciones siguientes: **a)** Administrar la totalidad de la recaudación del impuesto dentro de su territorio. **b)** Reintegrar a la Federación las cantidades equivalentes a los 2/11 restantes del total recaudado por la aplicación de las cuotas, a fin de que se proceda a su distribución en términos de la fracción II de este artículo, o bien, manifestar su	**Artículo 4o-A.-** ... **I.** ... **a)** ... **b)** ...

autorización para que la Federación compense dichas cantidades contra sus participaciones federales, en términos de lo establecido en el artículo 9o. de esta Ley.	
c) Destinar los recursos que correspondan a la entidad por la administración del impuesto a la compensación de las pérdidas en participaciones estatales que sufran sus municipios y en el caso del Distrito Federal sus demarcaciones territoriales, derivadas de modificaciones en la forma de distribución de la entidad a sus municipios o demarcaciones territoriales.	**c)** ...
d) Incluir en las publicaciones a que se refiere el artículo 6o., último párrafo de esta Ley, el destino de los recursos que corresponderán a sus municipios y en el caso del Distrito Federal sus demarcaciones territoriales, así como acreditar su cumplimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	**d)** ...
Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del artículo 9o. de esta Ley, siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les correspondan.	...
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas.	...
II. Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas, 2/11 se destinarán a un Fondo de Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última información oficial del Instituto Nacional de	**II.** ...

Estadística, Geografía e Informática, tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos los rubros contenidos en el mismo.	
El Fondo de Compensación se distribuirá conforme a la fórmula siguiente:	...
$T_{i,t} = \frac{\frac{1}{PIBpc_{i,t-1}}}{\sum_i \frac{1}{PIBpc_{i,t-1}}} FC_t$	...
Donde:	...
$T_{i,t}$ es la transferencia de la entidad i en el año t.	...
$PIBpc_{i,t-1}$ es el último Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero de la entidad i construido con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.	...
FC_t es el Fondo de Compensación en el año t.	...
$\sum_i$ es la sumatoria de la variable que le sigue.	...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades a que se refiere esta fracción, dentro del mes siguiente al entero o compensación de dichas cantidades por parte de las entidades federativas que administren el impuesto.	...
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán presentar al Congreso de la Unión una evaluación sobre los resultados y desempeño del Fondo a que se refiere esta fracción, así como sobre la conveniencia de conservar o modificar las reglas de su distribución. Dicha evaluación deberá presentarse en el mes de enero del año 2018 y posteriormente cada 5 años en caso de no modificarse	...

las reglas de distribución. Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades federativas en términos de este artículo. La distribución del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población. *[Los recursos que reciban las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en términos de este artículo, deberán destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación ambiental.]* ***Nota:** Último párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 11-07-2008*	Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el **25%** de la recaudación que corresponda a las entidades federativas en términos de este artículo. La distribución del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo **a lo dispuesto en el artículo 2-B de la presente Ley.**
Artículo 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos. El Fondo a que se refiere este artículo será distribuido entre aquellas entidades federativas que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente: $T_{i,t} = (0.5C1_{i,t} + 0.5C2_{i,t})FEXHI_t$ En donde FEXHIt se refiere al Fondo de Extracción de Hidrocarburos en el año a repartir. $C1_{i,t} = \frac{EXP_{i,t-1}}{\sum_i EXP_{i,t-1}}$ es el coeficiente relativo a la extracción de petróleo y gas. $C2_{i,t} = \frac{EXG_{i,t-1}}{\sum_i EXG_{i,t-1}}$ es el coeficiente relativo a la producción de gas	**Artículo 4o-B.** ... .

asociado y no asociado.	
EXPi,t-1 es el valor de extracción bruta de los hidrocarburos de la entidad federativa i conforme a la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.	...
EXGi,t-1 es el volumen de producción de gas natural asociado y no asociado de la entidad federativa i, en el año anterior para el cual se realiza el cálculo, según el Sistema de Información Energética.	...
$\sum_i$ es la sumatoria de la variable que le sigue, sobre las entidades que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.	...
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades correspondientes, a más tardar el día 25 del mes posterior a la presentación de los pagos provisionales a que se refiere el artículo 255 de la Ley Federal de Derechos. Asimismo, dicha dependencia efectuará el ajuste que corresponda a los enteros mensuales provisionales, de acuerdo con la declaración definitiva a que se refiere el artículo 254 de dicha Ley.	...
Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades federativas.	Los municipios recibirán cuando menos el **25%** de los recursos percibidos por las entidades federativas.
Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.	**Artículo 6o.-** Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al **25%** de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. ~~**Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.**~~
La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión	La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento **o si así lo requiriera algún Municipio, la Federación** hará la entrega directa de dichas participaciones a los Municipios descontando la participación del

Permanente de Funcionarios Fiscales.	monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta Ley.	Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el **25%** de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del **2-B** de esta Ley.
Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, a que está obligada conforme al artículo 3 de esta Ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios o Demarcaciones Territoriales. También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.	...
Artículo 7o.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las participaciones a que se refieren los artículos 2o.-A, fracciones I y III, y 3o.-A de esta Ley.	**Artículo 7o.-** ...
Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que antecede, recibirán las cantidades que les correspondan conforme a esta Ley, en concepto de anticipos a cuenta de participaciones.	Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que antecede, recibirán las cantidades que les correspondan conforme a esta Ley, en concepto de anticipos a cuenta de participaciones; **entregando a los municipios las cantidades según el fondo que les corresponda.**
Cada cuatro meses la Federación realizará un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo sobre la recaudación obtenida en ese período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de los dos meses siguientes.	....
A más tardar dentro de los 30 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública del año anterior a la Cámara de	...

Diputados del H. Congreso de la Unión para su revisión, la Federación determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el ejercicio, aplicará las cantidades que hubiera afectado provisionalmente a los Fondos y formulará de inmediato las liquidaciones que procedan.	
Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones en el Fondo General de Participaciones a que se refiere la fórmula del artículo 2o., así como las que se establecen en los artículos 2o.-A, fracciones I y III y 3o.-A de esta Ley, se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos coeficientes.	...

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, décimo párrafo; 2-A, fracción III; 3-A, primer párrafo y la fracción II, último párrafo; 4, penúltimo párrafo; 4-A, fracción II, penúltimo párrafo; 4-B, último párrafo; 6, primero, segundo y tercer párrafos; 7, segundo párrafo, y se adiciona el artículo 2-B, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a la siguiente:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Único. Se reforman los artículos 2, décimo párrafo; 2-A, fracción III; 3-A, primer párrafo y la fracción II, último párrafo; 4, penúltimo párrafo; 4-A, fracción II, penúltimo párrafo; 4-B, último párrafo; 6, primero, segundo y tercer párrafos; 7, segundo párrafo, y se adiciona el artículo 2-B, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles

nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el **25%** a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma **prevista en el artículo 2-B de la presente Ley**.

Artículo 2-A.- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

III.- **3%** de la recaudación federal participable, en la siguiente forma:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.

…
…
…
…

Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos.

…
…

Artículo 2-B.- Las cantidades que correspondan a los Municipios en los términos de la fracción III del artículo 2-A y demás disposiciones contenidas en esta Ley, se distribuirán por la Federación de acuerdo a la siguiente forma:

I. El 40%, de acuerdo a la relación porcentual que represente el número de habitantes de cada Municipio (i) del Estado (j), respecto del número de habitantes en el Estado (j). Al inicio de cada ejercicio fiscal, el número de habitantes se tomará de la última información oficial que emita el Consejo Nacional de Población para el año en que se aplicarán los ingresos (RPM);

RPMij = (No. Habitantes en el Municipio i del Estado j / No total de habitantes del Estado j) X 0.40

II. El 30%, de acuerdo a la relación porcentual que representen los ingresos propios por el Municipio (i) del Estado (j), del uno de octubre del año anterior al treinta de septiembre del año corriente, conforme a los datos con que cuenten las Entidades de

Fiscalización de los Estados o la Entidad Homologa, en relación al total de los percibidos por todos los municipios del Estado j a que corresponda (RIMij);

RIMij = (Ingresos propios obtenidos por el Municipio i del Estado j / Total de ingresos propios del Estado j) X 0.30

Los ingresos propios a que se refiere esta fracción, son los que perciba el municipio, distintos de las transferencias de recursos federales o estatales que reciban en los términos de la Ley de Ingresos respectiva.

III. El 20%, de acuerdo a la relación porcentual que represente la superficie territorial de cada Municipio (i) del Estado (j), respecto de la superficie total del Estado (j), conforme a los últimos datos con que cuente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (RSMij); y

RSMij = (Superficie territorial del municipio i del Estado j / Superficie total del Estado j) X 0.20 y

IV. El 10% restante, de acuerdo a la relación porcentual que se denominará zona municipal, que se calculara para cada Municipio (i) del Estado (j) de acuerdo al número de habitantes, nivel de marginación y región socioeconómica, de acuerdo a la información publicada por CONAPO e INEGI (RZMij).

Donde RZMij se calculará de la manera siguiente:

RZMij = (CMHi + CMMi + CMRi) x 0.10

Donde:

a) El 30% del número de habitantes de cada Municipio (i) dividido entre el total en el Estado (j), que dará por ende el Componente Municipal de Habitantes (CMHij), con base en los datos que indique el último informe oficial emitido por el Consejo Nacional de Población para el año en que se aplicarán los ingresos.

CMHi = (población del Municipio i del Estado j / Población del Estado j) X 0.30;

b) El 35% por ciento del número asignado que por nivel de marginación establece el Consejo Nacional de Población para cada Municipio (i), dividido entre el resultado de la suma de los números de los niveles de marginación de los Municipios (i) del Estado (j), que dará por ende el Componente Municipal de Marginación (CMM), asignando los números a cada Municipio de la siguiente manera: uno, para los que establece el Consejo Nacional de Población con "Muy Alta marginación"; dos, para los que califican como "Alta marginación"; tres, para los que tienen "Media marginación"; cuatro, para los que establece con "Baja marginación" y cinco, para los que tiene "Muy Baja marginación".

CMMi = (Componente de marginación del Municipio i del Estado j / Suma de los números de los niveles de marginación de los Municipios i de los Estados j) x (0.35)

c) El 35% por ciento del promedio ponderado que resulte de aplicar el porcentaje de población por el número

correspondiente que por región socioeconómica establezca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) obteniendo un promedio ponderado para cada Municipio i del Estado j, este promedio será dividido entre la suma de los promedios de todos los Municipios i del Estado j, que dará por ende el Componente Municipal de Región socioeconómica (CMR);

CMR = Región socioeconómica del Municipio i del Estado j) / Suma de los promedios ponderados de los Municipios i de los Estados j) x 0.35.

RZM = Redondear [(1/CMi) / ∑(1/CMi)](100)-1

Donde:

CMij = CMHij + CMMij + CMRij por cada Municipio i del Estado j.

∑ (1/CMij) = La suma de las fracciones (1/CMij) de cada Municipio i del Estado j.

(RPM) + (RIM) + (RMS) + (RZM) = Porcentaje por municipio i del estado j.

Artículo 3-A.- Las entidades federativas y **municipios** adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes:

I.- ...

II.- ...
...

Los municipios recibirán como mínimo el **25%** de la participación que le corresponda al estado, **que se distribuirán de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 2-B de la presente Ley.**

Artículo 4°.- ...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Los municipios recibirán como mínimo el **25%** de la recaudación que del Fondo de Fiscalización corresponda a las entidades federativas **que se distribuirán de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 2-B de la presente Ley.** Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales.

...

Artículo 4o-A.- ...

I. ...

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

...

...

II. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el **25%** de la recaudación que corresponda a las entidades federativas en términos de este artículo. La distribución del porcentaje mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo **a lo dispuesto en el artículo 2-B de la presente Ley.**

...

Artículo 4o-B. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Los municipios recibirán cuando menos el **25%** de los recursos percibidos por las entidades federativas.

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 25% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas.

La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento **o si así lo requiriera algún Municipio, la Federación** hará la entrega directa de dichas participaciones a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el **25%** de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del **2-B** de esta Ley.

...

Artículo 7o.- ...

Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que antecede, recibirán las cantidades que les correspondan conforme a esta Ley, en concepto de anticipos a cuenta de participaciones; **entregando a los municipios las cantidades según el fondo que les corresponda.**

....

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan todas las leyes y disposiciones legales, en los ámbitos: federal y estatales, que se opongan u obstaculicen la adecuada aplicación de la presente reforma en perjuicio de las asignaciones presupuestales a los municipios.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá ejecutar las acciones necesarias, a fin de considerar los incrementos y fórmulas de asignación contenidas en el presente decreto, para que sean aplicados para el cálculo del presupuesto de egresos y la ley de ingresos aplicables al ejercicio fiscal correspondiente al año 2014.

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los cinco días siguientes a la asignación de los recursos, considerando los periodos comprendidos en los calendarios de ministraciones, el desarrollo de las fórmulas con los factores y elementos que las componen; asimismo, el resultado del cálculo por el que se asignan los recursos a las Entidades Federativas, a los municipios, al Distrito Federal y sus delegaciones políticas, con la finalidad de promover y fortalecer los principios de transparencia y máxima publicidad a que están obligados los órganos gubernamentales, evitando

que se preste a discrecionalidad y opacidad en la asignación de los recursos del Fondo General de Participaciones.

Quinto. El titular del Poder Ejecutivo de las entidades Federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, adoptarán las medidas necesarias a efecto de que se observe y adecuen los procedimientos en los cuales intervienen en la distribución de los recursos para los municipios, para tales efectos, se concede el plazo comprendido a partir de la entrada en vigencia y hasta el mes de diciembre del año 2013.

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, D.F. a los once días del mes de junio de 2013.

Marcos Aguilar Vega
Diputado Federal

DEL DIP. SILVANO BLANCO DEAQUINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Desde la perspectiva constitucional los municipios son autónomos y libres, constituyendo la base administrativa y política del estado mexicano, no obstante en la parte de los recursos económicos, desde el año de 1996 hasta nuestros días, de los ingresos que percibe la federación por concepto de impuestos y derechos por extracción de petróleo y de minería, solamente un 20% reparte a los estados y ellos a su vez distribuyen a los municipios el 4%, quedándose con el 80% restante, ello ha ocasionado tanto para las entidades federativas como para sus municipios entre otras problemáticas un aumento preocupante en su deuda en los últimos años, con todo lo que esto conlleva.

Siendo por ello elemental aumentar el porcentaje del Fondo General de Participaciones, en aras de un federalismo fiscal auténtico, cuyos beneficiarios sean los municipios.

ARGUMENTOS

Contexto y marco conceptual

Es parte de la esencia que el **municipio es la célula de la organización social nacional,** existiendo actualmente **2,436 y 16 delegaciones** en los Estados Unidos Mexicanos, además de representar la distribución territorial de nuestro país, base fundamental del desarrollo nacional.

El municipio es según la doctrina del derecho constitucional, "una circunscripción territorial habitada por familias e individuos, quienes conforman una colectividad con fines propios como grupos, pero distintos en interés personal y familiar"; persiguiendo tanto el desarrollo estatal como federal, sin embargo se han generado municipios alejados de lo anterior, fenómeno que vale la pena considerar por ser fuente principal de la presente iniciativa.

El artículo 40 de nuestra Constitución estipula que:

> Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Dentro de los principios esenciales que se destacan de dicho precepto, entre otros, es la conformación de una República Federal, dando paso a la conformación de estados libres y soberanos, acorde con lo estatuido por el numeral 43 de la Ley Suprema, que enlista a las entidades federativas que constituyen la República Mexicana.

A lo largo de la historia, tanto el federalismo como el centralismo han sido y son dos formas de concebir la organización política y económica que han permeado al Estado mexicano, prevaleciendo hoy día el primero. En la teoría el federalismo representa la república federal y popular, en donde todo poder público dimana y se instituye en el pueblo para su beneficio, empero en la realidad, en tratándose de política fiscal existen hechos palpables que hacen eco a la existencia del Centralismo.

Abundando al respecto y de acuerdo con el artículo 115 de la CPEUM, los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y como organización política y administrativa el municipio libre, en donde el gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

Por otra parte, cabe hacer mención de que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la ley, teniendo a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) alumbrado público; c) limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) mercados y centrales de abasto; e) panteones; f) rastro; g) calles, parques y jardines y su equipamiento; h) seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución, policía preventiva municipal y tránsito y; i) los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Por ello, resulta necesario por parte de los municipios, para la prestación de los servicios públicos enunciados, contar con un conjunto de recursos económicos, que se conformarán además de los generados por ellos mismos, por otras fuentes de ingresos, según la estructura financiera pública que actualmente impera en los Estados Unidos Mexicanos.

Esto genera en el contexto de la política fiscal el llamado "federalismo fiscal", el cual consiste en conjunto de relaciones fiscales que se establecen entre los diversos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, siendo aquellas que pueden ir desde la delimitación precisa de las fuentes fiscales, hasta la total coincidencia fiscal y su correspondiente coordinación; siendo conocida en nuestros días como el **Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,** acorde por lo definido en el *Diccionario jurídico mexicano*[34].

En lo relativo a los municipios, una parte medular de sus facultades consiste en la administración libre de su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, **correspondiéndole además las participaciones federales,** que le serán cubiertas por la Federación con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

No se puede soslayar que en los tiempos presentes la cuestión financiera juega un papel predominante, ya que abona a que la autonomía y la libertad de los municipios se den, pese a ser imitadas evitando que las mismas se pierdan.

El instrumento jurídico que prevé lo anterior es la Ley de Coordinación Fiscal cuyos objetivos son además de coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los estados, **municipios** y Distrito Federal, la de establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales y su respectiva distribución.

De dicha ley se desprende que del 100% de la recaudación federal en un ejercicio, un 20% constituirá el Fondo General de Participaciones, correspondiéndole a los Estados solamente un 20% y, una quinta parte de dicho 20% para los municipios, en otras palabras de un 100%, **a la federación le corresponde un 80%, a las entidades federativas un 16% y, a los municipios el resto, esto es el 4%.**

Esta situación ha hecho que la Federación controle más del 80% de los ingresos fiscales totales generados en México, lo cual es un indicador del grado de dependencia financiera de los estados y de los municipios en relación con la Federación.

Constitución del Fondo General de participaciones

De acuerdo con el numeral 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, **el Fondo General de Participaciones** se constituirá con **el 20% de la recaudación federal** participable que obtenga la federación en un ejercicio.

[34] UNAM

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por:

1. Todos sus impuestos,
2. Los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

Sin embargo no se incluirán en la recaudación federal participable:

- Los impuestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones;
- Los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.
- Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración
- administrativa;
- El impuesto sobre automóviles nuevos;
- La parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en que participen las entidades en los términos del articulo 3o.-A de esta Ley; ni la parte correspondiente al régimen de pequeños contribuyentes
- La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o., fracción **II,** inciso B) y 2o.-A, fracción **II,** de la LIEPS;
- Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley;
- El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Si a la recaudación federal participable en términos cuantitativos se le restan los conceptos antes anunciados, por simple aritmética, el mencionado 20% de participación que tienen derecho los estados y municipios tiende a ser menor.

Ahora bien, uno de los objetivos que debe perseguir toda política fiscal es el de fortalecer el federalismo fiscal, a través del fortalecimiento del sistema de participaciones por medio del reparto justo de las mismas, requiriéndose para ello de una autonomía financiera mucho mayor a la existente[35].

Para esto es fundamental observar el comportamiento y evolución del sistema de participaciones. Hace 33 años, en 1980 se sentaron las bases del actual **Sistema Nacional de Coordinación Fiscal** y dentro del mismo el **Sistema Nacional de Participaciones Federales a Estados y Municipios,** tomándose la modalidad de **calcular y distribuir las participaciones a partir de todos los impuestos federales, con ciertas excepciones.**

Para el año de 1980 la participación fue del 13%, aumentando los porcentajes de entre el 16%y el 18% en los años de 1981 a 1990, hasta alcanzar el actual 20% a partir de 1996, sin embargo del último incremento al día de hoy (después de 17 años), no se ha dado aumento alguno.

En apariencia se ha dado un incremento del 7%, sin embargo, es de señalar que la mayor parte de estos incrementos, han sido más el producto de suspensiones adicionales en los ingresos propios de los estados y municipios, mismos que han dejado de cobrarse a cambio de recibir mayores ingresos vía las participaciones federales, acorde con el siguiente cuadro.[36]

Incrementos en los porcentajes de la Recaudación Federal Participabletomados para la distribución del Fondo General de Participaciones (EGP)

[35] AYALA ESPINO, JIOSE, *Economía pública.*
[36] httlj/www.indetec.gob.mx/enh/Interps/DocsInt/Federalismo23a.pcIE Luis García Sotelo

Año	Fundamento	%1PP	Comentarios
1980	Conforme a la LCP	13.000000%	Representado por las participaciones que el Gobierno
1980	Anexo 1 al CAd**	1.578399%	Por la recaudación de impuestos estatales y
1980	Anexo 1 al CAd	0.354475%	Por gastos de administración en los que incurrían las
1980	Anexo 2 al CAd	0.692872%	Por tratamiento especial a estados petroleros.
1980	Anexo 4 al CAd	1.269105%	Por apoyo fiscal de los estados al Sistema Alimentario Mexicano.
1980	Anexo 5 al CAd	0.024537%	Por Reformas a la LIVA en 1981 que originaron suspensión o derogación de gravámenes estatales o municreales.
1980	Anexo 3 al CAd	0.016462%	Por suspensión del cobro de derechos de transporte.
1982		0.026918%	Por suspensión de impuestos estatales a profesionistas.
1982		0,019255%	Recaudación suspendida de pozos artesianos del Distrito Federal
1982		16.984023%	Porcentaje de integración del FGP para este periodo
1988 1989	LCF	0.248126%	Efecto de la forma de integración del FGP en 1988 y 1989 derivado del incremento de la recaudación del IVA que fue superior al crecimiento de la REP
1990	LCF	1,029121%	Fondo Financiero Complementario que se integró al FGP.
			50% de la reserva de contingencia (constituida
1991		0.250000%	en 1988 y que operaba fuera del FG1[3].
			Incremento otorgado sin condicionamiento
1996	LCF	1.488730%	alguno y en apoyo a las finanzas de los estados y municipios.
	Total a la fecha	20.000000%	

*. Ley de Coordinación Fiscal, ** Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

En síntesis puede afirmarse que, sólo alrededor del 1,5% del actual Fondo General de Participaciones ha sido el resultado de un incremento directo; es decir, sin que esté de por medio alguna condición o suspensión adicional a los tributos locales.

Por lo tanto, tales participaciones deben incrementarse ya que las necesidades de la población inmersas en los municipios han cambiado en lo que va del presente siglo, debiéndose dar por igual un cambio en la política fiscal en donde los recursos fiscales federales que se le participan a los municipios sean los suficientes con el propósito real de buscar su fortalecimiento financiero.

No debe olvidarse que todo contribuyente u empresa ubicada en cualquier parte del territorio nacional, pagan a la Federación al menos tres de los impuestos mas importantes: impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), no obstante que la situación jurídica o de hecho prevista en sus correspondientes leyes, es decir, lo que se grava que es la fuente impositiva, se origina en los municipios.

Por todo lo argumentado es elemental aumentar el porcentaje del Fondo General de Participaciones, en aras de un federalismo fiscal auténtico en beneficio principalmente de los municipios, con la finalidad de que el porcentaje del 4% del que ahora participan se aumente en términos reales hasta el 8.75% en un periodo de 5 años.

Situación financiera actual de los estados y municipios

La deuda de las entidades federativas y municipios, ha crecido en los últimos años de forma preocupante.

De acuerdo con cifras de la Secretaria de Hacienda y crédito Público, el saldo al cierre de 2012 se ubicó en 434,761.2 millones de pesos.

Así mismo, la Auditoria Superior de la Federación (ASE) realizó un estudio sobre la deuda subnacional, es decir los pasivos de la entidades federativas y municipios, resultando que la misma creció aceleradamente en tres años; en el 2008 el débito total era de 203,070.2 millones de pesos y para el 2011 fue de 390,777.5 millones de pesos, lo que significa un aumento a una tasa nominal de 92% y un aumento de tasa real de 67.9%.

Dichos escenarios justifican el atraso económico y social que existe en los municipios que conforman el territorio nacional, siendo urgente tornar medidas concretas a corto y mediano plazo.

FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en el artículo 71, fracción **II,** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente Iniciativa,

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal,

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y último del artículo 2 y los párrafos primero y tercero último del artículo 6, de la Ley de Coordinación fiscal, en los siguientes términos:

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con **el 25%** de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos **el 35%** a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 35% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 35% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. De esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Segundo. Los incrementos de 20 a 25 y del 20 al 35 por ciento a que se refiere el presente decreto, se aplicarán gradualmente. Para tal efecto, a partir del ejercicio fiscal de entrada en vigor del presente ordenamiento, se adicionará uno por ciento y un tres por ciento respectivamente, cada año hasta alcanzar el porcentaje de participaciones aprobado, en un periodo de 5 años.

CONCEPTOS		2014	2015	2016	2017	2018
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA LOS ESTADOS		21%	22%	23%	24%	25%
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS		23%	26%	29%	32%	35%
Para los municipios		4.83%	5.72%	6.67%	7.68%	8,75%
Para los estados		16,17 %	16,28 %	16.33 %	16,32 %	16.25%

Tercero. Se derogan las disposiciones legales en lo que contravengan al presente decreto.

Cuarto. Las legislaturas de los estados deberán adecuar sus ordenamientos respectivos para dar cumplimiento .o-q dispone el presente decreto.

DEL DIP. HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUSCRITO POR EL DIPUTADO HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El que suscribe, **HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA**, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es parte de la obligación del Poder Ejecutivo y Legislativo, mantenerse alineados a las necesidades de la ciudadanía, estar actualizados de los conflictos sociales que van floreciendo en el transcurso de nuestra historia.

A través de los años, nuestra sociedad ha ido evolucionando en todos sus aspectos, tanto positivos como negativos y por ende también la delincuencia ha ido sofisticándose hasta encontrar la manera mas práctica, eficaz y asertiva de lograr a través de dañar al prójimo un beneficio económico mayor con menos riesgo, siendo el secuestro un golpe social perfecto a favor de la delincuencia, floreciendo imperios de crimen organizados aprovechándose de la falta de medidas de protección, atención y sanciones dentro del régimen legal mexicano.

No debemos pasar por alto, que las consecuencias sobre las victimas de un secuestro son colectivas, es decir, el secuestro no sólo conlleva a la privación de la libertad de una persona, si no al desenvolvimiento de una serie de daños físicos, psicológicos, económicos y emocionales no sólo sobre la persona en cautiverio si no también expandiéndose hacia los familiares y amigos que indirectamente son también víctimas de esté secuestro. La secuelas son permanentes y muy graves, por lo que hace que este delito sea de los mas crueles y devastadores , partiendo de ahí el éxito que esta conducta delictiva le ha traído sus autores y por ende, la urgente necesidad de un enfoque legal especifico sobre este delito.

Por lo anterior, fue palpable el dramático incremento en la frecuencia de secuestros realizados por bandas organizadas que utilizan este método delictivo como su actividad principal, siendo éste un negocio altamente rentable para ellos, así como la necesidad, por las características del delito y del daño que causan, de incrementar las medidas necesarias para evitar la impunidad sobre las personas que realicen éste tipo de conducta . Es por ello que en el 2010, fue necesario que los legisladores crearan LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, y de esta manera brindar a la ciudadanía mexicana mayor protección y seguridad frente a el delito de secuestro.

Ahora bien, a través de éstos últimos años, se ha reflejado que no solo las bandas de crimen organizado son

autores del delito del secuestro, sino que en ocasiones para la obtención de un beneficio económico, social y/o emocional, existen personas que simulan por sí mismos su propia privación de la libertad, engañando a familiares, amigos y a la misma autoridad.
Esta conducta tiene una afectación directa sobre los familiares y amigos que se convierten en victimas de quien simula su propio secuestro, ya que aunque no trae aparejada la privación de la libertad si tienen una afectación importante sobre las personas involucradas, que como terceros son afectadas gravemente psicológica, emocional y económicamente de manera irreversible.

Dentro de la LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su articulo 13, se señala una pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad.

Consideramos que el daño que causan las personas que realizan este tipo de conductas no debe menospreciarse, ya que como se menciono en párrafos anteriores, los daños que se causan a los familiares y amigos, victimas directas en el caso que nos ocupa de éste delito, son exactamente iguales a los que sufren los familiares y amigos de una persona que es privada de su libertad por un tercero, aunado a la burla que se realiza también sobre las autoridades, quienes invierten tiempo y recursos que pueden ser utilizados para la capturas y liberación de delincuentes y victimas respectivamente en secuestros reales.

Por lo anterior, y para conseguir la diminución de este tipo de conductas delictivas, es de relevante importancia que se asevere la sanción estipulada en el cuerpo legal que rige éste delito, siendo así que al manejarse solo trabajo a favor de la comunidad como pena, estamos prácticamente invitando a la sociedad ha que lleve a cabo este tipo de conductas, cuando nuestra misión debe ser prevenir la delincuencia, haciendo conciencia en la ciudadanía sobre las consecuencias que pueden haber cuando se daña a otra persona, mediante sanciones que tengan un peso significativo que reflejen un riesgo elevado al considerarse llevar a cabo este delito.

Es por esto, que se propone una modificación sobre la sanción que se encuentra ya estipulada, para que se castigue con prisión de dos a ocho años al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad.

En este sentido para los diputados del Partido Acción Nacional, es de vital importancia unirnos a la causa e implementar sanciones suficientes para la protección de la seguridad e integridad emocional y psicológica de los mexicanos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

Artículo Único. Se reforma el artículo 13 del LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS suscrito por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 13.- Se impondrá, de dos a ocho años de prisión al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente Ley.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ---- días de julio de 2013.

DIPUTADO HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA

DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ

Senador **ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ** integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 164, párrafos 1 y 2 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, al tenor de las consideraciones siguientes:

La búsqueda de la democracia participativa refiere a que los ciudadanos tengan mayor participación en la toma de decisiones políticas que la otorgada tradicionalmente por la democracia representativa. Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Se manifiesta usualmente por medio de referendos por los que los representantes consultan a la ciudadanía o por medio de iniciativas de consulta que los ciudadanos presentan a los representantes.

Esta definición está directamente asociada a la figura de revocación de mandato que significa:

"Dejar sin efecto una concesión, un mandato o resolución. Mandato son funciones delegadas por el pueblo o por una clase de ciudadanos para ejercer el mando".

En este tenor se entiende como la facultad de los electores para destituir a todos o algunos funcionarios públicos de su cargo antes de finalizar su período. Es una figura de democracia directa que se define como una forma de gobierno en la cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio de poder.
Desde el surgimiento del Estado moderno, surgió el fenómeno de concentración del poder por parte del Ejecutivo. Por una parte, los marcos institucionales favorecieron a la investidura a fin de garantizar la continuidad del Estado, pero acabaron por entregar potestades extralimitadas a un mando unipersonal en detrimento de los derechos ciudadanos.
Ante ello, se adoptaron tres rutas democratizadoras para acotar el poder. El primer caso, la separación entre la jefatura de Estado y la de gobierno, a fin de que el acontecer político significara el cambio de gobierno y la conservación del Estado. La segunda opción fue el mayor control del parlamento sobre el poder Ejecutivo, dentro del esquema de la separación de poderes. En tercer lugar, la promoción de los derechos de los ciudadanos para controlar el mandato de sus gobernantes.
Es por ello que la soberanía en una concepción democrática exige reforzar el control popular sobre el gobierno y promover la responsabilidad de los mandatarios hacia los electores, sus prioridades, sus necesidades y sus derechos.
Mediante el procedimiento de revocatoria del mandato, el electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a quien él mismo eligió, antes de que concluya el período de su mandato. Es decir, el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decide sobre la continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de elección popular.

En el mundo existen diversos países consagran la posibilidad de revocar el nombramiento de los funcionarios de elección popular, antes de cumplir su período de mandato.

Esta figura se reconoce a nivel constitucional nacional y por decisión estrictamente popular en Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, países en los cuales la figura del referéndum revocatorio o consulta popular de revocatoria se encuentra inserta en el capítulo de los derechos políticos de sus respectivos textos

constitucionales.

La intención de incorporar la revocación de mandato en nuestro país obedece al convencimiento de generar el consenso popular y, por tanto, se fortalece la legitimidad de las autoridades electas, sus actos de gobierno y sus decisiones, y genera nuevos espacios de responsabilidad de las autoridades por el ejercicio de la función pública.

El "castigo" ciudadano correlativo al "premio" que significa la reelección, en el debate público de la Reforma Política, debe orientarse hacia a la figura de revocación de mandato. La intervención de los electores sobre la continuidad de los servidores públicos en el poder comienza con la revocación del mandato, a fin de que una vez que el mandato conferido ha sido retirado puedan responder administrativa y/o judicialmente por sus acciones.

La adición propuesta de la fracción VI de artículo 35 refiere al fortalecimiento de las prerrogativas ciudadanas que deben necesariamente estar contenidas en nuestra Carta Magna como un derecho de los ciudadanos en relación con el principio de soberanía sobre sus gobernantes. Debe privilegiarse como un mecanismo de rendición de cuentas que permita sancionar el mal uso del poder conferido por el pueblo.

Los derechos políticos de los ciudadanos son uno de los principales ámbitos materiales de la Reforma Política. Asimismo, la estructura del artículo 35 corresponde formalmente a las prerrogativas, que le son conferidas a los ciudadanos para el pleno del ejercicio de sus derechos políticos.

Precisamente por esta orientación se pretende regular las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana o la consulta popular que sin referir a la revocación de mandato quedaría trunca cualquier pretensión de reforma de política que permita una verdadera democracia participativa.

Por las anteriores consideraciones me permito proponer la siguiente modificación:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. a V. …

VI. Revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente, sujetándose a lo dispuesto por esta Constitución y por la ley reglamentaria.

Se recorren la actual fracción VI propuesta y las fracciones subsecuentes

SUSCRIBE

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Salón de Sesiones del Senado de la República, treinta y uno de julio de 2013.

CONTINÚA TOMO II



SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL

Consulta la Gaceta ***www.senado.gob.mx***

